



INFORME **DE GESTIÓN Y PRONUNCIAMIENTOS INSTITUCIONALES**

OCTUBRE
2019
-
DICIEMBRE
2020



INFORME DE GESTIÓN Y PRONUNCIAMIENTOS INSTITUCIONALES

2019-2020

Lic. José Apolonio Tobar Serrano
PROCURADOR PARA LA DEFENSA
DE LOS DERECHOS HUMANOS

UNIDAD DIRECCIONAL

José Apolonio Tobar Serrano

Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos

Sylvia Rosa Hidalgo Alvayero

Procuradora Adjunta para la Defensa de los Derechos Humanos

Carlos Dagoberto Pacheco Garay

Secretario General

Levis Amparo Abarca Procurador Adjunto para la Defensa de los Derechos Civiles y Políticos	José David Torres Sandoval Procurador Adjunto para la Defensa del Derecho al Medio Ambiente	Jesús Ulises Rivas Sánchez Procurador Adjunto para la Defensa de los Derechos de la Niñez y la Juventud	Leonor Elisa Arévalo Romero Procuradora Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Mujer y Familia
Luis Romeo Alemán García Procurador Adjunto para la Defensa de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales	Silvia María Beatriz Campos Cevallos Procuradora Adjunta para la Defensa de los Derechos de las Personas Migrantes y Seguridad Ciudadana	Miguel Alfonso Muñoz Reyna Director de la Escuela de Derechos Humanos	Ana María Delgado Orellana Coordinadora de Delegaciones Departamentales

DELEGADAS Y DELEGADOS DEPARTAMENTALES

Rosa Guillermina Sandoval Martínez	Delegada Departamental de Ahuachapán
Sandra Verónica Bautista Ramírez	Delegada Departamental de Cabañas
Álex Oseas Ayala	Delegado Departamental de La Libertad
Luis Alcides Mejía Moreno	Delegado Departamental de Cuscatlán
Miriam del Carmen Romero	Delegada Departamental de La Paz
Moisés Roberto Penado Parada	Delegado Departamental de La Unión
Roberto Martínez	Delegado Departamental de Morazán
Gladis Edubina Benítez de Ramos	Delegada Departamental de San Miguel
Xenia Elizabeth Merino de Jacinto	Delegada Departamental de San Vicente
Gustavo Joaquín Blanco Castro	Delegado Departamental de Santa Ana
Hazel Margarita Monroy de Arrué	Delegada Departamental de Sonsonate
Adrián Díaz Rivas	Delegado Departamental de Usulután
Orlando Antonio Orellana Cortez	Delegado Departamental de Chalatenango

Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos

5ª Avenida Norte y 19 Calle Poniente, San Salvador,
El Salvador, Centro América
Teléfonos: 2520-4300; 2520-4301; y 2520-4302

Redacción y Edición:
Carolina A. Molina



Informe de Gestión y **Pronunciamientos Institucionales**





Contenido

I. Presentación	15
II. Informe de actividades y logros institucionales	19
1. Acciones de protección y promoción de derechos humanos	21
2. Logros e iniciativas prioritarias	23
A.Consulta con víctimas del conflicto armado	24
B.Actuación durante la emergencia nacional por la pandemia COVID-19	25
C.Fortalecimiento de las relaciones externas nacionales e internacionales	29
D.Premio Nacional a la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos	31
III. Posicionamientos públicos	35
A. Llamamientos y recomendaciones relacionadas con las medidas estatales de atención y contención de la COVID-19	35
a) Aspectos generales	35
1. Lineamientos institucionales para atender la Emergencia decretada por el Consejo de Ministros ante la Declaratoria de Pandemia de COVID-19	35
2. Mecanismos de atención y protección de derechos humanos de la población en el contexto de la pandemia de COVID-19	37
3. PDDH lanza APP para recibir denuncias	38
4. Llamado para que toda persona cumpla las medidas implementadas por las autoridades con el fin de garantizar salud y seguridad de la población ante la COVID-19	38
5. Recomendaciones para la atención adecuada de la emergencia sanitaria	39
a) Restricciones al ejercicio de derechos	41
1. Medidas de Restricción Temporal del Ejercicio de los Derechos de Reunión y Libertad de Tránsito, a fin de contener la pandemia COVID-19, decretadas por el Ministerio de Salud Pública	41
b) Derechos de las personas salvadoreñas retornadas y varadas en el exterior	43
1. La Situación de las Personas Salvadoreñas en el Exterior, Personas Retornadas en Centros de Contención por la pandemia COVID-19	43
2. Posición sobre declaraciones del Ministro de Justicia y Seguridad Pública sobre los Centros de Contención para las Personas Retornadas	45
3. Personas Salvadoreñas que se encuentran Varadas en el Exterior ante el Cierre de Fronteras y el Aeropuerto Internacional en el contexto de la pandemia por COVID-19	46
4. Conmemoración de la Semana del Migrante	47

c) Derecho a la salud	50
1. La importancia de garantizar el derecho a la salud mental de la población en general y personas en centros de contención en el contexto de la pandemia de COVID-19	50
2. Medidas cautelares en relación a las graves condiciones en las que se encuentran las personas ingresadas en el Hospital Nacional General de Neumología y Medicina Familiar “Dr. José Antonio Saldaña” en el contexto de la pandemia COVID-19	52
d) Derecho al trabajo, garantía de ingresos y medios de subsistencia	53
1. Sobre los acontecimientos ocurridos en los CENADES.	53
2. Cierre de operaciones de varias empresas del país y las consecuentes afectaciones a los derechos de las personas trabajadoras	54
3. Muerte de miembros de la Policía Nacional Civil, y por el contagio por COVID-19 de otros elementos policiales	56
4. Afectaciones a los Derechos Humanos de la Salud, Trabajo y Alimentación en el marco del COVID-19	57
5. Conmemoración del 16 de octubre “Día Mundial del Derecho a la Alimentación”	59
e) Derechos a la libertad, integridad y seguridad personal	62
1. Pronunciamiento frente a irrupciones de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil en viviendas durante la pandemia por COVID-19	62
2. Casos denunciados en el contexto de la emergencia nacional provocada por el COVID-19	64
3. Presunta privación de libertad y tortura de elemento de la Fuerza Armada por miembros de la misma institución	64
f) Derechos de las mujeres y grupos en condición de vulnerabilidad	66
1. El Derecho a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres durante la pandemia COVID-19	66
2. Llamado a unir esfuerzos contra la discriminación	67
3. Conmemoración del “Día de la Bendición de la Semilla por los Pueblos Indígenas de El Salvador	67
4. Conmemoración de los 12 años de entrada en vigencia de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo	68
5. Posicionamiento de la Mesa Temática de Derechos Humanos y VIH, con el acompañamiento de la Procuraduría para la defensa de los Derechos Humanos ante la situación de la pandemia COVID-19	71
6. Información sobre la utilización del Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom para atender pacientes adultos positivos de COVID-19	72
7. Utilización de la imagen de niñas y niños durante la entrega de canastas solidarias	73
8. Utilización y Exposición por parte del Presidente de la República Nayib Armando Bukele Ortez, de un niño vestido con bolsas plásticas que sirven de empaque a la canasta solidaria que entrega el gobierno de El Salvador	73
9. WEBINAR CIDH-OEA: “Situación de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en el Contexto de la Pandemia, 26 de mayo de 2020	74

g) Libertad de expresión y acceso a la información	76
1. En relación con manifestaciones de sonidos de pitos y cacerolazos de la población salvadoreña y la utilización en redes sociales del nombre de la hija del señor presidente	76
2. Hechos de violencia ocurridos en la Alcaldía Municipal de Soyapango	77
h) Fechas conmemorativas y otros	78
1. “31 de marzo, Día de la Visibilidad Trans”	78
2. El Día del Trabajo, en el contexto de la pandemia por COVID-19	79
3. Día Internacional de la Familia	81
4. Día Mundial de las Madres y los Padres	82
5. Fallecimiento del señor Douglas Fernando García Castro, Inspector Jefe de la División Antiextorsiones de la Policía Nacional Civil, a causa de COVID-19	83
6. Solidaridad con la Defensoría del Pueblo de Ecuador por la Resolución Constitucional de la Unidad Judicial de Tránsito y las Amenazas e Intimidaciones del Gobierno ante la Defensa de los Derechos de Personas Ecuatorianas en el Extranjero a Consecuencia del COVID-19	83
7. Día Mundial de los Refugiados	84
B. Posicionamientos públicos vinculados a diferentes temáticas de derechos humanos	89
a) Medio ambiente	89
1. Las inundaciones en la Colonia Santa Lucía, municipio de Ilopango, San Salvador	89
2. Alerta roja decretada por Tormenta Amanda	90
3. Los estragos ocasionados con el paso de la tormenta Amanda por el territorio salvadoreño y la actuación de las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres	91
4. Importancia de la firma y ratificación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú	92
b) Derecho al agua	94
1. La mala calidad del agua recibida por los habitantes del área metropolitana de San Salvador durante enero de 2020	94
2. Conmemoración del Día Mundial del Agua	96
c) Derechos de las mujeres	98
1. El feminicidio de una mujer embarazada, en San Juan Opico, departamento de la Libertad	98
2. Día Nacional e Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer	100
3. Día Internacional de las Mujeres Defensoras de Derechos Humanos	102
4. Foro “Impacto Psicosocial de la Violencia de Género en las Mujeres y su Entorno”	103

5. Femicidio agravado de la señora María Apolonia López Zelaya y el femicidio en grado de tentativa de su hija, en el cantón Hualama del municipio de Chapeltique, departamento de San Miguel	104
6. Hechos de Violencia Contra la Mujer y Femicidios ocurridos en los primeros quince días del mes de enero de 2020	105
8. Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia	106
9. Día de la Mujer de las Américas	107
d) Desplazamiento forzado	108
1. Aprobación del dictamen favorable de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa del Proyecto de Ley Especial para la Atención y Protección Integral de Personas en Condición de Desplazamiento Forzado Interno	108
e) Vida, Seguridad e Integridad personal	108
1. Hechos de violencia suscitados en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad de El Salvador	108
2. Lamentable hecho de ametrallamiento de un bus de transporte de empleados de una fábrica textil del municipio de El Rosario, departamento de La Paz	110
3. El asesinato de dos agentes policiales en el municipio de San Juan Opico, departamento de la Libertad	111
4. El aumento de homicidios durante el fin de semana y las medidas ordenadas al respecto	112
i) Trabajo y derechos sindicales	113
1. Conmemoración del “Día del Sindicalista Salvadoreño”	113
2. Supresión de las plazas de cargos de los trabajadores y trabajadoras de las Secretarías de la Presidencia de la República	114
3. Remoción de los trabajadores y las trabajadoras de las diferentes Dependencias del Órgano Ejecutivo	116
j) Verdad, justicia y reparación	117
1. La impunidad en la ejecución extralegal de Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, en el marco del aniversario 40 de su martirio	117
2. Asistencia al 38 aniversario de la masacre de El Mozote	119
3. Mensaje en el XXVIII Aniversario de los Acuerdos de Paz	119
4. Consulta Territorial para escuchar a Víctimas del Conflicto Armado	121
5. Proyecto de Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional	122
6. Conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas	125
k) Personas migrantes, refugiadas, salvadoreñas en el exterior y retornadas	126
1. Conmemoración del día Internacional de la Persona Migrante	126
f) Derechos de las personas LGBTQ+	128

1. Homicidio de persona trans ocurrido durante la madrugada del domingo 27 de octubre, en el Bulevar de los Héroes, San Salvador	128
2. Desaparición y posterior hallazgo del cuerpo sin vida de una persona trans, en el río Torola, departamento de Morazán	129
3. Reactivación de la Mesa de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, sobre derechos de la población LGBTIQ+	131
4. Asesinato de persona LGBTIQ+ ocurrido en la madrugada del 16 de noviembre de 2019, en el cantón Cara Sucia, municipio de san Francisco Menéndez, departamento de Ahuachapán	132
5. Asesinato de persona integrante LGBTIQ+ ocurrida el 7 de marzo de 2020 en Intipucá, La Unión	133
6. Día Internacional contra la Homo, Lesbo, Bi y Transfobia	134
7. Día Orgullo LGBTIQ+	135
G) PUEBLOS INDÍGENAS	136
1. Conmemoración del 88° Aniversario del Genocidio-Etnocidio de 1932 fosa común, Izalco	136
H) PERSONAS CON DISCAPACIDAD	138
1. Homicidio del señor Elías Antonio Hernández Campos, hijo del defensor de derechos humanos de las personas con discapacidad y miembro de la junta directiva departamental de Sonsonate de la Asociación de Lisiados de Guerra de El Salvador “héroes de noviembre de 1989” – ALGES, señor Lorenzo Hernández	138
2. En ocasión de conmemorarse el 03 de diciembre como Día Nacional e Internacional de las Personas con Discapacidad	139
i) Niñas, niños y adolescentes	142
1. Muerte Violenta de una Adolescente encontrada en Santo Tomás	141
2. Resolución de la Cámara Primero de lo Penal de la Primera Sección del Centro, en relación al caso del Segundo Magistrado de la Cámara Tercero de lo Civil de la Primera Sección del Centro, licenciado Eduardo Jaime Escalante Díaz, por atribuírsele el delito de agresión sexual en perjuicio a una niña de 10 años de edad	143
3. 30° Aniversario de la Convención Sobre los Derechos del Niño	146
4. Día Internacional de la lucha contra el Cáncer Infantil	147
5. Día Nacional e Internacional contra el Trabajo Infantil	148
6. Celebración del Día Internacional de la Juventud	149
7. Investigación de la Fiscalía General de la Republica sobre el homicidio del niño Erick G., San Salvador	151
8. Reiterando llamado a las autoridades gubernamentales, sobre la atención que debe darse, para bajar los altos índices de embarazos en niñas y adolescentes, durante el primer trimestre del año 2020	152
9. 11 de octubre, Día Internacional de la Niña	154
10. Homicidio del niño Alexis A D A	155
j) Personas adultas mayores	155

1. “Mes de la Persona Adulta Mayor” sobre el Sistema Nacional de Protección hacia la Persona de Edad en El Salvador	155
2. “Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez”, y “Día Nacional en favor de la Eliminación del Abuso, Maltrato, Discriminación y Negligencia contra las Personas Mayores”	158
k) Personas con VIH	159
1. Día Mundial de la Respuesta al VIH	159
l) Otros	160
1. La PDDH y la Fundación Latitudes inauguran primer hubs para protección de periodista en coberturas de alto riesgo	160
2. Fallecimiento del Jurista y Defensor de Derechos Humanos, Pedro Nikken	160
3. Día de los Derechos Humanos 2019	161
4. Hechos relacionados con el 9 de febrero de 2020 en la Asamblea Legislativa	162
5. Procuradoras y Procuradores de Centroamérica alcanzan acuerdos en materia de Derechos Humanos para la región	164
IV. Medidas Cautelares	169
1. Medida Cautelar para la protección de las personas trasladadas a cuarentena en el Hospital “Dr. José Antonio Saldaña”	169
2. Medidas cautelares para la protección de las personas en Centros de Contención durante la emergencia sanitaria por COVID-19	177
3. Medidas Cautelares para la protección de personas retenidas por incumplimiento de la cuarentena domiciliar	214
4. Medida cautelar en relación a la Consulta Pública sobre el proyecto “Pequeña Central Hidroeléctrica Nuevo Nahuizalco II” sobre el Río Sensunapán.	228
V. Informes	237
1. Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador. (Para Lista de Cuestiones)	237



Presentación





I. Presentación

Con atención al mandato constitucional que me ha sido conferido como Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos en cuanto a velar por el respeto y garantía de los derechos humanos de todas las personas, en esta ocasión presento la Compilación de Posicionamientos Institucionales emitidos durante mi primer año de gestión.

Consciente de que el trabajo institucional no se encuentra limitado a la investigación de casos individuales, he establecido mi posición respecto de aquellas situaciones o hechos que de forma determinante han afectado el desarrollo pleno de quienes habitan en El Salvador a través de distintos pronunciamientos que hoy pongo a disposición con el fin de fortalecer los conocimientos de la población respecto a sus derechos humanos y, a la vez, hacer hincapié en las autoridades sobre su obligación de proteger, cumplir y garantizar los derechos humanos para toda la población.

Todo ello dentro del marco del Mandato otorgado por la Constitución de la República y la normativa interna, el cual da sustento a todo un Sistema de Protección y Promoción de Derechos Humanos, que tiene como objetivo el establecimiento de mecanismos específicos que contribuyen en conjunto hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales por la defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales.

Esta recopilación consta de documentos relacionados con el trabajo institucional realizado durante la emergencia nacional por la pandemia de COVID-19 y otros vinculados a distintas temáticas, especialmente las vinculadas a los derechos de las personas en mayor condición de vulnerabilidad.

La publicación de este documento responde a mi interés de mantener actualizada a la sociedad salvadoreña sobre los posicionamientos más relevantes e ilustrativos declarados en todos los campos de los derechos humanos y con ello, continuar con la tarea de promover y difundir la doctrina institucional que contribuye en la defensa permanente de la dignidad humana en el país.

De esta manera, también se identifican los principales logros obtenidos, ya que desde el inicio de mi gestión he instruido la adopción de metodologías de participación y colaboración con las distintas mesas temáticas de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, espacios interinstitucionales, organismos internacionales, cuerpo diplomático y de manera particular con la población salvadoreña, visitando los territorios y escuchando sus necesidades e intereses a través de mecanismos de consulta específicos con cobertura nacional.

He reforzado el apoyo para las Delegaciones Departamentales en tanto que éstas representan y ejercen un vínculo más estrecho con la población y las autoridades locales en materia de protección y promoción de los derechos humanos. También he promovido el fortalecimiento de capacidades del personal institucional y dirigido lineamientos con miras a consolidar la prestación de un servicio público comprometido y sensibilizado que potencie la responsabilidad en las tareas encomendadas y por ende la confianza y credibilidad en la Procuraduría.

Hago énfasis en que, a partir de la experiencia acumulada durante este periodo he comprobado la urgente necesidad de superar las causas estructurales que mantienen la desigualdad y discriminación y que además generan agravios especialmente manifestados en la falta de progresividad de los derechos y las diferentes situaciones de violencia que gravemente afectan de manera particular a las mujeres, las personas con discapacidad, adultas mayores, migrantes, pueblos indígenas y población LGBTIQ+.

Asimismo, he insistido a través de distintas y reiteradas recomendaciones sobre la urgente adopción de medidas concretas tendientes a garantizar la atención de dichas situaciones a través de políticas públicas integrales ligadas a la realización efectiva de los derechos humanos y la modificación de actitudes y prácticas políticas, económicas y socioculturales

que los vulneran, teniendo como base un verdadero, transparente y robusto sistema de información, así como los recursos materiales, técnicos y presupuestarios adecuados.

Para ello es esencial la correcta y concreta aplicación del principio de la centralidad humana, la equidad e integración intergeneracional y el enfoque diferencial con énfasis territorial, particularmente para atender las problemáticas de las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad. De igual manera, resulta también urgente la adopción de medidas concretas que garanticen oportunidades reales para el ejercicio adecuado de la participación política, trascendiendo del desencanto y la frustración hacia un ejercicio ético, responsable e informado de las propuestas y acciones públicas, teniendo como premisa que el ejercicio de los derechos políticos no son un fin en sí mismo sino un medio fundamental para garantizar los demás derechos.

La ocasión es propicia para refrendar mi compromiso de ofrecer una institución cercana a la población, atenta a las necesidades de las personas y grupos en mayor condición de vulnerabilidad y disponible para actuar de manera eficaz, eficiente y oportuna en la tutela y promoción de la dignidad humana, acorde con los principios plasmados en la Constitución de la República, la normativa nacional y los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Lic. José Apolonio Tobar Serrano

Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos



Informe de Actividades y Logros institucionales





II. Informe de actividades y logros institucionales

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) es la institución que constituye la piedra angular del Sistema Nacional de Promoción y Protección de los Derechos Humanos cuya atribución esencial es la de supervisar la actuación y omisión de las autoridades públicas frente a las personas en aras de garantizar el cumplimiento íntegro y efectivo de las obligaciones contenidas en las normas internacionales; la rendición de cuentas y la garantía progresiva de los derechos humanos.

En este sentido, sin duda alguna, su creación supone uno de los logros más relevantes de los Acuerdos de Paz y constituye el hito de mayor trascendencia en materia de protección institucional de los derechos humanos y libertades fundamentales de la población salvadoreña, de tal forma que desde el asidero constitucional de su mandato y la definición de su carácter permanente e independiente, con personalidad jurídica propia y autonomía administrativa, está facultada para ejercer su magistratura moral dotada de un conjunto de competencias cuya amplia formulación se encuentra en sintonía con las exigencias de una efectiva defensa de los derechos humanos.

De esta forma, con su amplio mandato puede conocer cualquier situación en la que los derechos humanos estén siendo amenazados o hayan sido vulnerados. Pero también se le faculta asistir a víctimas de violaciones a dichos derechos, promover y proponer las medidas que estime necesarias en orden a prevenir vulneraciones a los mismos y formular conclusiones y recomendaciones pública o privadamente.¹ Estas atribuciones dan paso a la actividad de protección dentro de todos los centros de detención administrativa, penitenciarios, militares, etc., realizando visitas in situ, investigando presuntas violaciones de derechos humanos ya sea de oficio o por denuncia que hubiera recibido y emitiendo recomendaciones por medio de resoluciones, informes o cualquier otro tipo de pronunciamiento institucional.

A su vez, la Constitución también otorga a la Procuraduría la atribución de promover el respeto universal y efectivo de todos los derechos humanos y libertades fundamentales a través de procesos de educación, capacitación y difusión de los mismos, actividades académico culturales, publicaciones especializadas, disponibilidad de acervo bibliográfico u otras actividades complementarias, contribuyendo de esta manera con la prevención de los abusos y violaciones a los derechos humanos y a la formación de una cultura que asuma entre sus valores y principios el imperativo ético del respeto a la dignidad humana y la convivencia sana entre las personas y las instituciones del Estado.

Cuadro N° 1
Mandato constitucional

Artículo 194, romano I de la Constitución de la República

- | | |
|-----------|---|
| 1° | Velar por el respeto y la garantía a los derechos humanos; |
| 2° | Investigar, de oficio o por denuncia que hubiere recibido, casos de violaciones a los derechos humanos; |
| 3° | Asistir a las presuntas víctimas de violaciones a los derechos humanos; |
| 4° | Promover recursos judiciales o administrativos para la protección de los derechos humanos; |
| 5° | Vigilar la situación de las personas privadas de su libertad. Será notificado de todo arresto y cuidará que sean respetados los límites legales de la detención administrativa; |

¹ Artículo 194, I, 3°, 10°, 11° y 12° de la Constitución de la República.

Artículo 194, romano I de la Constitución de la República

- 6°** Practicar inspecciones, donde lo estime necesario, en orden a asegurar el respeto a los derechos humanos;
- 7°** Supervisar la actuación de la administración pública frente a las personas;
- 8°** Promover reformas ante los Órganos del Estado para el progreso de los derechos humanos;
- 9°** Emitir opiniones sobre proyectos de leyes que afecten el ejercicio de los derechos humanos;
- 10°** Promover y proponer las medidas que estime necesarias en orden a prevenir violaciones a los derechos humanos;
- 11°** Formular conclusiones y recomendaciones públicas o privadamente;
- 12°** Elaborar y publicar informes;
- 13°** Desarrollar un programa permanente de actividades de promoción sobre el conocimiento y respeto de los derechos humanos;
- 14°** Las demás que le atribuyen la Constitución o la ley.

En síntesis, la Procuraduría supervisa a todos los órganos del Estado salvadoreño, sin excepción alguna, examinando si con su comportamiento cumplen con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos humanos; con ese propósito se enmarca dentro de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, que gozan de la máxima acreditación que supone su aceptación internacional y el cumplimiento de los Principios de París.²

En la actual gestión, iniciada en octubre de 2019, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, licenciado José Apolonio Tobar Serrano, ha considerado especialmente importante que la investigación de presuntos abusos y otras situaciones en relación con los derechos humanos sea realizada a través de una atención oportuna, ágil y eficaz, disponiendo de las medidas de asistencia apropiadas para personas y grupos en mayor condición de vulnerabilidad, en un plazo razonable y garantizando la participación de las víctimas, debiendo también tomarse acciones coordinadas para la difusión, promoción y educación junto con la incidencia para lograr el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en concordancia con los principios plasmados en la Constitución, la normativa nacional y los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

En ese contexto, se ha reforzado el apoyo para las Delegaciones Departamentales en tanto que estas representan y ejercen un vínculo más estrecho con la población y las autoridades locales en materia de protección y promoción de los derechos humanos. También se ha promovido el fortalecimiento de capacidades del personal institucional y dirigido lineamientos con miras a consolidar la prestación de un servicio público comprometido y sensibilizado que potencie la responsabilidad en las tareas encomendadas y por ende la confianza y credibilidad en la Procuraduría.

Asimismo, durante este período, se han realizado importantes acciones de protección y promoción en derechos humanos en cumplimiento del mandato constitucional y legal, así como importantes iniciativas que han beneficiado a diversos sectores de la población salvadoreña como resultado de las medidas y enfoques adoptados, las cuales se detallan en los siguientes apartados.

² Además de las normas contenidas en la Constitución y la ley secundaria, el mandato de esta Procuraduría se complementa y fortalece con los Principios Relativos al Estatuto de las Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de Derechos Humanos, denominados como “Principios de París”, suscritos por representantes de dichas organizaciones en 1991, que contemplan criterios o estándares para su funcionamiento y composición.

1. Acciones de protección y promoción de derechos humanos

En el periodo comprendido entre el 16 de octubre de 2019 y el 31 de diciembre de 2020 las acciones de protección de derechos humanos, en relación a la prevención e investigación de presuntas violaciones a los mismos, suman **9,012** a nivel nacional en el marco de la asistencia a víctimas y la investigación de presuntas violaciones a sus derechos. De estas, 6,162 están referidas a orientaciones legales, 1,185 a acciones inmediatas³ y 1,665 a denuncias atendidas.

De igual manera se han emitido **2,643 pronunciamientos** que formalizan el ejercicio de los mecanismos y acciones de protección⁴; entre estos, 922 se refieren a resoluciones u oficios iniciales cuya función es solicitar informe a la autoridad señalada o superior jerárquico sobre los hechos denunciados y las medidas adoptadas al respecto, pudiendo activar o solicitar colaboración a otras autoridades, dictar recomendaciones y medidas que promuevan el cese de la presunta violación denunciada, evitar que sea consumada o recomendar la restitución del derecho presuntamente vulnerado, además de promover la investigación de los hechos, entre otras cuestiones.⁵ Además se han firmado 473 resoluciones iniciales, 109 resoluciones de responsabilidad, 32 relativas al acatamiento de recomendaciones y 54 pronunciamientos vinculados a buenos oficios, entre otros.

Por otro lado, de manera particular es importante destacar la emisión de 150 posicionamientos públicos por medio de los cuales se ha externado la opinión pública, inmediata y oportuna de la PDDH sobre hechos que implican violaciones o presuntas violaciones a derechos humanos, de trascendencia nacional e internacionales y en los cuales se han realizado llamados, exhortaciones, recomendaciones o propuestas para su superación. Estos posicionamientos han estado vinculados a las carencias derivadas de la gestión inadecuada de riesgos, las afectaciones al medio ambiente, la falta de acceso a la justicia pronta eficaz y oportuna así como medidas de protección en situaciones de violencia para las mujeres y la población LGBTIQ+, la supresión ilegal de plazas en el sector público, los derechos de la niñez y adolescencia, especialmente en relación a la violencia sexual que les afecta, las necesidades de las víctimas del conflicto armado en materia de verdad, justicia y reparación, la situación del derecho al agua en sus elementos de calidad, acceso y abastecimiento, las violaciones a derechos humanos vinculadas a la seguridad pública y las necesidades y derechos laborales del cuerpo policial, el desplazamiento forzado, los derechos de las personas migrantes, y salvadoreñas en el exterior, entre otras temáticas.

Finalmente, se realizaron 120 verificaciones de observación preventiva, 135 mediaciones⁶ y 1,263 atenciones vinculadas a derechos de las personas privadas de libertad.⁷ Asimismo, se realizaron 330 atenciones humanitarias, jurídicas y psicoemocionales vinculadas a víctimas migrantes y familiares de migrantes desaparecidos así como a víctimas de desplazamiento forzado interno.⁸

Cuadro N° 2
Resumen de Acciones Vinculadas a la Protección de Derechos Humanos

Periodo 16 de octubre de 2,019 a 31 de diciembre de 2020	
1	6, 192 orientaciones legales
2	2,643 pronunciamientos firmados ⁹
3	1,665 denuncias atendidas

³ Datos correspondientes a la sede central y enero a junio 2020 delegaciones departamentales

⁴ Datos correspondientes a enero – noviembre de 2020

⁵ Art. 77 del Reglamento para la Aplicación de los Procedimientos del Sistema de Protección de Derechos Humanos de la PDDH

⁶ Datos Departamento de Observación Preventiva y Atención a Crisis, enero a junio 2020

⁷ Datos Departamento Penitenciario, enero a junio 2020

⁸ Datos Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos de las Personas Migrantes y Seguridad Ciudadana. Enero a junio 2020

⁹ Periodo entre enero y noviembre de 2020

Periodo 16 de octubre de 2,019 a 31 de diciembre de 2020	
4	1,263 atenciones personas privadas de libertad
5	1,185 acciones inmediatas
6	330 atenciones migrantes y desplazamiento forzado
7	163 acciones inmediatas
8	150 posicionamientos públicos sobre diversas temáticas que afectan a los derechos humanos
9	135 mediaciones
10	120 verificaciones de observación preventiva
Total	13,846

En relación a las actividades de promoción de los derechos humanos, se realizaron 446 acciones a nivel nacional, 53 de estas fueron actividades educativas, referidas a 24 cursos formativos (11 Cursos Básicos de Derechos Humanos), 24 jornadas formativas y 1 diplomado relativo a "Derechos Humanos, Discapacidad, Participación Ciudadana y Humanización". Estas actividades beneficiaron a 1,353 personas (718 hombres y 635 mujeres), además se entregaron 733 materiales educativos, siendo las temáticas impartidas las siguientes:

Cuadro N° 3
Acciones educativas en materia de derechos humanos

Temáticas impartidas	
1	Derechos Humanos y salud
2	Derechos Humanos y consentimiento informado
3	Derechos Humanos con enfoque de género
4	Igualdad y no discriminación
5	Víctimas y derechos humanos
6	Sistemas de Protección Derechos de las Mujeres
7	Sistemas de Protección Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
8	Derecho al trabajo
9	Uso de la fuerza y derechos humanos
10	Protección contra la tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes
11	Deberes del Estado en materia de Derechos Humanos
12	Derechos de las personas migrantes
13	Derechos de la niñez y adolescencia
14	Derechos de las personas con discapacidad
15	Crímenes de odio contra población LGBTI
16	Formación de formadores en derechos humanos

De igual manera se realizaron 34 jornadas de difusión vinculadas al mandato de la PDDH, especialmente dirigidas a estudiantes de 1° y 2° año de Bachillerato, educación básica,

personal docente y administrativo de centros escolares, beneficiando a un total de 890 personas, de las cuales 724 fueron niños y niñas. Además se realizaron seis actividades en modalidad de feria, instalando stand con material informativo de derechos humanos en diferentes universidades, en las cuales participaron 323 personas (207 mujeres y 116 hombres).

Adicionalmente se llevaron a cabo 12 acciones conmemorativas relacionadas con los derechos humanos en modalidad de cine fórum en las que participaron 626 personas (400 mujeres y 226 hombres) y donde 427 fueron personas jóvenes entre 19 y 24 años. En total, las actividades de difusión beneficiaron a un total de 1,839 personas.

Por su parte, las actividades de difusión vinculadas a la Biblioteca institucional beneficiaron a 595 personas, a través de visitas guiadas, atención en sala, festivales y curso para niños y niñas.

Cuadro N° 4
Resumen de Acciones Vinculadas a la Promoción de Derechos Humanos y personas beneficiadas

Periodo 16 de octubre de 2,019 a 30 de noviembre de 2020		
N°	Total de actividades	Personas beneficiadas
1	307 actividades de promoción realizadas por las delegaciones departamentales ¹⁰	S/D
2	53 jornadas educativas	1,353
3	34 jornadas de difusión del mandato PDDH	890
4	34 acciones de difusión Biblioteca	595
5	12 cine fórum	323
6	6 ferias DDHH	626
Total	446	3,787

Finalmente debe agregarse la elaboración de diferentes documentos metodológicos para el fortalecimiento de capacidades y lineamientos de actuación internos entre los que pueden mencionarse las “Directrices para el Monitoreo y Verificación institucional en situación de riesgo y un estado de emergencia” y la actualización de la “Guía para Monitoreo de Albergues”; el “Protocolo de Atención a Casos de Desplazamiento Forzado” y el “Manual para la investigación de ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas”, así como el “Manual de Calificaciones Integral” (actualmente en revisión).

2. Logros e iniciativas prioritarias

En el marco del trabajo realizado durante el primer año de gestión de la actual administración se han considerado como aspectos centrales de su labor el mantenimiento de un contacto estrecho de participación y colaboración con las distintas mesas temáticas de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, espacios interinstitucionales, organismos internacionales, cuerpo diplomático y de manera particular con la población salvadoreña, visitando los territorios y escuchando sus necesidades e intereses a través de mecanismos de consulta específicos con cobertura nacional.

De esta forma, a continuación se presenta un resumen de los aspectos más destacados en la ejecución de acciones prioritarias para una efectiva defensa y promoción de los derechos humanos

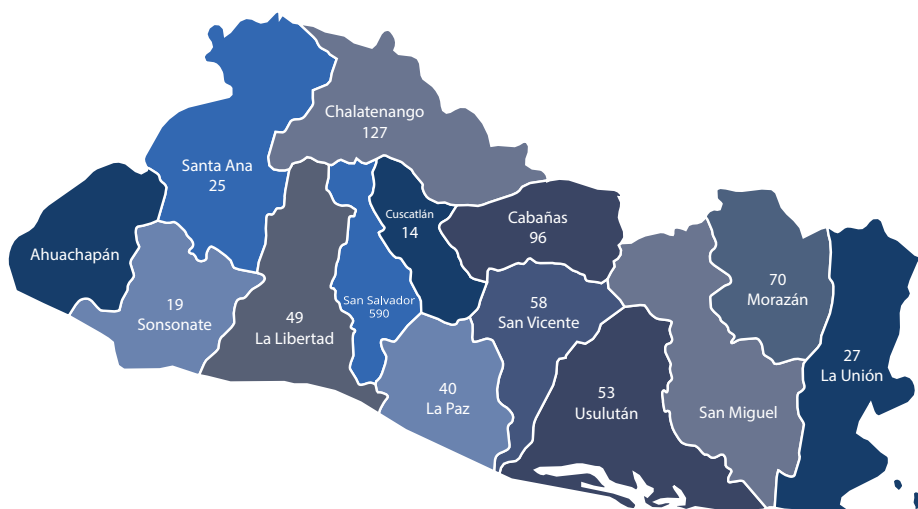
¹⁰ Datos enero a junio 2020 Delegaciones Departamentales

A. Consulta con víctimas del conflicto armado

Con el convencimiento de que la participación real de las víctimas del conflicto armado salvadoreño, respecto de la identificación, diseño e implementación de todas aquellas medidas que atiendan las graves violaciones que sufrieron, es esencial e indispensable para garantizar el pleno cumplimiento de sus derechos, la PDDH realizó un proceso de consulta con esta población, para conocer de primera mano, y con mayor exactitud, las problemáticas que enfrentan, sus demandas y propuestas en esta materia.

Por ello, se elaboraron propuestas, cartas metodológicas y guías de trabajo para las personas facilitadoras e instrumentos de vaciado de información que permitieron realizar un proceso adecuado, respetuoso y participativo. De esta manera, entre el 31 de enero y el 15 de febrero de 2020, se planificó y ejecutó un proceso de consulta a nivel nacional a través de jornadas-taller.

En dichas jornadas se contó con la presencia de 604 personas en representación de todas las zonas geográficas del país, gracias a la coordinación realizada con las organizaciones de víctimas y las delegaciones departamentales. Concretamente se llevaron a cabo en 12 de los 14 departamentos abarcando 89 comunidades. La mayor participación se registró en Chalatenango con 127 personas, seguido de Cabañas con 96 y Morazán con 70 participantes. Estos tres departamentos representan el 51% de las personas consultadas.



Participantes por departamento

Fuente: Elaboración propia con datos registrados del proceso de consulta a nivel nacional

Sin duda alguna, desarrollar este proceso supuso para la PDDH dos grandes aciertos. A nivel interno, entrar en contacto directo con las víctimas, escuchar sus necesidades, intereses y demandas nos acerca a esa relación natural que existe entre quienes son titulares de derechos y la institución que, por mandato constitucional, está llamada a velar porque esos derechos sean respetados y garantizados. Estar de su lado supone precisa e inicialmente esa acción básica de escucha atenta y comprensiva en un ambiente de confianza.

En ese sentido, una conclusión fundamental fue la necesidad del reconocimiento de los agravios. Ninguna acción estatal que se realice puede prescindir del reconocer y valorar el impacto de las experiencias de violencia que caracterizó a las violaciones a derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado, las cuales no solo transgredieron enormemente la dignidad de las personas, sino que, además, suponen, hasta este día, consecuencias en sus condiciones de vida y graves impactos en sus proyectos individuales, familiares y comunitarios.

A lo largo de la consulta se pudo escuchar y comprender el profundo sentimiento de insatisfacción y la desesperanza que las víctimas experimentan ante la impunidad, el rechazo y la falta de reconocimiento institucional y social de los dolores padecidos. Muchas veces han sido cuestionadas, tratadas como sospechosas o mentirosas, estigmatizadas públicamente y, en definitiva, sin esfuerzos estatales que valoren y atiendan los efectos acumulativos de tales agravios.

Por eso, en el informe emitido, se consideró que toda acción estatal en esta materia debe partir de esta premisa ineludible: los daños causados han sido consecuencia de violaciones a derechos humanos que se han mantenido a lo largo de los años, sumándose agravios a través de diversas acciones y omisiones que, como tales, han repercutido en la vida íntima, social, política, cultural y de desarrollo individual y colectivo de las víctimas. Por lo tanto, dicha acción debe responder a esas experiencias, ser auténticamente reparadora desde una visión integral, histórica y multidisciplinaria.

B. Actuación durante la emergencia nacional por la pandemia COVID-19

Desde el inicio de la emergencia nacional decretada a causa de la pandemia COVID-19, esta Procuraduría, en cumplimiento y apego estricto al mandato constitucional y legal de velar por el respeto y la garantía de los derechos humanos, por medio de las Delegaciones Departamentales, las Procuradurías Adjuntas específicas y los departamentos y unidades especializadas que la integran, ha coordinado políticas y mecanismos de protección de derechos humanos con el objeto de adoptar una posición institucional frente a las actuaciones del Estado para contener el contagio y las muertes por el COVID-19, vinculadas a la emisión de varios decretos ejecutivos y legislativos, los cuales han logrado la suspensión de las actividades académicas, limitación de la actividad comercial y del transporte público, la restricción de vuelos aéreos, el cierre de fronteras, la creación de centros de cuarentena para personas viajeras, entre otras, como la limitación de la libertad de circulación y de reunión.

En esta coyuntura, la labor inicial de la PDDH estuvo dirigida prioritariamente a monitorear la implementación de las medidas de contención, especialmente con respecto a la situación de las personas en los Centros de Cumplimiento de Cuarentena (CCC o Centros de Contención), debido a las constantes denuncias sobre condiciones inadecuadas, falta de alimentación y graves carencias de los servicios básicos. A esta labor, y debido a la complejización de la emergencia, se fueron agregando otras vinculadas al monitoreo y verificación de los retenes policiales, las circunstancias de las detenciones de las personas por incumplimiento de la cuarentena domiciliar, la situación apremiante de las personas desempleadas, despedidas o con trabajos informales enfrentadas a una limitación grave de sus ingresos y medios de subsistencia, las condiciones del personal de salud pública y de las personas varadas en el extranjero, etc.

En este contexto, la PDDH implementó una serie de modificaciones en su práctica institucional para articular de manera integral el mandato constitucional, a fin de mantener la adecuada atención de las personas usuarias, lo cual conllevó a elaborar planes y mecanismos, diseñar estrategias y habilitar distintos medios, entre los cuales se destacan: uso de vías telemáticas y telefónicas; de guías e instrumentos especiales de recolección de información; el envío de avisos a través de una aplicación informática disponible para descargar desde la página web de la PDDH en dispositivos Android, el monitoreo de redes sociales; el replanteamiento e implementación de la verificación, observación y monitoreo sistemático de la actuación de las instancias gubernamentales; la coordinación con organizaciones sociales, referentes locales y otros actores claves; la reorganización del recurso humano en sus niveles ejecutivo, técnico y administrativo; y el acceso efectivo al sistema informático por parte del personal.

De igual manera se desarrolló una metodología específica que permitió la obtención, el aseguramiento, registro y análisis de la información, recabada por las distintas áreas de la PDDH, sobre una importante cantidad de vulneraciones en cuyo procesamiento fueron claves las estrategias de trabajo relacionadas a modalidades presenciales, semipresenciales

y a distancia o virtuales, lo cual fue esencial para todas aquellas labores asociadas a la elaboración oportuna de informes, pronunciamientos, resoluciones y comunicados. En este orden, se creó un sistema informático para el registro de los casos, el cual está basado en un catálogo especial que contiene derechos y hechos violatorios vinculados a las situaciones más problemáticas dentro de la emergencia, destacando las necesidades de las personas y grupos en mayor condición de vulnerabilidad.

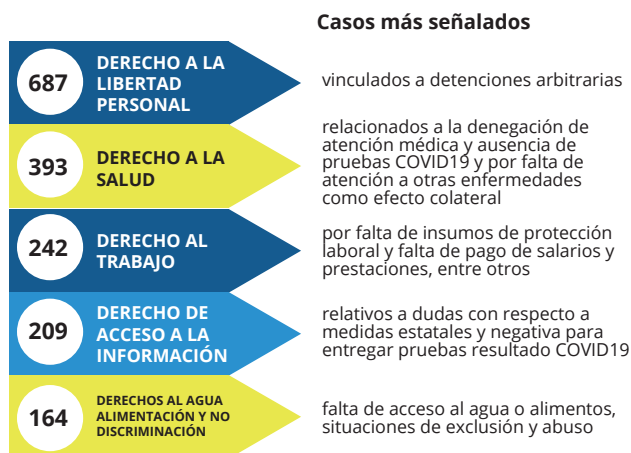
Cabe destacar que todas estas disposiciones también fueron tomadas con el sumo propósito de proteger a las personas usuarias y al personal institucional con base al acatamiento de las medidas de contención, girando directrices para realizar una nueva práctica y un nuevo tipo de verificación sobre las respuestas estatales y el impacto a los derechos humanos de la población salvadoreña.

Bajo tales procedimientos, la PDDH mantuvo un constante monitoreo sobre afectaciones a los derechos humanos de la población salvadoreña. Al respecto, en mayo de 2020, se presentó el “Informe Preliminar Sobre COVID – 19 y Derechos Humanos en El Salvador”, que tuvo como objetivo hacer una evaluación preliminar de la respuesta estatal desarrollada durante la emergencia nacional. Es importante señalar que, para la obtención de los datos, su procesamiento y posterior análisis, se hizo uso de los medios descritos anteriormente, que permitieron realizar un monitoreo sin dejar de lado la protección del personal y el acatamiento de las medidas implementadas por las autoridades.

En síntesis, dicho informe especial preliminar contiene los principales hallazgos del análisis de los casos recibidos y la identificación de las situaciones que se consideraron de mayor relevancia durante esta etapa de la emergencia nacional.

**1,811 casos
recibidos durante
la emergencia
por
COVID 19***

Período 21 de
marzo al 26 de
agosto de 2020



Por otro lado, la PDDH elaboró una serie de informes y reportes sobre la actuación estatal, que dieron cuenta de la situación de la emergencia sanitaria, lo cual fue crucial para señalar diversas problemáticas y hechos violatorios y recomendar a las instituciones públicas las medidas necesarias para corregir y prevenir la ocurrencia de este tipo de hechos. Entre estos destacan los siguientes

Cuadro N° 5
Informes y reportes emitidos durante la emergencia nacional por COVID-19

1	Reporte de Casos y Verificaciones en Controles Vehiculares
2	Informe Sobre Actuaciones Policiales Violatorias de Derechos Humanos Durante la Emergencia Nacional por COVID – 19
3	Reporte de Casos Atendidos Durante la Emergencia Nacional COVID – 19 (Abril 2020)
4	Reporte de Casos y Pronunciamientos Emitidos Durante la Emergencia Nacional COVID – 19 (Mayo 2020)
5	Reporte de Situación Derechos Humanos Durante la Emergencia Nacional en El Salvador por COVID – 19
6	Reporte Situacional 2019 – 2020 (Monitoreo sobre la situaciones de las personas migrantes durante la emergencia por COVID-19)
7	Análisis situacional de las violaciones a derechos humanos ocurridas en el departamento de Ahuachapán
8	Informe sobre el resultado de las actividades realizadas en materia de derechos específicos de las Mujeres durante la emergencia COVID 19
9	Informe sobre el Derecho a la Salud
10	Opinión de “Plan de Repatriación gradual de los salvadoreños que a la fecha aún se encuentran en el exterior y que por motivos de las medidas sanitarias de prevención de la propagación del COVID-19, no han podido retornar a El Salvador”, para Ministerio de Relaciones Exteriores

Asimismo, durante la cuarentena domiciliar se emitieron una serie de pronunciamientos institucionales vinculados a la efectiva defensa de los derechos humanos, entre estos destacan la elaboración de más de 80 posicionamientos públicos especialmente vinculados a hacer llamamientos y recomendaciones relacionados con las medidas estatales de atención y contención de la pandemia, análisis sobre las restricciones al ejercicio de derechos, especialmente los de las personas en mayor condición de vulnerabilidad tales como los salvadoreños y salvadoreñas en situación de retorno y aquellas personas varadas en el exterior o que vieron afectados sus derechos a la salud, trabajo, garantías de ingreso y medios de subsistencia, libertad, seguridad, acceso a la información, entre otros.

De manera particular es importante destacar la emisión de siete medidas cautelares vinculadas a la protección de las personas trasladadas a cuarentena en el Hospital “Dr. José Antonio Saldaña” y a los diferentes centros de contención así como de aquellas retenidas por el presunto incumplimiento de la cuarentena domiciliar. En estas situaciones se reconoció la complejidad de la situación enfrentada por los Estados y las sociedades a nivel mundial debido a las medidas excepcionales que requiere la pandemia, lo que supone desafíos extraordinarios desde el punto de vista de los sistemas sanitarios, la vida cotidiana de las personas y para la vigencia de los derechos humanos.

En tal sentido se declaró que las condiciones y hechos que motivaron la emisión de las medidas cautelares constituían una situación de peligro o daño inminente a la vida de diferentes personas, así como a su integridad y salud, resultado que debía ser prevenido por medio del proceder de las autoridades de salud, quienes deberían ajustar su conducta a las obligaciones de medio de conservar (asegurar efectividad) y defender (garantizar sin discriminación) el derecho humano a la vida, a la integridad personal y a la salud física y psicosocial de las personas en cuarentena o retención.

De esta manera se hizo un llamamiento a adoptar con carácter de urgente e impostergable, las medidas competentes en el marco de los protocolos de atención internacionales

y nacionales existentes para la atención de las personas en cuarentena preventiva o diagnosticadas con COVID-19 para prevenir afectaciones más graves a la salud y la vida. Asimismo, se exhortó a que de inmediato se adoptaran las medidas para la atención urgente a pacientes en condición de vulnerabilidad, particularmente niñez, neonatos, personas adultas mayores, mujeres, mujeres embarazadas o en estado post parto, personas con discapacidad, personas con VIH y a quienes presentaban condiciones de salud adyacentes, como enfermedades crónicas. Por otra parte, deberían proporcionarse los insumos necesarios para la protección y bioseguridad del personal médico, enfermeras y demás personal de apoyo hospitalario.

También se estableció la obligación de garantizar con urgencia que la medida de confinamiento en centros de contención ordenada por el Ministerio de Salud para personas retornadas, se ejecutara bajo las condiciones elementales materiales y estructurales adecuadas para la separación, distanciamiento físico, higiene y salubridad; lo anterior implica —aunque no se agota con— la existencia de habitaciones separadas (temporales o permanentes) y espacios idóneos para la atención de otras necesidades básicas, entre otras medidas cautelares.

Por otro lado, también se diseñaron y ejecutaron diferentes campañas de promoción de derechos con el objeto de generar sensibilización sobre los estándares de derechos humanos aplicables en el contexto de la emergencia, especialmente la campaña denominada **“VOS TENÉS DERECHO”**, la cual tuvo como objeto generar en la población salvadoreña el conocimiento de sus derechos, en especial aquellos que en virtud del combate a la pandemia del COVID-19 son susceptible de mayor vulneración. Además se realizaron diferentes foros virtuales de análisis en los que participaron titulares de diferentes instituciones nacionales de derechos humanos, integrantes de organismos internacionales y personas expertas en las temáticas específicas vinculadas a la emergencia sanitaria.

Cuadro N° 6
Foros virtuales realizados durante la emergencia nacional por COVID-19

1	Webinar “Derechos de las Personas Internas en Prisión durante la Pandemia (RINDHCA Y FIO)
2	Conversatorio “Derechos Humanos y Estado, Arbitrariedades en Pandemia” Revista Gato Encerrado
3	Webinar “Empresas y Derechos Humanos en tiempos del COVID” (RINDHCA Y FIO)
4	Webinar “Instituciones Nacionales de Derechos Humanos durante la Pandemia” Comisión Interamericana de Derechos Humanos
5	Webinar “Personas salvadoreñas varadas en el exterior contexto COVID-19) PDDH
6	Webinar “Repatriación de ciudadanos en tiempos de COVID-19 (RINDHCA Y FIO)
7	Webinar “Estado Constitucional y Democrático de Derecho en el marco de la pandemia por COVID-19” Asociación Americana de Juristas, rama El Salvador y PDDH
8	Foro “Los Impactos de la Emergencia Nacional por el COVID 19 sobre las Mujeres y la Respuestas de la Sociedad Civil” (Grupo Interagencial ONU)

Finalmente, la PDDH ha mantenido una verificación constante de la situación de las personas privadas de libertad en el contexto de la pandemia, de esta manera, entre marzo y octubre de 2020, realizó 617 verificaciones sobre las condiciones de salud y habitabilidad en los centros penitenciarios. Estas verificaciones se han realizado de manera remota a través de llamadas telefónicas y la remisión de oficios debido a que la Dirección General de Centros Penales no ha permitido el ingreso de la PDDH a dichos centros

C. Fortalecimiento de las relaciones externas nacionales e internacionales

Durante el primer año de la presente gestión se han realizado acciones orientadas hacia la consolidación de espacios de interacción y vinculación con las instituciones del Estado, la sociedad civil y actores internacionales involucrados en la protección y promoción de los Derechos Humanos". En ese sentido, se han formulado diferentes estrategias tales como la suscripción de convenios y la promoción de mecanismos de participación de diversos sectores sociales en la protección de los Derechos Humanos, entre otras.

De esta manera, en el marco de la obligación de crear, fomentar y desarrollar nexos de comunicación y cooperación con organismos promoción y defensa de los derechos humanos se impulsó la firma de Convenios de Cooperación con Médicos del Mundo y el Colegio Médico, cuyo objetivo es establecer una alianza de trabajo para la ejecución de acciones de cooperación y fortalecimiento de vínculos que permitan trabajar conjuntamente temas relacionados con la protección del derecho humano a la salud en razón de la pandemia por COVID-19.

También se han firmado dos convenios vinculados al trabajo conjunto para la garantía de los derechos de las mujeres con los cuales se pretende iniciar un proceso de gestión de proyectos sociales colaborativos de interés mutuo, para realizar investigaciones en el ámbito de las respectivas competencias institucionales; asimismo, compartir investigaciones realizadas de forma independiente, trabajar en la búsqueda y logro de proyectos en común, que pretendan el respeto a los derechos humanos, su promoción y educación, específicamente con la Asociación de Mujeres Universitarias (AMUS) y la Asociación Colectiva de Mujeres para el Desarrollo Local (Colectiva Feminista), que también incluye el componente de la protección integral de las mujeres defensoras de DDHH articuladas en la Red Salvadoreña de Defensoras de derechos humanos.

Asimismo, se ha reactivado, fortalecido y coordinado trabajo conjunto con 13 Mesas Permanentes de Derechos Humanos, algunas creadas a instancia de la Procuraduría y otras a partir de diferentes iniciativas de sociedad civil, como uno de los mecanismos impulsados por la PDDH de propiciar una mayor coordinación en lo relativo a la protección de los derechos humanos a través de la construcción de propuestas, posicionamientos públicos, entre otros.

En especial deben destacarse las acciones vinculadas al análisis, difusión e incidencia para la aprobación de diversos proyectos de ley vinculados directamente con los derechos humanos de los grupos en mayor condición de vulnerabilidad en el contexto actual, de manera particular se resalta el acompañamiento para la aprobación de la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad y en los procesos de revisión de los proyectos de Ley de Atención Integral para la Persona Adulta Mayor y para la Protección de Periodistas

Cuadro N° 7
Mesas de Trabajo conjunto sobre Derechos Humanos

1	Mesa Permanente sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas Mayores
2	Mesa Permanente de Niñez, Adolescencia y Juventudes
3	Mesa Permanente de VIH y Derechos Humanos
4	Mesa Permanente de las Personas con Discapacidad
5	Mesa LGBTI
6	Mesa de Memoria Histórica
7	Mesa Permanente sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente
8	Mesa Permanente para la Discusión de Desabastecimiento de la zona de Santiago Texacuangos

- | | |
|-----------|--|
| 9 | Mesa Permanente relacionada con la extracción de material pétreo en Cantón San Francisco, municipio de Quezaltepeque |
| 10 | Mesa por la Soberanía Alimentaria |
| 11 | Mesa Interinstitucional de Dialogo de Derechos Humanos y Seguridad (se instalaron además 6 mesas de dialogo en las Delegaciones Departamentales de La Paz, La Libertad, San Miguel, Usulután, Sonsonate y Cabañas) |
| 12 | Mesa de Actuación Policial |
| 13 | Mesa de Protección a Periodistas |

A nivel internacional, la PDDH, como Institución Nacional de Derechos Humanos de El Salvador (INDH), integra varios Organismos internacionales de Protección de Derechos Humanos, entre ellos: La Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI), la Red de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Continente Americano (RINDHCA), la Federación Iberoamericana de Ombudsmen (FIO), y el Consejo Centroamericanos de Procuradores; a través de los cuales se desarrollan procesos conjuntos que permiten articular de manera colaborativa y complementaria el trabajo para la elaboración de documentos, la formulación de recomendaciones y el impulso de procesos en agendas internacionales.

Es así que en estos espacios se da seguimiento a los hechos acontecidos en cada país y la actuación de los Ombudsmen, quienes en el completo ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en respeto irrestricto a los “Principios de París” tutelan las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos a nivel global, y ejercen su rol de defensa, promoción y protección de los Derechos Humanos de sus connacionales, cumpliendo con independencia y autonomía su labor de supervisión al Estado en defensa de los derechos de las poblaciones y grupos más desfavorecidos.

Debe destacarse que en la gestión actual, se lidera la Secretaría General de la RINCHCA; cuyo comité coordinador está integrado por Sergio Micco / Branislav Marelic de la INDH de **Chile** (Región Sur), Maria del Rosario Piedra de la INDH de **México** (América del Norte), y Freddy Carrión de la INDH de **Ecuador** (Región Andina), este último, recientemente electo presidente de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI).

De manera particular en el contexto de la pandemia por COVID-19, estos organismos han desarrollado un papel fundamental en el desarrollo de debates e intercambio de experiencias y buenas prácticas para documentar la labor de las INDH, elaborando directrices específicas para la atención de los grupos en mayor condición de vulnerabilidad, el registro de ataques contra las INDH, entre otras.

También se han elaborado diferentes documentos de opinión entre los que destacan el informe para la RINCHCA sobre las afectaciones generadas a partir de las injerencias del poder Ejecutivo en contra del Ombudsman¹¹; el documento solicitado por el Comité de Derechos Humanos, sobre el proceso de consideración del estado del Sistema de Órganos creados en virtud de Tratados de Derechos Humanos de la ONU¹²; los aportes para la elaboración del Informe Anual de Derechos Humanos del Departamento de Estado, Embajada de los Estados Unidos¹³; entre otros insumos como la elaboración de un video sobre el Rol de la INDH en etapas post CONFLICTO, que fue solicitado por la Red Europea de INDH (ENRHI)¹⁴; y la participación de una encuesta enviada por la GANHRI, sobre INDH y COVID¹⁵.

¹¹ De fecha 10 de abril de 2020, sobre el periodo comprendido desde el 01 junio 2019 hasta el 30 de abril 2020, periodo en el que dio inicio el mandato constitucional de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, el cual sería incorporado al Informe del Secretario General de NNUU en el 45 período de sesiones a desarrollarse el segundo semestre de 2020

¹² En julio de 2020 fue enviado al Comité de Derechos Humanos de la ONU

¹³ En septiembre de 2020 fue enviado a la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador

¹⁴ Se envió el 29 de septiembre de 2020

¹⁵ Se envió el 2 de octubre de 2020

En el marco de la discusión de la propuesta de Resolución Bienal de la Instituciones de Derechos Humanos, en la 45ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se enviaron comunicaciones oficiales al Ministerio de Relaciones Exteriores de este país, a fin de que el Estado Salvadoreño apoyara la aprobación de dicha resolución, sin haber obtenido respuesta alguna; no obstante, el 6 de octubre de 2020, muchos Estados de todo el mundo se comprometieron a fortalecer su apoyo a las instituciones nacionales de derechos humanos en medio de la pandemia de COVID-19 en curso.

D.Premio Nacional a la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos

A través del Premio Nacional a la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, y Menciones Honoríficas, en diciembre 2020, se reconoció a mujeres, hombres, instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil que, de forma heroica, ejemplar, incluso anónima e invisible realizan acciones positivas para el cumplimiento, el respeto y garantía de los derechos humanos en nuestro país.

También, se concedieron menciones honoríficas para aquellas personas o instituciones que junto a la PDDH durante el año realizaron un trabajo destacado a favor de las víctimas de violaciones a derechos humanos o promovido acciones educativas sobre los mismos. De igual manera se entregaron preseas post mortem a personas que ofrendaron su vida y trabajo por una sociedad más justa y respetuosa de los derechos humanos, entre estos se destacó la labor de Herbert Anaya Sanabria, Israel Antonio Quintanilla Cerna, María Julia Hernández Chavarría, Ignacio Ellacuría y Monseñor Oscar Arnulfo Romero.

Asimismo, mediante éste se conmemoró que un 10 de diciembre de 1948, se proclamó en el seno de las Naciones Unidas la Declaración Universal de los Derechos Humanos, instrumento que representa el ideal común de todos los pueblos por alcanzar la libertad, la justicia y la paz en el mundo, teniendo como fundamento el reconocimiento de la dignidad humana y de los derechos iguales e inalienables de todas las personas.



Llamamientos y recomendaciones relacionadas con las **medidas estatales de atención y contención de la COVID-19**





III. Posicionamientos públicos

Los posicionamientos públicos son un tipo de pronunciamiento institucional por medio de los cuales el Procurador externa su posición de manera pública, inmediata y sencilla sobre hechos que impliquen violaciones o presuntas violaciones a derechos humanos o de trascendencia nacional e internacional, en los cuales puede emitir llamados, exhortaciones, recomendaciones o propuestas. Art. 91 del Reglamento para la Aplicación de los Procedimientos del Sistema de Protección de la PDDH

A. Llamamientos y recomendaciones relacionadas con las medidas estatales de atención y contención de la COVID-19

a) Aspectos generales

1. Lineamientos institucionales para atender la Emergencia decretada por el Consejo de Ministros ante la Declaratoria de Pandemia de COVID-19

A la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) le corresponde verificar aquellas situaciones de emergencia y crisis en el país, como la presentada a nivel mundial, luego que la Organización Mundial de la Salud declarara como Pandemia el brote del COVID-19, situación en la cual, en relación a las acciones a tomar para la prevención, se pueda advertir violaciones o potenciales violaciones a los Derechos Humanos; tal como se desprende del mandato constitucional, establecido en el artículo 194 romano I numerales 1°, 3°, 6°, 7°, 10° y 11° y en el artículo 11 numerales 1°, 3°, 6°, 7°, 10° y 11° de la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

El presente documento tiene como objetivo, brindar lineamientos a las diferentes dependencias de la PDDH para realizar una labor de verificación de manera análoga y sistemática, como método de verificación y recopilación de información pertinente, que luego permita al titular posicionarse sobre la situación de emergencia y la actuación o no de las autoridades competentes, así como la activación de las instituciones que componen el Sistema Nacional de Salud y otras instituciones, con el fin de asegurar los derechos humanos de las personas, sobre todo aquellas que están en condición de vulnerabilidad.

En tal sentido, el Suscrito considera que ante emergencias como la presente, la labor de verificación de la PDDH se vuelve necesaria para evaluar la actuación de las instituciones en la prevención, promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud de aquellos casos que se presentaren con el COVID-19 y asistir a las personas que se encuentran en situación de riesgo en sus necesidades no atendidas, particularmente las personas puestas en cuarentena en los diferentes establecimientos destinados para ellos.

Por lo tanto, el trabajo de la PDDH se orienta en el monitorear y recabar información y en la observación de las acciones tomadas por las autoridades para proteger el derecho a la vida, y a la salud de la población ante la situación de emergencia decretada. En tal sentido, los lineamientos a seguir son los siguientes:

Ante la emergencia decretada por la pandemia del COVID-19, todo el personal técnico y administrativo de la PDDH deberá estar disponible para conformar equipos de trabajo o de verificación cuando les sea requerido, salvo consideradas excepciones.

Estar atentos de todos los medios de comunicación sobre las disposiciones emitidas por la Presidencia de la República y el Ministerio de Salud, como ente rector del Sistema Nacional

de Salud, a efecto de monitorear y verificar las actuaciones de las instituciones competentes, respecto a los mecanismos de prevención y atención implementados, como los estados de cuarentena declarados a las personas que llegan a los diferentes puntos aéreos, marítimos y terrestres, incluyendo aquellos puntos ciegos en las diferentes fronteras de nuestro país.

El personal de la sede central que reciba denuncias o tenga conocimiento de afectaciones al derecho a la vida o a la salud entre otros, en el marco de la pandemia del COVID-19 se abrirá un expediente único de situación y cuando sean recibidos nuevos casos, se irá levantando acta por cada caso presentado. En las Delegaciones Departamentales, se deberá abrir un expediente por cada delegación y en el mismo sentido que la Sede Central se irán anexando las actas que correspondan; enviando informe de ello a la Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Para las labores de verificación que se designen, en los diferentes lugares destinados a cuarentena, deberá considerarse que el equipo de verificación no se encuentre dentro de un grupo de personas con factores de riesgo, como personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas y pacientes inmunocomprometidos (enfermedades renales, trasplantados, cáncer, diabetes, VIH, cardiopatías, entre otros) y que además este personal verificador cuente con los insumos mínimos para la prevención de la enfermedad, como la dotación de mascarillas, guantes, alcohol en gel, entre otros.

En las labores de verificación deberá observarse en los distintos establecimientos de salud de su jurisdicción sobre la existencia de casos sospechosos o confirmados, así como la existencia de protocolos de atención, la capacidad instalada para atender dichos casos y los insumos necesarios que debe tener el personal de salud que atenderá los mismos.

Verificar en los lugares destinados para la cuarentena que se garantice el respeto a los derechos humanos de las personas en estado de cuarentena, disponiendo de los suficientes recursos económicos, técnicos y humanos para realizar una atención inmediata, segura, en condiciones de dignidad y aplicando medidas prioritarias y condiciones básicas como alimentación de calidad, implementos de higiene personal, medicamentos, atendiendo a cada caso.

Verificar los protocolos de atención psicosocial en situaciones de crisis, tanto en los puntos de entrada y salidas del país como en los lugares de cuarentena, para minimizar o evitar el impacto en la salud física y emocional de la población en resguardo.

Verificar que se garantice el bienestar de niños, niñas y adolescentes, mujeres particularmente en estado de embarazo, ciudadanos que presenten condición de enfermedades crónicas y personas adultas mayores por su alto riesgo a contraer el COVID19, tanto en el momento de la recepción, el traslado y la permanencia de la cuarentena establecida y en caso de tener resultados positivos al virus, verificar en los centros de salud a los que sean remitidos.

Verificar la existencia de protocolos de atención para las personas en cuarentena, y la aplicación de los mismos en puestos fronterizos aéreos, terrestres y marítimos, que contemplen medidas de forma escalonada, a efecto de no exponer al contacto directo a las personas en tránsito en El Salvador y al personal que desarrolla actividades laborales en dichos puestos migratorios.

Verificar si las personas cuentan con la información adecuada respecto al señalamiento del lugar en que guardará la cuarentena, las condiciones físicas de las mismas y la atención médica y psicosocial que se le brindará; así como del tipo de personal que le prestará dicha atención.

Verificar sobre los establecimientos de salud que están destinados para albergar a las personas que resulten confirmados con el virus y la capacidad instalada de éstos.

Verificar si las personas declaradas en cuarentena se les ha realizado la prueba para detectar el COVID-19, si ha sido un servicio gratuito o han debido pagar por dicha prueba y qué tipo de personal le ha realizado la misma.

Verificar si las aerolíneas o encargados del transporte terrestre han brindado información a los pasajeros declarados en cuarentena, sobre la aplicación de tarifas por cambio de boleto o alternativas ofrecidas para regresar a su país de origen.

Verificar si en todos los puntos fronterizos del país se han dispuesto condiciones mínimas para la protección tanto de las personas que ingresan o salen del país como para el personal que da cumplimiento a las medidas indicadas por el Gobierno, como dotación de mascarillas, alcohol en gel, agua y otros insumos necesarios para la prevención.

Verificar la cantidad de personal designado para la atención de las personas en cuarentena.

Verificar sobre la actuación de los Comités de Protección Civil en los casos que se presenten en las diferentes jurisdicciones.

El personal encargado de las indagaciones o investigaciones se mantendrá protegido y acatará las recomendaciones del personal sanitario encargado del centro de atención o cuarentena, se abstendrá de adelantar juicios de valor frente a los encargados. De ser posible, una vez autorizado, mantendrá comunicación con personas afectadas atendiendo las recomendaciones y evitando contactos o cercanía directa.

El personal de la PDDH no podrá adelantar o prometer acciones que no están al alcance institucional en razón de no generar expectativas en los pacientes.

Informar de forma permanente al Procurador Adjunto para la Defensa de los Derechos Humanos, al Procurador adjunto DESC y a la Coordinadora Nacional de Delegaciones sobre las acciones verificadas y cualquier eventualidad en el marco de las afectaciones por el COVID-19.

13 de marzo de 2020

2. Mecanismos de atención y protección de derechos humanos de la población en el contexto de la pandemia de COVID-19

Informo a la población que esta Institución Nacional de Derechos Humanos, adicional a las funciones ordinarias, desde del inicio de las alertas por el COVID-19 a nivel nacional ha realizado un especial monitoreo y supervisión a la Administración Pública, y ha proporcionado asistencia a las personas afectadas en el contexto de la pandemia, pronunciándome oportunamente haciendo los llamados públicos y recomendaciones a las autoridades respectivas, en específico, para mejorar las condiciones de atención a las personas que se encuentran en los centros de cuarentena, en garantía a los derechos humanos.

En esta oportunidad hago de su conocimiento que luego de evaluar la realidad nacional, con el ánimo de garantizar la continuidad del ejercicio de mi mandato hacia la población, de tutelar derechos humanos, he dispuesto lo siguiente:

El cierre temporal hasta nuevo aviso de las Delegaciones Departamentales y la sede central, como medida preventiva para garantizar la salud de la población usuaria y del personal.

Para recibir denuncias o avisos de parte de la población, se puede hacer a través de: a) las líneas telefónicas habilitadas (anexo directorio); b) por medio de la aplicación disponible en la Play Store denominada "PDDH EN LA EMERGENCIA"; c) en el espacio de denuncias de la página web oficial www.pddh.gob.sv; d) en la cuenta oficial de twitter "@PDDHEISalvador"; y e) en la cuenta oficial de Facebook "Procuraduría para la defensa de los Derechos Humanos de El Salvador".

Como Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, sobre la base de mi mandato constitucional informo que continuaré realizando las acciones necesarias para proteger y

garantizar los derechos humanos de la población y, hago un llamado a mantener la calma, a colaborar con todas las medidas de salud dispuestas por las autoridades competentes, para prevenir y atender la pandemia.

19 de marzo del año 2020.

3. PDDH lanza APP para recibir denuncias

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) lanzó hoy una aplicación para recibir denuncias, avisos y consultas de la población ante constituidas, inminentes o posibles violaciones a los Derechos Humanos de las personas.

Se trata de la app: “PDDH EN LA EMERGENCIA”, una herramienta digital amigable, portable y fiable, que funciona con dispositivos móviles y computadoras en la plataforma Android.

Esta aplicación (app) permitirá acercar los servicios de la PDDH en el contexto del distanciamiento social. Con “PDDH EN LA EMERGENCIA” se estrechará la brecha generada por la medida; que ha demostrado ser eficaz para contener la propagación del COVID-19. Las personas podrán exigir el cumplimiento de sus derechos en continuidad, a través de esta app sin moverse a sede central, ni a delegaciones, ni exponerse a ser aprehendidos por su movilización.

Es la respuesta institucional, como alternativa, para garantizar la continuidad de la defensa de los Derechos Humanos de la población en el marco de la emergencia del COVID-19, en el contexto de la cuarentena nacional decretada por el Ejecutivo a través del Ramo de Salud, que restringe la movilización de la población y que ha implicado indebidamente; como se ha evidenciado a escala nacional, la retención de personas que sólo cumplen con su trabajo, suplen necesidades básicas u otra razón.

Sobre esto, la PDDH ha manifestado que tal sanción debe ser de carácter administrativo y que no amerita retención ni mucho menos detención en centros, que contrario a la medida de distanciamiento social, expone a riesgo a las personas que han infringido la cuarentena nacional domiciliar.

“PDDH EN LA EMERGENCIA” será muy útil para la población retenida en delegaciones policiales, en situación de cuarentena, centros de contención y familiares de personas retenidas, quienes demandan conocer de su situación.

“Esta aplicación acerca a la ciudadanía con la PDDH, porque los Derechos Humanos son siempre vigentes, intransferibles e inalienables” expresó el Procurador Apolonio Tobar respecto de esta aplicación digital.

“Ponemos a disposición de la población esta aplicación, úsenla, es para ustedes” enfatizó el titular de la PDDH.

26 de marzo de 2020

4. Llamado para que toda persona cumpla las medidas implementadas por las autoridades con el fin de garantizar salud y seguridad de la población ante la COVID-19

Debido a la crisis sanitaria generada por el COVID-19, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos atendiendo al mandato constitucional de velar por el respeto y garantía de los derechos humanos, supervisar la actuación de la administración pública frente a las personas, promover y proponer medidas necesarias para prevenir violaciones, así como formular conclusiones y recomendaciones (artículo 194 romano i ordinales 1º, 7º,

10º y 11º de la constitución de la república y artículo 11 ordinales 1º, 7º, 10º y 11º de la ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos) al país en general expresa:

Quiero dirigir este día mi mensaje hacia las personas con responsabilidades de dirección, titulares institucionales en la función pública, jefaturas, gerencias de empresas, personas con liderazgo en hogares y equipos de trabajo, a quienes invito a hacer suyo lo dispuesto en el artículo 1 de nuestra Constitución, que establece que la organización del Estado debe tener como origen y fin de su actividad la persona humana.

Como Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, me encuentro consciente de la grave situación que enfrentamos, en torno a la cual, personas al frente de instituciones públicas y de buena parte de la empresa privada, han suspendido o disminuido sus labores y enviado al personal bajo su dirección hacia sus hogares, haciendo importantes esfuerzos para garantizar su justa y necesaria remuneración y la continuidad de servicios vitales bajo otras modalidades.

Muchas personas han optado por reunirse en sus hogares, bajo el cobijo y cuidado de la familia, evitando las salidas y por tanto la exposición innecesaria; algunas personas, atendiendo lo mandado por las autoridades, guardan con mucho sacrificio cuarentena en albergues; hay quienes, por la naturaleza de las funciones que realizan han debido continuar con sus labores diarias, adoptando con seriedad y compromiso las medidas de precaución que ya se han hecho públicas a través de medios oficiales. A todas esas personas expreso mi saludo respetuoso, solidario y lleno de esperanza; sin embargo, tristemente debo señalar el incumplimiento de medidas emitidas por las autoridades competentes por parte de algunas personas, quienes han desoído los múltiples llamados hacia la responsabilidad y precaución restando importancia a las directrices o han dado mayor valor al ánimo de lucro que a la vida de las personas.

Hemos constatado además como otras personas al margen de la legalidad e incluso de forma temeraria, han querido sorprender a las autoridades convirtiéndose en factores de elevado riesgo agravando la ya muy delicada situación que afrontamos; frente a ellas debo expresar mi más firme condena y unirme a la voz ya reiterada de otros funcionarios públicos, a fin de que sean asumidas con celo y diligencia las instrucciones emitidas por las autoridades competentes para garantizar nuestra seguridad, integridad, salud y vida.

Ante esta emergencia hago el llamado a que seamos sensatos, consecuentes, prudentes y solidarios, respetemos la vida, lo que solo puede hacerse bajo la comprensión de que todas y todos formamos un solo cuerpo y que los actos u omisiones de unos afectan directamente a la totalidad. Demos cuenta pues, de nuestra humanidad en la asunción responsable de lo propio, y demostremos -como ya antes lo hemos hecho- la enorme resiliencia y grandeza de nuestro pueblo.

20 de marzo de 2020

5. Recomendaciones para la atención adecuada de la emergencia sanitaria

En este contexto de emergencia nacional debido a la crisis sanitaria generada por el COVID-19, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, atendiendo al mandato constitucional de velar por el respeto y garantía de los derechos humanos, supervisar la actuación de la administración pública frente a las personas, promover y proponer medidas necesarias para prevenir violaciones así como formular conclusiones y recomendaciones (artículo 195, romano I, ordinales 1º, 7º, 9º y 11º de la Constitución de la República y artículo 11, ordinales 1º, 7º, 10º y 11º de la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos) al país en general hace saber:

Se han realizado diversas acciones de verificación en la mayoría de centros de contención del coronavirus (CCC) debido a las denuncias por las condiciones a las que han sido sometidas diversas personas nacionales y extranjeras que recientemente ingresaron

al país, especialmente pasajeros que en el Aeropuerto Internacional se les hizo firmar documentos para una posible cuarentena domiciliar pero que luego fueron enviados a albergues improvisados con condiciones de alojamiento.

Equipos de verificación de la PDDH entrevistaron personas enviadas a los CCC y las denuncias han sido similares, instalaciones improvisadas en estado de abandono, falta de información, escasez de personal sanitario, falta de insumos de aseo personal, hacinamiento e improvisación en la atención y falta de insumos de protección (para prevenir) en personal de salud y seguridad.

Considerando la importancia de la emergencia nacional, pero preocupado por la posibilidad que la operativización de la ley especial de restricción de derechos constitucionales pueda llevarnos a situaciones que ante la falta de planes de contingencia y tratamiento de la epidemia atenten contra la vida y la dignidad de los y las ciudadanas, hago los siguientes llamados y recomendaciones:

- 1) A todas las autoridades nacionales y locales, a atender los lineamientos de seguridad y prevención, siendo el Ministerio de Salud, la única autoridad delegada para determinar medidas urgentes relacionadas con la libertad de tránsito.
- 2) A los alcaldes municipales, a sumarse, a las actividades de contingencia con personal idóneo y equipado adecuadamente y en la medida de lo posible proveer a la población de insumos básicos sanitarios y paquetes de alimentos a personas que se han visto imposibilitadas de generar ingresos.
- 3) A las autoridades en general, a abstenerse de infundir temor y miedo colectivo que pueda traducirse en asedio comunitario, ya que ello puede provocar violaciones a los derechos humanos.
- 4) Al Gobierno de la República le invito a:
 - a) Conformar una Mesa de Trabajo con las autoridades sanitarias en las que se incluya al Colegio Médico y a la Procuraduría para Defensa de los Derechos Humanos, y que estas sean las encargadas de dar y manejar aspectos médicos como las condiciones de los CCC, los protocolos de atención y los tratamientos adecuados reconocidos mundialmente.
 - b) Que a todas personas en los CCC se les practique la prueba para determinar o no la portación del COVID-19.
 - c) En caso hayan nuevos traslados de personas que se encuentren en los CCC, previo a ellos se coordine al personal que los va a recibir y prepare las condiciones de las instalaciones en las que serán alojados.
 - d) Que se garantice a todo el personal de salud condiciones y equipamiento idóneo para atención de las personas que se encuentran en los CC y de quienes resulten positivo con el COVID-19 para evitar que dichas personas sean contagiadas.
 - e) Se valore atender la oferta técnica ofrecida por el Colegio Médico para contar con todas las herramientas posibles para la lucha contra el COVID-19.
 - f) Se aseguren rutas de atención para que las diferentes empresas puedan hacer llegar su productos a los centros de abastecimiento de la población, pues en los lugares de mayor concentración poblacional el abastecimiento es diario. Que se garantice atención psicosocial a todas las personas que se encuentren en los CCC, pues sin duda el encierro, el aparente trato discriminatorio, la falta de atención de problemas de salud, sin duda puede generar problemas de ansiedad o depresión.
 - g) Activar el primer nivel de atención médica (unidades de salud comunitaria)
 - h) Garantizar que las personas en condiciones de cuarentena obedezcan estrictamente a prevenir la propagación del virus y no se violenten libertades fundamentales como la comunicación con su familia, movilidad interna, alimentación adecuada y medidas de aseo personal.
 - i) Se brinde equipamiento necesario a personal de la Fuerza Armada y Policía Nacional Civil que dan seguridad en los CCC y demás lugares para que pues

prevenir el contagio.

- 5) A ANDA: a que se verifique la posibilidad de regular el suministro de agua potable en zonas con desabastecimiento con le fin de que la población pueda seguir con las recomendaciones de higiene que la Presidencia de la República ha indicado.
- 6) A las autoridades del Ministerio de Economía y la Defensoría del Consumidor, a permanecer vigilantes y atentos a posibles hechos de acaparamiento, desabastecimiento y alteración de precios de aquellos productos básicos recomendados para la prevención.
- 7) A las diferentes instituciones de gobierno, a que se sumen al llamado de suspensión temporal de actividades laborales para no poner en riesgo de contagio del COVID-19 al persona, tal como lo establecen los incisos 2do. y 3ro. del artículo 5 del Decreto Legislativo 593 (Estado de Emergencia Nacional por COVID-19).
- 8) A población en general le insto a acatar las medidas de prevención emitidas por las autoridades competentes, manteniéndose en calma, verificando información a través de sitios oficiales, siguiendo instrucciones y recomendaciones sanitarias a efecto de evitar la propagación del COVID-19, recordando que, en caso de presentar algún síntoma, debe marcarse el 132.

Finalmente reitero el compromiso de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de seguir vigilante de la garantía del derecho humano a la salud y la vida de la población salvadoreña.

21 de marzo de 2020

A) Restricciones al ejercicio de derechos

1. Medidas de Restricción Temporal del Ejercicio de los Derechos de Reunión y Libertad de Tránsito, a fin de contener la pandemia COVID-19, decretadas por el Ministerio de Salud Pública

La noche de ayer 21 de marzo de 2020, el Presidente de la República anunció la restricción por 30 días de los derechos de Reunión y Libertad de Tránsito, decretados en ocasión de la emergencia en materia de salud pública ocasionada por la pandemia del virus COVID-19. Al respecto y de conformidad al mandato constitucional conferido en los artículos 194 romano I ordinales 1º, 7º, 10º y 11º de la Constitución de la República; y 11 ordinales 1º, 7º, 10º y 11º de la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en mi calidad de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Expongo:

- 1) Soy consciente de la gravedad de la situación mundial que ahora enfrentamos y de la impostergable necesidad de adoptar medidas que prevengan el contagio masivo del virus COVID-19 para salvaguardar la salud y la vida de la población salvadoreña.
- 2) Comprendo que, bajo ciertas circunstancias, resulte imprescindible intervenir o limitar temporalmente el ejercicio de ciertos derechos a fin de garantizar la vigencia de otros a su vez fundamentales.
- 3) Concuero con que en el cometido de evitar la propagación del virus COVID-19, todas y todos jugamos un rol importante y que, en ese sentido, debemos con responsabilidad estar dispuestos a realizar sacrificios significativos para alcanzar los objetivos ulteriores.
- 4) Acompaño con firmeza el esfuerzo de servidoras y servidores públicos que, en virtud de su especialización, mandato y competencia, desempeñan un rol vital en la garantía de los derechos de la población, aún a costa de la asunción de vulnerabilidades y riesgos en régimen de excepción.

No obstante, hechos históricos y recientes en el ejercicio de la autoridad por parte de servidores públicos, el mandato constitucional que ostento y mi compromiso ético y moral, ameritan la no abstracción de este servidor respecto de los abusos que la suspensión de garantías pudiese conllevar.

Preocupa en especial el hecho que ante la inexistente reglamentación; carencia de instrucciones precisas, oportunas y acertadas; insuficientes controles internos; poca certeza e imprecisión en las indicaciones; inexperiencia de servidores en circunstancias de excepción; cansancio, estrés o hasta insensatez por parte de personas encargadas de garantizar el cumplimiento de las restricciones decretadas; se produzcan abusos, excesos o arbitrariedades que conlleven al atropello de los derechos humanos de la población.

Ante ello es preciso que el órgano responsable, en este caso, el Ejecutivo, eleve con diligencia todos los mecanismos que la legalidad y el Estado de Derecho disponen para la garantía del respeto de la esfera jurídica de toda la población.

Debe por tanto, asegurar el buen funcionamiento y garantizar las condiciones para el libre ejercicio del propio mandato de entidades constituidas por naturaleza como garantes de los más esenciales derechos, entre ellas la IGSP, ISDEMU, CONNA, ISNA, CONAIPOD, CONAVIH y por supuesto PDDH y demás instituciones del Ministerio Público, quienes a su vez estamos obligados a facilitar a la población canales de comunicación para generar respuestas eficaces y oportunas y a informar debidamente sobre el resultado de nuestras actuaciones.

Debe además el Órgano Ejecutivo, garantizar la adecuada atención de poblaciones que tras la desaparición de la Secretaría de Inclusión Social carecen ahora dentro del mismo de un referente directo para la defensa de sus derechos, como es el caso de la población LGBTQ+ y de personas adultas mayores.

Ahora más que nunca, es menester que se instruya adecuadamente a servidores en materia de seguridad pública **SOBRE EL TRATO DIGNO Y APROPIADO A SERES HUMANOS** en cualquiera de las circunstancias, en la necesidad y proporcionalidad que deben reunir las medidas que se empleen frente a una coyuntura específica; y en la necesidad de privilegiar siempre la opción menos gravosa a la esfera de derechos ante una multiplicidad de alternativas.

Ante la suspensión temporal de derechos constitucionales resulta imperante la subsistencia de las garantías judiciales indispensables para la protección de la propia esfera jurídica; la población debe tener a su mano recursos sencillos, rápidos y efectivos; que posibiliten el control jurisdiccional de las decisiones adoptadas por otros órganos en afectación de derechos fundamentales individuales y colectivos.

Por lo tanto, con base en las atribuciones expresadas en la norma constitucional y legal arriba mencionada, recomiendo:

- 1) A las y los servidores públicos enunciados en este pronunciamiento y demás instancias estatales compelidas, incluyendo a la PDDH, a prestar nuestros servicios con celo y desde una visión holística, poniendo al centro de nuestra misión a la persona humana y la garantía de su dignidad, en cumplimiento de nuestros respectivos mandatos.
- 2) A las diferentes entidades que conforman el Órgano Ejecutivo, a actuar con cautela, mesura, sensatez y responsabilidad; a garantizar el respeto irrestricto de todos los derechos no afectados por el régimen de excepción; a cerciorarse en forma responsable de las circunstancias que podrían constituir una desavenencia frente a las medidas ordenadas, y aún frente a ellas, ceñirse absolutamente al respeto a la dignidad humana.
- 3) En ese mismo sentido, a mantener una comunicación responsable. Es decir, que las medidas que se tomen sean lo más claras posibles al momento de comunicarlas

y tomarse el tiempo de transmitir cualquier cambio o aclaración adicional a la población que no tenga acceso a redes sociales. Esto, con el fin de evitar que, por desconocimiento o falta de actualización, las personas incurran en incumplimiento y se violenten innecesariamente sus derechos.

- 4) Recomiendo, además, garantizar la seguridad e integridad de todas las personas que por fuerza mayor o estado de necesidad deban hacer uso de espacios públicos restringidos, entre ellas, personas en búsqueda de insumos básicos para la propia subsistencia, la de su grupo familiar o la de personas confinadas en albergues. Al respecto, es importante estandarizar entre la población y los encargados de controlar la circulación (PNC y FAES) medidas de identificación (DUI, carné de empleados, constancias de trabajo) para evitar llevar al extremo las restricciones presidenciales.
- 5) Consecuentemente, es menester designar un lugar para las personas quienes, habiéndose confirmado estar incumpliendo las nuevas medidas, guarden cuarentena sin que se perjudique a quienes ya se encuentran en albergues, cumpliendo cuarentena desde hace varios días.
- 6) Al Órgano Judicial, a hacer efectivas las garantías judiciales indispensables para la protección de derechos, a efecto de que la suspensión de garantías no exceda la medida de lo estrictamente necesario para atender la emergencia, y que la actuación de los poderes públicos no desborde los límites señalados en las disposiciones, aún dentro de la situación de excepcionalidad jurídica vigente.
- 7) De igual forma recomiendo al Órgano Judicial, adopte las medidas necesarias de acceso a sus juzgados y demás dependencias, a fin de que la restricción de la libertad ambulatoria no constituya obstáculo para el ejercicio de los derechos de la población y para el cumplimiento del mandato conferido.
- 8) Finalmente recomiendo al Órgano Ejecutivo que valore la posibilidad de habilitar el libre tránsito de empleados y empleadas (debidamente identificados) de las diferentes organizaciones de la sociedad civil que laboran en la vigilancia, monitoreo y vigencia de derechos humanos de la población salvadoreña.

Hago finalmente un llamado a toda la población salvadoreña; a actuar con calma, serenidad y buen juicio; a evitar toda forma de estigma y discriminación en contra de personas que han resultado o resulten infectadas por el virus COVID-19; a unirnos como un solo pueblo, solidarios en el propósito de reducir a su expresión mínima la afectación que la pandemia del citado virus traerá a nuestras vidas. Les invito a confiar, apoyar y proteger a todas las servidoras y servidores públicos que ahora se encuentran en la primera línea de protección y a acatar con espíritu de corresponsabilidad sus indicaciones y lineamientos, en tanto estén ejecutados para nuestro propio amparo.

22 de marzo de 2020

B) Derechos de las personas salvadoreñas retornadas y varadas en el exterior

1. La Situación de las Personas Salvadoreñas en el Exterior, Personas Retornadas en Centros de Contención por la pandemia COVID-19

En atención a mi mandato constitucional conferido en el artículo 194 romano I, ordinales 1°, 2°, 3°, 7°, 10° y 11° de la Constitución de la República, estimo de manera urgente pronunciarme sobre la situación de las personas migrantes en el contexto de la pandemia del COVID-19, al respecto expongo lo siguiente:

Como Defensor del Pueblo, he realizado acciones para dar seguimiento a las condiciones de diversos grupos en situación de vulnerabilidad, en contextos de migración tales como:

salvadoreños que se encuentran en el exterior, personas retornadas en los centros de contención. Dichas acciones se han enfocado en tener un monitoreo permanente de medios de comunicación, verificadores in situ y monitoreo remoto en el caso de personas retornadas y comunicaciones oficiales para realizar gestiones directas con autoridades competentes.

En lo que respecta a las personas salvadoreñas que se encuentran en el exterior, desde el primer momento que se adoptaron medidas de parte del Órgano Ejecutivo, solicité informe al Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre las acciones adoptadas para garantizar a nuestros connacionales el derecho a la protección consular en el exterior y el monitoreo constante sobre su situación, petición que reiteraré de forma reciente.

Sin embargo, hemos tenido conocimiento de casos de personas salvadoreñas en diferentes países que han solicitado gestiones de buenos oficios a esta Procuraduría, para que se inste a las autoridades consulares que realicen las coordinaciones necesarias, de ser procedente, para retornar al país, tal es el caso de 78 personas salvadoreñas que se encuentran en Panamá, que consideran necesario su retorno y someterse a la cuarentena respectiva, tal como lo ha determinado el Órgano Ejecutivo. De igual forma el caso de 25 personas salvadoreñas en Colombia, quienes se encontraban temporalmente en dicho país en actividades académicas y en el contexto de la pandemia no pudieron regresar a El Salvador; a quienes se suman 24 personas que se encuentran en Miami; 1 persona que se encuentra en Costa Rica; y 30 personas que se encuentran en Nicaragua.

En los primeros dos casos reconozco que hay un esfuerzo de las autoridades consulares salvadoreñas de retomar su petición, sin embargo, aún no reciben una respuesta definitiva, ni información certera al respecto. En este punto es necesario hacer énfasis en lo esencial del derecho a la protección consular, como una obligación del Estado salvadoreño de asistir humanitaria y legalmente a nuestros connacionales, facilitarles las gestiones necesarias dentro de su competencia y de garantizar el derecho a la información y difusión sobre dichas acciones. Dando cumplimiento a las disposiciones de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares¹⁶ que en su artículo 67 establece la obligación estatal de cooperar de la manera que resulte apropiada en la adopción de medidas relativas al regreso ordenado de los trabajadores migratorios y sus familiares al Estado de origen cuando decidan regresar, cuando expire su permiso de residencia o empleo, o cuando se encuentren en situación irregular en el Estado de empleo o inclusive cuando se encuentren en situación regular.

Por otra parte, desde el cumplimiento de mi mandato, he dado seguimiento a las condiciones de las personas salvadoreñas retornadas, que se encuentran en centros de contención, de acuerdo a verificación in situ realizada por personal de esta Procuraduría, a la Dirección de Atención al Migrante de la Dirección General de Migración y Extranjería y al Centro Integral de Atención a las Personas Migrantes, se pudo constatar por medio del personal del Ministerio de Salud adscrito a dicha Dirección, que las personas retornadas se someterían a la cuarentena, además que habían personas repatriadas de México y Estados Unidos, a las cuales se les realizaba su chequeo médico al ingreso. Paulatinamente fueron habilitándose 3 centros de contención más para personas provenientes de Estados Unidos, en el caso de México, cesaron las deportaciones. De acuerdo a las últimas cifras verificadas en los centros referidos se contaban con 345 personas en totalidad, 61 mujeres y 284 hombres.

La información obtenida por esta Procuraduría ha sido muy limitada, por la falta de colaboración de las autoridades de la Dirección General de Migración y Extranjería, quienes ante nuestras peticiones y monitoreo tanto in situ como de forma remota, no han proporcionado una información amplia sobre las condiciones de los centros, en algunos se ha negado información por parte de los administradores, ante directrices del Director General de la mencionada dependencia. Esta situación es preocupante, debido a que dicha autoridad está obligada a dar cumplimiento a lo establecido en los artículos, 10 y 34 de la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, de lo contrario puede

¹⁶ Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. Adoptada por la Asamblea General en su resolución 45/158, de 18 de diciembre de 1990. Disponible: <https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cmw.aspx>

incurrir en las responsabilidades establecidas en el artículo 46 del mismo cuerpo normativo, por obstaculizar nuestro mandato.

Por lo tanto, en consonancia con mi mandato establecido en el artículo 194 de la Constitución de la República realizo las siguientes recomendaciones:

- 1) Exhorto a la señora Ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill Tinoco, que realice por medio de la red consular salvadoreña en el Exterior, la divulgación de las acciones de protección consular a realizar en el contexto de la pandemia; y establezca medios accesibles de comunicación para que las personas salvadoreñas en el exterior conozcan sobre las mismas, puedan canalizar sus peticiones y obtener respuestas oportunas.
- 2) A la misma autoridad en el caso que nos ocupa, le recomiendo brindar una respuesta e información necesaria a las personas salvadoreñas que se encuentran en Panamá y Colombia, con el fin de solventar su situación de retorno al país y en caso de no ser posible, velar por su protección y derechos proporcionándoles asistencia desde el exterior.
- 3) Al Director General de Migración y Extranjería se le recomienda acatar las disposiciones de la Ley de esta Procuraduría, concernientes a prestar colaboración y la información que se requiera, para no incurrir en las responsabilidades del artículo 46 de esta institución, por lo cual se solicita gire las directrices a las dependencias a su cargo para que puedan proporcionar la información que se requiera.
- 4) A las autoridades de migración, protección civil, administradores de centros de contención de personas reportadas y personal médico adscrito a los mismos se les solicita garantizarles la protección necesaria no solamente en el tema de salud física y mental, sino también identificando otras necesidades de protección, si migraron por tener un temor fundado de persecución por violencia social o de género y por lo tanto al finalizar las restricciones por las medidas, se necesitarían otras acciones adicionales para proteger su integridad y proporcionarles los medios necesarios de acceso al trabajo para su integración a la sociedad.

Finalmente, reitero mi compromiso de realizar acciones coordinadas para la protección y asistencia de las personas retornadas en situación de contención y población en general, así como también de mantenerme vigilante de las acciones realizadas por las instituciones antes referidas para la garantía y respeto por los derechos humanos.

29 de marzo del 2020.

2. Posición sobre declaraciones del Ministro de Justicia y Seguridad Pública sobre los Centros de Contención para las Personas Retornadas

En mi calidad de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y en atención a mi mandato Constitucional, conferido en el artículo 194 romano I ordinales 1°, 7°, 10° y 11° de la Constitución de la República, me refiero a la situación que enfrentan las personas retornadas albergadas en centros de contención, y expongo lo siguiente:

Expreso mi preocupación ante las declaraciones del señor Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas, el 15 de mayo del presente año en un programa nacional de noticias, haciendo referencias a dificultades surgidas en los centros de contención de personas retornadas de los Estados Unidos, manifestando que como ha sido del registro de los medios de comunicación esa “población es un tanto complicada de tratar”.

Este tipo de expresiones y acciones realizadas reflejan la utilización de un enfoque represivo y de seguridad en el abordaje con las personas retornadas y de otros centros, generando diferenciación en el trato y asignando menores condiciones adecuadas en los centros de contención de los mismos.

Además, fomenta en la sociedad salvadoreña escenarios de discriminación, criminalización y estigma por su condición de migrantes retornados, cuando lo que necesitan es la identificación de sus necesidades de protección, que se les garantice sus derechos a la información y a la salud física y mental, en condiciones dignas durante su proceso de cuarentena.

Por lo antes planteado, y en total concordancia con las medidas establecidas por diferentes organismos internacionales, recomiendo al Estado y todo su aparato gubernamental a:

- 1) Evitar que las medidas de contención y reducción de la pandemia del COVID-19 se basen en justificaciones discriminatorias, ya que incluso las políticas generales pueden tener efectos discriminatorios si tienen un impacto desproporcionado en personas o grupos en situación de vulnerabilidad, como es el caso de esta población, con especial énfasis en las personas retornadas con necesidades de protección.
- 2) Utilizar un enfoque de atención diferenciada, no generando tratos discriminatorios, sino brindando una atención especializada la cual es requerida por una persona o grupos de personas debido a su situación de vulnerabilidad, respondiendo siempre a los principios de igualdad y no discriminación.

Un abordaje de respeto a las diferencias implica que las medidas de atención, asistencia y protección de las personas corresponderán al grado de vulnerabilidad en que se encuentren, entre otras causas, en razón de la edad, sexo, orientación sexual, identidad o expresión de género, etnia, condiciones de discapacidad, situación de exclusión u otras³. En este sentido, reitero mi compromiso de realizar acciones coordinadas para la protección y asistencia de las personas en situación de contención y población en general, así como también de mantenerme vigilante de las acciones realizadas por las instituciones antes referidas para la garantía y respeto por los derechos humanos.

18 de mayo del 2020

3. Personas Salvadoreñas que se encuentran Varadas en el Exterior ante el Cierre de Fronteras y el Aeropuerto Internacional en el contexto de la pandemia por COVID-19

A partir de la declaratoria de emergencia en El Salvador mediante el decreto legislativo 593 de fecha 14 de marzo del presente año, connacionales que se encontraban en diferentes partes del mundo quedaron sin poder regresar al país, por el cierre de fronteras y el aeropuerto internacional.

Al respecto, como Procurador para la Defensa de Derechos Humanos he dado seguimiento a la situación desde el inicio de la emergencia, solicité informe, mediante oficios dirigidos a la Ministra de Relaciones Exteriores, licenciada Alexandra Hill Tinoco, y a la Dirección de Asistencia y Protección para los salvadoreños en el Exterior, de fecha 24 y 30 de marzo respectivamente; en el que indicaran los lineamientos o protocolos implementados en el contexto de la emergencia, y las acciones implementadas por la representación diplomática; sin recibir respuesta alguna a esta fecha.

Mediante pronunciamiento de fecha veintinueve de marzo del presente año¹, exhorté a la señora Ministra de Relaciones Exteriores, que realizara por medio de la red consular salvadoreña en el exterior, la divulgación de las acciones de protección consular a implementar en el contexto de la pandemia. En el mismo sentido, el ocho de abril del corriente año, esta Procuraduría emitió resolución en la cual se calificó la negativa del Estado salvadoreño de impedir el ingreso de las personas salvadoreñas, como una afectación al derecho de las personas referidas, a que no se les prohíba la entrada en el territorio de la República, se consideró que las omisión de las acciones del órgano Ejecutivo, contrariaban lo establecido en los artículos 5 de la Constitución, entre otros instrumentos internacionales.

Por su parte la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, admitió la demanda del proceso de Amparo 167-2020, el 8 de abril del presente año, ordenó como medida

cautelar la creación inmediata de un plan de repatriación gradual de los connacionales. En resolución de fecha 15 de mayo, ordenó, entre otras medidas, ampliar el número de repatriaciones; y reducir el plazo de 14 semanas propuestas para finalizar el plan de repatriación, por considerarlo irrazonable, teniendo en cuenta la precariedad en que los aludidos salvadoreños se encuentran.

Por lo anterior, en mi calidad de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, tal como lo he manifestado en diferentes medios y oportunidades, considero preocupante todavía se tenga un plan insuficiente para resolver la situación de las personas “varadas”, y el retardo injustificado para repatriarlas; lo cual resulta atentatorio a la dignidad humana, y además constituye un incumplimiento a la Constitución de la República y los tratados internacionales ratificados por el Estado Salvadoreño; entre ellos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual en su artículo 12 numeral 4 establece “Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país”.

Es importante mencionar que el interés de prevenir la propagación de la enfermedad y salvaguardar la salud de la población salvadoreña; no justifica la medida de restricción para ingresar al país por parte de nuestros conciudadanos varados, ya que se pueden realizar las pruebas, y en caso de resultar positivas, brindar los tratamientos médicos necesarios para recuperarles en su salud; por lo que, además de restringir el ingreso al país, también se está negando el acceso a recibir los servicios de salud y otros derechos relacionados.

Por lo tanto, en el ejercicio de mi mandato de velar por el respeto y garantía de los derechos humanos establecido en el artículo 194 romano I ordinales 1°, 7° y 11; y 11 ordinales 1°, 7° y 11° de la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

EXHORTO al presidente de la República, señor Nayib Bukele Ortiz, adoptar las medidas urgentes y necesarias para garantizar la repatriación de todas las personas que se encuentran varadas en el exterior sin poder ingresar al país; asimismo, asegurar que a su regreso se realicen las pruebas correspondientes y, en caso de ser necesario, se garantice el cumplimiento de la cuarentena reglamentaria en condiciones que respeten su dignidad humana.

RECOMIENDO a la señora Ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill Tinoco, evaluar los mecanismos de comunicación y protección consular utilizados para que sean eficientes, suficientes y garantes del derecho a la información de las personas salvadoreñas en el exterior. Asimismo, realizar gestiones necesarias y urgentes para brindar asistencia humanitaria.

SOLICITO a las mismas autoridades que en el plazo de cinco días posteriores a la notificación de este pronunciamiento remitan informe sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a lo recomendado por esta Procuraduría y por la honorable Sala de lo Constitucional en el proceso Amparo 167-2020.

28 de mayo de 2020

4. Conmemoración de la Semana del Migrante

Como Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, reconozco el papel fundamental que desempeñan las personas migrantes salvadoreñas en el exterior, así como el aporte de personas extranjeras y trabajadores migrantes en nuestro país, y me sumo a la conmemoración de la semana del Migrante, establecida por medio de Decreto Legislativo N° 71 en septiembre del año 1997, destacando las diferentes actividades desarrolladas por organismos internacionales y sociedad civil.

Esta Procuraduría reconoce que existen muchas situaciones que ponen en condiciones de vulnerabilidad a las personas migrantes en los países de origen, tránsito y destino, entre ellas: las condiciones climáticas adversas, la xenofobia, políticas de militarización, asesinatos, desapariciones, robos, secuestros, trata de personas y otras violaciones a derechos humanos como prácticas sistemáticas, que se realizan en la zona fronteriza

entre México y Estados Unidos. Según datos del Proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) entre el periodo del 1 de enero y 10 de agosto del 2020 se contabilizan 173 migrantes fallecidos en dicha franja fronteriza, convirtiéndola en la tercera ruta con mayor índice de mortalidad a nivel mundial.

Reitero mi preocupación por el contexto mundial derivado de la Pandemia del COVID-19, y sus múltiples impactos generados en la población migrante: de índole sanitarios, económicos y psicosociales; los cuales son más marcados en las poblaciones que viven en condiciones precarias, que poseen escasos recursos y tienen limitado acceso a los servicios sociales y de salud, principalmente afectan a las personas migrantes que se encuentran en situación de irregularidad en el extranjero, aquellos que viven en condiciones de hacinamiento, y en circunstancias laborales inestables, informales o peligrosas.

Sumado a lo anterior, los impactos y estrategias para afrontar la migración y la crisis sanitaria mundial por el coronavirus están condicionadas por factores de género; por lo tanto, es imprescindible destacar el mayor grado de vulnerabilidad que sufren las mujeres, quienes además asumen mayoritariamente el trabajo doméstico no remunerado, situación que sobrecarga desproporcionalmente a las mujeres en relación a otros grupos.

Como parte de las atribuciones constitucionales conferidas a esta Procuraduría, y por comunicaciones o avisos recurrentes recibidas de personas usuarias durante el actual periodo de emergencia nacional, se efectuó un monitoreo al accionar de las instituciones del Estado y de la realidad tanto nacional como internacional de las personas salvadoreñas migrantes retornadas en condiciones vulnerables. Según datos de la Dirección General de Migración y Extranjería, para el mes de marzo del presente año, se recibieron 1609 personas retornadas de diferentes países, para llegar a la cifra en el mes de julio de 3,493 personas migrantes retornadas de México y Estados Unidos principalmente durante el periodo de emergencia.

Si bien las personas retornadas fueron enviadas a centros de contención, para las medidas sanitarias correspondientes, se constituyó primordial evaluar, las condiciones generales de dichas instalaciones y todo lo relacionado a la logística y tratamiento hacia las personas, entre otras cosas, hallazgos relevantes en los CCC como: a) Los traslados e ingresos en centros de contención se hicieron sin la debida clasificación y sin tomar en cuenta factores de riesgo como origen y morbilidades; b) La mayor parte de instalaciones carecían de las condiciones necesarias para la separación y el distanciamiento físico exigido para evitar la propagación del virus; c) Los centros no contaban con la infraestructura sanitaria adecuada que posibilitara condiciones de higiene y salubridad ante estadías prolongadas y tampoco se brindaba suficiente provisión de artículos de higiene personal.

Los aspectos antes señalados, fueron debidamente documentados y notificados a las autoridades responsables de los Centros de Contención como de la Dirección General de Migración y Extranjería y del Ministerio de Salud Pública, entre otros, por medio de la resolución de fecha 22 de mayo de 2020 señalando como principal vulneración el derecho a la no discriminación por la condición de persona retornada en condiciones vulnerables, pues los lugares designados por el Gobierno Central, fueron instalaciones que no estaban acondicionadas para recibir y albergar a los migrantes que llegaban al país.

Por otra parte, el cierre del Aeropuerto Internacional de El Salvador “San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez” como parte de las medidas implementadas para el control y contención de la pandemia, derivó en una escalada de afectaciones para aquellos compatriotas que habían salido del país por diversos motivos y que debían retornar al país.

Esta Procuraduría documentó desde finales del mes de abril diversas solicitudes de personas migrantes salvadoreñas que se encontraban esperando a ser repatriados en diferentes países, y los cuales señalaron que no recibieron el acompañamiento consular y que, incluso no les fue posible establecer comunicación por las vías que estableció el Ministerio de Relaciones Exteriores y ser tomados en cuenta dentro del Plan de Repatriación Gradual de Salvadoreños que se encuentran en el Exterior.

Debe destacarse que en los casos registrados se recibió perfiles de compatriotas que estaban en condiciones críticas, prevaleciendo situaciones de salud, casos de mujeres salvadoreñas embarazadas y reportes en los cuales los salvadoreños se encontraban en estado de depresión y otro número considerable de personas se encontraba en condiciones precarias, ante la imposibilidad de registrarse o comunicarse con las sedes consulares, y del proceso tardado para retornar a El Salvador.

Según estimaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en su sitio web el pasado 4 de agosto del presente año, a esa fecha se habían repatriado más de 5,000 salvadoreños, procedentes de aproximadamente 147 países. Al día 30 de agosto de este mismo año, Cancillería reporta en su sitio oficial que ha logrado retornar aproximadamente 6,500 salvadoreños.

Por otra parte, deseo subrayar las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco de la pandemia por COVID-19 para el ejercicio de los derechos humanos de la población migrante, refugiada y desplazada, prestando debida atención a las necesidades de particulares quienes se ven obligados a desplazarse a raíz de la violencia, amenazas o riesgos contra su integridad personal y cuya condición se ha visto agravada debido al cierre de fronteras, limitantes a la movilidad interna u otro tipo de barreras sanitarias. Entre las cuales se encuentran que los Estados deben tomar medidas específicas para incluir a las personas en situación de movilidad humana en las políticas y servicios de prevención y respuesta al COVID-19, incluyendo garantizar el acceso equitativo a la información, las pruebas y la atención médica, independientemente de su situación migratoria.

Finalmente, por la importancia que reviste la semana del Migrante en El Salvador deseo manifestar y destacar la Conmemoración de los diez años de la firma del Convenio “Acuerdo de Cooperación Interinstitucional para la Creación de Mecanismos de Intercambio de Información Sobre Migrantes No Localizados y Cuerpos No Identificados”; instrumento que dio origen al Banco de Datos Forenses de Migrantes No Localizados de El Salvador, conformado por el Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (COFAMIDE), el Vice Ministerio de Relaciones Exteriores, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el cual fue firmado el 25 de agosto del año 2010.

Dicho esfuerzo interinstitucional, impuso una novedosa forma de trabajo entre instancias del Estado, el cual subsiste hasta la fecha, dicho espacio de coordinación ha posibilitado en gran medida que el Estado posea una alternativa o vía para poder garantizar resultados a las familias afectadas, sobre la identificación científica de personas migrantes salvadoreñas que han fallecido en la ruta migratoria; sin embargo, es necesario que el Estado salvadoreño asuma en su totalidad el deber de garantizar, mecanismos de búsqueda e identificación, con medidas legislativas, políticas migratorias, integrales y acciones para la asistencia y protección a las familias víctimas de migrantes desaparecidos.

En consecuencia, sobre la base de mi mandato establecido en el artículo 194 romano I ordinales 1°, 2°, 7° y 11° de la Constitución de la República, expongo las siguientes recomendaciones:

Al Señor Presidente de la República, Nayib Armando Bukele, y a la señora Canciller de la República, Alexandra Hill Tinoco, revisen el actual sistema de protección consular, a efecto que se permita ampliar y potenciar la intervención en favor de la población migrante salvadoreña que se ve afectada por las diferentes políticas de control migratorio en la región y por el actual escenario de pandemia provocado por el COVID-19 a nivel global; para garantizar de forma irrestricta la protección de los derechos fundamentales a la población salvadoreña migrante, en diferentes condiciones jurídicas en el exterior y que requieren la intervención del Estado salvadoreño.

De igual forma insto al Ministro de Salud, Dr. Francisco José Alabí a liderar junto al Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y su Familia

(CONMIGRANTES) la creación de programas de salud mental con enfoque multicultural, derechos humanos y género para la detección, atención y recuperación de las secuelas del estrés psicosocial ocasionadas por la pandemia del COVID-19, dentro del cual se establezca como eje de atención la inclusión de las personas migrantes, desplazadas internas, personas migrantes salvadoreñas que estuvieron en el exterior esperando a ser repatriados en condiciones vulnerables.

A las autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, por medio de la Dirección de Atención a Víctimas y personas retornadas y sus oficinas locales, a iniciar de forma inmediata, la elaboración de medidas específicas para la asistencia e integración a la sociedad salvadoreña de las personas retornadas con necesidades de protección, en razón de que normalmente regresan al lugar donde pueden persistir los riesgos a su vida, salud y seguridad que obligaron su partida; por lo tanto, se constituye en urgente la creación e implementación de medidas afirmativas adicionales para resguardar la integridad y la vida de dichas personas que son afectadas por estructuras criminales.

1 de septiembre de 2020

c) Derecho a la salud

1. La importancia de garantizar el derecho a la salud mental de la población en general y personas en centros de contención en el contexto de la pandemia de COVID-19

En mi calidad de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y en atención al mandato que se me ha conferido en el artículo 194 romano I, ordinales 1°, 7°, 10° y 11° de la Constitución de la República, me refiero a la importancia de proporcionar atención psicosocial, a las personas albergadas en centros de contención y a la población en general a consecuencia de la pandemia COVID-19, por ello, expongo lo siguiente:

Reitero la gravedad que la pandemia del COVID-19 ha generado a nivel mundial y la necesidad de seguir adoptando medidas urgentes para prevenir el contagio masivo de la población salvadoreña, , pero también es importante señalar que debe retomarse por el Estado salvadoreño, el derecho a la salud mental como un derecho básico de la población en general y sobre todo de las personas que se encuentran en los centros de contención desde hace varios días.

Estimo que, desde la perspectiva de la salud mental, una pandemia implica una perturbación psicosocial que puede exceder la capacidad de manejo de la población afectada. Con base a lo anterior, deseo reafirmar lo señalado por la Organización Mundial de la Salud (OMS)¹⁷ en el sentido que es normal sentirse **“estresado, confuso y temeroso”** debido a la crisis que se experimenta.

Por otra parte, es preciso señalar como lo destaca la Organización Panamericana de la Salud (OPS)¹⁸ que los efectos en la salud mental, generalmente, son más marcados en las poblaciones que viven en condiciones precarias, que poseen escasos recursos y tienen limitado acceso a los servicios sociales y de salud.

Por lo tanto, expreso mi preocupación ante las consecuencias que la pandemia del COVID-19 puede generar en la población en general y considero que no se reconocen los problemas de salud mental en su verdadera dimensión y el impacto que pueda generarse a consecuencia de la crisis, aunado a ello el estigma y la falta de información sobre las afectaciones mentales por parte de las autoridades propicia que las personas no busquen atención al sentirse afectadas.

Según las verificaciones realizadas a nivel nacional en los centros de contención, son pocos los que contaban con atención psicosocial para las personas ahí recluidas, las

¹⁷ OPS/OMS <https://www.paho.org/es/documentos-tecnicos-ops-enfermedad-por-coronavirus-COVID-19>.

¹⁸ OPS. Protección a la Salud Mental en Situaciones de Epidemia. THS/MH/06/1

tensiones experimentadas en los primeros días, ante la improvisación de los mecanismos implementados para la derivación a los centros referidos, la falta de información, condiciones adecuadas y la incertidumbre generada, pudieron afectar a dichas personas.

Consecuente con mi postura, es imperioso que el Estado Salvadoreño evalúe objetivamente y estratégicamente los impactos que la pandemia del COVID-19 ha generado en la salud mental de la población en general, principalmente en las personas albergadas y grupos en condición de vulnerabilidad, tales como mujeres, niñez y adolescencia, adultos mayores, entre otros.

Estimo importante resaltar que “el derecho a un nivel de vida adecuado asegure la salud y el bienestar”, consagrado por primera vez en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y establecido por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en sus resoluciones A/HRC/32/18 y A/HRC/36/L.25 destacando la relación entre salud mental y derechos humanos, debe garantizarse de parte del Estado de El Salvador.

Como Defensor del Pueblo y en consonancia con mi mandato constitucional realizo las siguientes recomendaciones:

- 1) A las autoridades del Ministerio de Salud Pública y otras instituciones del Órgano Ejecutivo a considerar a la población albergada como sujetos activos y no meramente pasivos de derechos, esto incluye involucrar a las personas y capacidades, para que pueden aportar con acciones concretas y efectivas para su propia salud mental, eso implica visualizar la atención psicosocial no solo como la demanda de asistencia sino como un proceso activo que requiere la participación de todos los/as involucrados/as.
- 2) Al Estado salvadoreño a:
 - a) Implementar protocolos para atención psicosocial en crisis con un enfoque de derechos humanos y atención diferenciada para grupos en condiciones de vulnerabilidad: niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y enfermedades crónicas, entre otras. Estos protocolos deberán responder a las diferentes etapas que implica el proceso de cuarentena, para la prevención de afectaciones en la salud mental de la población en resguardo.
 - b) Garantizar el uso de material lúdico para niñas, niños y adolescentes en albergues o centros de resguardo, así como su debida sanitización constante a efectos de prevenir el contagio del COVID-19 o cualquier otro tipo de enfermedad que ponga en riesgo a este grupo poblacional. Asimismo, es de vital importancia que se implementen actividades de recreación y distensión para la población en general que se encuentra en aislamiento.
 - c) Crear un espacio intersectorial de trabajo con la participación de los referentes señalados por la Ley Nacional de Salud Mental de nuestro país: MINSAL, CONNA, MJSP, MINED, MINTRAB, etc. Con el objetivo de responder a acciones de corto, mediano y largo plazo sobre la base de una evaluación del impacto que la pandemia del COVID-19 ha generado en la salud mental de la población en general, principalmente la que se encuentra en centros de contención, la cual debe servir de base para la creación de respuestas integrales en atención psicosocial.
 - d) Divulgar información clara, sencilla y concreta para la promoción de la salud mental de la población salvadoreña en general que se encuentra en cuarentena a consecuencia de esta pandemia, e información certera y oportuna a la población en general para disminuir los impactos generados por el temor a la pandemia.
- 3) Insto al Estado Salvadoreño a crear programas de cuido a fin de resguardar la salud mental de servidoras y servidores públicos que realizan acciones en virtud de sus competencias en la garantía de los derechos de la población en estos momentos de crisis, especialmente a los equipos de atención que brindan su labor

en centros de contención, a fin de evitar un desgaste a su salud en general y un mejor desempeño de sus labores.

Finalmente, reitero mi compromiso de realizar acciones coordinadas para la protección y asistencia de las personas en situación de contención y población en general, así como también de mantenerme vigilante de las acciones realizadas por las instituciones antes referidas para la garantía y respeto por los derechos humanos.

26 de marzo del 2020

2. Medidas cautelares en relación a las graves condiciones en las que se encuentran las personas ingresadas en el Hospital Nacional General de Neumología y Medicina Familiar “Dr. José Antonio Saldaña” en el contexto de la pandemia COVID-19

El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, ante diversas denuncias interpuestas por familiares y personas que han sido trasladadas a cuarentena al Hospital Saldaña, en el marco de las medidas de contención y prevención por el COVID-19, y la información vertida por medios periodísticos al respecto. Ha considerado que los hechos denunciados corresponden a presuntas graves violaciones al derecho a la salud en vinculación estrecha con el derecho a la vida.

Entre estos hechos se encuentran de forma general: la falta de atención médica oportuna y eficaz ante padecimientos crónicos o enfermedades adyacentes; condiciones insalubres del lugar, no se cuenta con agua potable, ni con artículos de uso personal y la falta de información adecuada sobre su situación clínica, su diagnóstico, los resultados de las pruebas realizadas para detectar el coronavirus y en los casos en que ya se les ha brindado los resultados, el desconocimiento e incertidumbre al respecto a su estancia o no en el lugar, sobre todo los que resultaron negativos, agravando más su situación de salud física, mental y social.

Por otra parte, se registran dos casos de muertes de adultos mayores, quienes padecían de enfermedades crónicas o adyacentes y quienes presuntamente no recibieron atención médica oportuna según han descrito diversos medios de comunicación.

En consecuencia, sobre la base del mandato constitucional y legal de esta Procuraduría de promover y proponer las medidas que estime necesarias en orden a prevenir violaciones a derechos humanos y reconociendo la complejidad que enfrentan los Estados y las sociedades a nivel mundial debido a las medidas excepcionales que requiere la pandemia global ocasionada por el COVID-19, lo que supone desafíos extraordinarios desde el punto de vista de los sistemas sanitarios, la vida cotidiana de las personas y para la vigencia de los derechos humanos.

Se declara, que en las condiciones actuales y de acuerdo con las informaciones existentes en este momento, las personas afectadas en el marco de la atención de la pandemia por COVID-19, se encuentran en una situación de peligro o daño inminente en su vida, integridad personal y a su salud, resultado que debe ser prevenido por medio del proceder de las autoridades de salud, quienes deberán ajustar su conducta a las obligaciones de conservar (asegurar efectividad) y defender (garantizar sin discriminación) el derecho humano a la vida, a la integridad personal y a la salud física y psicosocial de las personas en cuarentena.

Por lo que se emite como medida cautelar al señor Ministro de Salud, doctor Francisco José Alabí Montoya, que adopte con carácter de urgentes e impostergables, las medidas de su competencia en el marco de los protocolos de atención internacionales y nacionales existentes para la atención de las personas en cuarentena preventiva o diagnosticadas con COVID-19 que se encuentran en el Hospital Nacional General de Neumología y Medicina Familiar “Dr. José Antonio Saldaña”, para prevenir afectaciones más graves a la salud y la vida. A la misma autoridad se le previene que debe garantizar de forma urgente el acceso a la información, de las personas que se encuentran en el Hospital Saldaña, sobre sus tratamientos, estados de salud y permanencia en dicho nosocomio.

Asimismo, se le exhorta a que de inmediato adopte las medidas para la atención urgente a pacientes en condición de vulnerabilidad, particularmente niñez, neonatos, personas adultas mayores, mujeres, mujeres embarazadas o en estado post parto, personas con discapacidad, personas con VIH y a quienes presentan condiciones de salud adyacentes, como enfermedades crónicas. Por otra parte, deberá proporcionar los insumos necesarios para la protección y bioseguridad del personal médico, enfermeras y demás personal de apoyo hospitalario.

Al señor Presidente de la República Nayib Armando Bukele, se le exhorta a realizar las acciones de su competencia a efecto de garantizar las condiciones adecuadas en el Hospital Nacional General de Neumología y Medicina Familiar “Dr. José Antonio Saldaña” así como demás hospitales de la red nacional del país que sean destinados para contener, detectar y brindar el tratamiento adecuado a las personas frente al COVID-19, lo que implica además, garantizar al personal de salud de todos los insumos, equipos e infraestructura necesaria para el buen desempeño de sus labores.

Al señor Fiscal General de la República se le insta a realizar las acciones de investigación de su competencia sobre las dos muertes que hasta la fecha han ocurrido en el contexto de la pandemia COVID-19, dentro del Hospital Saldaña, aplicando en todo momento el principio de debida diligencia, ante la gravedad y circunstancias en que se suscitaron.

El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, reitera su compromiso para velar por los derechos de la población en el contexto de esta Pandemia y prevenir mayores afectaciones a los derechos de todos y todas y de los grupos en situación de vulnerabilidad.

31 de marzo de 2020

c) Derecho al trabajo, garantía de ingresos y medios de subsistencia

1. Sobre los acontecimientos ocurridos en los CENADES.

El sábado 21 de marzo de 2020, en cadena nacional de radio y televisión, el señor Presidente de la República anunció dos nuevas medidas para enfrentar la pandemia generada por el virus COVID-19, siendo: declarar cuarentena domiciliar obligatoria por treinta días; y ordenar la entrega de un subsidio de \$300 dólares a 1.5 millones de hogares para la compra de alimentos. El citado funcionario expresó “Todos los hogares que consuman menos de 250 kilovatios [de energía eléctrica] van a recibir 300 dólares. Obviamente, los que reciban su salario no van a recibir nada (...). Ahí está incluida gente que vende ropa, que hace dibujos en los parques, artistas. En total, son 1.5 millones de hogares que representan el 75% de la población”.

El viernes 27 de marzo, por medio de otra cadena nacional, el señor Presidente de la República explicó el mecanismo de entrega del subsidio de \$300 dólares, explicando que se habilitaría una página web el mismo día en el cual las personas deberán consultar si son beneficiarias con su DUI, en caso positivo dirigirse a la agencia bancaria correspondiente.

Los 1.5 millones de hogares, expresó, serán divididos en “tandas” de 100 mil, para que al día siguiente se presente a retirar el subsidio el primer segmento, luego el domingo el siguiente grupo hasta terminar. Las personas que necesiten el apoyo y no estén registrados deberán acudir a los CENADE del Ministerio de Economía.

Las anteriores palabras del Presidente provocaron una avalancha de consultas en línea lo cual provocó el colapso del sitio web habilitado; asimismo, produjo que los días sábado 28, domingo 29 y lunes 30 de marzo del corriente año enorme cantidad de personas acudieran a los bancos del sistema financiero y a los CENADES para retirar el subsidio ofrecido sin que se les entregase, debido, según se ha conocido en los medios de comunicación y redes sociales, a que no se cuenta con los fondos prometidos.

Las noticias que han circulado este día en las diferentes plataformas digitales, a simple vista denotan una actuación improvisada del señor Presidente de la República y de su equipo de trabajo debido a que formula anuncios e invitación a que las personas pueden

retirar el subsidio prometido sin tener asegurado los fondos y un plan para operativizar la medida anunciada.

La actuación improvisada de la Administración Pública evidentemente ha puesto en riesgo la salud y la vida de la población que, impulsada por la necesidad, ha acudido en multitudes a retirar el subsidio, incrementando de forma exponencial el riesgo de infección por el COVID-19.

Es comprensible el enorme esfuerzo que significa para el señor Presidente de la República y su equipo de trabajo entregar el bono alimenticio a las familias que lo necesitan, pero también constituye una violación a los derechos de toda persona a “la buena Administración” y a ser tratada con respeto, dignidad y deferencia por las autoridades, reconocidos en el art. 16 numerales 1 y 2 de la Ley de Procedimientos Administrativos.

En consecuencia, con base en mis atribuciones constitucionales y legales, contenidas en los artículos 194 romano I, ordinales 1°, 2°, 3°, 7° y 11° de la Constitución de la República, 10 y 35 de la Ley especial que rige a esta Procuraduría, recomiendo, al señor Presidente de la República, Nayib Armando Bukele Ortiz, que:

- 1) Adopte de manera inmediata las medidas idóneas para garantizar que las familias beneficiadas del subsidio alimenticio ofrecido reciban dicha prestación de forma ordenada, ágil, segura, evitando las aglomeraciones de personas.
- 2) Que al momento de ordenar una medida para hacerle frente a la crisis humanitaria que está viviendo el país, ya tenga diseñado plan de operativización de la misma, pues no se puede seguir teniendo como regla general la improvisación.

30 de marzo de 2020

2. Cierre de operaciones de varias empresas del país y las consecuentes afectaciones a los derechos de las personas trabajadoras

En cumplimiento a las medidas preventivas sanitarias adoptadas por el Gobierno de El Salvador, debido a la prolongación de la cuarentena domiciliar se ha suspendido buena parte de la actividad productiva en el país y varias empresas han informado a través de los diferentes medios de comunicación, el cierre de operaciones de sus negocios, dado que ya les es insostenible financieramente continuar funcionando, Muchos de estos negocios son pequeños y medianos.

Se ha conocido también sobre el cierre obligatorio de varias empresas, entre ellas la industria textil INTRADESA, ADOC S.A. de C.V., entre otras, y según la información publicada en los diferentes medios de comunicación, estas empresas durante la pandemia se han dedicado a la fabricación de nuevos productos como la elaboración de insumos médicos de protección personal, como mascarillas, guantes, entre otros, los que afirman, eran distribuidos a diferentes instituciones de gobierno y otros eran exportados a Estados Unidos, cumpliendo con las medidas de bioseguridad requeridas. Dicho cierre fue realizado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, luego de una inspección realizada por representantes del mismo, en la que se hicieron acompañar de elementos de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada de El Salvador, manifestando el señor Ministro de Trabajo, Óscar Rolando Castro que obedecía al cumplimiento del Decreto Ejecutivo número 24 por ser empresas no autorizadas para operar, además de velar por la salud de las personas trabajadoras de las mismas.

Es motivo de preocupación para el suscrito, que no se ha conocido de una resolución fundamentada por parte del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, donde se justifique el cierre de las referidas empresas, en tanto que éstas han expresado que en el contexto que vive El Salvador, su giro de producción está orientado a generar productos necesarios para el combate de la epidemia.

Con el cierre de todas estas empresas, ya sea por dificultades económicas o por suspensión obligatoria realizado por una autoridad pública, el factor común es la afectación de una gran cantidad de empleados que se quedan sin fuente de ingresos que alimenta a miles de familias, agravándose con ello la crisis económica que ya viven las familias salvadoreñas por la pandemia del COVID-19.

La Organización Internacional del Trabajo, OIT, ha estimado que por la epidemia del COVID-19 “la promoción de una política activa destinada a fomentar el pleno empleo, productivo y libremente elegido, tendrá que incluir medidas selectivas para estabilizar la economía y abordar los problemas de empleo, con inclusión de medidas de estímulo fiscal y monetario, destinadas a estabilizar los medios de subsistencia y los ingresos, y a salvaguardar la continuidad de las empresas; para ello se deben explorar todas las opciones que permitan financiar medidas de apoyo a las empresas y a sus trabajadores y proporcionar una protección social adecuada, buscando que la ayuda a las empresas y a los empleos esté dirigida a los más vulnerables, a fin de mitigar las consecuencias sociales y económicas del período de confinamiento. Habida cuenta de la vulnerabilidad de las pequeñas empresas y de los trabajadores en la economía informal, “priorizándose el diálogo social, la consulta y el fomento de la participación activa de las organizaciones de empleadores y de trabajadores en la planificación, la puesta en práctica y el seguimiento de las medidas de recuperación y resiliencia”.

Por su parte la CEPAL ha identificado que la pandemia ha agudizado las dificultades de la población —especialmente la más pobre y vulnerable— para satisfacer sus necesidades básicas. Por ello, es preciso garantizar los ingresos, la seguridad alimentaria y los servicios básicos a un amplio grupo de personas cuya situación se ha vuelto extremadamente vulnerable y que no necesariamente estaban incluidas en los programas sociales existentes antes de la pandemia”.

Por ello, la seguridad alimentaria de las familias y comunidades de los estratos más pobres, debe ser ahora una prioridad para el Gobierno, debiendo hacerse una distribución justa y equitativa de alimentos y productos básicos, para aquellas comunidades con urgente necesidad y/o con mayor número de habitantes en cada hogar, a fin de garantizar que las personas tengan en todo momento, acceso físico y económico a suficiente alimento para satisfacer sus necesidades nutricionales, por lo que con base en mis atribuciones consignadas en el artículo 194 romano I, ordinales 1°, 3°, 7° y 11° de la Constitución de la Republica:

Insto al señor presidente de la República, Nayib Armando Bukele Ortiz, a:

Adoptar medidas urgentes de protección para las personas que han perdido sus empleos, debido al cierre de operaciones de sus lugares de trabajo, mientras son reactivados los diferentes sectores de la economía que les garantice subsistencia plena.

Crear un espacio de diálogo con presencia de funcionarios de alto nivel, que incluya al Ministro de Trabajo y Previsión Social, la Ministra de Economía, instituciones académicas, entidades empresariales y laborales, con la finalidad de discutir un plan de reactivación o rescate de la actividad económica, garantizando la defensa de los derechos laborales y empresariales.

Adoptar las medidas de rescate económico que sean dialogadas con los sectores productivos y laborales, mediante un plan de fortalecimiento de la economía, con énfasis en la ayuda directa de la micro, pequeña y mediana empresa, al sector informal y trabajadores por cuenta propia.

Al Ministro de Trabajo y Previsión Social, señor Óscar Rolando Castro:

En cuanto a lo expresado por las empresas, que han mencionado que actualmente se dedicaban a producir insumos médicos y equipos de protección, explique la motivación que llevó a adoptar la decisión del cierre de las empresas, en tanto que, bajo esa óptica, las mismas estarían amparadas por el Decreto Ejecutivo 24.

Reitero mi compromiso con la población trabajadora, de seguir velando por los derechos laborales y de las actividades económicas permitidas, en el marco del combate de la pandemia; asimismo a estar vigilante del respeto al debido proceso y que las actuaciones públicas no excedan las funciones que les otorga el marco legal establecido.

17 de mayo de 2020

3. Muerte de miembros de la Policía Nacional Civil, y por el contagio por COVID-19 de otros elementos policiales

Sobre la base de mi mandato constitucional el artículo 194, considero oportuno pronunciarme con mucha preocupación ante el reciente fallecimiento de elementos de la corporación policial, por COVID-19.

De acuerdo con declaraciones del señor director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza, se confirmó que 200 agentes de la corporación han dado positivo a la prueba del COVID-19¹⁹. De ellos dos se encontraban en estado grave por lo que estaban bajo atención hospitalaria, el resto permanece en centros de contención bajo los protocolos de Salud. Y de acuerdo con las cifras oficiales, se suman la muerte de dos miembros de la corporación que perdieron la batalla frente a esta enfermedad.

En anterior oportunidad me pronuncié sobre el fallecimiento del inspector jefe Douglas Fernando García Castro, quien murió el 16 de mayo en horas de la mañana en el Hospital Nacional San Rafael, en el municipio de Santa Tecla por contagiarse de COVID-19²⁰. Del otro caso de fallecimiento por la misma causa, no se dieron más detalles. Además de tener conocimiento de las muertes de otros dos elementos policiales con sintomatología similar a la del COVID-19, destacados en otros municipios de San Salvador y en el occidente del país.

Sobre el hecho que hay aproximadamente 200 casos positivos en la PNC coincide con que al día trece de mayo del presente año se conoció de 33 casos de contagio a COVID-19 y aproximadamente 110 miembros se encuentran en cuarentena, y al menos 60 agentes de la base de la Policía Rural en Cuscatlán se encontraban cumpliendo el aislamiento, en instalaciones que no cumplen las condiciones higiénicas y sanitarias para la atención y recuperación del personal, esto según fuentes periodísticas consultadas a la fecha²¹, en las que se advierten denuncias de las malas condiciones laborales y de descanso en las que operan los miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) frente a la pandemia. Debo enfatizar, que desde el inicio de la cuarentena la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) ha estado vigilante de las actuaciones de la PNC así también de las condiciones laborales en las que han llevado a cabo nuevas designaciones giradas por el órgano ejecutivo.

Del 31 de marzo al 11 de abril del presente año personal de la PDDH realizó verificación de 181 controles vehiculares, en los mismos detectó la falta de medidas de bioseguridad para el personal policial. 340 policías fueron contabilizados al momento de hacer las intervenciones, solamente el 15 % del personal contaba con insumos sanitarios como mascarillas, guantes y alcohol en gel, el 58 % utilizaban algunos implementos como la mascarilla, del 27% no se tiene información²².

¹⁹ <https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/onc-COVID-19-coronavirus-policias-con/716009/2020/>

²⁰ Disponible en: <https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/coronavirus-muere-jefe-antiextorsiones-covid-19/714926/2020/>

²¹ Disponible en: https://www.elsalvador.com/noticias_nacionalidez-paliciais-positivos-coronavirus_elementos_quarentena1712636/20204, de fecha 7/05/2020. https://www.elsalvador.com/noticias/nacional_covid_4-pc-policias-sentes-contagio-soldados-militares/714199/2020/, de fecha 13/05/2020. <https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/dirigente-policial-denuncia-pnc-no-plan-prevencion-coronavirus-covid-19/714133/2020/> de fecha 13/05/2020.

²² Informe del señor Procurador sobre actuaciones policiales violatorias a Derechos Humanos durante la Emergencia Nacional por COVID-19, abril de 2020.

De igual manera en fecha 1 de abril me pronuncie ante la situación del personal de seguridad pública en el ejercicio de sus funciones, por lo que expuse que no se les estaba entregando kit de limpieza, que se encontraban en hacinamiento en los lugares de descanso al colmo de dormir en los vehículos, que sus horarios de trabajo trascendían a 12 horas generando cansancio acumulado²³, todas condiciones propicias para el contagio masivo.

Es por ello, que en seguimiento a las recomendaciones dictadas en los pronunciamientos anteriores, considero oportuno referirme una vez más a que se prioricen las medidas de seguridad para los miembros de la corporación policial, se habiliten espacios seguros, con las medidas establecidas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, y se priorice la realización de pruebas de COVID-19 para los mismos, a fin de brindarles el tratamiento médico de forma oportuna y temprana, garantizándoles además su derecho a la información sobre todos sus procesos médicos.

De acuerdo con lo antes mencionado y a las atribuciones que me confiere la Constitución de la República en su artículo 194 romano I ordinales 1o, 2o, 7o, y 119; y la Ley Orgánica de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en los artículos 10 y 35. En mi calidad de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos:

1. Le envío a la familia de los miembros de la PNC fallecidos a causa de COVID 19 mi sentido pésame y solidaridad esperando que tengan la fortaleza divina en este difícil momento.
2. Al señor Ministro de Justicia y Seguridad Pública, ingeniero Rogelio Eduardo Rivas Polanco, le insto a que haga efectivas las medidas de bioseguridad a todo el personal de la PNC. Se gestionen trámites de pensión vitalicia para las familias que atraviesan la pérdida de su ser querido en razón de la labor que desempeñan y que se adopten los protocolos para la detección de casos tempranamente dentro de la institución policial.
3. Al señor Director General de la Policía Nacional Civil, Comisionado Mauricio Arriaza Chicas, nuevamente le exhorto a dotar de todos los implementos higiénicos y sanitarios para los miembros de la corporación, así también genere condiciones de infraestructura para el descanso, evitar el hacinamiento y además que garantice el cumplimiento de las medidas de aislamiento y sanitización, para prevenir más contagios.
4. Al señor Ministro de Salud Pública, doctor Francisco Alabi, gire las directrices necesarias para realizar inspecciones periódicas, en las diversas delegaciones policiales a nivel nacional, e instruir a las jefaturas de la corporación policial sobre las medidas de bioseguridad, adecuadas para que los miembros de esta entidad, puedan adoptarlas de la mejor manera, además de implementar un programa de salud mental enfocada a este grupo, ante el arduo y extenuante trabajo que realizan.

Como Defensor del Pueblo, me encuentro vigilante de las violaciones a derechos humanos que puedan afectar a los miembros de la corporación policial, reitero mi compromiso de continuar aportando al efectivo cumplimiento y respeto de los mismos.

26 de mayo del 2020

4. Afectaciones a los Derechos Humanos de la Salud, Trabajo y Alimentación en el marco del COVID-19

La limitación al derecho a la libertad personal, tránsito y de circulación establecida en el Decreto Legislativo 6391 y Decreto Ejecutivo 242 han implicado graves violaciones al derecho humano a la salud de la población salvadoreña, sobre todo para aquellas personas usuarias del sistema público y privado de salud, que padecen enfermedades crónicas como cáncer, insuficiencia renal o trasplantados, psoriasis, lupus, hipertensión arterial pulmonar,

²³Pronunciamiento del señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, licenciado José Apolonio Tobar Serrano, ante situación de personal de seguridad pública en el ejercicio de sus funciones, dictado el 1 de abril del año 2020.

fibrosis quística, diabetes, hemofilia, reumatismo, esclerosis múltiple, enfermedad celíaca, enfermedades de depósito lisosomal, VIH, entre otras, debido a la suspensión del transporte público de pasajeros incluyendo el servicio de taxi, medida en extremo rigurosa ya que les ha imposibilitado tener acceso a terapias de diálisis, hemodiálisis, quimioterapias, radioterapias, entre otras, así como también, el retiro de sus medicamentos.

El Presidente de la República Señor Nayib Armando Bukele Ortiz estableció como mecanismo para solucionar la falta de transporte público de pasajeros para las personas con enfermedades crónicas, la habilitación del número de teléfono 2121-4010 y el 132 del Sistema de Emergencia Médica (SEM), con la finalidad de ofrecer transporte gratuito; sin embargo, por información brindada en los distintos medios de comunicación y denuncias recibidas en esta Procuraduría, se tiene conocimiento que el mecanismo aludido no ha sido efectivo, dado que al ser activado por las personas usuarias de los servicios de salud, no han tenido respuesta quedándose muchas personas sin poder recibir sus tratamientos médicos o teniendo que caminar durante horas para poder llegar al centro médico, situación que también afecta a aquellos grupos en condición de vulnerabilidad como las personas con discapacidad y adultos mayores que por su condición les es más difícil el acceso o la llegada a los servicios públicos y privados de salud.

La situación expuesta evidencia una clara violación a lo establecido en el artículo 3 numeral 5 parte final del Decreto ejecutivo 24 que establece: "...El Gobierno brindará a todas las personas con enfermedades crónicas, cáncer, insuficiencia renal, diabetes, terapias y otras enfermedades análogas, transporte gratuito desde su casa al hospital y viceversa", al artículo 8, lit. d) numeral 2 del Decreto Legislativo 639 respecto a las personas con causa justificada para poder circular, así como al derecho humano a la salud establecido en los artículos 1, 2 y 65 de la Constitución de la República; 3 y 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, I y XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Esta Procuraduría considera que el mecanismo establecido por el Gobierno, fue improvisado y poco difundido más aún, el hecho de informar a través redes sociales al cual la mayoría de la población arriba mencionada no tiene acceso, sobre todo quienes viven en la zona rural, quienes viajan a la ciudad de San Salvador para recibir los servicios especializados en salud, así como para retirar sus medicamentos en los hospitales del tercer nivel de atención del Ministerio de Salud (Hospital Nacional Rosales, de Niños "Benjamín Bloom, de la Mujer "Dra. María Isabel Rodríguez" etc.) del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (Hospital Médico Quirúrgico y Oncológico, Materno Infantil 1° de Mayo, Hospital General etc.,) de Sanidad Militar (Hospital Militar), todos de la ciudad de San Salvador.

Diversas asociaciones de pacientes han denunciado a través de los distintos medios de comunicación la afectación de aproximadamente 300 pacientes trasplantados renales que no han retirado sus medicamentos inmunosupresores en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, situación que aumenta el riesgo de muerte. El Ministerio de Salud mediante el comunicado de fecha 15 de marzo del presente año, en el marco de las medidas por el COVID-19 estableció en los 30 hospitales y unidades de la red pública a nivel nacional la siguiente medida: "Se suspenderá la atención de la consulta externa a partir del lunes 16 de marzo del presente año y hasta nuevo aviso. A cada paciente se le reprogramará la cita y se le informará oportunamente... Solo se atenderán los servicios de emergencia y también se dará atención a pacientes con enfermedades crónicas con alto riesgo de descompensación". La cual ha afectado a muchos pacientes que no han recibido sus tratamientos y medicamentos, incluso aquellos con enfermedades crónicas debido a la falta de un mecanismo efectivo por parte del Gobierno para trasladarse a los establecimientos de salud. Lo anterior, se agudiza con la prohibición de movilizarse a un municipio distinto al de residencia, cuando en el caserío, cantón o municipio no hay un lugar para adquirir los alimentos: más grave aún, cuando se trata de medicamentos que en el municipio donde residen tampoco se pueden adquirir y deben desplazarse a un municipio aledaño para ello, siendo más difícil cuando éstos solo son dispensados en hospitales del tercer nivel de atención (hospitales especializados), ubicados en la zona metropolitana de San Salvador.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado que las medidas adoptadas por los Estados en la atención y contención de la pandemia deben tener como centro el pleno respeto de los derechos humanos bajo los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, lo que comprende la restricción al ejercicio del poder estatal, es decir requiere que cualquier órgano o funcionario del Estado o de una institución de carácter público, se abstenga de violar los derechos humanos al suspender el derecho y acceso a la salud, el detrimento de la calidad de vida y se eleva el nivel de estrés de la población.

En tal sentido, conforme al mandato conferido en el artículo 194 romano I ordinales 1°, 2°, 3°, 7° y 10° de la Constitución de la República, el suscrito Procurador concluyó que se ha violentado el derecho humano a la salud y a la alimentación de la población salvadoreña en el marco de la Pandemia del COVID-19 por parte del Estado de El Salvador al no garantizar mecanismos efectivos para el acceso a servicios de salud de forma integral, al no establecer mecanismos efectivos ante la inminente caída de la economía y el alto grado de endeudamiento lo que aumentará los niveles de pobreza, por ello:

Exhorto al presidente de la República señor Nayib Armando Bukele y al señor Ministro de Salud doctor Francisco José Alabí Montoya para que, de forma conjunta, con carácter urgente establezcan mecanismos efectivos para el acceso a los servicios de salud de forma integral para las personas, sobre todo para aquellas en mayor estado de vulnerabilidad como son las que padecen enfermedades crónicas y otras enfermedades análogas, personas con discapacidad y adultos mayores.

Exhorto al presidente de la República señor Nayib Armando Bukele y a su gabinete de gobierno para que generen los mecanismos efectivos para garantizar el derecho al trabajo y a la alimentación de los sectores más vulnerables de la población salvadoreña.

Recomiendo al presidente de la República, valore la posibilidad de crear un espacio de diálogo entre autoridades del Órgano Ejecutivo, gremiales empresariales, la academia y sector sindical, para diseñar una política pública de recuperación de la economía nacional sustentada en el respeto a los derechos de la clase trabajadora.

12 de mayo de 2020

5. Conmemoración del 16 de octubre “Día Mundial del Derecho a la Alimentación”

El hambre y la desnutrición no se deben en modo alguno a la fatalidad ni a una maldición de la naturaleza; se deben al hombre. El que muere de hambre es víctima de un asesinato: a desnutrición crónica grave, el hambre persistente implican una violación del derecho fundamental a la vida. Esta tragedia silenciosa tiene lugar diariamente en un planeta agobiado por la riqueza.

En mi calidad de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos –atendiendo mi mandato constitucional y legal de velar por el respeto y garantía de los derechos humanos, de supervisar la actuación de la administración pública frente a las personas, de promover y proponer medidas necesarias para prevenir violaciones a los mismos, así como de formular conclusiones y recomendaciones (artículo 194 romano I ordinales 1°, 7°, 10° y 11° de la Constitución de la República y artículo 11 ordinales 1°, 7°, 10° y 11° de la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos) expreso:

Un reconocimiento a la labor del Programa Mundial de Alimentos de la ONU- PMA, a quien además felicito por haber sido elegido ganador del Premio Nobel de la Paz 2020, por sus esfuerzos en combatir el hambre en el mundo, especialmente, en zonas de conflicto, “evitando el uso del hambre como un arma de guerra”.

La Declaración Universal de Derechos Humanos (ONU 1948) reconoce en el artículo 25 que: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios, tiene asimismo derecho a los seguros

en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”

El artículo 11 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) establece que el derecho a la alimentación adecuada forma parte junto con los derechos al vestido y a la vivienda, del derecho a un nivel de vida adecuado para la persona y su familia y a la mejora permanente de las condiciones de existencia. Este Pacto especifica el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre.

En 1996 los países de la región latinoamericana y del Caribe suscribieron el Protocolo de San Salvador en cuyo artículo 12 se define que “Toda persona tiene derecho a una nutrición adecuada que le asegure la posibilidad de gozar del más alto nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual”

En los documentos elaborados por los relatores especiales sobre el derecho a la alimentación de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se define como “El derecho a tener acceso, de manera regular, permanente y libre, sea directamente, sea mediante compra en dinero, a una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente, que corresponda a las tradiciones culturales de la población a que pertenece el consumidor y que garantice una vida psíquica y física, individual y colectiva, libre de angustias, satisfactoria y digna”.

La Observación General N° 12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Comité DESC, indica que el derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando “todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene accesos físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla”.

En concordancia con el tema de la seguridad alimentaria, el derecho a la alimentación abarca no sólo la disponibilidad y el acceso como elementos clave de la definición, sino también la utilización de los alimentos que significa el uso biológico apropiado de los alimentos, que requiere una dieta adecuada en energía y nutrientes, así como agua potable y servicios de saneamiento.

De acuerdo con el Comité DESC, por necesidades alimentarias se entiende que el régimen de alimentación en conjunto aporte una combinación de productos nutritivos para el crecimiento físico y mental, el desarrollo y el mantenimiento y la actividad física que sea suficiente para satisfacer las necesidades fisiológicas humanas en todas las etapas del ciclo vital, y según el sexo y la ocupación. Implica el acceso de todas las personas a alimentación de cierta calidad, apta para cubrir las necesidades fisiológicas humanas y sin sustancias nocivas.

El Estado está en la obligación de proporcionar la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de las personas, sin sustancias nocivas y aceptables para una cultura determinada y la accesibilidad de esos alimentos en formas sostenibles y que no dificulten el goce de otros derechos humanos.

De acuerdo con el Comité DESC, una alimentación adecuada no sólo consiste en un conjunto de elementos nutritivos que permitan la supervivencia. Para su definición se deben tener en consideración factores culturales, sociales, económicos, climáticos y ecológicos imperantes en el momento.

Es un compromiso de justicia acorde al cumplimiento y respeto de los derechos humanos que todas las personas, en condiciones de igualdad y sin discriminación, tengan capacidad para obtener alimentos en cantidades suficientes para satisfacer sus necesidades físicas, ya sea por esfuerzo propio, por la acción solidaria o por donaciones del gobierno.

Todos los alimentos que necesite la persona deben ser accesibles, para ello se deben garantizar cadenas de producción y suministro, evitando el acaparamiento y los sobreprecios, en especial de los productos básicos y de consumo popular.

La Observación General 12 señala que toda persona o grupo que sea víctima de una violación del derecho a la alimentación adecuada debe tener acceso a recursos judiciales adecuados u otros recursos en los planos nacional e internacional que le permitan obtener una reparación adecuada: restitución, indemnización, compensación o garantía de no repetición.

En la actualidad es de lamentar que, en el mundo, casi 690 millones de personas padecen hambre, 10 millones más que en 2019. La pandemia de COVID-19 podría sumar entre 83 y 132 millones de personas a esta cifra. En el Salvador se prevé un decrecimiento económico y desempleo que pondrá en la calle a más de cien mil trabajadores entre el sector formal e informal, se acrecentará la pobreza a niveles de los años noventa y unas ochocientas mil personas no contarán ni con dos dólares para alimentarse cada día.

Desde mi mandato constitucional y legal como Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos comparto el lema de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, que para este año 2020 es “Cultivar, nutrir, preservar. Juntos”, así como el “llamamiento a la solidaridad para ayudar a las personas más vulnerables a que se recuperen de la crisis y para hacer que los sistemas alimentarios sean más resilientes y robustos, de manera que puedan resistir el aumento de la volatilidad y los choques climáticos, proporcionar dietas saludables asequibles y sostenibles para todos, y medios de vida dignos para los trabajadores del sistema alimentario”.

La pandemia incrementará las dificultades de muchas personas para obtener alimentos nutritivos, escasearán e incrementarán sus costos ya que nuestro país es uno de los más caros en la región para poder alimentarse adecuadamente. La FAO señala que en América Latina y el Caribe se necesita por lo menos \$1.06 diarios por persona para comprar una dieta mínima (un tiempo de comida), un 34% más caro que el promedio global. Un salvadoreño necesita para comer por lo menos \$1.46 diarios, solo superado en la región por las Islas Vírgenes Británicas, en Costa Rica el costo es de \$0.94, en Honduras es \$1.15 y en México, \$0.66.

El informe también contiene lo que se requiere para costear una dieta que cubra las necesidades nutricionales mínimas; es decir, no solo con un criterio de calorías, sino de nutrientes necesarios. Ahí es donde en El Salvador la cifra se eleva a \$5.09 diarios por persona, en comparación, esta cifra es de \$2.55 en México, \$2.75 en las Islas Vírgenes Británicas, \$3.32 en Honduras y \$2.74 en Costa Rica.

El COVID-19 podría llevar al cierre a unas 2.7 millones de empresas y provocaría la pérdida de 8.5 millones de empleos en América Latina, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Esto llevaría a 83.4 millones de personas en la pobreza, 16 millones más que en 2019. En El Salvador, la pobreza podría haber subido al 51.4 % de los hogares, lo que implica de 1.3 a 1.6 millones de nuevos pobres, por el aumento del desempleo y la caída de las remesas.

La obligación principal del Estado es la de adoptar medidas para lograr progresivamente el pleno ejercicio del derecho a la alimentación adecuada para todas las personas que están bajo su jurisdicción, para ello es necesario darle cumplimiento a la Política Nacional de Seguridad Alimentaria (2018/2028) y enrumbarla hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo sostenible de la Agenda 2030. De igual manera es necesario impulsar iniciativas como el reconocimiento constitucional del derecho a la alimentación como un derecho humano, la aprobación del proyecto de Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, y la reactivación del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional CONASAN, como entidad rectora encargada de coordinar las acciones relativas a la seguridad alimentaria y nutricional en El Salvador.

Es necesario realizar acciones dirigidas a la recuperación económica pero sobre todo, acciones dirigidas a paliar el impacto de las medidas restrictivas para contener el COVID-19 y garantizar a la población la existencia de alimentos y medidas adecuadas de suministros, evitar la especulación e incremento de precios, garantizar empleos o subsidios a los

trabajadores de salario mínimo y a quienes se ocupan en el sector informal, la producción agropecuaria sustentable y amigable con el medio ambiente, la inclusión y capacitación de mujeres trabajadoras del campo y la promoción de la agricultura familiar.

Es necesario además que el Ministerio de Agricultura y Ganadería, realice una distribución oportuna y equitativa de las canastas solidarias, principalmente a las personas que pertenecen a los sectores vulnerables de la población.

El Estado debe promover campañas para la buena alimentación sobre todo para los niños y niñas en las Escuelas con la finalidad de garantizar un nivel de vida saludable, el 9% de escolares de primer grado presentan desnutrición crónica o retardo en crecimiento.

Finalmente, para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de la población, se hace necesario un abordaje integral y multisectorial.

16 de octubre de 2020

e) Derechos a la libertad, integridad y seguridad personal

1. Pronunciamiento frente a irrupciones de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil en viviendas durante la pandemia por COVID-19

He recibido denuncia (de personas que se acogieron a la confidencialidad sobre la base del artículo 34 de la Ley de la Procuraduría) en donde nos han expresado, que elementos de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil, (PNC), han irrumpido, en algunas viviendas, en los municipios de Mejicanos y de San Salvador; junto a otro caso²⁴ ocurrido el catorce de abril del presente año, en los condominios Procavia, en el departamento de Santa Ana; en el cual Agentes de la Sección Táctica Operativa de la PNC, irrumpieron en una vivienda y amenazaron a los habitantes con detenerlos, remitirlos a un Centro de Contención y alegaron la aplicación del citado decreto ejecutivo.

En los casos denunciados, se conoció de la afectación a mujeres pues los elementos de seguridad cuando ingresaron –según el relato de la denuncia- realizaron registros en sus viviendas, además de intimidarlas, para que salieran a comprar alimentos, dejando una de ellas solo a su hijo de cinco años en custodia de los elementos policiales y militares. De igual forma, otros ciudadanos han expresado que este día en la colonia Sierra Morena, la Policía Nacional Civil se encontraba ingresando a las viviendas, amparados de igual forma en el mismo marco normativo.

Al respecto expongo las siguientes consideraciones:

- 1) Las acciones realizadas por miembros de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil, en los casos expuestos son ilegales y arbitrarias. Además, violentan el derecho a la seguridad de las personas cuyas viviendas fueron registradas. De igual manera, ha sido violentado el derecho a la inviolabilidad de la morada establecido en el artículo 20 de la Constitución de la República.
- 2) El Decreto Ejecutivo 19 en el Ramo de Salud, es claro en su artículo 1 literal c al establecer que: “Toda persona está obligada a permitir el ingreso de los delegados del Ministerio de Salud, debidamente identificados” en medio de la crisis sanitaria que vive el país por la pandemia del COVID-19. El documento establece que el personal de salud podrá ingresar a los hogares identificados para inspeccionar, además de locales, predios públicos o privados, con el objeto de evaluar las medidas sanitarias que se deben adoptar para el combate de la pandemia, por lo tanto, el ingreso de las autoridades de salud, debe tener una finalidad de evaluación de medidas sanitarias, con elementos objetivos y

²⁴ Según noticia presentada en La Prensa Gráfica de fecha 15-04-2020, página 18, titulada “Se metieron a mi casa sin autorización”.

encontrarse plenamente identificados, informando a las personas las razones por las cuales necesita tener acceso a la vivienda, sin acompañarse de personal policial o militar dentro de las mismas, en caso que se hagan presentes con estas instituciones por razones de seguridad, no es legal que ingresen a las viviendas. Y las personas afectadas pueden denunciar si han sido sujetas de violaciones a derechos humanos.

- 3) En los casos citados las autoridades militares y de la policía, han puesto en riesgo a grupos en situación de vulnerabilidad tal es el caso de mujeres y niñez, ejerciendo violencia institucional sobre ellos, arriesgando su seguridad e integridad. Dichas prácticas, deben ser investigadas y determinarse las responsabilidades correspondientes dentro de la Corporación Policial y la Fuerza Armada.
- 4) Retomo la resolución 1/20, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de fecha 10-04-2020, sobre Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, que ha establecido: “El deber de respetar los derechos humanos comprende la noción de la restricción al ejercicio del poder estatal, es decir, requiere que cualquier órgano o funcionario del Estado o de una institución de carácter público se abstenga de violar los derechos humanos y las medidas que los Estados adopten, en particular aquéllas que resulten en restricciones de derechos o garantías, deben ajustarse a los principios «pro persona», de proporcionalidad, temporalidad, y deben tener como finalidad legítima el estricto cumplimiento de objetivos de salud pública y protección integral, como el debido y oportuno cuidado a la población, por sobre cualquier otra consideración o interés de naturaleza pública o privada.” Dichas obligaciones deben ser cumplidas por las autoridades.

Como Defensor del Pueblo, de acuerdo al mandato conferido en el artículo 194 romano I ordinales 1°, 2°, 3°, 7°, 10° y 11° de la Constitución de la República he girado comunicaciones oficiales al Ministro de la Defensa y al Director de la Policía Nacional Civil en las que he solicitado:

- 1) Informe sobre la legalidad de los hechos descritos ut supra, diligencias de investigación realizadas a la fecha y las pendientes de ejecutar a fin de deducir responsabilidades, individualizando a los elementos de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil, que participaron en los hechos, garantizando el respeto al debido proceso, y que además informe cualquier otro dato que estimen pertinente sobre el caso.
- 2) De igual forma les he recomendado, girar las instrucciones respectivas a toda dependencia militar y policial, para que se abstengan de la realización de actos que no se encuentran sustentados en una ley formal, nacional o internacional, que ponen en riesgo la seguridad e integridad de poblaciones vulnerables en este caso, niños y mujeres.

Finalmente, expreso a la población en general, que cualquier acción arbitraria o ilegal de las autoridades en el contexto de la pandemia COVID-19, puede ser denunciada a esta Procuraduría, quien dará el respectivo seguimiento. El respeto y garantía de los derechos humanos, es irrenunciable e imprescriptible y por lo tanto debe ser prioridad de las autoridades velar por su cumplimiento.

15 de abril del 2020

2. Casos denunciados en el contexto de la emergencia nacional provocada por el COVID-19

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en el contexto de emergencia que vive El Salvador, está realizando su trabajo a la sombra de lo previsto en el artículo 194 de la Constitución de la República; por lo que se ha comenzado con una dinámica de resolver aquellos casos denunciados en los cuales se haya agotado la etapa investigativa.

- 1) Se conoció el hecho de un joven que fue herido de bala en sus dos piernas por parte de un agente de la Policía Nacional Civil en el municipio de San Julián, Sonsonate; al cual se le dio seguimiento y tras los informes solicitados a las autoridades respectivas, las catorce horas con cuarenta minutos del día 27-IV-2020 se emitió resolución final en la Delegación departamental de Sonsonate estableciendo la violación del derecho humano a la integridad personal, por malos tratos, crueles e inhumanos o degradantes y/o registros de manera ilegal, uso desproporcionado de la fuerza e inadecuada utilización de arma de fuego.

En la citada resolución se declara responsable de la violación de tal derecho, al agente Javier Arturo Campos Hernández, recomendándole al Jefe de la delegación de la Policía Nacional Civil de Sonsonate que capacite al personal bajo su cargo para que las actuaciones de los elementos de seguridad mantengan el respeto a los derechos humanos con la finalidad de evitar que hechos como el antes mencionado se vuelva una práctica reiterada; de igual forma se ha solicitado a la señora delegada departamental de la Inspectoría de la PNC que informe a esta Procuraduría el resultado del proceso disciplinario promovido en contra del agente Campos Hernández, también, se ha requerido a la jefa de la oficina del fiscal del mismo departamento para que informe sobre el estado en que se encuentra el proceso penal 330-UDVSO-2020.

- 2) Por otro lado, también se tuvo conocimiento del hecho ocurrido en el municipio de Santa Rosa Guachipilin, Santa Ana, en el que una persona que regresaba de alimentar vacas fue agredido por miembros de la Policía Nacional Civil; al cual se le dio seguimiento y tras los informes solicitados a las autoridades respectivas, a las diez horas con treinta minutos del día 29-IV-2020 se emitió resolución final en la Delegación departamental de Santa Ana estableciendo la violación del derecho humano a la integridad personal, así como la libertad personal por detención ilegal.

En la citada resolución se declaró responsable de la violación de tales derechos humanos, a los agentes que participaron en el operativo policial recomendándole al Jefe de la delegación de la Policía Nacional Civil comisionado Osmín Cortéz Figueroa, que continúe promoviendo las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes en contra de los agentes responsables, garantizando el debido proceso; de igual forma se ha recomendado al citado comisionado que gire instrucciones al personal bajo su cargo para que las actuaciones de los elementos de seguridad mantengan el respeto a los derechos humanos con la finalidad de evitar que hechos como el antes mencionado se vuelva una práctica reiterada; de igual forma se ha solicitado al señor delegado departamental de la inspectoría de la PNC que informe a esta Procuraduría el resultado del proceso disciplinario promovido por el citado caso; y también se ha requerido a la jefa de la oficina fiscal que informe sobre el estado en que se encuentra el proceso penal que se haya iniciado.

29 de abril de 2020

3. Presunta privación de libertad y tortura de elemento de la Fuerza Armada por miembros de la misma institución

Se ha tenido conocimiento por medio de redes sociales²⁵ que en la Fuerza de Tarea Marte de la Fuerza Armada con sede en la Naval, un soldado decidió salir e irse a su casa y el teniente William Alexander Alfaro Rivas, junto a un sargento lo privaron de libertad, le dieron una fuerte golpiza y lo refirieron a un pabellón donde lo tienen amarrado y torturado.

²⁵ Aviso del Movimiento de los Trabajadores de la Policía, publicado en su página de Twitter moverderechopnc, a las 11:40 p.m. del día 23 de mayo de 2020.

De ser ciertos los hechos descritos, nos encontramos ante una gravísima afectación al derecho a la integridad, libertad, y seguridad personal, por actos de tortura y privación arbitraria de la libertad e intimidación y coacción, lo cual violenta diversos tratados internacionales de obligatorio cumplimiento para el Estado salvadoreño, tales como la Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, que establece claramente en su artículo 2, tres premisas principales:

1. Todo Estado parte de la Convención, tomará medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura en todo territorio que esté bajo su jurisdicción.
2. En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra y amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura.
3. No podrá invocarse una orden de un funcionario superior o de una autoridad pública como justificación de la tortura.

En consecuencia, en mi calidad de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, y en atención a mi mandato conferido en el artículo 194, romano I, ordinales 2º, 3º, 7º de la Constitución de la República:

1. Al señor Ministro de la Defensa Nacional, Contra Almirante, Francis Merino Monroy, le solicito, realizar acciones urgentes para verifca la veracidad de los hechos arriba descritos, y en caso de ser ciertos:
 - a. Ordene el cese inmediato de las violaciones de derechos antes aludidos,
 - b. Verificar de inmediato si la víctima necesita atención médica, brindándole toda la asistencia necesaria incluida asistencia psicosocial inmediata.
 - c. Investigar e individualizar a los presuntos responsables, coordinar y cooperar con la Fiscalía General de la República, para investigación y determinación de responsabilidades.
 - d. Ajustar los planes y programación de trabajo de los miembros de la Fuerza Armada a nivel nacional, para prevenir afectaciones a sus derechos a la salud física y mental, a la integridad personal y a la seguridad, e implementarlos con en enfoque de derechos humanos, haciendo efectivas las medidas de bioseguridad a todo el personal.

Sobre la base del artículo 37 de la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, hago del conocimiento de los hechos al señor Fiscal General de la República, Dr. Raúl Melara, para que realice las acciones de su competencia, de forma urgente.

A funcionarios arriba mencionados, les solicito informar a esta procuraduría en el plazo de 24 horas contadas a partir de la notificación de este pronunciamiento sobre el resultado de las acciones encomendadas.

Reitero mi compromiso de estar permanentemente monitoreando la situación de los derechos humanos de toda la población en el contexto de la pandemia, lo cual incluye la garantía de los derechos de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que también se encuentran en primera línea de trabajo para cumplir con su mandato.

24 de mayo de 2020

f) Derechos de las mujeres y grupos en condición de vulnerabilidad

1. El Derecho a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres durante la pandemia COVID-19

Con la aprobación del Estado de Emergencia y la Cuarentena Domiciliar por la Pandemia COVID-19, muchas mujeres están en situación de riesgo conviviendo con sus agresores, por lo que su hogar lejos de ser un lugar seguro es un sitio de peligro para ella y su descendencia. El aislamiento de las mujeres ante la pandemia puede generar que enfrenten obstáculos adicionales para denunciar o para huir de las situaciones violentas, incrementando hechos de violencia psicológica y emocional, física, sexual, así como muertes violentas (feminicidios) e incluso suicidios feminicidas.

Las mujeres que están en centros de contención tampoco están exentas de ser víctimas de violencia de género, pues debido al confinamiento en el que se encuentran, son vulnerables a sufrir situaciones de acoso o violencia sexual.

ONU MUJERES ha sostenido que “es indispensable brindar servicios de atención a mujeres víctimas/sobrevivientes de violencia durante la emergencia y desarrollar modalidades que faciliten el acceso a los mismos”, por lo cual es propicio exhortar a las instituciones estatales que velan por los derechos de las mujeres, Procuraduría General de la República, Fiscalía General de la República, Policía Nacional Civil y, principalmente, al Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), a que refuercen los mecanismos de alerta y denuncia a través de medios electrónicos y/o aplicaciones informáticas que permitan a las mujeres que estén enfrentando situaciones de violencia estar informadas de las acciones de prevención y respuesta. Así como, fortalecer los recursos de atención psicológica a efecto que las mujeres víctimas puedan a través de llamadas telefónicas o mediante el uso de herramientas de texto recibir atención especializada de emergencia.

Además, es importante hacer un llamado firme al funcionariado público, en especial porque están obligados como representantes del Estado a respetar y garantizar los derechos humanos principalmente los de las mujeres, y a la población civil a abstenerse de realizar conductas, que de acuerdo al artículo 55 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres pueden ser calificadas como Expresiones de Violencia contra las Mujeres, tales como “burlarse, desacreditar, degradar o aislar a las mujeres dentro de sus ámbitos de trabajo, educativo, comunitario espacios de participación política o ciudadana, institucional u otro análogo como forma de expresión de discriminación”, utilizando en el contexto de la Pandemia, medios digitales para lograr su cometido.

Reprocho toda conducta que constituya Violencia Digital contra las mujeres, entendida ésta como aquella que implica actos de acoso, hostigamiento, amenazas, vulneración y difusión de datos e información de carácter personal, divulgación de información apócrifa, fotografías, videos o cualquier contenido gráfico o sonoro que sea divulgado a través de plataformas de internet, espacios digitales, aplicaciones o cualquier tecnología de la información que atenten contra la integridad, dignidad, privacidad, libertad o vulnere algún derecho humano de las mujeres.

Como Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, recomiendo que el Estado en cumplimiento a la Política Nacional para las Mujeres, realice una campaña masiva en medios de comunicación para el respeto del derecho a una vida libre de violencia para las mujeres. Reitero mi compromiso de velar por el respeto irrestricto al derecho a una vida libre de violencia de todas las mujeres, y de mantenerme vigilante para que la actuación de las instituciones competentes sea eficaz y de esta forma prevenir, controlar y minimizar la violencia desde un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género; finalmente exhorto a denunciar ante esta Procuraduría toda afectación a derechos humanos, mediante llamada telefónica, redes sociales y plataformas digitales que están disponibles ante la emergencia.

2. Llamado a unir esfuerzos contra la discriminación

Como Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos externo mi preocupación por la creciente y alarmante situación de estigma social y discriminación en el contexto de la emergencia nacional por la pandemia de coronavirus COVID 19, especialmente para las personas que están siendo tratadas por esta enfermedad o se presume que puedan padecerla; incluso para quienes están cumpliendo cuarentena en los centros habilitados por el gobierno y otras que se encuentran fuera del país e intentan retornar.

En ese contexto si bien reconozco y comprendo los temores, confusiones y ansiedades que genera una situación hasta ahora desconocida en el mundo, reitero que tanto el funcionariado público como la sociedad en su conjunto tenemos la obligación de evitar cualquier asociación negativa, estereotipos o exclusiones que real o potencialmente afecten la dignidad de las personas o les excluya de la protección y garantía de sus derechos, especialmente el de recibir atención médica de manera inmediata.

Por lo tanto hago un llamado al Presidente Nayib Bukele y su gabinete de gobierno, a los medios de comunicación y a la sociedad salvadoreña en general a prevenir y detener cualquier acto de discriminación, recomendando especialmente hacer mayores esfuerzos por compartir datos e información clara, fidedigna y precisa sobre esta enfermedad, usando formatos accesibles e inclusivos para todas las personas, especialmente para quienes tienen un acceso limitado a internet y evitando particularmente la propagación de información falsa que genere pánico, amenazas y desorden.

De igual manera recomiendo la utilización de un lenguaje adecuado que evite culpabilizar o criminalizar a las personas en la transmisión del virus COVID-19, privilegiando mensajes centrados en sus derechos, necesidades y el incremento sustancial de información que llame a la calma, la empatía y la solidaridad hacia quienes se encuentran especialmente vulnerables y afectadas por esta emergencia.

4 de abril 2020

3. Conmemoración del “Día de la Bendición de la Semilla por los Pueblos Indígenas de El Salvador

En cumplimiento de las atribuciones que me han sido conferidas en el artículo 194 romano I ordinal 1°, 7°, 10° y 11° de la Constitución de la República de El Salvador, este día tres de mayo, fecha en que los pueblos indígenas de nuestro país, realizan la ceremonia de bendición de la semilla, práctica ancestral que contribuye a promover el uso de la semilla nativa, así como, el trabajo de la tierra, conforme a su cosmovisión y formas de vida, les extendiendo un saludo fraterno a los pueblos Nahua- Pipiles, Lenca y Kakawira de nuestro país.

En tan importante fecha, es necesario reconocer el trabajo que realizan en aras de alcanzar sus justas reivindicaciones como la garantía, protección y cumplimiento de sus derechos económicos sociales y culturales, entre estos, el derecho a la seguridad alimentaria, a la salud intercultural, a la tierra, a condiciones de vida digna, entre otros. Esfuerzos que esta Procuraduría ha venido acompañando a través de la Mesa Permanente de la PDDH sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.

He observado con gran preocupación durante esta crisis sanitaria que enfrenta nuestro país, a raíz del COVID19, que grupos en condiciones de vulnerabilidad se han visto desprotegidos e invisibilizados, tal es el caso de los pueblos indígenas, debido a la falta de medidas, programas de prevención, protección y asistencia orientados a su atención, conforme a su cosmovisión y forma de vida propia, especialmente a los abuelos y abuelas, niñez indígena, mujeres embarazadas, los que deben de ser una prioridad para nuestro sistema de salud.

Otro aspecto importante a evidenciar, es el impacto que generará esta pandemia en las condiciones socioeconómicas de las comunidades indígenas de nuestro país, en vista que las antes citadas en su mayoría dependen del trabajo de la tierra y otras actividades agrícolas,

por tanto se debe priorizar la adopción de políticas públicas y planes de contingencia por parte del Órgano Ejecutivo, que atiendan sus necesidades económicas y garanticen su subsistencia y seguridad alimentaria de manera digna posterior a tal crisis de salud.

En virtud de lo anterior, el Foro Permanente de las Naciones Unidas para Cuestiones Indígenas ha expresado que los Estados Miembros deben proteger a los más vulnerables de nuestra sociedad, instando a adoptar medidas inmediatas para asegurar que los pueblos indígenas sean informados, protegidos y priorizados durante la pandemia de salud mundial del COVID-19. En este sentido, la información en lenguas indígenas es importante para garantizar su accesibilidad y seguimiento, siendo motivo de especial preocupación los enfermos crónicos, los que se encuentran en situación de fragilidad médica, así como los ancianos indígenas quienes son una prioridad para nuestras comunidades como guardianes de la historia, las tradiciones y culturas.

Por lo tanto, con base en las atribuciones expresadas en el artículo 194 romano I ordinales 1, 3, 7 y 11 de la Constitución de la Republica. RECOMIENDO:

Al Señor Presidente de la Republica, Nayib Armando Bukele Ortiz,

- a) Girar las directrices necesarias a las instituciones pertinentes, en aras de que éstas realicen un trabajo articulado, con el objeto de garantizar que los pueblos indígenas sean informados, protegidos y priorizados durante la pandemia de salud mundial del COVID-19.
- b) La atención a los pueblos indígenas por parte del Estado debe de estar orientada a la protección integral de sus derechos humanos, desde una visión de personas titulares de éstos y no solo desde la perspectiva cultural.

Al Señor Ministro de Salud, doctor Francisco José Alabi Montoya, garantizar que los pueblos indígenas participen y sean incluidos en las medidas relacionadas con la salud pública, desde la interseccionalidad de la medicina moderna y tradicional, incluyendo además sus necesidades y prioridades específicas para abordar el contagio comunitario del COVID-19.

Al Señor Ministro de Agricultura y Ganadería, Pablo Anliker, adoptar las medidas, planes de contingencia y políticas agrícolas específicas para pueblos indígenas, orientadas a hacer frente a las necesidades económicas y alimentarias de los antes citados, que resulten de tal pandemia.

3 de mayo de 2020

4. Conmemoración de los 12 años de entrada en vigencia de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo

Este día se conmemora nuevamente de la entrada en vigencia de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad –CDPD- y su Protocolo Facultativo, que generó a los Estados Parte el compromiso de implementación efectiva en el ámbito interno a través de una serie de medidas destinadas a asegurar los derechos de las personas con discapacidad.

Con la crisis sanitaria mundial generada por el COVID-19, el Estado salvadoreño en marzo recién pasado declaró emergencia nacional lo que conllevó la aplicación de medidas restrictivas vinculadas al distanciamiento social, confinamiento domiciliar, limitación del libre desplazamiento, circulación de personas, cancelación de ciertas actividades económicas, desarrollo atípico de los programas de educación (a distancia), la prestación irregular de algunos servicios de salud, rehabilitación, uso de insumos para la prevención del contagio, entre otras.

Las medidas antes citadas han agravado en la mayoría de los casos la ya precaria situación de la población con discapacidad, al omitir la realización de adecuaciones necesarias para su inclusión, pues en los planes y lineamientos de atención en salud en esta situación de la emergencia se ha debido considerar: tipos de discapacidad, edad, continuidad de tratamientos médicos, rehabilitación, entre otros para asegurar el goce del nivel más alto posible de salud para el colectivo con discapacidad en los Centros de Contención del Coronavirus -CCC-, en los hospitales, espacios comunitarios y confinamiento domiciliar.

El contenido de la Convención, debió ser ese estándar de derechos humanos que orientara la elaboración, ejecución y evaluación de políticas, planes, programas, protocolos y lineamientos sanitarios, puesto que establece disposiciones relativas al respeto y garantía de derechos humanos de la población con discapacidad, entre los que destacan: atención prioritaria en situaciones de riesgo y emergencias, la libertad y seguridad personal, protección de la integridad física y mental contra cualquier forma de violencia y abuso. De igual manera contiene la garantía del derecho a la educación, salud, rehabilitación, accesibilidad física, comunicación, información, trabajo, empleo, nivel de vida adecuado, protección social, acceso a la justicia, entre otros.

El Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en octubre del año recién pasado al realizar las observaciones finales sobre los informes periódicos segundo y tercero combinados de El Salvador, agregó una serie de recomendaciones con carácter vinculante para la inclusión de las personas con discapacidad; tales como: establecer un presupuesto de reserva para emergencias humanitarias y desastres; adoptar medidas legales, políticas eficaces, la prohibición de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, proporcionar servicios de rehabilitación, alojamiento de emergencia, asistencia médica y psicológica; asignación de recursos para garantizar la accesibilidad de los servicios, que los profesionales de la medicina reciban la debida formación sobre los derechos de las personas con discapacidad para que los tengan en cuenta en los tratamientos y el asesoramiento, tanto en las zonas urbanas como en las rurales.

En este contexto de emergencia, también ha sido evidente que la información oficial divulgada, los decretos ejecutivos y legislativos relacionados con la misma, no se disponen en formatos accesibles para las personas con discapacidad visual e intelectual. La información proporcionada en las conferencias de prensa y cadenas nacionales se ha limitado a la interpretación en Lengua de Señas Salvadoreña -LESSA-; aunque es importante resaltar el aporte de distintos medios de comunicación que han mantenido campañas de recomendaciones para sobrellevar el aislamiento social, el cumplimiento del confinamiento domiciliar y medidas de higiene para evitar el contagio del COVID-19, pero sin incluir la información accesible para la población con discapacidad.

El trabajo y empleo ha sido otro de los derechos que durante años ha carecido de medidas oportunas y decididas para la población con discapacidad, lo cual se ha acrecentado en la actual situación de emergencia; pues muchas familias ante la falta de oportunidades de empleo se dedican al comercio informal generando ingresos insuficientes para cubrir las necesidades básicas de las personas con discapacidad y sus familias, por tal razón ha llamado la atención la ausencia de medidas para priorizar a personas con discapacidad en el otorgamiento del bono de compensación económica para alimentación de \$300.00 entregado por el Órgano Ejecutivo, provocando tal exclusión la agudización de su situación de pobreza.

En cuanto al derecho a la educación de las personas con discapacidad, El Salvador ha sido señalado por el Comité correspondiente de carecer de medidas para alcanzar niveles óptimos de igualdad. No obstante, para quienes han tenido la posibilidad del acceso a la educación, la decisión de las autoridades educativas de suspender las clases presenciales, sustituyéndolas por la modalidad virtual, a partir de la emergencia nacional por COVID-19, no previó que la mayoría de personas con discapacidad que asisten a centros de estudio públicos carecen de recursos tecnológicos e informáticos, de metodología y los materiales de enseñanza accesibles (internet, guías en braille, dispositivos auditivos, videos con

interpretación en LESSA u otros) para la continuidad de la educación a distancia. Esa omisión refleja otra evidente discriminación en perjuicio de la población con discapacidad.

En consecuencia de lo anterior, conforme al mandato constitucional que me ha conferido en el artículo 194 romano I de la Constitución de la República, en mi calidad de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, emito las siguientes recomendaciones:

Al señor Presidente de la República, Nayib Armando Bukele Ortiz:

- 1.- Instruir a las autoridades de las instituciones que componen el Órgano Ejecutivo, entre ellas los cuerpos de seguridad que implementen acciones destinadas a garantizar y respetar los derechos de las personas con discapacidad, asegurándose que en lo sucesivo los decretos ejecutivos protejan los derechos y libertades fundamentales de la población con discapacidad, dando cumplimiento a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; 2.- Garantizar la integridad y la libertad personal de las personas con discapacidad, erradicando todo abuso, maltrato y discriminación por condición de discapacidad; 3.- Implementar mecanismos institucionales para que las personas con discapacidad, sean consultadas e involucradas activamente en la planificación, implementación y monitoreo de las medidas de prevención y contención de COVID-19, así como en los procesos posteriores de rehabilitación.

Al señor Ministro de Salud, doctor Francisco Alabi:

- 2.- Garantizar el acceso de las personas con discapacidad a los servicios de salud con igual calidad y nivel de atención médica, incluidos los servicios de salud mental. Tomando en cuenta las necesidades propias de la discapacidad de la persona, edad y género; 2.- Dar continuidad a los tratamientos de salud y rehabilitación; 3.- Asegurar que toda la información pública sobre las medidas relativas a la emergencia nacional por COVID-19 sea divulgada en formatos accesibles para las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás, proporcionándose plataformas virtuales accesibles en varios formatos, modos y métodos alternativos de comunicación; 4.- Realización de campañas permanentes de prevención al COVID-19 en formatos accesibles para las personas con discapacidad; 5.- Salvaguardar la provisión de alimentos, medicamentos y otros suministros para personas con discapacidad en situaciones de aislamiento y cuarentena.

A la señora Ministra de Educación, licenciada Carla Hananía de Varela:

- 3.- Tomar medidas urgentes para asegurar que la niñez y juventud con discapacidad continúen su año escolar en la modalidad virtual para lo cual se les debe dotar de los recursos tecnológicos y materiales accesibles acorde a su discapacidad, incluyendo la población que vive en zonas rurales; 2.- Considerar medidas alternativas para los casos de estudiantes con discapacidad que carecen de acceso a recursos por su condición de ruralidad o marginalidad; 3.- Instruir al personal docente para evitar y erradicar la discriminación de estudiantes con discapacidad en las condiciones referidas en los numerales anteriores.

Al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, señor Rolando Castro:

- 4.- Asegurar a las personas con discapacidad el respeto de su derecho al trabajo, condiciones y prestaciones laborales, así como la estabilidad laboral, tanto en el ámbito público como privado, particularmente en esta situación de la emergencia nacional.

Al Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad –CONAIPD- en el ejercicio de entidad rectora de la Política Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad:

- 5.- Garantizar que todas las instituciones públicas cumplan dicha política; y activar a las autoridades correspondientes ante eventuales afectaciones de derechos a la población

con discapacidad cometidas en el sector privado o público, dando el seguimiento debido para la restitución de los derechos y reparación a las víctimas.

Al Órgano Legislativo, a través de la Comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad:

6. Asegurar que todos los decretos sujetos a su aprobación en el marco de la actual emergencia nacional, incluyan la protección y garantía de los derechos de las personas con discapacidad desde el enfoque social de derechos;
7. Reconsiderar en el proyecto de Ley de Inclusión de las Personas con Discapacidad la autonomía plena del CONAIPD a fin que no se le inhiba de realizar la supervisión amplia y autónoma de los derechos de las personas con discapacidad.

Finalmente, aprovecho esta ocasión para expresar a las personas con discapacidad, sus familias y organizaciones sociales a continuar los esfuerzos de exigencia de los derechos humanos de la población con discapacidad.

3 de mayo de 2020

5. Posicionamiento de la Mesa Temática de Derechos Humanos y VIH, con el acompañamiento de la Procuraduría para la defensa de los Derechos Humanos ante la situación de la pandemia COVID-19

La Mesa Temática de Derechos Humanos y VIH, con el acompañamiento de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, es un espacio conformado por organizaciones de la sociedad civil y profesionales que trabajan en la defensa de los derechos humanos de personas con VIH, personas de la diversidad sexual y trabajadoras sexuales desde el año de 2017.

Ante la situación actual de la pandemia del COVID-19, hemos seguido de cerca la tendencia e impacto que ocasiona a nuestra población, dicha afectación ha golpeado fuertemente a los grupos en condiciones de vulnerabilidad como: personas con VIH, población de la diversidad sexual y trabajadoras sexuales. En ese sentido, manifestamos nuestra profunda preocupación, por el deterioro en la calidad de vida que la pandemia está ocasionando en los aspectos siguientes:

Las personas con VIH, personas de la diversidad sexual y trabajadoras sexuales, son colectivos que pertenecen al sector informal, en su mayoría trabajan de manera independiente ganándose la vida en diversas actividades laborales; y, como bien conocemos, el quedarse en casa debido a la cuarentena les afecta en la generación de ingresos para la sobrevivencia de sus familias.

Lamentamos que una gran parte de personas que son cabezas de hogar, no pudieron ser beneficiarias con el bono de \$300.00 dólares que el gobierno entregó como apoyo a las familias, esto debido a: carecer de un lugar propio donde vivir, limitándoles para registrarse y obtener subsidio, lo cual, al no contar con ello, quedaron fuera del sistema para obtener dicho bono.

Con respecto a la entrega de las canastas, está pasando la misma situación debido a que no están llegando a la mayoría de los sectores ya mencionados, lo cual la situación se vuelve más compleja debido a que a la fecha, muchas familias, están quedando sin alimentos. En algunos casos las personas que han recibido dicha canasta, se las han entregado de manera incompleta, situación que no nos parece justo quitar de lo poco que puedan recibir.

Sumado a esto persisten dificultades en el retiro de sus medicamentos antirretrovirales en algunos hospitales; ya que, a pesar de hacer uso de los números de contacto para solicitar transporte para movilizarse a los hospitales, ha sido difícil debido a que no contestan, en

algunos casos que se ha logrado coordinar, a última hora el transporte no ha llegado por las personas, lo que impactará la adherencia de dichos medicamentos.

Finalmente denunciemos la ausencia de programas de salud mental dirigido a personas viviendo con VIH, y otros colectivos marginados y estigmatizados por la sociedad.

Por lo anterior, la Mesa emite el presente posicionamiento e insta a las autoridades respectivas a:

- 1) Buscar el acercamiento, la coordinación y diálogo inclusivo en los espacios de representaciones de la sociedad civil de las poblaciones de personas con VIH, diversidad sexual y trabajadoras sexuales, las cuales conocen de cerca la realidad de sus miembros.
- 2) Establecer un mecanismo de entrega efectivo de las canastas básicas completas, a quienes aún no las han recibido.
- 3) Informar de los resultados del monitoreo a hospitales y clínicas TAR donde se dispensa medicamentos Antirretrovirales para conocer sobre la disponibilidad de los mismos, así como el mecanismo de distribución y con ello evitar que las personas dejen de tomarlo.
- 4) Nos ponemos a la disposición para contribuir a realizar un trabajo coordinado, para que se logre beneficiar a las personas a las cuales representamos.

28 de mayo de 2020

6. Información sobre la utilización del Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom para atender pacientes adultos positivos de COVID-19

A través de información difundida en los medios de comunicación, se tuvo conocimiento que el Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom sería utilizado para atender pacientes adultos positivos de COVID-19. Por lo cual el 15 de mayo de 2020, se solicitó información al Director del Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, doctor Ángel Ernesto Alvarado Rodríguez, quien informó que el Hospital Bloom al ser un hospital de tercer nivel, su objetivo primordial es ofrecer servicios de especialidades médicas y quirúrgicas a la población de las niñas y niños, por lo cual dicho hospital NO ATIENDE a pacientes adultos sospechosos o diagnosticados con Coronavirus, solo niños y niñas.

Con referencia a la utilización del Hospital Bloom como centro de recolección de plasma anti COVID-19, se expuso que el criterio médico utilizado es que el plasma convaleciente es una alternativa de tratamiento que se obtiene de pacientes recuperados de la enfermedad, quienes pueden hacer una donación altruista en el Centro de Recolección de Plasma Anti Covid, ubicado en el Hospital Bloom, para lo cual se formuló protocolo con diferentes especialistas, se adecuaron las instalaciones, se capacitó y entrenó al personal en AFERESIS, utilizando los protocolos del Bloom y del MINSAL.

Por lo anterior, esta Procuraduría comunica la información antes descrita a las instituciones, organizaciones y pueblo en general que defiende los derechos de la niñez salvadoreña, a quienes les insta a continuar pendientes del buen funcionamiento del Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, con el fin de lograr se garantice el Principio del Interés Superior y el Derecho a la Salud de la Niñas, Niños.

Así mismo, el suscrito Procurador reconoce el buen trabajo que desempeña el Director del Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, doctor Ángel Ernesto Alvarado Rodríguez, quien siempre está presto a colaborar e informar sobre situaciones de atención médica a la niñez en el Hospital Bloom, con lo cual contribuye al buen funcionamiento de la institucionalidad en beneficio del interés superior de la niñez.

03 de junio de 2020

7. Utilización de la imagen de niñas y niños durante la entrega de canastas solidarias

A través de diferentes redes sociales y medios de comunicación, he conocido sobre la utilización de niñas y niños, para realizarles fotografías recibiendo paquetes alimenticios, que entrega la Presidencia de la República a través de su programa de Bienestar Social, en el marco de la atención por la emergencia del COVID-19

Estos hechos constituyen una grave afectación al derecho a la protección a la imagen, vida privada e intimidad de las niñas y niños, establecidas en el artículo 46 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, y artículo 16 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Por lo anterior, en uso de mis facultades Constitucionales, establecidas en el artículo 194 romano I, le solicito al señor Presidente de la República, Nayib Armando Bukele Ortiz, ordene que no se utilice la imagen de niñas, niños y adolescentes, para las actividades en las que se entrega paquetes alimenticios u otra actividad estatal, durante la presente emergencia o coyuntura.

Exhorto, al Consejo Directivo y Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, estar vigilante ante hechos como los señalados; debiendo garantizar la protección de todos los derechos de la población infantil y adolescente en el país.

10 de junio de 2020

8. Utilización y Exposición por parte del Presidente de la República Nayib Armando Bukele Ortiz, de un niño vestido con bolsas plásticas que sirven de empaque a la canasta solidaria que entrega el gobierno de El Salvador

Como pueblo salvadoreño, hemos sido testigos de una publicación por la red social Twitter que realizó el Presidente Nayib Armando Bukele Ortiz, el día 01 de julio de 2020 a las 22:45 horas, (re tuit) donde en un video aparece el niño JDRM, de ocho años, vestido con bolsas plásticas desechables que sirven de empaque de las canastas solidarias que entrega el gobierno, quien, entre otras cosas le agradece al presidente por los víveres que ha recibido su familia, le pide a Dios que ya no sigan los contagios de COVID-19 y la recuperación de los enfermos.

Frente a lo anterior, me veo en la imperiosa obligación de recordarle al presidente Nayib Bukele, que como máxima magistratura de El Salvador, él es el primer llamado a cumplir la Constitución de la República, instrumentos internacionales firmados y ratificados por El Salvador y demás leyes del país que protegen los derechos de los niños y niñas, así pues, hacerle ver con firmeza al presidente Nayib Bukele, que su conducta transgrede los artículos 34 y 35 de nuestra Carta Magna; 16 de la Convención Sobre los Derechos del Niño y 46 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA).

En ese sentido, como Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, le pido y exijo al presidente Nayib Bukele, que desista de utilizar y exponer niños y niñas en sus cuentas de redes sociales y cualquier otro medio de comunicación ó difusión, debido que tales acciones y publicaciones atentan contra la dignidad de la niñez.

Finalmente, le recomiendo a la señora Procuradora General de la República Licda. Mirian Geraldine Aldana Revelo, que en su calidad de Presidenta del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, se reúna con carácter de urgencia con el Consejo Directivo del CONNA y coordinen con la señora Directora Ejecutiva Ad-honorem Licda. Maritza Haydee Calderón de Ríos, para que inicie proceso investigativo sobre este hecho y esté pendiente para que situaciones como estas, que atentan contra la imagen y dignidad de los niños y niñas no se realicen por cualquier funcionario o ciudadano.

02 de julio de 2020

9. WEBINAR CIDH-OEA: “Situación de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en el Contexto de la Pandemia”, 26 de mayo de 2020

Somos conscientes de la gravedad de la pandemia por la que estamos atravesando por lo que apoyamos todas las medidas excepcionales y esfuerzos que desde el Gobierno y todas las instituciones públicas y privadas se están llevando a cabo para parar la pandemia y encontrar salidas rápidas; sin embargo, creemos que muchos de los mensajes que se están difundiendo en los medios de comunicación infieren en la manera discrecional y arbitraria en la que se selecciona a las personas en función de su edad en los CCC, Centros Sanitarios y Centros de Atención de Personas Adultas Mayores. Por otra parte, los mensajes de funcionarios de Gobierno sobre la inevitable muerte de las Personas Mayores afectadas, está causando miedo y desprotección en este sector de la población, por lo que consideramos discriminatorio e inhumano, que se tenga en cuenta criterios de edad para priorizar la atención sanitaria de las Personas Mayores, en lugar de considerar criterios clínicos y otras circunstancias vitales de las personas, con independencia de la edad.

También señalamos con mucha preocupación la escasez de recursos de protección para el personal que presta los servicios de atención a las Personas Adultas Mayores, lo que podría originar el incumplimiento de los protocolos de actuación y atención en algunas residencias de personas mayores y la falta de mecanismos de respuesta de los servicios de ayuda humanitaria a domicilio hacia este sector de la población. Cabe destacar que la falta de recursos de protección, no justifica determinadas actuaciones que atentan contra los derechos humanos de las Personas Mayores y los principios de la bioética.

La pandemia está poniendo en evidencia la situación de precariedad de algunas residencias de personas mayores, ante lo que hemos exigido desde la labor de esta Procuraduría la intervención directa y rigurosa del Ejecutivo para la progresividad de la institucionalidad de protección de las Personas Mayores en nuestro país, la instauración de la Dirección de la Persona Adulta Mayor y la pronta activación del funcionamiento del Consejo Nacional de Protección de las Personas Adultas Mayores (CONAIPAM), competentes en la materia según las funciones específicas en la Ley de Atención Integral de las Personas Adultas Mayores.

Esta Procuraduría concluye que la ausencia del CONAIPAM en la supervisión de las acciones estatales ante la emergencia nacional y la falta de sus pronunciamientos contundentes a favor de la población Adulta Mayor, reafirman nuestro requerimiento institucional de la urgente necesidad de una institución rectora específica en la temática.

Por lo antes expuesto, como Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos hago un llamado a las siguientes autoridades:

Al señor Presidente de la República, Nayib Armando Bukele Ortiz:

1. Que inste a quien corresponda para la pronta verificación de los Centros de Atención de Personas Mayores a nivel nacional, específicamente esclarecer lo que está ocurriendo en el Centro de Atención de Ancianos “Sara Zaldívar”, y depuren responsabilidades, y se realice un informe con el resultado de las investigaciones y actuaciones oportunas. Todo ello para que, a pesar de la gravedad de la crisis, se lleven a cabo prácticas sociales e institucionales que no abandonen la solidaridad, la defensa de los derechos humanos y la dignidad de las personas mayores.
2. La activación urgente y necesaria ante la pandemia del COVID-19, del Consejo Nacional para la Atención Integral a los Programas de los Adultos Mayores (CONAIPAM), para la implementación de las medidas de monitoreo y vigilancia contra la violencia hacia Personas Mayores, ya sea a nivel intrafamiliar, en residencias de larga estadía, hospitales o cárceles, facilitando la accesibilidad a los mecanismos de denuncia.
3. Incluir prioritariamente a las Personas Mayores en los programas de respuesta a la pandemia, especialmente en el acceso a las pruebas de COVID-19, al tratamiento médico oportuno, al acceso a los medicamentos y a los cuidados paliativos necesarios.

4. Garantizar el aprovisionamiento de ayuda humanitaria a las Personas Adultas Mayores, asegurando que se les brinde alimento, agua y saneamiento; estableciendo espacios para la institucionalización de personas en situación de pobreza extrema, calle, abandono y discapacidad.
5. Garantizar del Presupuesto General de la Nación una partida presupuestaria que asegure una atención integral de la población Adulta Mayor institucionalizada, ya que los mismos carecen del apoyo financiero del Estado.

A la Honorable Comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad de la Asamblea Legislativa:

1. Establecer como una prioridad en la agenda la actualización y reforma de la Ley de Atención Integral para la Persona Adulta Mayor, con un enfoque de derechos humanos, en la cual se garantice la institucionalidad nacional de protección de la Persona Mayor en nuestro país, ante la disolución de la Dirección de la Persona Mayor en el actual Gobierno.

Al señor Ministro de Salud, Doctor Francisco José Alabí Montoya:

1. Que la implementación de los protocolos médicos, las decisiones sobre los recursos médicos, y tratamientos en relación al COVID-19 sean suministrados sin discriminación en razón de la edad y prestando especial atención a las Personas Adultas Mayores con discapacidad, VIH/SIDA, enfermedades crónicas, que requieran atención regular como diabetes, hipertensión, demencia senil, Alzheimer, etc.
2. Establecer dentro de las medidas de contingencia un balance entre la protección ante el COVID-19 y la necesidad particular de las Personas Mayores de comunicarse con sus familias para quienes se encuentren en hospitales y residencias a largo plazo, facilitando medios alternativos de contacto familiar como comunicación telefónica o internet.
3. Garantizar a las Personas Mayores dentro de los protocolos de respuesta a la pandemia, el consentimiento previo, pleno, libre e informado y teniendo en cuenta situaciones particulares como la pertenencia a pueblos indígenas.
4. Garantizar que los Centros de Atención y las residencias de Personas Mayores sean tratadas como instituciones de actuación preferente en esta crisis generada por la pandemia, por lo que deberá de suministrar a todos los profesionales y residentes de mascarillas, caretas, lentes y recursos básicos de protección. de los diferentes Centros de Atención de Personas Mayores a nivel nacional.
5. Hacer test en todas las residencias de Personas Mayores a nivel nacional para asegurar que los profesionales y los residentes de los Centros de Atención sean aislados para recibir su tratamiento médico.
6. Proporcionar el personal suficiente para prestar un servicio de manera adecuada y oportuna a los residentes; debiendo de brindarles formación de manera rápida por los mismos equipos de profesionales de las residencias sobre su propio desempeño laboral.
7. Garantizar el desplazamiento diario del personal médico para atender las patologías clínicas que presentan los residentes de los Centros de Atención de Personas Mayores a nivel nacional, y se le brinde el tratamiento médico adecuado y oportuno, con la finalidad de evitar complicaciones de salud que ameriten el traslado a hospitales o centros sanitarios.

A la señora Ministra de Desarrollo Local, María Ofelia Navarrete:

1. Priorizar la instauración de la Dirección de la Persona Adulta Mayor en el país y la pronta activación del CONAIPAM, quienes deberán realizar estudios periódicos y actualizados

sobre la situación de abuso, maltrato, discriminación y negligencia hacia este sector de la población, que permitirá establecer la línea de base para el desarrollo de programas y políticas tendientes a erradicar la problemática.

2. Unificar esfuerzos para la elaboración de un protocolo de actuación en los casos de abuso, maltrato, discriminación y abandono hacia la Personas Adultas Mayores, en medio de esta crisis sanitaria, económica y social, con las diferentes instituciones involucradas en su protección.

Finalmente hago un llamado al aparato Estatal y a la sociedad salvadoreña, a generar una imagen sin estigmatización a la Persona Adulta Mayor, impulsando un envejecimiento activo y saludable, y erradicar todo paradigma de homogenizar el envejecimiento, naturalizando el deterioro, declive y discapacidad como parte del proceso de envejecimiento, entendiendo que dichas condiciones están más bien, determinadas por las condiciones sociales, económicas y ambientales de cada sociedad. Pues el envejecimiento es heterogéneo y diferencial en cada ser humano.

15 de junio de 2020.

g) Libertad de expresión y acceso a la información

1. En relación con manifestaciones de sonidos de pitos y cacerolazos de la población salvadoreña y la utilización en redes sociales del nombre de la hija del señor presidente

Es del conocimiento público que desde el día 12 de mayo de 2020, a las 20:00 horas, la población salvadoreña ha estado realizando protestas públicas contra el señor presidente de la República, Nayib Bukele, consistentes en el sonar de pitos y cacerolazos por la inconformidad ante los efectos de la “cuarentena especial”, “el no retorno de los compatriotas varados en países extranjeros”, “por la falta de transparencia del gasto público”, “por las personas que no tienen ingresos económicos y alimentos”, “por los que se han infectado en los centros de contención”, entre otros.

Ante lo cual, esta Procuraduría reconoce el legítimo derecho del pueblo salvadoreño a expresarse y protestar libremente conforme al artículo 6 de la Constitución de la República, donde se regula que:

“Toda persona puede expresar y difundir libremente sus pensamientos siempre que no subvierta el orden público, ni lesione la moral, el honor, ni la vida privada de los demás”. En ese sentido, como Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos estoy obligado a exponerle al pueblo manifestante, que así como tienen la plena libertad de protestar, también tienen la obligación de no lesionar la moral, el honor y la privacidad de los demás”.

Por lo anterior, se le exhorta al pueblo salvadoreño que realiza la protesta, desistir de utilizar el nombre de la hija del señor presidente de la República, en sus gritos y frases al momento de realizar sus manifestaciones, lo cual transgrede los artículos 34 y 35 de la Constitución de la República; 16 de la Convención Sobre los Derechos del Niño y 46 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA).

Finalmente, se le recomienda al señor presidente de la República Nayib Armando Bukele Ortiz que, como funcionario público, no utilice ni exponga a su hija en sus apariciones y espacios públicos.

14 de mayo de 2020

2. Hechos de violencia ocurridos en la Alcaldía Municipal de Soyapango

Desde el día 28 de agosto del presente año, trabajadoras y trabajadores de la Alcaldía Municipal de Soyapango, miembros del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Alcaldía de Soyapango, SITMUSOY, y Sindicato de Trabajadores Municipales de Soyapango, SITRASOY, acompañados también por miembros de la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales, ASTRAM, iniciaron una protesta pacífica en los alrededores de la alcaldía, ante la supuesta privatización de los servicios de recolección de desechos sólidos en ese municipio.

Las personas trabajadoras de ese municipio denunciaron ante personal de esta Procuraduría que en el período de cuarentena por el COVID-19, tuvieron conocimiento que autoridades de la Alcaldía iniciaron un proceso de licitación para adjudicar a una empresa los servicios de recolección de basura en el municipio, viéndose afectados con dicho proceso alrededor de 253 personas trabajadoras del Departamento de Recolección de Desechos Sólidos, por lo que decidieron ubicar siete camiones recolectores frente a la Alcaldía y bloquear algunas calles, como una medida para presionar a las autoridades a buscar soluciones a la problemática. Ante ello el señor Alcalde Municipal, Juan Pablo Álvarez expresó que con el ánimo de buscar alternativas para mejorar el servicio de recolección de basura en el municipio, el Concejo Municipal emitió un acuerdo para iniciar un proceso de búsqueda de un socio estratégico que se encargara de la recolección, dado que por la crisis sanitaria por el COVID-19, no se les ha entregado el dinero de FODES y la recolección de fondos municipales también se redujo.

En horas de la madrugada de este día, tres personas trabajadoras fueron lesionadas, luego del ataque sufrido con armas de fuego y objetos contundentes, presuntamente por un grupo de 25 personas que llegaron a las 11:00 de la noche de ayer, con palos, piedras y botellas, quienes comenzaron a ofender y a provocar a los manifestantes, de quienes creyeron también eran personas trabajadoras que llegaban a apoyarlas en la protesta, pero expresan los trabajadores que al parecer eran personas de estructuras delincuenciales o grupos de choque, que alrededor de la 01:00 de la madrugada de hoy, hicieron varios disparos que impactaron a tres de las personas que protestaban y custodiaban los vehículos municipales que utilizaban para la protesta.

Los heridos son los señores José Alfredo Esquivel Ramos, Francisco Olmedo y Javier Alberto Rivas, el primero recibió un impacto de bala que rozó su rostro y los otros dos en miembros inferiores, quienes fueron trasladados por la Cruz Verde al Instituto Salvadoreño del Seguro Social. El señor alcalde Juan Pablo Álvarez expresó, que “probablemente hubo disparos desde las instalaciones de la alcaldía hacia afuera, pero en defensa propia”.

Personal de esta Procuraduría verificó el conflicto suscitado en la Alcaldía, desde tempranas horas de la mañana, cuya intervención logró que las autoridades municipales entablaran una Mesa de Diálogo con los trabajadores para buscar alternativas de solución a la problemática, interviniendo en dicha Mesa también representantes del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y de esta Procuraduría, en la que el señor Alcalde y su Concejo por unanimidad, mostrando apertura y buena disposición al diálogo, adoptaron acuerdos para levantar las medidas de protesta, garantizando la estabilidad laboral de las personas trabajadoras, no tomando represalias en contra de los manifestantes empleados y empleadas de esa alcaldía y desistiendo de cualquier acción que atente contra los derechos de los trabajadores; asimismo se acordó dejar sin efecto el acuerdo municipal que autorizaba el inicio del proceso de licitación de un socio estratégico para la recolección de desechos y en su defecto se buscará un financiamiento para la compra de nuevos camiones y reparación de los camiones compactadores con problemas mecánicos, asimismo se reinstalará a partir de mañana al señor Mario Cesar Rochac como Gerente de Desechos Sólidos; acuerdos que se hicieron constar en el Acta número 38 de la sesión ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de Soyapango este día, según Acuerdo Municipal número uno.

En el ejercicio del derecho a la protesta pacífica, como mecanismo esencial para exigir la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales, “las personas trabajadoras no deberían ser sometidas a medidas de represalia ni privaciones de libertad, por haber

ejercido derechos garantizados en los instrumentos de la OIT en materia sindical”. En tal sentido, las personas trabajadoras de la Alcaldía Municipal de Soyapango que demandaban atención de las autoridades municipales ante la presunta e inminente afectación a su derecho al trabajo, por considerar que al trasladar los servicios de recolección de basura a una empresa privada, su estabilidad laboral se vería afectada, realizaron acciones de protesta que no fueron atendidas de forma oportuna por las autoridades municipales, ocasionando que las mismas culminaran con hechos de violencia, los que pudieron haberse evitado respondiendo oportunamente a las peticiones de las personas trabajadoras; sin embargo se reconoce la actitud de diálogo mostrada este día por las autoridades municipales para desmontar el conflicto laboral suscitado.

Frente a los hechos antes expuestos y en cumplimiento a las atribuciones consignadas en el art. 194 romano I, ordinales 1°, 3°, 7° y 11° de la Constitución de la República, como Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos:

1. Señalo con profunda preocupación la violación a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de las personas trabajadoras de la Alcaldía Municipal de Soyapango, por la omisión del señor Alcalde y su Concejo Municipal de atender de forma oportuna las demandas, pudiendo haberse evitado hechos violentos como los ocurridos en contra de los trabajadores José Alfredo Esquivel Ramos, Francisco Olmedo y Javier Alberto Rivas.
2. Insto al señor Alcalde Municipal de Soyapango, Juan Pablo Álvarez, a mantener y privilegiar el diálogo como mecanismo para buscar soluciones a los conflictos que puedan suscitarse con la clase trabajadora, estando esta Procuraduría en la disposición de participar si fuera necesario. Así mismo se le insta a darle seguimiento a los acuerdos tomados este día por el Concejo Municipal, según el acta número 38 citada.
3. Recomendando al señor Fiscal General de la República, Dr. Raúl Melara, iniciar la investigación que corresponda, sobre los hechos ocurridos en la madrugada de este día en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Soyapango en contra de las personas trabajadoras que resultaron lesionadas.

31 de agosto de 2020

h) Fechas conmemorativas y otros

1. “31 de marzo, Día de la Visibilidad Trans”

En cumplimiento de las atribuciones que me han sido conferidas en el artículo 194 romano I ordinal 1°, 7°, 10° y 11° de la Constitución de la República de El Salvador, este día 31 de marzo, día de la visibilidad trans, extendiendo un saludo fraterno a toda la población de mujeres y hombres trans de nuestro país.

En esta fecha, es importante reconocer el trabajo que realizan las organizaciones de mujeres y hombres trans, en aras de alcanzar sus justas reivindicaciones como el derecho a una Ley de Identidad y la exigencia al Estado de impulsar las políticas pública o buenas practicas necesarias que contribuyan a erradicar la estigmatización y discriminación de la que han sido víctimas históricamente por su orientación sexual y expresión de género. Esfuerzos que esta Procuraduría seguirá acompañado.

Aprovecho la ocasión, a consecuencia de la coyuntura que en la actualidad atraviesa nuestro país, a raíz del COVID19, que ha dado lugar, en algunos casos, a la desprotección de las poblaciones más vulnerables, entre estas la población LGBTIQ+, debido a la falta de medidas concretas o programas de asistencia y protección por parte del Estado dirigidas específicamente a la población trans, y más a las personas adultas mayores, de reiterarles el compromiso de esta Procuraduría de velar y garantizar el ejercicio y cumplimiento de sus derechos humanos en tal crisis sanitaria.

En virtud de lo anterior, además de expresarles mi admiración por el trabajo realizado como defensoras y defensores de derechos humanos, aprovecho la ocasión para reiterarles mis más sinceras felicitaciones, e instarles a continuar con tan loable labor.

Finalmente, hago el llamado al Estado salvadoreño, en este contexto de emergencia, especialmente a los titulares de los Ministerios de Salud, de Gobernación y de Cultura, como la instancia rectora en su atención, a asegurar los programas o medidas necesarias que garantice los derecho a la alimentación, salud, asistencia económica, seguridad, no discriminación y todo esfuerzo, que les facilite enfrentar esta pandemia a las personas de la población LGBTQ+.

31 de marzo de 2020

2. El Día del Trabajo, en el contexto de la pandemia por COVID-19

Este 1 de Mayo, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, se suma a la lucha por la reivindicación y la defensa de los derechos de la clase trabajadora que en medio de la crisis sanitaria se mantiene activa. La actual crisis generada por el COVID-19 ha significado graves afectaciones a sus derechos, pues mucha de la actividad productiva del país ha sido paralizada y su fuerza laboral ha quedado en condición de vulnerabilidad por el cierre de su fuente de ingreso y negárseles el goce de prestaciones sociales y demás derechos inherentes al trabajo.

Aprovecho la ocasión para saludar y reconocer a toda la clase trabajadora del país, particularmente a aquellas que desde el inicio de la emergencia realizan esfuerzos inagotables en la defensa de la salud de los habitantes, tales como: personal médico, de enfermería, de laboratorio, de mantenimiento, auxiliares, motoristas y de otras áreas de la medicina y de apoyo hospitalario; así como a elementos de la Policía Nacional Civil, de la Fuerza Armada de El Salvador y miembros de las Comisiones Municipales de Protección Civil, quienes se encuentran en la primera línea de respuesta a la crisis; y a quienes el Estado debe asegurarles la disponibilidad y provisión oportuna y en cantidades suficientes de material de bioseguridad, insumos y suplementos médicos esenciales para la protección de su salud, según lo ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Asimismo hago un llamado a los titulares de las instituciones del sector público y municipal, a respetar la estabilidad laboral y la garantía del debido proceso de las personas trabajadoras, cuyos derechos laborales ante la presente coyuntura deben ser garantizados, por ello debo lamentar el despido de 35 trabajadores de la Alcaldía Municipal de San Salvador, que denunciaron ante esta Procuraduría que no se respetaron los procedimientos legales para la separación de sus cargos, en el medio de esta crisis donde aumentan todas las necesidades. De igual forma exhorto a los empleadores del sector privado, respetar las normas de protección de las personas trabajadoras, observando los procedimientos administrativos y manteniendo al máximo de lo posible, las fuentes de empleo que estén bajo su responsabilidad, pues las empresas tienen un rol clave que desempeñar en estos contextos y su conducta debe guiarse por los principios y reglas de derechos humanos; por ello es preocupante la cantidad de personas que han sido despedidas de la industria textil, entre ellas las 497 personas de la empresa Varsity Pro y 210 personas de Industrias Florenzi.

El impacto económico de esta pandemia ya ha generado que las empresas no puedan cancelar salarios ni otras prestaciones a sus trabajadores; realicen despidos o suspendan contratos individuales de trabajo; de esto último es preocupante la cantidad de personas afectadas por las suspensiones de contratos, facultad concedida al empleador en el Código de Trabajo, pero que no ha sido retomada ni discutida en los decretos de emergencia aprobados por los Órganos Ejecutivo y Legislativo, lo cual causa preocupación ya que el Estado aún no presenta para su discusión un plan de ayuda económica para las empresas afectadas.

En cuanto al subsidio de trescientos dólares entregado desde finales de marzo y durante el mes de abril, presuntamente dirigido a personas del sector informal, debo señalar que

se han recibido quejas sobre su cobertura, pero además, que éste no contempló a las que eran trabajadoras y trabajadores activos y que han sido cesados de sus empleos o se les ha reducido su salario, siendo obligación del Estado evaluar, diseñar o readecuar un plan de apoyo económico a las personas que han perdido su empleo a causa de la pandemia y recibir subsidios o asistencia en caso de desempleo, para compensar la pérdida de ganancias, tal y como lo ha señalado la Organización Internacional del Trabajo. Lo anterior, no hace más que hacer evidente la crítica situación de las personas trabajadoras por cuenta propia y las del sector informal, que han resultado ser los más golpeados con esta crisis, cuya fuente de ingreso depende de forma exclusiva de su actividad productiva diaria, y que en este contexto se ha vuelto casi nula, esto explicaría que últimamente hay más personas en la calle arriesgando su salud, ante la necesidad de buscar el sustento de sus familias.

Por otra parte, recientemente la Asamblea Legislativa aprobó con ligereza la Ley de Regulación de Teletrabajo, sin embargo esta nueva normativa y sus posibles efectos no fueron analizados con un enfoque de derechos humanos, ya que si bien la tecnología podría contribuir a evitar la pérdida de empleos, generación de nuevas fuentes y mejorar ciertas condiciones asociadas al trabajo, como la reducción del tiempo de desplazamiento; en el contexto actual muchas personas están experimentando una modalidad obligatoria de teletrabajo, la que no afecta por igual a hombres y mujeres, sino que profundiza las desigualdades de género en el trabajo, pues las mujeres asumen además los roles de cuidado de las hijas e hijos, su educación, tareas de orden y limpieza del hogar y el desempeño a distancia de su propio trabajo, actividades que en hogares monoparentales, cuya cabeza de familia es la mujer, toda la carga la asume ella, sin que dicho trabajo sea reconocido ni remunerado, por lo que toda medida que el Estado adopte para enfrentar la pandemia y su impacto socio económico, debe tener enfoque de derechos humanos con amplia perspectiva de género.

Por lo anterior, con base en mis atribuciones consignadas en el art. 194 romano I, ordinales 1°, 3°, 7° y 11° de la Constitución de la Republica, recomiendo:

Al señor Presidente de la Republica, Nayib Armando Bukele Ortez:

Adoptar medidas urgentes de protección para las personas que han perdido sus empleos, que han sido objeto de suspensión de contratos de trabajo y que sus salarios y demás prestaciones laborales han sido reducidas.

Girar las instrucciones necesarias para agilizar la creación de medidas de recuperación y rescate económico que sean dialogadas con los sectores productivos, mediante un plan de fortalecimiento de la economía, con énfasis en la ayuda directa de la micro, pequeña y mediana empresa, al sector informal y a trabajadores por cuenta propia, a fin que la economía del país pueda reconstruirse en el menor tiempo posible. Lo anterior, tomando en cuenta que toda acción gubernamental, en el ámbito laboral debe adaptarse a las nuevas realidades, donde la seguridad y salud ocupacional y la obligación del Ministerio de Trabajo para hacerlas cumplir, son de vital importancia; por lo que deben ser adoptadas todas las medidas para la protección de las trabajadoras y trabajadores, con el estricto cumplimiento de las indicaciones de distanciamiento social que sean necesarias para evitar el avance de la pandemia.

Valorar la creación de un espacio de diálogo con presencia de funcionarios de alto nivel que tengan capacidad de decisión y que se incluya representación de diferentes asociaciones empresariales, productoras y laborales de este país con la finalidad de diseñar una política pública de rescate de la economía nacional garantizando la defensa de los derechos laborales y empresariales.

Al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, Rolando Castro:

Elaborar un censo, si aún no lo ha hecho, de las personas afectadas negativamente por la pandemia, y de las medidas de protección adoptadas para cada una de ellas; se detallen los procedimientos seguidos y los apoyos dados al sector empleador.

Diseñe, ejecute y supervise la aplicación de un plan para la protección de los derechos laborales de las personas en el país. Así mismo vigile que, en el desarrollo de las labores remuneradas desde el hogar, las actividades domésticas no afecten de forma desproporcional a la mujer, adoptando las medidas idóneas para atender esas afectaciones de género.

Desarrollar una política de diálogo, concertación y acercamiento con todos los sectores vinculados: trabajadores, trabajadoras y sus organizaciones sindicales, el ámbito empleador y el gobierno, con el ánimo de buscar soluciones consensuadas a las diferentes problemáticas que los atañen.

Reitero mi compromiso, con la población trabajadora para seguir velando porque la actuación de todas las estructuras a través de las cuales se expresa el poder público, respete y garantice sus derechos laborales.

1 de mayo de 2020

3. Día Internacional de la Familia

La Asamblea General de Naciones Unidas por medio de su resolución 47/237 de fecha 20 de septiembre de 1993 decidió celebrar el Día Internacional de la Familia cada 15 de mayo, con el fin de dar a conocer temas relacionados con las familias y reflexionar acerca de cómo les afectan los procesos sociales, económicos y demográficos.

Este año, el tema elegido por Naciones Unidas es “**Familias en Desarrollo: Copenhague y Beijing +25**”, en ocasión al 25 aniversario de la Declaración de Copenhague y la Plataforma de Acción de Beijing, instrumentos en los que se establecen medidas concretas para asegurar el desarrollo social y bienestar de la población, así como lograr el empoderamiento e igualdad de género, respectivamente.

Dicha conmemoración se realiza en el marco de la Pandemia de COVID-19, la cual ha centrado los esfuerzos de los Estados en su combate y ha expuesto la necesidad de invertir en políticas sociales que protejan a las personas y familias más vulnerables.

La familia está evolucionando en todo el mundo; su tamaño se reduce en muchos casos, mientras crece el número de hogares monoparentales. En la actualidad el 65% de las familias están formadas por parejas que viven con niñez de diversa edad (38%) o con niñez y miembros de la familia extensa, como los abuelos (27%). Los hogares monoparentales constituyen el 8% del total y están compuestos en su mayoría por mujeres con hijas e hijos (84%).

La disminución de familias extensas y el aumento del número de familias monoparentales hacen que la protección social adquiera particular relieve. Tradicionalmente, las familias extensas ofrecían una protección social informal basada en los cuidados mutuos o compartidos. Con la evolución de las estructuras familiares esas prácticas a menudo dejan de ser viables; de ahí la creciente importancia de los sistemas formales de protección social y la necesidad de adoptar medidas que tengan en cuenta las cuestiones de género.

Con la pandemia de COVID-19, las familias se han llevado la peor parte: se han visto obligadas a proteger a sus miembros, cuidar de hijas e hijos, personas adultas mayores, familiares enfermos o con discapacidad y de continuar con sus responsabilidades laborales.

Particularmente, las familias salvadoreñas enfrentan momentos de crisis debido a las nuevas disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo No. 639 y Decreto Ejecutivo No. 24, con las cuales se limita el derecho a la libertad personal, tránsito y circulación, y no se garantizan mecanismos efectivos para el acceso a servicios de salud de forma integral, ni para el derecho al trabajo y a la alimentación de los sectores vulnerables de la población, situación que genera un alza en el estrés, que puede producir comportamientos violentos principalmente contra mujeres, niñas y niños.

Por lo anterior, hago un llamado al funcionariado público, al sector privado y a la sociedad en general, para que trabajen en conjunto a fin de fomentar que, en la familia como base de la sociedad, se implemente mayor igualdad, lo cual coadyuvará a alcanzar la igualdad de género; y para que en el marco de la pandemia de COVID-19, se apoye a las familias más vulnerables, principalmente a aquellas que han perdido sus ingresos o incluso vivienda, asegurándoles la salud y alimentación.

15 de mayo de 2020

4. Día Mundial de las Madres y los Padres

La Asamblea General de Naciones Unidas por medio de su resolución 66/292 de fecha 17 de septiembre de 2012 decidió proclamar el 1 de junio Día Mundial de las Madres y los Padres, para que se observe anualmente en honor de las madres y los padres de todo el mundo, destacando la responsabilidad primordial que tienen en la educación y protección de las y los niños, y que para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, deben crecer en un entorno familiar y en un ambiente de felicidad, amor y comprensión.

Este día “tiene por objetivo rendir homenaje a las valiosas contribuciones que hacen las madres y los padres en todo el mundo, que pertenecen a todas las religiones, culturas y sociedades.” Dichas contribuciones son necesarias incluso para alcanzar los objetivos centrales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que fue aprobada por los líderes mundiales en 2015, y se enfocan en el fin de la pobreza, la promoción de una prosperidad económica compartida, el desarrollo social y el bienestar de las sociedades, al tiempo que preservan el medio ambiente.

Las políticas familiares pueden contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con el fin de la pobreza y el hambre, asegurando y promoviendo la salud y el bienestar en todas las edades, garantizando las oportunidades educativas a lo largo de la vida y consiguiendo la igualdad de género.

En El Salvador, el concepto de familia se ha transformado. Se observa un aumento en el porcentaje de jefes de hogar adolescentes –entre 14 y 17 años- al frente de familias nucleares o monoparentales. La formación de una familia en la adolescencia se convierte en una fuente de vulnerabilidad, cuando paralelamente las y los jóvenes abandonan el sistema escolar sin haber completado su educación formal, debiendo ingresar al mercado laboral en trabajos de baja remuneración y sin acceso a seguridad social, o bien dedicarse al cuidado de las y los hijos. En la mayoría de casos, la jefatura de la familia recae en la mujer.

En el marco de la Pandemia COVID-19, las familias se llevan la peor parte. Las madres y los padres tienen la responsabilidad de proteger a sus familias de cualquier daño, cuidar a las y los niños que no asisten a la escuela, cuidar a las personas adultas mayores bajo su cargo, familiares enfermos, y al mismo tiempo continuar con sus responsabilidades laborales. Sin el apoyo de las madres y los padres, la salud, educación y bienestar emocional de la niñez está en riesgo.

Lamentablemente, en nuestro país con la aprobación del Estado de Emergencia y la Cuarentena Domiciliar por la Pandemia COVID-19, muchas mujeres, niñas y niños están en situación de riesgo pues el confinamiento les dificulta denunciar a sus agresores y en ocasiones conviven con ellos; asimismo las mujeres son generalmente las encargadas de las tareas de educación dentro del hogar, del cuidado de hijas e hijos y de las actividades de limpieza, asumiendo cargas desproporcionadas de trabajo doméstico y cuidado en comparación con sus parejas hombres, lo que las coloca en una situación de desigualdad y les ocasiona dificultad para equilibrar el trabajo y las responsabilidades familiares, lo cual evidencia que deben realizarse esfuerzos para promover la igualdad de género desde la familia.

Por lo anterior, es propicio exhortar a las instituciones estatales, principalmente al Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), para que junto al sector privado y a la sociedad en general, fomenten “políticas sobre la corresponsabilidad y la distribución equitativa del trabajo doméstico y del cuidado, para que las mujeres puedan seguir participando de sus actividades productivas aún con el incremento en el trabajo del hogar debido a la pandemia.”, lo cual coadyuvará a alcanzar la igualdad de género.

1 de junio de 2020

5. Fallecimiento del señor Douglas Fernando García Castro, Inspector Jefe de la División Antiextorsiones de la Policía Nacional Civil, a causa de COVID-19

Con profundo pesar he recibido este día la noticia sobre el fallecimiento a causa del COVID 19, del señor Douglas Fernando García Castro, Inspector Jefe a cargo de la División Antiextorsiones de la Policía Nacional Civil. Él, como muchos otros servidores públicos, ha integrado con sacrificio y compromiso la primera línea de respuesta ante esta emergencia que nos convoca a todas y todos.

En ese sentido, en múltiples ocasiones he insistido en la impostergable necesidad de dotarles de todos los implementos necesarios para el desempeño de su vital servicio, en condiciones de bioseguridad, debiendo además, considerarse para la asignación de sus respectivos roles, factores como padecimientos crónicos en salud preexistentes, edad y cualquier otra circunstancia que les ubique en mayor condición de riesgo.

Su familia, la Corporación Policial y la sociedad en general, debemos ahora lamentar el fallecimiento del señor García Castro, conocido como “Ruso” entre sus compañeros. A todas estas personas expreso mi solidaridad y mi profundo sentir ante esta irremediable pérdida

Por lo anterior, reitero mi llamado al señor Director General de la Policía Nacional Civil, comisionado Arriaza Chicas para que asuma el compromiso de garantizar la vida de todas las personas y de manera especial de aquellas que se encuentran a su servicio y bajo su responsabilidad; después de todo, resulta simplemente inaceptable el no otorgar la debida prioridad a la adopción de las medidas necesarias para proteger a quienes nos protegen.

16 de mayo de 2020

6. Solidaridad con la Defensoría del Pueblo de Ecuador por la Resolución Constitucional de la Unidad Judicial de Tránsito y las Amenazas e Intimidaciones del Gobierno ante la Defensa de los Derechos de Personas Ecuatorianas en el Extranjero a Consecuencia del COVID-19

En mi calidad de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador y en atención a mi mandato Constitucional, conferido en el artículo 194 romano I; como miembro de la Alianza Global de Instituciones Defensoras de Derechos Humanos (GHANRI) y de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, expongo lo siguiente:

El doctor Freddy Carrión Intriago, Defensor del Pueblo de Ecuador, ha manifestado públicamente que existe una resolución judicial desfavorable al accionar de la Institución de Derechos Humanos de ese país; y que han existido diferentes amenazas e intimidaciones del Ministerio de Gobierno de la Presidencia de la República y de la Cancillería Ecuatoriana, de iniciar juicios penales en contra de la Defensoría por haber activado la tutela judicial efectiva en función de los derechos de las personas Ecuatorianas que se encuentran varadas en el extranjero por el contexto de la pandemia de COVID-19.

Considerando que la situación de connacionales varados en el extranjero es común a muchas de las realidades de los países de Latinoamérica, incluida la nuestra, exaltamos

en esta oportunidad, el rol que la Defensoría del Pueblo de Ecuador está realizando para garantizar los derechos de su población que se encuentra fuera y en exigencia a las autoridades nacionales y competentes de su país, siendo estas acciones amparadas en el principio internacional que “Los derechos humanos y la dignidad humana no tienen fronteras”.

La Defensoría del Pueblo de Ecuador si bien es cierto es una institución estatal que controla las posibles arbitrariedades de las instituciones públicas, los consorcios privados y particulares con la aquiescencia del Estado que puedan lesionar o violentar derechos humanos fundamentales, es una institución autónoma e independiente, en consecuencia, el respeto a las acciones ejercidas por el mandato del Defensor del pueblo son clave para la consolidación del Estado Constitucional Democrático de Derecho.

Esta Procuraduría considera que los diferentes Gobierno de los países de América, en el contexto de la pandemia COVID-19, deben actuar de conformidad con la resolución 1/2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la cual recomienda a los Gobiernos de los Estados miembros a guiar su actuación de conformidad a los principios y obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos. Además, los Estados de la región deben brindar y aplicar perspectivas interseccionales y prestar especial atención a las necesidades y al impacto diferenciado de dichas medidas en los derechos humanos de los grupos históricamente excluidos o en especial riesgo, tales como personas en situación de movilidad humana, mujeres, niñez y adolescencia, entre otros.

Por lo anterior, en la calidad arriba mencionada manifiesto mi total respaldo y solidaridad con el defensor del pueblo de Ecuador, doctor Fredy Carrión Intriago, a quien animo a no decaer en la genuina y legítima lucha por la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos ecuatorianos.

16 de mayo del 2020

7. Día Mundial de los Refugiados

El 20 de junio fue declarado por las Naciones Unidas como el día mundial de las personas refugiadas, fecha que se conmemora desde el año 2001 por resolución 55/76 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 4 de diciembre del año 2000, en coincidencia con el aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.

Los conflictos armados, las graves violaciones a derechos humanos, la violencia social, de género y los desastres naturales son las principales causas que generan la movilización de personas entre las cuales se encuentran los grupos de apátridas, solicitantes de asilo, potenciales refugiados y personas víctimas de desplazamientos forzados.

En esta ocasión, quiero referirme a la situación de vulnerabilidad que enfrentan las personas refugiadas, solicitantes de asilo y víctimas de desplazamiento forzado en el contexto de la pandemia del coronavirus (COVID-19) que a nivel mundial impone a la conmemoración de este día un contexto preocupante de crisis global, en la cual los estados y todas sus estructuras se han enfocado y esforzado a atender la crisis sanitaria que también ha afectado a El Salvador.

La pandemia del coronavirus ha puesto de manifiesto las desigualdades, la violencia estructural y la inexistencia de políticas públicas, programas y rutas de atención en El Salvador, para las personas y grupos familiares afectados directamente por el desplazamiento forzado interno, en razón que al encontrarse en medio de la emergencia sanitaria en sus lugares donde se encuentren, su situación de vulnerabilidad, desprotección y confinamiento se ha incrementado, generando otro tipo de amenazas por la desinformación ante el riesgo de contagio.

Durante la presente emergencia sanitaria nacional, esta Procuraduría ha registrado desde finales de marzo de este año, nueve casos de personas y grupos familiares víctimas de

desplazamiento forzado por razones de violencia, cinco de ellos reportados por hombres y cuatro por mujeres, quienes se han visto amenazados y amedrentados por grupos criminales para abandonar sus lugares de residencia, y un caso de potencial riesgo de desplazamiento.

Las personas que han sido víctimas de desplazamiento forzado sufren una crisis sanitaria y humanitaria, puesto que se encuentran expuestas al virus sin poseer recursos para protegerse, además de vivir o trabajar en condiciones de precariedad y hacinamiento, e inclusive pueden existir casos en los cuales se encuentren aislados en sus viviendas, o albergues temporales para protegerse de las afectaciones a su integridad y su vida, además de ello, carecen de acceso a otros servicios básicos, como el agua, salud y nutrición y se encuentran propensos a sufrir desastres, como las recientes tormentas tropicales que sucedieron semanas atrás en El Salvador.

Por otra parte, no se puede omitir el impacto socioeconómico generado por las limitaciones a la libre circulación y las diferentes cuarentenas para el combate del COVID-19 en nuestro país, que obliga a las familias a subsistir con medios precarios. La crisis sanitaria también ha agravado la situación de las mujeres, niños y la población LGBTI desplazadas, quienes corren un riesgo mayor de sufrir violencia, abusos y explotación por razón de género y tienen dificultades para acceder a los servicios de protección y respuesta. En este periodo no solo se han registrado peticiones de protección e intervención, sino también apoyo urgente para solventar necesidades de alimentación y dotación de medicamentos por afectaciones de salud a los miembros del grupo familiar.

Es importante reflejar y destacar la asistencia humanitaria que se ha brindado por parte de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) Agencias Internacionales, entre otros, para la atención de las necesidades de las familias que se han visto afectadas por esta pandemia del COVID-19. Las respuestas ágiles y oportunas de las organizaciones han sido esperanzadoras para las familias que se han visto afectadas de manera indirecta o directa ante esta crisis de salud.

En este sentido es imperioso reflexionar sobre la intervención del Estado relacionada a la protección de las víctimas, puesto que los cierres de fronteras y otras restricciones a la circulación para combatir las propagación de COVID-19 ha generado graves repercusiones en los derechos de las personas que han sido víctimas de desplazamiento forzado, al verse atrapadas en situaciones muy peligrosas o sin opciones de protección y optar por el confinamiento absoluto en detrimento de sus derechos y dignidad como seres humanos.

Asimismo, las personas retornadas con necesidades de protección, se enfrentan a la fragilidad del sistema de atención a víctimas, además se ven limitadas en los accesos a los servicios de salud pública, que en estos momentos se encuentran sobrepasados en su capacidad de respuesta para la contención de la pandemia del COVID-19 y la atención de otras afectaciones a su salud no constituye en estos momentos una prioridad.

Cabe señalar que a pesar de los esfuerzos que realizan las instituciones nacionales del ejecutivo para combatir y contener la pandemia a nivel nacional, no puede omitirse, reprogramarse o pausarse por parte del Ministerio de Justicia y seguridad Pública y la Dirección General de Atención a Víctimas y Migración Forzada, las necesidades de protección para las víctimas del desplazamiento forzado y las personas retornadas que se han presentado a nivel nacional durante el presente periodo de Emergencia Nacional. La respuesta a las peticiones y necesidades de las familias debe ser acorde al grado de riesgo y vulnerabilidad que el Estado está obligado a garantizar para el goce y respeto irrestricto de los derechos humanos de dicha población.

Tomando en consideración que existe ya la aprobación de una Ley para la Atención y Protección Integral de Personas en Condición de Desplazamiento Forzado y un Plan Nacional de Acción para dar respuesta a los compromisos regionales asumidos en el Marco Integral de Protección y Soluciones (MIRPS) como Defensor del Pueblo y garante de los derechos de las personas refugiadas, desplazadas internas y retornadas con necesidades

de protección, sobre la base de mi mandato constitucional establecido en el artículo 194 romano I ordinales 1º, 2º, 7º, 11º, recomiendo:

- 1) Al Señor Presidente de la Republica, Nayib Bukele, realice todas las gestiones necesarias para el fortalecimiento a nivel nacional de las Oficinas de Atención a Víctimas, desde la Dirección Central, dotándolas de personal multidisciplinario y recursos financieros necesarios y suficientes para la atención de las víctimas de desplazamiento y personas retornadas, con necesidades de protección. Además que en todas las dependencias del Órgano Ejecutivo se transversalice el enfoque de protección a estos grupos vulnerables.
- 2) Exhorto al Señor Ministro de Justicia y seguridad Pública, Rogelio Rivas, para que en coordinación con la Dirección de Atención a Víctimas, enfoque sus esfuerzos, recursos humanos y financieros para la protección de las víctimas de desplazamiento y personas retornadas, para la asistencia humanitaria inmediata y restablecimiento de las condiciones dignas de vida, soluciones duraderas y desarrollo de estas poblaciones vulnerables.

Finalmente, reitero mi solidaridad con las personas refugiadas y desplazadas internas, comprometiéndome a seguir dando cumplimiento al mandato constitucional que se me ha otorgado para la protección de las víctimas y me pongo a disposición para realizar las coordinaciones necesarias con las instituciones estatales competentes, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, para impulsar y coadyuvar al cumplimiento de los compromisos que como Estado se han adoptado y que las Ley Especial mandata.

20 de junio de 2020



Posicionamientos públicos vinculados a diferentes temáticas de derechos humanos





B. Posicionamientos públicos vinculados a diferentes temáticas de derechos humanos

a) Medio ambiente

1. Las inundaciones en la Colonia Santa Lucía, municipio de Ilopango, San Salvador

Las fuertes lluvias de la noche del miércoles 13 de mayo dejan en evidencia la vulnerabilidad en la que se encuentran habitantes de la Residencial Santa Lucía en el municipio de Ilopango y sus alrededores durante estos eventos climáticos, ocasión en que el caudal cubrió la totalidad de las calles, alcanzando los dos metros y medio de altura aproximadamente, lo que ocasionó pérdidas materiales y una grave afectación psicológica a más de cincuenta familias de la zona.

El 26 de abril de este año, las fuertes lluvias provocaron daños en los trabajos realizados para el drenaje provisional de las aguas lluvias en la Residencial Santa Lucía, lugar donde se realizan obras de mitigación permanente para reducir el riesgo de sus habitantes ante la cárcava de gran magnitud originada en ese lugar.

En mi calidad de Procurador Para la Defensa de los Derechos Humanos, al inicio de mi gestión realicé una verificación in situ y evidencié la situación de riesgo en que se hallaban los habitantes de dicho sector, debido a la Cárcava que amenazaba las viviendas; oportunidad en la que me pronuncié²⁶ en el sentido de que “era urgente el buen funcionamiento de sistema Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, y tomar las medidas para prevenir y reducir los riesgos”, asimismo, advertí que toda medida que se tomara debía ser realizada en el menor tiempo posible.

Al respecto, se tuvo conocimiento que el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, está ejecutando el Proyecto denominado “Construcción de Obras de Protección en la Colonia Santa Lucia, intersección del Final de la Calle Principal y Avenida Santa Lucia, Municipio de Ilopango, Departamento De San Salvador”; para ello tomó a bien implementar un desvío provisional de las aguas que descargan sobre la cárcava, argumentando que dicho proyecto finalizaría el 3 de agosto del corriente año²⁷.

Ante las condiciones de riesgo como la expuesta, y en atención a la obligación del Estado, de garantizar el derecho al disfrute a un nivel de vida posible de manera progresiva, y a la prevención de riesgos, como los ocasionados por eventos naturales, incrementados en su impacto por la actividad humana, resulta imprescindible que las autoridades que conforman el Sistema de Protección Civil y Mitigación de Riesgos adopten medidas urgentes y oportunas para ese fin.

Es preocupante para este Procurador que la época lluviosa apenas inicia, y ya se evidenció la vulnerabilidad que se advirtió en la época lluviosa pasada; y ahora con el agregado del contexto de la Pandemia COVID -19, por lo que es necesario adoptar medidas prontas, oportunas y efectivas, para la protección de la vida y los bienes de las familias afectadas. En consecuencia, con base a las razones expuestas, en cumplimiento del mandato constitucional²⁸ de velar por el respeto y garantía de los derechos humanos, supervisar la actuación de la administración pública frente a las personas y formular conclusiones pública o privadamente, Exhorto:

²⁶ Pronunciamento del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, sobre la situación y las necesidades de atención de las familias afectadas por una cárcava en la Residencial Santa Lucia, municipio de Ilopango, 17 de octubre de 2019.

²⁷ Remisión de informe cárcava Residencial Santa Lucia, Ministerio de Obras Públicas y de Transporte, San Salvador 9 de diciembre de 2019. dmpot-gli-596-2019.

²⁸ 3 Artículo 194 romano I ordinales 1°, 7°, y 11° de la Constitución.

1. Al señor Ministro de Obras Públicas, licenciado Edgar Romeo Rodríguez:
 - a. Realizar el máximo de sus esfuerzos en la creación e implementación de un Plan de Contingencia que permita acelerar las actividades de ejecución del proyecto de mitigación con una solución permanente en la Cárcava de la Residencial Santa Lucía en el municipio de Ilopango, a fin de facilitar el drenaje adecuado y seguro de las aguas lluvias según el diseño en ejecución; y la prevención de riesgos en la vida y bienes los habitantes.
 - b. Que el Plan de Contingencia contemple obras de mitigación provisionales y la creación de un equipo para solventar eventuales inundaciones durante la ejecución del proyecto por la época lluviosa.
2. Al Director General de Protección Civil y Mitigación de Desastres, licenciado Orlando Tejada Castillo, adoptar las medidas necesarias y oportunas a fin de brindar alertas tempranas para la prevención y mitigación de riesgos a los habitantes de la Residencial Santa Lucía y sus alrededores, así como de las distintas comunidades en la zona de San Salvador que se encuentran en similar situación.
3. Al señor Alcalde Municipal de Ilopango, licenciado Adán de Jesús Perdomo, que, desde la Comisión Municipal de Protección Civil y Mitigación de Desastres, brinde el monitoreo oportuno y asistencia necesaria a los habitantes de la zona afectada por la inundación arriba descrita.

Del cumplimiento de lo recomendado, rindan informe las autoridades supra citadas, en un plazo de cinco días hábiles contados a partir de su notificación.

A las comunidades afectadas y al pueblo en general, reitero mi compromiso de mantener un monitoreo constante de la situación de las comunidades vulnerables ante los fenómenos climáticos.

16 de mayo de 2020

2. Alerta roja decretada por Tormenta Amanda

En los últimos días El Salvador ha sido afectado por la presencia de constantes precipitaciones, que debido a su intensidad, en tres días han pasado de Alerta Amarilla a Alerta Roja dado los daños ocasionados con el paso de la tormenta “Amanda” por el territorio salvadoreño.

De acuerdo a la información preliminar brindada por las autoridades de Protección Civil, las fuertes lluvias de la madrugada de este día ocasionaron la muerte de 9 personas, 200 casas inundadas, un total de 100 árboles caídos; en tanto 46 albergues han sido habilitados en los departamentos de San Salvador, La Libertad, Sonsonate y San Vicente, con un total de 1,200 personas albergadas, en su mayoría centros escolares. Por su parte el Alcalde de San Salvador, a través de una conferencia de prensa realizada este día, dio a conocer que en ese municipio un aproximado de 50 viviendas se destruyeron en su totalidad, así como una persona fallecida, informando que todas las casas comunales servirían de albergues; sin embargo, manifestó que ya algunas de ellas servían como centro de contención a raíz de la pandemia COVID-19.

Esta situación es preocupante, dado que actualmente nos encontramos en la fase III de la pandemia del COVID-19, lo que conlleva a un alto nivel de contagio, por lo que, este escenario no es favorecedor para las prácticas de prevención que la población necesita; en tanto, es sumamente necesario adaptar y mejorar las condiciones y atención de los albergues para las personas afectadas, esencialmente prevenir el hacinamiento, dotar de agua y alimentos suficientes para las necesidades primordiales y domésticas, tomando en cuenta los grupos de personas en condición de vulnerabilidad, y asegurar alternativas de resguardo y económicas viables e inmediatas para los afectados que perdieron sus viviendas, así como evaluar las condiciones en que se encuentran las familias en zonas vulnerables.

En este sentido, la coordinación entre los organismos del Sistema Nacional de Protección Civil se vuelve sumamente necesaria para brindar una adecuada y oportuna atención a las situaciones de riesgo a desastres, en la protección de la vida y los bienes de las personas afectadas.

En virtud de lo anterior, exhorto a las autoridades que conforman el Sistema de Protección Civil, a unir sus esfuerzos para la atención de la población salvadoreña, que en el contexto de las fuertes lluvias cuenten con la información necesaria y oportuna sobre la situación climática, y condiciones acordes a su dignidad humana en los centros de albergues, que posibiliten su protección y respeto a derechos y libertades fundamentales.

A la población salvadoreña, hago un llamado a atender las recomendaciones emitidas por las autoridades de Protección Civil, y reitero mi compromiso de velar por el respeto y la garantía de los derechos humanos, a través del monitoreo y gestión inmediata en esta situación climática en que se encuentra el país.

31 de mayo del 2020

3. Los estragos ocasionados con el paso de la tormenta Amanda por el territorio salvadoreño y la actuación de las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres

En los últimos días el departamento de San Salvador nuevamente fue escenario del mayor desastre durante este evento climático, lo cual es un reflejo del deterioro ambiental, en especial del suelo -a causa del crecimiento urbanístico acelerado- que ha generado en los últimos años un grave impacto en la disponibilidad del agua para consumo humano, y a la vez, severas inundaciones por la falta de infiltración de las aguas lluvias, consecuentemente su erosión, riesgo en la vida y seguridad de las personas, pérdidas materiales, daños de infraestructuras y de cultivos.

De acuerdo al sitio oficial de Reporte de Emergencia Climática Amanda, hasta las 20:48 horas del 4-6-2020 el número de fallecidos ascendía a 27 personas y 10 personas continúan desaparecidas, 12,154 personas se encuentran distribuidas en los 269 albergues habilitados en el país, en su mayoría afectadas por las inundaciones, desprendimientos de aludes, entre otros; a esta situación se suman daños en carreteras y viviendas; por lo que quiero externar mis condolencias a los familiares de las víctimas mortales.

El 31 de mayo, en el contexto de la alerta roja decretada por la tormenta Amanda, insté a las autoridades de Protección Civil a adecuar los albergues atendiendo a la prevención en la propagación del contagio por COVID-19, evitando el hacinamiento, dotando de suficiente agua y alimentación adecuada.

A partir de lo anterior, esta Procuraduría ha realizado verificaciones in situ en 87 centros de albergues a nivel nacional, en los que se constató aspectos positivos, entre los que destacan, la presencia y rol del personal de la Policía Nacional Civil y Fuerza Armada, cuerpos de socorro y líderes comunales en las tareas de rescate de las víctimas y evacuación de afectados, la presencia de autoridades municipales y gubernamentales en las zonas vulnerables, la información oportuna de la situación climática y de riesgo a través de los diferentes medios de comunicación.

No obstante, hay aspectos que generan preocupación, debido que en su mayoría, los centros de albergues no reúnen condiciones mínimas de espacio para distanciamiento social, sobrepasando la capacidad de personas para la habitabilidad considerada en la prevención del contagio de COVID-19, algunos ubicados en zonas con alto índice delictivo, no cuentan con espacios privados para duchas, no aptos para el desplazamiento de personas con discapacidad física, dado que muchos funcionan en centros escolares, evidenciando la improvisación observada en la operativización de las medidas gubernamentales.

Es lamentable que dada la gravedad de la situación, aun no se supere la falta de coordinación de las instancias municipales de protección civil y el gobierno central, dado que, en su mayoría las alcaldías asumen la provisión de insumos necesarios para el funcionamiento de los albergues, en especial de los centros instalados por líderes comunales o religiosos; donde en general existe carencia de alimentos y de insumos para el saneamiento e higiene, agua potable, insumos para las necesidades diferenciadas de grupos vulnerables y manejo inadecuado de los desechos; a excepción de los albergues en el departamento de La Libertad, los cuales cuentan con el apoyo directo del gobierno central, municipal, organizaciones no gubernamentales e iglesias.

Cabe recordar que son muchas las necesidades de las personas albergadas, en tanto, debe brindarles condiciones dignas, que permitan garantizar la seguridad, alimentación, vestuario, salud física y mental; a su vez, el respeto a la confidencialidad en la prestación de servicios de salud, en especial la atención psicológica.

En este sentido y de conformidad a las facultades constitucionales de esta Procuraduría de velar por el respeto y garantía de los derechos humanos, asistir a las presuntas víctimas, de supervisar la actuación del Estado frente a las personas y emitir recomendaciones, (artículo 194 romano I ordinales 1°, 3°, 7° y 11 de la Cn) Recomendando:

A la Presidencia de la República, realizar esfuerzos de coordinación con las diferentes Alcaldías Municipales a fin de dotar de insumos necesarios para el adecuado funcionamiento y estancia en condiciones de dignidad a las personas albergadas, a través de alimentación oportuna y adecuada según la edad, colchonetas, entre otros.

Al director del Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, establecer las coordinaciones necesarias con las entidades integrantes de las instancias de protección civil departamental y municipal para que se garanticen medidas e insumos para el saneamiento e higiene, y prevención del contagio de COVID-19, en las que se incluyan mascarillas, jabón, alcohol gel, espacios físicos de aislamiento de casos sospechosos y mecanismos de traslados inmediatos para la atención de la enfermedad en centros hospitalarios.

A su vez, garantizar las condiciones de seguridad y acompañamiento necesario a las personas albergadas durante la fase de retorno a sus comunidades.

A los concejos municipales, garantizar habitabilidad de los centros de albergues en sus municipios, priorizando la unificación familiar, acceso al agua potable y oportuna recolección de los desechos sólidos.

Al señor Ministro de Salud, proveer material y equipo de protección individual al personal que labora en los albergues; a su vez, promover las medidas de prevención constantes en las personas albergadas, a fin de prevenir el contagio de COVID-19.

A la población en general, hago un llamado a atender las recomendaciones de las autoridades de protección civil, en especial cuando éste se trate de su traslado a lugares seguros para sus familias.

5 de junio de 2020

4. Importancia de la firma y ratificación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe tiene su origen en el año 2012, cuando el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas celebró del 20 al 22 de junio en Río de Janeiro, Brasil, la conferencia de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas o conferencia de desarrollo de Naciones sustentables, también conocida

como Río+20; en donde los países de América Latina y el Caribe impulsaron la declaración sobre la aplicación del principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.

En noviembre del año 2014, tras dos años de trabajo para materializar el documento donde se desarrolla la aplicación del principio 10 de la Declaración de Río, mediante la decisión de Santiago, los países signatarios dieron inicio a la fase de la negociación del acuerdo regional, con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) como secretaria técnica. Para ello, crearon un comité de negociación compuesto por 24 países de la región, siendo El Salvador parte del mismo.

El 4 de marzo del año 2018 en Escazú, Costa Rica, luego de nueve reuniones presenciales y seis virtuales, después de cuatro años de negociación, El Salvador participó y dio su voto a favor, para impulsar la adopción del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como acuerdo de Escazú.

Dicho Acuerdo Regional es un instrumento jurídico pionero en materia de protección ambiental, es el primer tratado sobre asuntos ambientales de la región y el primero en el mundo que incluye disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales; su fundamento radica en el principio 10 de la Declaración de Río de 1992, según el cual manifiesta que “el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que disponga las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionar acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre estos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes”.

El Salvador a pesar que fue parte de la comisión de negociación, haber dado el voto favorable para el acuerdo en la ciudad de Escazú, Costa Rica y haber superado la consulta interna requerida con las entidades ministeriales vinculadas al Acuerdo, contando con el recomendable a favor de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, aún no se convierte en país signatario.

El acuerdo de Escazú, requiere de 11 ratificaciones para entrar en vigor, y a la fecha se mantiene abierto a la firma de todos los países de América Latina y el Caribe, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, desde el 27 de septiembre de 2018 al 26 de septiembre de 2020; sin embargo, a treinta días del vencimiento del plazo únicamente se cuenta con 22 países firmantes y nueve han ratificado, por lo que se está a la espera que El Salvador lo firme y ratifique.

Es sumamente importante para El Salvador consolidar un acuerdo regional orientado a reforzar la implementación de los principios de acceso a la información, a la participación pública y a la justicia en asuntos ambientales, reconocidos a escala mundial desde 1992. El Acuerdo de Escazú se caracteriza por observar la relación vinculante del ejercicio de los derechos humanos y el entorno ambiental saludable. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reconoce esta dinámica integral entre el cumplimiento de derechos humanos y su estrecho vínculo con el medio ambiente, planteando la necesidad sobre la responsabilidad de los Estados en la prevención y protección del medio ambiente, además de reconocer al medio ambiente saludable como derecho humano.

Es de recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su visita in loco a El Salvador señaló al Estado Salvadoreño “la necesidad de tener un enfoque de derechos en las políticas y marcos normativos relacionados al agua y al medio ambiente, en particular en contextos de gestión y uso de agua de forma transfronteriza, actividades

de empresas públicas y transnacionales, implementación de tratados de inversión, como en la ejecución y financiamiento de proyectos”, además se identificó el limitado acceso a la información pública, principalmente en temas referidos al medio ambiente, “la CIDH recibió información de distintas organizaciones y medios de comunicación respecto a casos en los que se alegan restricciones en el acceso a la información pública, como una mayor clasificación de información reservada por parte de distintos organismos vinculados a temas de seguridad, ambiente, gastos y acuerdos migratorios” ante ello recomendó al Estado Salvadoreño “ Ratificar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú)”.

Contar con un instrumento jurídico como el Acuerdo de Escazú se vuelve estrictamente necesario para El Salvador, a fin de reforzar derechos a la información, participación, y acceso a la justicia en asuntos ambientales, adicionalmente a la protección de las personas defensoras de derechos humanos; es decir, eliminando brechas existentes que exacerban condiciones de desigualdad e impunidad para la población en general.

En la actualidad, estos derechos se han visto afectados en nuestro país, que de contar con dicho instrumento, ofrecería mecanismos para su protección internacional, y a manera de ejemplo podemos citar la consulta pública en pleno desarrollo de una Pandemia, por la construcción de una represa en el Río Sensunapan, o los daños a la vida, salud y medio ambiente de las comunidades de Sitio del niño del Municipio de San Juan Opico, departamento de La Libertad; a raíz de la Fábrica de Baterías Record de El Salvador, en donde aún no existe una reparación en la víctimas, sin olvidar los diferentes asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, entre otros.

En ese sentido, en mi calidad de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, reitero la necesidad de firmar y ratificar el Acuerdo de Escazú antes del 26 de septiembre del presente año, para que, como Estado Salvadoreño se honre el compromiso internacional adquirido el 4 de marzo de 2018, garantizando de esta manera un entorno seguro y propicio para las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos, particularmente el del medio ambiente; y dar al país una oportunidad para la construcción de la paz tan anhelada.

En razón de lo anterior, sobre la base de las facultades conferidas en el artículo 194 romano I ordinales 1°, 3°, 7°, 10° y 11° de la Constitución de la República exhorto:

- a. Al señor presidente de la República, Nayib Armando Bukele Ortiz, que honre a la brevedad posible el compromiso internacional que como país adquirimos el 4 de marzo de 2018 en la ciudad de Escazú Costa Rica, firmando El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como Acuerdo de Escazú.
- b. A las diputadas y diputados de la Honorable Asamblea Legislativa, que una vez firmado El Acuerdo Regional de Escazú por el señor presidente de la Republica Nayib Armando Bukele Ortiz, lo ratifiquen.

b) Derecho al agua

1. La mala calidad del agua recibida por los habitantes del área metropolitana de San Salvador durante enero de 2020

Desde el pasado 16 de enero, diversas personas residentes del Área Metropolitana de San Salvador, denunciaron a través de la red social Twitter²⁹, que el agua que reciben en sus hogares presenta mal olor, sabor y color.³⁰

²⁹ <https://twitter.com/elsalvadorcom/status/1217896804425109504>

³⁰ <https://twitter.com/elsalvadorcom/status/1218986487447834624>

Por su parte, el presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), arquitecto Frederick Benítez en su cuenta de Twitter admitió la situación, a su vez informó que el mal olor y sabor del agua se debía a la proliferación de algas en el Río Lempa, y que la situación estaba solucionada³¹, animando a su consumo en una entrevista televisiva, sin asumir la mala calidad del agua.

El día de ayer (19/1/2020), la Comisión Nacional de Protección Civil, a través del presidente de esa entidad, Mario Durán,³² admitió que el agua suministrada por ANDA estaba afectada en su potabilidad, anunciando a la vez un plan de contingencia que consiste en proveer agua embotellada y suministro a través de pipas a comunidades y colonias de Santa Tecla, Ciudad Merliot, Apopa, Ilopango, Soyapango y San Martín. La ejecución del plan se ha divulgado a través de las distintas redes sociales, en las que se observa la participación de diversas instituciones para responder a la emergencia.

Pese a las medidas implementadas, la situación no deja de ser preocupante, debido a que las comunidades y colonias afectadas en algunos casos, reciben de manera racionada el suministro del agua potable; aunado a ello, a la fecha no se tiene información clara sobre las dificultades que tiene ANDA para potabilizar el agua, de cómo y en cuánto tiempo se estima la solución, y de la prevención sobre uso del agua evidentemente contaminada.

Es lamentable e irresponsable, que en estas circunstancias los funcionarios encargados de garantizar la calidad y accesibilidad del agua promuevan su consumo, sin tomar en cuenta la importancia de la salubridad para la protección de la salud de la población salvadoreña. En este sentido, resulta imprescindible que los esfuerzos por garantizar el acceso al agua se retomen de manera urgente y diligentemente, con criterios de disponibilidad y calidad para el uso de consumo humano y doméstico, y que responda a una adecuada supervisión por parte de los entes contralores, a manera de garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de los habitantes del Área Metropolitana de San Salvador.

En este sentido, es preciso traer a cuenta que el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales en la Observación General No. 15 sobre Derecho al Agua, ha interpretado ampliamente las implicaciones a los derechos a un nivel de vida adecuado, y al disfrute del más alto nivel de salud física y mental³³, Señalando que:

“10. El derecho al agua entraña tanto libertades como derechos. Las libertades son el derecho a mantener el acceso a un suministro de agua necesario para ejercer el derecho al agua y el derecho a no ser objeto de injerencias, como por ejemplo, a no sufrir cortes arbitrarios del suministro o a la no contaminación de los recursos hídricos. En cambio, los derechos comprenden el derecho a un sistema de abastecimiento y gestión del agua que ofrezca a la población iguales oportunidades de disfrutar del derecho al agua.

11. Los elementos del derecho al agua deben ser adecuados a la dignidad, la vida y la salud humanas, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 11 y el artículo 12. Lo adecuado del agua no debe interpretarse de forma restrictiva, simplemente en relación con cantidades volumétricas y tecnologías. El agua debe tratarse como un bien social y cultural, y no fundamentalmente como un bien económico. El modo en que se ejerza el derecho al agua también debe ser sostenible, de manera que este derecho pueda ser ejercido por las generaciones actuales y futuras [xi].

12. En tanto lo que resulta adecuado para el ejercicio del derecho al agua puede variar en función de distintas condiciones, los siguientes factores se aplican en cualquier circunstancia:

a) La disponibilidad. El abastecimiento de agua de cada persona debe ser continuo y suficiente para los usos personales y domésticos. Esos usos comprenden normalmente el consumo, el saneamiento, la colada, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica. La cantidad de agua disponible para cada persona debería corresponder a las directrices de la

³¹ <https://twitter.com/FredckBenitez/status/1217951973762269185>

³² <https://twitter.com/GobernacionSV/status/1218666410819444736>

³³ Artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Organización Mundial de la Salud (OMS). También es posible que algunos individuos y grupos necesiten recursos de agua adicionales en razón de la salud, el clima y las condiciones de trabajo.

b) La calidad. El agua necesaria para cada uso personal o doméstico debe ser salubre, y por lo tanto, no ha de contener microorganismos o sustancias químicas o radiactivas que puedan constituir una amenaza para la salud de las personas. Además, el agua debería tener un color, un olor y un sabor aceptables para cada uso personal o doméstico. (...)”

Consecuentemente, ésta Procuraduría ha señalado en reiteradas ocasiones que la progresiva degradación ambiental ha provocado escasez y contaminación en las aguas superficiales y subterráneas, y advirtió a través del Informe sobre el Estado de los Bienes Hídricos en El Salvador, emitido en 2016 que esa situación *afecta las condiciones de salud, de la población, la producción de alimentos, la disponibilidad de agua, la preservación de los ecosistemas y medios acuáticos, y el incremento en los costos de operación de los sistemas de depuración para el abastecimiento de la población.*

La situación actual refleja con claridad la urgente necesidad de una adecuada supervisión sobre la disponibilidad y calidad del agua para los usos de consumo humanos y doméstico, y de un marco regulatorio que garantice el derecho humano al agua para las presentes y futuras generaciones, en las que la protección de las cuencas, la priorización en el uso para consumo humano y doméstico, la rectoría pública y la participación ciudadana sean claramente determinadas.

En consecuencia, con base a las razones expuestas, en cumplimiento³⁴ del mandato constitucional de velar por el respeto y garantía de los derechos humanos, supervisar la actuación de la administración pública frente a las personas y formular conclusiones pública o privadamente, Exhorto:

1. Al presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, arquitecto Frederick Benítez, a realizar una investigación exhaustiva respecto a los controles de calidad en las plantas potabilizadoras que provee del agua a los residentes del Área Metropolitana de San Salvador, y asegurar el debido mantenimiento de las mismas, a fin de prevenir el suministro de aguas contaminadas a la población.
2. A la Ministra de Salud Pública y Asistencia Social, la Doctora Ana Orellana Bendek, que de manera urgente realice los análisis necesarios para determinar la calidad del agua que se suministra a las personas residentes del Área Metropolitana de San Salvador, y dé a conocer los resultados a fin de prevenir afectaciones a la salud de esta población.
3. Al Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Arquitecto Fernando López Larreynaga, que de conformidad a sus atribuciones legales, adopte las medidas necesarias para supervisar las condiciones de las cuencas hidrográficas que abastecen el Área Metropolitana de San Salvador, debiendo realizar las acciones necesarias en aras de prevenir afectaciones al medio ambiente y a la salud de las personas.
4. A la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa, reitero el llamado que desde una década esta Procuraduría ha realizado a esa Comisión, a qué de manera urgente inicie la discusión de la Ley General de Aguas, y en el proceso, crear un espacio técnico para la participación de diferentes sectores de la población.

A la población salvadoreña, reitero mi compromiso en la defensa de los derechos humanos, y al monitoreo constante ante la problemática del agua que agobia al pueblo salvadoreño.

20 de enero de 2020

³⁴ Artículo 194 romano I ordinales 1°, 7°, y 11° de la Constitución.

2. Conmemoración del Día Mundial del Agua

En el año 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció formalmente el *derecho humano al agua y al saneamiento*, en razón de la protección y realización de los derechos humanos. Después de 10 años, en una fecha en que se conmemora el Día Mundial del Agua, al cual la ONU ha incluido en el tema de *Agua y Cambio climático*, con la finalidad de generar conciencia en la necesidad de planificación en torno al agua, y al saneamiento sostenible con la participación activa de todos los sectores para hacer frente a los efectos del cambio climático.

El Salvador, lleva más de una década a la espera de una normativa que garantice el ejercicio a este derecho. En el año 2012, en El Salvador se promovió una reforma constitucional para que se reconociera como derecho humano el agua y alimentación, de manera que, el 2 de abril de ese año, la Asamblea Legislativa logró acuerdo para la reforma del artículo 69 de la Constitución, a fin de incorporar en su texto el reconocimiento del agua y la alimentación adecuada como derechos humanos, la cual debió ser ratificada en la legislatura correspondiente al período 2012 a 2015, y no lo hizo.

Ese mismo año, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales presentó una propuesta de Ley General de Agua, la cual se encuentra en estudio desde entonces en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio climático de la Asamblea Legislativa; al igual que otras iniciativas de sectores como Foro del Agua, Asociación de Regantes El Cacao, Grupos Parlamentarios y la Propuesta de Ente Rector de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”.

Pese al tiempo y a los distintos proyectos de Ley de Agua en estudio, la Comisión de Medio Ambiente y Cambio climático no ha logrado acuerdos, por el contrario, en la actual legislatura, lejos de avanzar ha existido un total retroceso, y su discusión se estanca a medida que se valora la integración de la Junta Directiva de la entidad rectora; sobre la cual esta Procuraduría ha sido categórica en que, por ser una autoridad a la que los citados proyectos de ley atribuyen decisiones fundamentales sobre los diferentes usos del agua y de la protección integral de las cuencas, debe integrarse por representantes de instituciones públicas con atribuciones en materia hídrica, que garanticen la gestión integral del recurso hídrico, sin más interés que la transparencia y accesibilidad del agua como un derecho humano.

En este sentido, durante los últimos años la gravedad por la falta de disponibilidad hídrica ha sido más que evidente al considerar la cantidad de ocasiones en que comunidades realizan manifestaciones por el desabastecimiento del vital líquido en el Área Metropolitana de San Salvador; y recientemente por el suministro de agua contaminada por parte de la Administración de Acueductos y Alcantarillados (ANDA); a su vez, en el contexto de fenómenos naturales, lluvias abundantes que generan desastres en pocas horas, o los períodos largos de sequía que diferentes zonas del país han experimentado en los últimos años, generando grandes pérdidas en sus cultivos, afectaciones a la salud, a la vida y a la economía de muchas hogares; que de no atenderse oportuna y adecuadamente pone en riesgo el acceso al agua, a la alimentación, a la salud, y al trabajo, derechos sobre los cuales se centran los compromisos del Estado en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que ofrecen una ruta clara para su protección y ejercicio.³⁵

En la actualidad El Salvador afronta una nueva realidad a partir de la declaratoria de Pandemia que hiciera la OMS por la cantidad de países donde se ha expandido el virus COVID-19³⁶ y para prevenir su propagación se difundió una serie de medidas sanitarias en donde el agua se vuelve estrictamente necesaria; en otras palabras, proteger la salud de la población implica disponer de agua suficiente y de calidad para los servicios de salud y los prestadores del mismo, para quienes deben cumplir con una cuarentena en los centros establecidos, y para la población en general a efecto que se pueda cumplir con las medidas

³⁵ Objetivos de Desarrollo Sostenible, 6 Agua Limpia Saneamiento, 3 Salud y Bienestar, 2 Hambre Cero, 12 Acción por el Clima.

³⁶ Organización Mundial de la Salud, Director Tedros Adhanom Ghebreyesus, calificó de Pandemia el COVID-19, 11 de marzo de 2020.

de higiene recomendadas por las autoridades de salud; sin embargo, las protestas por el desabastecimiento han continuado en comunidades del Área Metropolitana de San Salvador.

Esta coyuntura obliga a ser responsables y solidarios, asumiendo los desafíos frente al cambio climático, pero también, otorgando a la población la garantía de una apremiante regulación del recurso hídrico, que posibilite el ejercicio del derecho humano al agua de las presentes y futuras generaciones.

En consecuencia, atendiendo a mi mandato constitucional y legal de velar por el respeto y garantía de los derechos humanos, de supervisar la actuación de la administración pública frente a las personas, de promover y proponer medidas necesarias para prevenir violaciones a los mismos, así como de formular conclusiones y recomendaciones, de conformidad a lo establecido en el artículo 194 romano I ordinales 1º, 7º, 10º y 11º de la Constitución de la República y artículo 11 ordinales 1º, 7º, 10º y 11º de la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, hago las siguientes recomendaciones:

1. A la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, de la Asamblea Legislativa, que atendiendo a su deber de legislar y adecuar la legislación a los estándares internacionales de los derechos humanos, reitero el llamado a dar continuidad sin dilaciones indebidas a la discusión de la Ley General de Agua, estableciendo acuerdos que favorezcan la aprobación de una normativa que responda al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, los desafíos para una gestión integral del recurso hídrico y el acceso al agua como un derecho humano.
2. Al Presidente de la Administración de Acueductos y Alcantarillados, (ANDA) Arquitecto Frederick Benítez, adoptar las medidas necesarias para mejorar la calidad del agua, y aquellas necesarias para que progresivamente se abastezca de manera regular el servicio a la población.

Que en atención a la presente emergencia por la pandemia del COVI-19, se garantice el suministro de agua potable suficiente y de calidad a las familias que la reciben racionada, en los centros de albergues y de salud, que les permitan condiciones y prácticas de higiene.

1. Al Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, arquitecto Fernando Lopez Larreynaga, mantener un monitoreo constante respecto a la calidad del agua en las cuencas hidrográficas; a su vez, realizar acciones encaminadas a prevenir el deterioro ambiental, supervisando las condiciones en que realizan las descargas de las aguas residuales e industriales a los cuerpos receptores.

De las acciones realizadas para el cumplimiento de las recomendaciones emitidas, rindan informe las autoridades arriba descritas en un plazo de diez días contados a partir de la notificación del presente pronunciamiento.

22 de marzo de 2020

c) Derechos de las mujeres

1. El feminicidio de una mujer embarazada, en San Juan Opico, departamento de la Libertad

En cumplimiento de las atribuciones conferidas en el artículo 194 romano 1 ordinal 1º, 7º, 10º y 11º de la Constitución de la República de El Salvador, externa que:

Este día se tuvo conocimiento, a través del periódico digital *elsalvador.com*³⁷ que una mujer con siete meses de embarazo, identificada como Vanessa Galdámez Ramírez, de veinticinco años de edad, falleció a raíz de un ataque perpetrado por su esposo, Juan Carlos García

³⁷ Ver: <https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/la-discusion-que-termino-en-el-asesinato-de-vanessa-una-joven-que-tenia-siete-meses-de-embarazo/655498/2019/>

Alemán, de veintiocho años, quien la golpeó después de una discusión entre la pareja, en una calle de la colonia Jardines en el municipio de San Juan Opico, departamento de La Libertad. Se reportó que la Policía Nacional Civil capturó al agresor, luego de que este último intentó escapar. En la publicación, no se detalló el estado de salud de la persona no nacida.

Sobre lo anterior, lamento tener que, nuevamente en una misma semana³⁸, expresar mi repudio y enérgica condena contra este hecho atroz que, una vez más, evidencia el odio y menosprecio hacia las mujeres y sus grupos familiares. Es particularmente reprochable que se atentara no solo contra la vida de la señora Galdámez Ramírez, sino también de la persona que estaba por nacer, demostrando así que la misoginia alcanza incluso a aquellos seres más indefensos de nuestra sociedad.

Hechos como el sucedido confirman, tristemente, que las mujeres no están seguras en ninguna parte. Y es que, desde el año 2018, se reportó que el domicilio particular donde residen las mujeres, es el lugar donde más ocurren los hechos calificados como delitos en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia y Discriminación contra las Mujeres (LEIV), ya que, en el año 2017, representó el 46.2%³⁹ de sitios donde sucedieron estos ilícitos. Lo anterior refleja -paradójicamente- que la residencia, el sitio que debería simbolizar resguardo y confianza para las mujeres, es el espacio más peligroso para ellas.

En atención a lo anterior, y desde el enfoque de interseccionalidad, es imperioso que el Estado adopte las medidas necesarias para garantizar los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación, y a la seguridad personal de ellas y su entorno, especialmente considerando su situación de embarazo como una condición que las coloca en una posición de mayor vulnerabilidad, que conlleva a que no solo debe resguardarse su vida, sino también la de la persona que está por nacer.

Desde la perspectiva de la primera infancia, ésta comprende el periodo de vida de niñas y niños que transcurre desde su gestación hasta cumplir los nueve años⁴⁰. En ese sentido, también se vuelve fundamental que las autoridades correspondientes se involucren activamente en garantizar y adecuar la normativa nacional para atender a las necesidades de la niñez en esa fase; principalmente, para proteger a las personas en etapa de gestación, y prevenir que, hechos como el que ahora nos ocupan, vuelvan a ocurrir.

Por lo tanto, en mi calidad de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, de conformidad a la normativa constitucional referida, y de la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, insto:

A la señora Ministra de Salud, doctora Ana Orellana Bendek, a que gire las directrices pertinentes para garantizar la pronta atención, de calidad y calidez, para la persona recién nacida, en caso de sobrevivencia, retomando para ello el interés superior de la niñez. Asimismo, incito a que las personas familiares reciban atención psicológica, para garantizar su bienestar mental.

A la señoras Procuradora General de la República, mágister Miriam Geraldine Aldana Revelo, y Directora Ejecutiva Interina del Consejo Nacional de la Niñez (CONNA), licenciada Yúdice Abigail Sánchez, a que adopten las medidas que de acuerdo a sus competencias correspondan para garantizar el interés superior de la niñez, particularmente en cuanto al ejercicio de su representación legal, cuidado personal, y resguardo.

A los señores Fiscal General de la República, doctor Raúl Ernesto Melara Morán, y Director General de la Policía Nacional Civil, Comisionado Mauricio Antonio Arriaza Chicas, a que investiguen este hecho a profundidad, garantizando la debida diligencia, el interés superior

³⁸ Pronunciamento del señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, ante la muerte violenta de una adolescente encontrada en Santo Tomás, de fecha 29 de octubre de 2019. Disponible en: <https://twitter.com/PDDHEISalvador/status/1189256472896720898?s=20>

³⁹ Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y Dirección General de Estadística y Censos. Informe sobre Hechos de Violencia contra las Mujeres. El Salvador, 2016 y 2017. (2018). pág. 168. Disponible en: <http://aplicaciones.digestyc.gob.sv/observatorio.genero/docs/Informe%20LEIV%202016-2017.pdf>

⁴⁰ Ver: Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA). Definición y rango etario para primera infancia en El Salvador. (2017). Pág. 25. Disponible en: <https://www.unicef.org/elsalvador/informes/definición-y-rango-etario-para-primera-infancia-en-el-salvador>

de la niñez, y el enfoque de género desde la perspectiva interseccional. Además, les exhorto a que adopten las medidas para garantizar la seguridad, reparación integral, y derecho a la verdad de las personas familiares de las víctimas, así como la reserva de su identidad, para evitar futuras transgresiones a sus derechos humanos.

Manifiesto mis condolencias a la familia afectada, sintiendo que este día que, tradicionalmente la población dedica para recordar a las personas que ya no nos acompañan terrenalmente, una familia, y su hija o hijo tengan que despedirse de un ser querido, y que es de vital importancia para la sociedad, puesto que no solo perdemos a una hija, madre, y esposa, sino también a una Mujer Salvadoreña valiosa.

Reitero mi indignación e intolerancia hacia la violencia contra las mujeres y la niñez, particularmente en este mes en que se conmemora el Día Internacional y Nacional de la No Violencia contra las Mujeres, comprometiéndome a mantenerme vigilante del actuar de las instituciones pertinentes, a efecto de garantizar el respeto irrestricto a los Derechos Humanos.

02 de noviembre de 2019

2. Día Nacional e Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer

La violencia contra las mujeres y niñas basada en género es un fenómeno que aqueja a nuestra sociedad y que constituye una grave transgresión a sus derechos humanos. En ocasión del Día Nacional e Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, me solidarizo con aquellas mujeres valientes que rompieron el ciclo, así como con aquellas que aún se encuentran inmersas en él. Por lo tanto, quiero referirme puntualmente a los logros y desafíos que afrontan las féminas que enfrentan hechos de violencia.

Las relaciones de poder entre mujeres y hombres son la causa principal de la violencia de género. En tal sentido, existen ciertos patrones de conducta que, lastimosamente, tienden a normalizarse en nuestra sociedad y se reproducen de generación en generación. La modificación de estos patrones es, sin duda, uno de los principales retos para erradicar la violencia. Para ello, es necesario el reconocimiento de las mujeres como un grupo en condición de vulnerabilidad considerando las desigualdades y atropellos que históricamente las rodea como la captura y el posterior asesinato de la activista Dominicana María Teresa Mirabal y sus dos hermanas Patria y Minerva, en Santo Domingo, precisamente un 25 de noviembre de 1960⁴¹.

En mi calidad de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos en Funciones, no puedo hacer caso omiso a los altos índices de feminicidios en el país que, hasta el quince de este mes y año, según datos del Instituto de Medicina Legal son 192. Es preocupante que, la mayoría de estos hechos hayan sido cometidos con manifestaciones de odio, rechazo y menosprecio hacia las víctimas, revelando su contenido misógino. Lamento, además, que muchos de estos delitos fueran precedidos por otros hechos de maltrato contra las mujeres, evidenciando que la violencia feminicida es la forma extrema de atentar contra su integridad y vida.

En materia de acceso a la justicia, debo reconocer el gran avance que tenemos como país al contar con una jurisdicción especializada para castigar aquellos hechos constitutivos de violencia de género. Sin embargo, también debo reconocer que aún existen obstáculos que impiden que las víctimas encuentren justicia y reparación. Entre esos obstáculos, en algunas instituciones del Estado, se observan estereotipos de género que se manifiestan a través de la atención que reciben las víctimas teniendo como resultado desacreditar la versión de las sobrevivientes y restarles importancia. La forma de vestir, las decisiones sobre el ejercicio de su sexualidad y la permanencia de las víctimas en los ciclos de violencia que afrontan, aún son factores que se toman en cuenta para brindar o denegar la debida atención y judicialización de sus denuncias, quedando algunos casos en impunidad.

⁴¹<https://www.lasinterferencias.com/2015/11/15/historia-del-25-de-noviembre-de-un-acto-de-terrorismo-de-estado-a-simbolo-de-la-violencia-contra-la-mujer>. Datos obtenidos el portal de Transparencia de la Corte Suprema de Justicia

La falta del enfoque interseccional en la atención y tramitación de denuncias de violencia en contra de las mujeres y niñas también constituye un valladar significativo, toda vez que las instituciones públicas sigan excluyendo las diferentes formas de discriminación que pueden enfrentar las mujeres en razón de la discapacidad, VIH, condición de pobreza, privación de libertad, embarazo, ejercicio en diferentes profesiones: periodistas, políticas, policías. Lo anterior impide que se dé a las víctimas una atención especializada que considere todos los contextos que rodeen su situación particular, a efecto de que se aborde los casos desde una perspectiva integral, que se retome cada una de esas afectaciones y se adopten medidas específicas.

Es importante destacar que la violencia basada en género no solo genera secuelas a nivel físico, sino también a nivel psicológico, las cuales se agravan con la falta de atención empática y de calidad por parte de los funcionarios quienes lejos de ayudar y reconocer a las víctimas como tales, las victimizan en cada etapa de la denuncia. Aunado a ello, la sociedad en general desafortunadamente, crea una cultura basada en culpar a la víctima y justificar la conducta del agresor. De lo anterior se desprende, a nivel psicosocial, que el impacto ocasionado por la violencia de género es una problemática que debe abordarse desde todos los sectores de la sociedad. Es necesario proporcionar a las mujeres agredidas un adecuado tratamiento psicológico para romper el silencio, reconocerse como víctimas, dotarles de mecanismos de afrontamiento adecuados, a través de los cuales puedan oportunamente exigir sus derechos. En ese sentido, considero importante la adopción, por parte de las instituciones públicas pertinentes, las medidas necesarias para garantizar la integridad psicológica y emocional de las víctimas, atendiendo a sus especiales condiciones de vulnerabilidad.

Este año, ONU Mujeres tiene como tema del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, “Pinta el mundo de naranja: Generación Igualdad condena la violación”, mismo que busca erradicar la “cultura” de la violación, concienciar sobre la importancia del consentimiento de las mujeres en el ámbito de la sexualidad y su reconocimiento como uno de los principales retos en la prevención y la erradicación de la violación y el acoso sexual. Desde esa perspectiva, es imperioso poner de relieve que la violencia sexual fue el tercer tipo de violencia al que más se enfrentaron las mujeres en 2018, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Datos, Estadísticas e Información de Violencia contra las Mujeres⁴².

La violencia sexual constituye una de las prácticas que perpetúan las históricas relaciones de poder entre mujeres y hombres. En la generalidad de casos, partiendo de la cultura patriarcal inminente en nuestra sociedad, la violación suele ser producto de tratar a la mujer como objeto que pueda considerarse pertenencia de alguien, en estos casos, del agresor. En atención a ello, es necesario que todos los sectores, como bien se hace desde las organizaciones de la sociedad civil, y de cada vez más instituciones gubernamentales, trabajen en la deconstrucción de la masculinidad hegemónica. La promoción y difusión del respeto hacia las diferencias entre mujeres y hombres es una medida de imperiosa necesidad, puesto que involucrará a los hombres en la disminución y posterior erradicación de la misoginia y el machismo y la formulación de un nuevo concepto de cara al respeto a la igualdad en derechos de género.

Por lo consiguiente, insto a todas las instituciones públicas, a los funcionarios, a las magistraturas de todos los tribunales del país y a la sociedad civil a promover una nueva cultura de respeto, que permita reconocer las diferencias entre mujeres y hombres e impulsen imágenes, roles y conductas positiva de y hacia las mujeres. Igualmente, exhorto a los funcionarios a adoptar las medidas necesarias para una debida atención, asistencia, sanción y reparación de los hechos constitutivos de violencia de género, quienes también deberán respetar la versión de los hechos que se les exponga sin cuestionamientos, así como la confidencialidad de su relato.

Reafirmo mi compromiso, desde la institución que represento, en cumplimiento del mandato constitucional conferido al señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, licenciado José Apolonio Tobar Serrano, con el objetivo de velar por el respeto

⁴² Véase: pág. 12 http://aplicaciones.digestyc.gob.sv/observatorio.genero/docs/Hechos_de_Violencia_contra_las_Mujeres_2018_VF.pdf

irrestricto al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación, que aborde la problemática de la violencia de género desde una perspectiva integral e interseccional. Condeno todo tipo y modalidad de violencia contra las mujeres, particularmente cuando quienes la enfrentan son grupos femeninos vulnerables. En ese sentido, hago un llamado a la sociedad para que nos unamos, mujeres y hombres, en la batalla para erradicar la violencia. Me solidarizo con las víctimas, de manera especial con aquellas que tristemente ya no nos acompañan, por haber sido asesinadas por razones de género.

En este día, primordialmente, reconozco la labor de las organizaciones de mujeres que día a día apoyan a las víctimas y se pronuncian en contra de los diferentes abusos cometidos por los agresores y el sistema de justicia. Les aliento a que no abandonen esa lucha y a que promovamos juntos una sociedad pacífica e inclusiva.

Estoy convencido de que, unificando esfuerzos, podremos erradicar la violencia contra las mujeres y niñas, para que las nuevas generaciones puedan vivir sin estereotipos de género y misoginia, concentrando nuestra energía en lograr un país en el que salir a la calle no sea cuestión de valentía sino de libertad.

25 de noviembre de 2019

3. Día Internacional de las Mujeres Defensoras de Derechos Humanos

Propiciar condiciones de dignidad y equidad para todas las personas; enfrentar la injusticia a través de la denuncia de los hechos y de sus responsables; formar, asesorar, asistir y acompañar a las víctimas; son solo algunas de las trascendentales labores que día a día realizan las defensoras de derechos humanos.

Su valiente e incansable trabajo en medio de una sociedad violenta y discriminatoria provoca que frecuentemente enfrenten calumnias, injurias, expresiones difamatorias con temerario desprecio a la verdad, amenazas, intimidación, agresiones directas, restricciones a la libertad, ataques contra la integridad personal, e incluso tortura y atentados contra la vida.

Causa profunda preocupación e indignación la persistente impunidad en la que quedan la mayor parte de las violaciones a derechos como la vida, la libertad, la seguridad personal, la integridad psicológica y física, la intimidad, la libertad de opinión y de expresión, de asociación y de reunión pacífica, de las defensoras de los derechos humanos.

Pese a ello, con firmeza y vehemencia alzan su voz contra las injusticias, reivindicando espacios y derechos que naturalmente les corresponden, y transformando progresivamente una sociedad de amplia desigualdad estructural, sistemática e histórica.

En tal sentido, y en el marco de este 29 de noviembre, Día Internacional de las Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, con base en las atribuciones expresadas en el artículo 194 romano I, ordinales 1°, 10° y 11° de la Constitución de la República y artículo 11 ordinal 11° de la ley que rige a esta Institución, en mi calidad de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos en funciones:

1. Expreso mi más amplio reconocimiento a la importante labor que las defensoras de derechos humanos individual o colectivamente desarrollan.
2. Reitero la responsabilidad que el Estado de El Salvador tiene de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, particularmente cuando las personas afectadas pertenezcan a grupos en condición de vulnerabilidad.
3. Destaco la necesidad de legislar para el reconocimiento de la labor de personas defensoras de derechos humanos y para elevar acciones de protección y garantía de sus derechos; y, de manera particular, para las mujeres de todas edades, ello de conformidad con las obligaciones y estándares internacionales como la Resolución de la Asamblea General de la ONU sobre Protección de las Defensoras de los Derechos Humanos y las Personas Defensoras de los Derechos de la Mujer, entre otros.

4. Recomiendo al Gabinete de Seguridad del Órgano Ejecutivo, elevar acciones de prevención y protección integral a favor de las defensoras de derechos humanos, mismas que deberán implementarse en coordinación con ellas, así como a través del diálogo abierto.
5. Recomiendo a todas las instituciones estatales la incorporación de la perspectiva de género, la igualdad, la no discriminación y la tolerancia cero hacia la violencia de género en todos sus protocolos, acciones y procesos organizativos.

Reafirmo mi compromiso de velar por el respeto irrestricto a los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación, acceso a la justicia, además del derecho a defender derechos. Como defensor de derechos humanos, no puedo ser ajeno a las necesidades que este grupo poblacional tiene, ni a las transgresiones que enfrentan al ejercer tan importante labor.

Externo mi saludo solidario con los altos ideales que compartimos y promovemos las mujeres defensoras de derechos humanos y la institución que ahora represento. Reitero nuestra voluntad para el fortalecimiento de estas importantes alianzas en la consecución de nuestros objetivos comunes.

29 de noviembre de 2019

4. Foro “Impacto Psicosocial de la Violencia de Género en las Mujeres y su Entorno”

Desde la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, se vela por el estricto cumplimiento del respeto a los derechos de las mujeres, en todas sus vertientes, a una vida libre de violencia y discriminación, al acceso a la justicia, la garantía de la debida diligencia, y el derecho a recibir una atención integral a sus quejas.

Asimismo, se realizan importantes esfuerzos para salvaguardar y garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos de las mujeres salvadoreñas, mediante acciones de protección a nivel nacional, con mayor ahínco ante presuntas vulneraciones al derecho a la vida, integridad personal, y libertad sexual de mujeres salvadoreñas.

Por lo anterior, y en ocasión del *Día Nacional e Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres*, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, licenciado José Apolonio Tobar Serrano, presentó el *“Foro Impacto Psicosocial de la Violencia de Género en las Mujeres y su Entorno”*.

Con la realización de dicho Foro se pretende evidenciar manifestaciones de los perjuicios sufridos por las mujeres víctimas de violencia, y demostrar que las políticas públicas no sólo deben encaminarse a solucionar la violencia como tal, sino también a poner un énfasis en la salud mental de las mujeres afectadas.

El desmontaje de los tabúes y estereotipos sobre la salud mental es fundamental para que nuestra sociedad alcance el desarrollo pleno. Incluir el enfoque psicosocial en la atención de víctimas y en la resolución de sus casos concretos, representa una necesidad que, desde la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos, debe incorporarse a las actuaciones estatales.

Finalmente, el titular de la PDDH reafirmó su compromiso de velar por el respeto y garantía de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación, acceso a la justicia, y reparación integral; e invitó a todos los sectores de la sociedad a que se sumen a esta labor, para ofrecerles a las nuevas generaciones un país inclusivo e igualitario, en el que las niñas y mujeres puedan alcanzar su pleno potencial en igualdad de condiciones que sus pares hombres.

3 de diciembre de 2019

5. Femicidio agravado de la señora María Apolonia López Zelaya y el femicidio en grado de tentativa de su hija, en el cantón Hualama del municipio de Chapeltique, departamento de San Miguel

En el marco de la conmemoración del Día Nacional e Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, cuyo lema adoptado por la Organización de las Naciones Unidas es “Pinta el mundo de naranja: Generación Igualdad condena la violación”, que promueve erradicar la violencia de género, la victimización secundaria de las víctimas, su culpabilización y promover sociedades inclusivas, con enfoque de género, y en virtud que esta campaña se une a los 16 días de activismo posteriores al 25 de noviembre.

En mi calidad de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, externo mi indignación, condena, y repudio ante el femicidio de la señora **María Apolonia López Zelaya** y el femicidio en grado de tentativa de su hija, ocurrido el día jueves 4 del presente mes y año, en el Cantón Hualama del municipio de Chapeltique, departamento de San Miguel, hechos presuntamente cometidos por el compañero de vida de una de las víctimas; por lo anterior y de acuerdo a mi mandato constitucional, instruí la verificación inmediata y el acompañamiento institucional a las víctimas de este lamentable acontecimiento, a efecto de garantizar el derecho a la justicia, la atención integral; el derecho a la vida e integridad personal, de la persona sobreviviente y la de su núcleo familiar, así como la activación de los mecanismos para su protección; acciones de las cuales me mantendré vigilante, sobre los resultados obtenidos por cada una de las instancias estatales activadas y que de acuerdo a sus mandatos establecidos, se encuentran en la obligación de proporcionar una atención, oportuna, inmediata, de calidad y calidez para las víctimas.

Como defensor del pueblo, debo reiterar y lamentar los hechos de violencia suscitados en este caso en particular, que enluta a una familia salvadoreña más y que demuestra que aún en compañía de la persona que representa protección, como es la figura materna, las mujeres continúen en situación de indefensión y vulnerabilidad, lo cual las expone a esta forma extrema de violencia contra ellas.

Me preocupa seguir observando el patrón que la persona agresora, siga siendo alguien cercano a las víctimas, y considerando que el femicidio es la expresión última del ciclo de la violencia, existe la posibilidad que ambas hallan enfrentado hechos de violencia previo a este suceso, por lo que es importante el involucramiento oportuno de la familia, la sociedad, y las instituciones encargadas de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, para coadyuvar a evitar desenlaces como el que motiva este pronunciamiento.

Por lo tanto, con base en las atribuciones expresadas en el artículo 194 romano I, ordinales 1°, 3°, 7° y 11° de la Constitución de la República, en mi calidad de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, hago un llamado a las siguientes autoridades:

1. Al señor Fiscal General de la República, doctor Raúl Ernesto Melara Morán, para que garantice la efectividad del régimen de protección para la víctima sobreviviente y para todas aquellas personas de su núcleo familiar que se consideren víctimas en el hecho ocurrido, debiendo tomar en cuenta el estado emocional y de salud de la persona sobreviviente, así como la situación familiar de la misma.

Asimismo, asegure los mecanismos de protección para las víctimas, garantice investigaciones objetivas apegadas a los instrumentos nacionales e internacionales de protección a los derechos de las mujeres, en las que se cumpla la garantía de la debida diligencia, con enfoque de género.

2. Al señor Director de la Policía Nacional Civil, comisionado Mauricio Arriaza Chicas, a efecto que instruya al personal encargado de la investigación, ordenada por la Fiscalía General de República, a ejecutar la misma con celo y diligencia oportuna, lo cual permita obtener los resultados objetivos de la investigación en el menor tiempo posible y se logre la detención del o los posibles responsables de estos feminidicidios.

3. A la señora Directora Ejecutiva del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, ISDEMU, Gilda Vivian Parducci Alvarenga, para que, en cumplimiento del Plan de Acción de la Política Nacional para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 2016 -2021, garantice en el ámbito urbano y rural, campañas y programas de sensibilización a nivel nacional para la población, y programas de reeducación para hombres agresores, a efecto de prevenir que, hechos como el antes citado se vuelvan una práctica recurrente; asimismo, para promover la cultura de la denuncia ante cualquier hecho de violencia que atente contra la integridad física, psicológica y emocional de las mujeres.

Finalmente, hago públicas mis condolencias a la familia de las mujeres víctima, a quien reitero mi firme compromiso de mantenerme vigilante para evitar la impunidad y velar por que se respete su derecho a la justicia.

6 de diciembre de 2019

6. Hechos de Violencia Contra la Mujer y Feminicidios ocurridos en los primeros quince días del mes de enero de 2020

El dos de enero del año dos mil veinte, se tuvo conocimiento de la desaparición y posterior Feminicidio Agravado de la señora Vilma Yessenia Jacobo Vásquez, en la Finca El Milagro, ubicada en el cantón Valle la Puerta del municipio de Tacuba departamento de Ahuachapán, presuntamente cometido por su compañero de vida. Ante lo cual en el ejercicio de mi mandato constitucional de supervisar la Administración Pública, velar por el respeto de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación, y el derecho acceso a la justicia efectiva, así como la aplicación del Protocolo de Acción Urgente y Estrategia de Búsqueda, por medio de la Delegada Departamental de Ahuachapán, giré las comunicaciones oficiales a las autoridades respectivas de la Policía Nacional Civil y Fiscalía General de la República, a efecto de garantizar los derechos fundamentales de las víctimas y sus familiares.

En este mismo contexto el seis de enero de este mismo año, a través de redes sociales, se tuvo conocimiento de la violencia física de la que fue sujeta una señora en el departamento de San Vicente, en presencia de sus hijos menores de edad, presuntamente por su compañero de vida; por lo que en cumplimiento de mi mandato constitucional, giré directrices a la Delegada Departamental de San Vicente, a efecto de mantener la vigilancia de la aplicación de la Ley Especial para una vida Libre de Violencia para las Mujeres, por parte de las autoridades de la Policía Nacional Civil y Fiscalía General de la República, quienes tienen a cargo velar por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y consecuente investigación de hechos delictivos.

En fecha diez y once de enero de los corrientes, de igual manera se tuvo conocimiento de los Feminicidios de la señora María Haydee Hernández junto a su hija Dania Esmeralda; y el de la adolescente J. B. Rivera Maldonado (1), quien fue privada de libertad y luego asesinada; respectivamente. Hechos ante los cuales en el ejercicio de mi mandato constitucional, en sede central de esta Institución y en la Delegación Departamental de Cuscatlán, se realizan las acciones de verificación del actuar Fiscal y Policial.

Por lo antes expuesto en mi calidad de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos este día externo mi indignación, condena, y repudio, que enlutan a las familias salvadoreñas y confirman la situación de indefensión de las mujeres, quienes están expuestas a esta forma extrema de violencia.

Ante tan lamentables hechos, insto a la sociedad en general a activar a Policía Nacional Civil, ante todo hecho de violencia contra las mujeres, y al involucramiento oportuno de las instituciones encargadas de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

En estricto cumplimiento de la garantía de protección de la vida privada de los niños y niñas, contemplado en los artículos 16 de la Convención sobre los Derechos del Niño y 46 de la

Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, en el presente pronunciamiento esta Procuraduría identificará a la joven, únicamente con las primeras letras de sus nombres y sus apellidos.

Por lo tanto, con base en las atribuciones expresadas en el artículo 194, romano I, ordinales 1°, 3°, 7° y 11° de la Constitución de la República, en mi calidad de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, hago un llamado a las siguientes autoridades:

1. Al Señor Fiscal General de la República, doctor Raúl Ernesto Melara Morán, para que en aplicación de la Política de Persecución Penal en Materia de Violencia contra las Mujeres, garantice investigaciones objetivas, apegadas a la legalidad, en las que se evidencie la garantía de la debida diligencia, con enfoque de género y en cumplimiento de los compromisos internacionales sobre violencia contra las mujeres en todas las etapas de su vida.
2. Al Señor Director de la Policía Nacional Civil, Comisionado Mauricio Arriaza Chicas, para que dentro del Plan de Control Territorial, realice acciones de prevención frente a la violencia contra las mujeres, garantice su activación oportuna ante todo aviso de afectaciones a derechos humanos, especialmente cuando se trate de mujeres en todas las etapas de su vida, y coordine con las demás instancias del Estado a fin de proveer a la ciudadanía de todos los recursos dispuestos en materia de seguridad.

Por último externo mis condolencias y solidaridad a la familia de las mujeres y adolescente víctimas, a quienes reitero mi firme compromiso constitucional de velar por el respeto del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación, y el derecho de acceso a la justicia efectiva.

15 de enero de 2020

8. Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia

El 22 de diciembre de 2015 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) decidió proclamar el 11 de febrero de cada año Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia⁴³ con el fin de lograr el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia, la tecnología y la innovación, así como para lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas de todas las edades.

Este año, el tema elegido por Naciones Unidas para conmemorar esta fecha es **“Más diversidad, mejor ciencia”**, centrándose en esfuerzos no sólo para inspirar y promover la participación de las mujeres y las niñas en la ciencia, sino también para eliminar los obstáculos a los que éstas se enfrentan para desenvolverse en dicha área.

Tal y como lo ha sostenido el Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, “para estar a la altura de los desafíos del siglo XXI, necesitamos aprovechar todo nuestro potencial. Ese esfuerzo exige desmontar los estereotipos de género. En este Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, hemos de asumir el compromiso de poner fin al desequilibrio de género en esta disciplina.”

La ciencia y la igualdad de género son fundamentales para el desarrollo sostenible. Sin embargo, en la actualidad menos del 30 por ciento de los investigadores en el mundo son mujeres. Según datos de la UNESCO⁴⁴ (entre 2014 y 2016), sólo alrededor del 30 por ciento de todas las estudiantes escogen estudios superiores dentro del campo de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y matemáticas (STEM). En todo el mundo, la matrícula de estudiantes femeninas es particularmente baja en el campo de la tecnología de la información y las comunicaciones (TIC), con un 3 por ciento; ciencias naturales, matemáticas y estadísticas, con un 5 por ciento, y en ingeniería, manufactura y construcción, con un 8 por ciento.

⁴³ Asamblea General de Naciones Unidas. Resolución A/RES/70/212, aprobada en la 81a sesión plenaria, de fecha 22 de diciembre de 2015.

⁴⁴ <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366649>

En nuestro país, según datos del Ministerio de Educación⁴⁵, en el año 2017 se matricularon en una Institución de Educación Superior (IES) 99,737 mujeres, de las cuales 10,297 se matricularon en nivel técnico; 87,488 en nivel universitario (2,072 en el área de Ciencias y 8,061 en la de Tecnología); y 1,952 en nivel de posgrado. En el mismo año, se graduaron 3,085 de nivel técnico; 9,093 de nivel universitario (120 en el área de Ciencias y 1,085 en el área de Tecnología); y sólo 713 de nivel de posgrado.

Lo anterior indica que no obstante han existido avances en el acceso a la educación, se requiere de cambios transformadores y enfoques integrados que eliminen las barreras estructurales actuales, reduzcan la brecha digital y permitan que las mujeres gocen de un acceso igualitario, principalmente en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, matemáticas y el diseño.

Por todo lo anterior, hago un llamado al funcionariado público, al sector privado y a la sociedad en general, para que continuemos trabajando a fin de generar espacios inclusivos en los que las mujeres y las niñas puedan aportar una nueva perspectiva, desarrollando su talento y creatividad, sin desigualdades o prejuicios que limiten su potencial.

11 de febrero de 2020

9. Día de la Mujer de las Américas

En 1982 la Asamblea General de los Estados Americanos (OEA) decretó el 18 de febrero como el Día de la Mujer de las Américas, en conmemoración de la creación de la Comisión Interamericana de las Mujeres (CIM) en el año 1928, Comisión que se ha proyectado y afianzado a lo largo de los años como el más alto foro para la promoción de los derechos humanos de las mujeres de las Américas.

La CIM ha desempeñado un rol protagónico en el logro de consensos, unificación de criterios y diseño de estrategias para la transformación de la realidad social y jurídica de las mujeres en el continente.

Uno de los hitos por alcanzar la igualdad de derechos entre mujeres y hombres es cuando en 1990 se convocó a la primera Consulta Interamericana sobre la Mujer y la Violencia; cuatro años más tarde, resultaría en la adopción de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), primer tratado internacional que reconoce la violencia contra las mujeres como una violación de sus derechos humanos y un obstáculo al pleno ejercicio de estos.

Posteriormente en 2004 se establece el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará – MESECVI– para apoyar y reforzar la plena implementación de la Convención y el derecho de las mujeres de vivir libres de violencia.

Nuestro país ratifica en el año 1995 la Convención de Belém Do Pará, la cual establece la obligación a los Estados parte de incluirla en su legislación interna, siendo ésta la base de la actual Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para Las Mujeres (LEIV) año 2010.

En esta fecha se rinde homenaje a todas las mujeres del continente americano, que a través de su dura y pertinaz lucha, lograron obtener el reconocimiento de sus derechos políticos y civiles para participar en todas las esferas de la actividad nacional e internacional.

Por todo lo anterior, en este Día de la Mujer de las Américas, hago un llamado a consolidar lo ya logrado e intensificar esfuerzos por avanzar en los planes y políticas ya fijadas, a fortalecer la coordinación entre instancias gubernamentales, la sociedad civil y los organismos internacionales, que afirman el compromiso para convertir en realidad los derechos de las mujeres y cumplir con la erradicación de la violencia que viven las mujeres.

18 de febrero de 2020

⁴⁵ Ministerio de Educación. Resultados de la Información Estadística de Instituciones de Educación Superior 2017. San Salvador, diciembre de 2018.

D) Desplazamiento forzado

1. Aprobación del dictamen favorable de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa del Proyecto de Ley Especial para la Atención y Protección Integral de Personas en Condición de Desplazamiento Forzado Interno

En mi calidad de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, sobre la base de las facultades que me confiere la Constitución de la República en el artículo 194, romano I, ordinales 1°, 7°, 9° y 11°, expongo lo siguiente:

Ante el reciente anuncio de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales sobre la aprobación del dictamen del Proyecto de Ley Especial para la Atención y Protección Integral de Personas en Condición de Desplazamiento Forzado Interno para ser discutido y aprobado en sesión plenaria de la Asamblea Legislativa el próximo 9 de enero del presente año (1). Reconozco como un avance importante la emisión del citado dictamen, en razón del cumplimiento de la sentencia de la Sala de la Constitucional en el Amparo 411/17, en la cual se declaró que en el país, existe el fenómeno de desplazamiento forzado que tiene origen en el contexto de violencia, por lo que ordenar revisar y emitir la legislación orientada a la protección de la víctima.

Desde la experiencia de la Procuraduría, en la atención de casos se ha brindado seguimiento a los diferentes proyectos de ley en la temática, asimismo, se participó en el esfuerzo multisectorial denominado “Grupo Gestor” que construyó el documento orientativo de estándares mínimos en la atención y protección de víctimas desplazamiento forzado, el cual fue entregado a la Comisión encargada de revisar, analizar y concretar un proyecto de ley.

En ese mismo sentido, comunico que en el último trimestre del año 2019 se emitieron tres comunicaciones oficiales al presidente de la Comisión en mención, solicitando nos informara el avance y la metodología utilizada en discusión de los diferentes proyectos; asimismo, se solicitó audiencia entre el Grupo Gestor, del cual formamos parte y la Comisión con el objetivo de poner a disposición el acompañamiento técnico, y que personal de la PDDH pudiera participar como observadores en las sesiones de discusión.

Al respecto, expreso que no se obtuvo respuesta a ninguna de las solicitudes antes citadas, situación que ha limitado u obstaculizado el mandato constitucional de la PDDH, de emitir opiniones de ley y supervisar la actuación de la Administración Pública, por lo cual recomiendo a la Asamblea Legislativa y a las diferentes Comisiones que la conforman que tengan presente que el mandato de esta Procuraduría es de naturaleza constitucional y obliga a los funcionarios y funcionarias a emitir informes que el titular de la PDDH solicite, de lo contrario podrían incurrir en responsabilidades de acuerdo al artículo 46 de la Ley de la PDDH.

7 de enero de 2020

E) Vida, Seguridad e Integridad personal

1. Hechos de violencia suscitados en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad de El Salvador

Ante los hechos de violencia generados por un grupo aproximado de cuarenta personas cubiertas de sus rostros, que irrumpieron las instalaciones de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad de El Salvador, el dieciocho de octubre del

presente año y quienes por medio de amenazas e intimidaciones, les ordenaban a los estudiantes que se retiraran de las instalaciones, del edificio de biología donde realizaban una protesta y vigilia pacífica en las afueras del edificio de biología, ante la inconformidad por presuntas violaciones al debido proceso administrativo en las elecciones de los organismos y autoridades internas de dicha facultad, así como la falta de acreditación de los estudiantes electos de la Junta Directiva de la misma; **lamento y expreso** mi rechazo a estos graves hechos de violencia que atentaron contra la vida, seguridad e integridad personal de los estudiantes, y por los graves daños ocasionados en las instalaciones de esa Universidad.

Por lo anterior y haciendo uso de la facultad mediadora que me confieren los artículos 194 romano I ordinales 1°, 2°, 7° y 10° de la Constitución de la República y 11 literales 1°), 2°), 3°), 7°), 10°) y 12°) de la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, facilité una reunión entre el señor Rector de la Universidad de El Salvador, maestro Roger Armando Arias Alvarado, el Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, doctor Mauricio Hernán Lovo, la señora Defensora de los Derechos Universitarios, licenciada Claudia María Melgar de Zambrana y un grupo de estudiantes de la citada Facultad, a fin de abordar la problemática suscitada. En dicha diligencia institucional se **acordó** lo siguiente:

1. Las autoridades de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, se comprometieron A no iniciar ningún proceso administrativo en contra de los estudiantes que participaron en los hechos ocurridos en el Edificio de Biología, en las fechas dieciocho y diecinueve de este mes y año; compromiso que aplicaba para los docentes que les acompañaron en dicha actividad; reiteró además el señor Decano, que hasta la fecha de la mediación, no constaba ningún expediente administrativo o de investigación, en la Facultad que él dirige; por lo que se comprometió a no tomar ningún tipo de represalias a futuro contra los estudiantes que participaron en la citada actividad.
2. Se señaló las ocho horas del veinticuatro de octubre del año en curso, a efecto de hacer entrega de las credenciales a los estudiantes electos en las elecciones desarrolladas en la mencionada facultad.
3. Crear una mesa de diálogo permanente con estudiantes y autoridades de la facultad ya identificada y que en la primera reunión se abordará el tema sobre las actuaciones atribuidas a la Jefa de Comunicaciones de esa área, a efecto de garantizar el derecho de audiencia y defensa.
4. A las nueve horas del miércoles treinta de octubre del presente año, se llevará a cabo la primera reunión de la Mesa Permanente de Diálogo entre las autoridades antes relacionadas y una representación de las diferentes asociaciones que existen en la citada facultad, y en la que además participarán representantes de la Defensoría de Derechos Universitarios y de esta Procuraduría.
5. De parte de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, se garantizará atención psicológica para las víctimas de los hechos vandálicos.

Finalmente, como Defensor del Pueblo exhorto a las autoridades de la Universidad de El Salvador y a los estudiantes a mantener el respeto mutuo dentro del margen de la legalidad y prevenir que hechos como los acontecidos en la fecha previamente señalada no se vuelvan a repetir, por ninguna razón en ninguna facultad del “Alma Mater”; finalmente reitero mi compromiso de acompañar a los estudiantes víctimas de estos hechos graves de violencia, en todas aquellas investigaciones que resulten por los daños ocasionados a los laboratorios de la Escuela de Biología y sobre la falta de seguridad institucional el día de los hechos.

23 de octubre de 2019

2. Lamentable hecho de ametrallamiento de un bus de transporte de empleados de una fábrica textil del municipio de El Rosario, departamento de La Paz

Mediante noticias publicadas en diferentes medios de comunicación⁴⁶ se tuvo conocimiento que en horas de la mañana del día dieciocho de octubre del año dos mil diecinueve, un bus que transportaba empleados de la Fábrica Textiles La Paz, de la Zona Franca El Pedregal, fue ametrallado por sujetos armados en el desvío Las Isletas, del municipio de San Pedro Masahuat del departamento de La Paz; resultando varias personas lesionadas, quienes fueron trasladadas al Hospital Nacional Santa Teresa de Zacatecoluca.

Personal de esta Procuraduría se presentó al referido nosocomio y constató que fueron ocho personas que resultaron lesionadas, quienes fueron remitidas al Instituto Salvadoreño del Seguro Social de Zacatecoluca, mientras que el joven Wilber Ernesto Tobar Rivas, de veinte años de edad, por su grave estado de salud, fue referido al Hospital General del Instituto Salvadoreño del Seguro Social en San Salvador, falleciendo durante su traslado.

Por su parte el inspector de Policía Nacional Civil, Francisco Ramírez, responsable de la investigación, confirmó que la Fiscalía General de la República y la Unidad a su cargo, se encontraban realizando las diligencias correspondientes para esclarecer lo sucedido y dar con los responsables del atentado, sin que, al momento de la entrevista, se hubiesen generado resultados.

Los hechos narrados, reprochables y censurables, revisten para este servidor una enorme preocupación, ya que una vez más la violencia y la inseguridad han provocado graves afectaciones a derechos fundamentales y han enlutado a nuestras familias salvadoreñas.

La situación que enfrentamos ha sido evidenciada por el señor Yury Fedotov, Director Ejecutivo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, quien expresó que Centroamérica es una de las regiones más peligrosas, donde los homicidios alcanzaron 62.1 por cada 100.000 personas en algunos puntos. Se destaca además en un estudio realizado por dicha oficina, que los crímenes están relacionados con violencia de género, violencia de pandillas y otros tipos de homicidios⁴⁷, que el número de personas muertas por la delincuencia y la violencia de género supera con creces al de las víctimas fatales de las guerras y los conflictos armados combinados.

Por lo tanto, con base en las atribuciones expresadas en el artículo 194 romano I, ordinales 1°, 3°, 7° y 11° de la Constitución de la República, en mi calidad de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, RECOMIENDO:

1. Al señor Fiscal General de la República, doctor Raúl Ernesto Melara Morán y al señor Director General de la Policía Nacional Civil, Comisionado Mauricio Arriaza Chicas, garanticen el acceso a la justicia para las víctimas, realizando una investigación pronta, eficaz y oportuna de estos lamentables hechos, a fin de llevar a los autores y partícipes ante los tribunales correspondientes. Debiendo garantizar la protección de las familias afectadas, de las víctimas sobrevivientes y de las personas que colaboren en la presente investigación y el favorecimiento de la justicia.
2. A las autoridades del Gabinete de Seguridad, que eleven las acciones necesarias para prevenir que ocurran hechos como el narrado y reforzar de forma general, la situación de seguridad de la población salvadoreña, enfocándose no solamente en la represión del delito, si no también y como eje prioritario, en la protección de las víctimas y la población salvadoreña.

⁴⁶ Ver: <https://cronio.sv/nacionales/ultima-hora-presuntos-pandilleros-ametrallan-bus-en-las-isletas-la-paz-y-dejan-cinco-personas-heridas/>, <http://diariolaportada.com/ametrallan-bus-de-transporte-particular-en-la-paz/>, <https://www.solonoticias.com/2019/10/18/ametrallan-bus-en-carretera-de-la-paz-y-dejan-5-lesionados/>

⁴⁷ UNODC, Global Study on Homicide 2019 (Vienna, 2019)

Como Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, estoy convencido que juntos podremos superar la vorágine de violencia que ahora lamentablemente sufrimos todos las salvadoreñas y salvadoreños, y, asumo mi compromiso con las víctimas de estas y otras graves violaciones a derechos humanos.

21 de octubre de 2019

3. El asesinato de dos agentes policiales en el municipio de San Juan Opico, departamento de la Libertad

De acuerdo a las facultades y atribuciones que me confiere la Constitución de la República en su artículo 194 romano I ordinales 1°, 7°, 10° y 11° y la Ley Orgánica de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en el artículo 11, ordinales 11° y 12°. En mi calidad de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos hago referencia a lo siguiente:

Que en noticias periodísticas publicadas el trece de diciembre del presente año, se tuvo conocimiento del asesinato de dos agentes policiales destacados en la delegación San Salvador Centro. Conforme a las fuentes consultadas⁴⁸ los nombres de los agentes corresponden a: Eduardo Efraín Alonso García y Carlos Elías Ascencio Borja, quienes iban a bordo de sus motocicletas en horas de la madrugada sobre la carretera que conduce hacia Quezaltepeque, en el municipio de San Juan Opico. Según las noticias periodísticas, ambos agentes fallecieron en extrañas condiciones⁴⁹.

Como defensor del pueblo, condeno este lamentable hecho, expreso mis condolencias a los familiares de cada una de las víctimas y mi solidaridad con la corporación policial por la pérdida de dos de sus elementos.

En consecuencia, sobre la base de mi mandato constitucional y legal les solicito:

- a. Al señor Presidente de la República de El Salvador, Nayib Armando Bukele Ortez, que informe sobre las medidas o mecanismos implementados para garantizar la protección y seguridad de todos los elementos de la Policía Nacional Civil y demás funcionarios encargados de las tareas de seguridad pública, a efecto de prevenir que el hecho antes citado se vuelva una práctica recurrente por la situación de vulnerabilidad de nuestro país.
- b. Al señor Ministro de Justicia y Seguridad Pública, ingeniero Rogelio Eduardo Rivas Polanco, que informe si cuenta con un plan de prevención para evitar pérdidas de vidas y otras afectaciones a la integridad personal u otras violaciones a derechos humanos de elementos policiales y sus familiares.
- c. Al señor Fiscal General de la República, doctor Raúl Ernesto Melara Moran, que inicie la dirección funcional e investigación oportuna y eficaz para la individualización de los perpetradores del suceso en comento y que además garantice la protección a los familiares de las víctimas, con el fin que el hecho no quede en la impunidad.
- d. Al señor Director General de la Policía Nacional Civil, Comisionado Mauricio Arriaza Chicas, que de acuerdo a sus facultades legales, realice las acciones pertinentes con celo, diligencia y efectividad.

Hago un llamado a la población en general, para que juntos y juntas promovamos la prevención de la violencia, nos solidaricemos en hermandad y compañerismo para la construcción de la tan anhelada paz de nuestro país.

⁴⁸ Disponible en: <https://www.lapagina.com.sv/nacionales/dos-policias-fallecen-en-confuso-accidente-de-transito-en-quezaltepeque/> <https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/dos-policias-mueren-al-ser-embestidos-por-vehiculo-en-el-desvio-de-opico/668016/2019/>

⁴⁹ <http://diario1.com/nacionales/2019/12/pandilleros-atropellaron-y-aplastaron-dos-policias-en-opico/>

Reitero mi compromiso de continuar aportando al efectivo cumplimiento y respeto de los derechos humanos de la ciudadanía y exhorto a todas las instituciones a redoblar los esfuerzos en el combate a la delincuencia y a prevenir hechos de violencia.

13 de diciembre del 2019

4. El aumento de homicidios durante el fin de semana y las medidas ordenadas al respecto

En mi calidad de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, REPROCHO Y CONDENÓ ENÉRGICAMENTE EL AUMENTO DE HOMICIDIOS registrados en el país desde el pasado viernes 24 de abril y me solidarizo con los familiares de las víctimas de tan lamentables hechos de violencia que enlutan sus hogares, lo que se suma a las preocupaciones que ya viven en el contexto de la crisis sanitaria por COVID-19.

Ante estos hechos, nuevamente, reitero mi preocupación ante la falta de un plan de seguridad que aborde de manera integral la prevención y persecución del delito, especialmente en contextos de emergencia como la que actualmente vive el país. Como lo he manifestado, el país carece de un enfoque de seguridad acorde a los estándares internacionales de derechos humanos y a la concreción de políticas públicas integrales, lo que requiere contar con un verdadero sistema de información sobre la violencia, recursos materiales y técnicos adecuados.

La situación de criminalidad es particularmente grave y obedece a problemas estructurales sin abordar, lo que no se resuelve con medidas de populismo punitivo.

Por lo anterior, es preocupante que, ante los recientes crímenes, la respuesta sea declarar estado de emergencia en Centros Penales por tener información del organismo de inteligencia que los homicidios fueron ordenados desde el interior de los mismos, lo cual evidencia la poca efectividad de las medidas de seguridad en los citados centros penitenciarios.

De igual forma, exponer que el uso de la fuerza letal está autorizado para defensa propia o para la defensa de la vida de los salvadoreños, solamente es traer a colación lo establecido en los artículos 27 del Código Penal y 27 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil; es decir, ya existe normativa que regula el accionar de los diferentes cuerpos de seguridad en el ejercicio de sus funciones, por tanto, no debe entenderse como una licencia para actuar al margen de la ley, ya que en todo caso para invocar esa excluyente de responsabilidad debe llevar consigo el cumplimiento de los requisitos exigidos en los citados preceptos legales.

Por otro lado la operativización de la declaratoria de emergencia en algunos centros penales sin garantizar el distanciamiento físico volvió ineficaz las medidas que la Dirección General de Centros Penales (DGCP) estaba llevando a cabo para prevenir la enfermedad COVID-19 entre las personas privadas de libertad; y nuevamente no se siguió el procedimiento establecido en el artículo 23 de la Ley Penitenciaria, tal como ocurrió el pasado 3 marzo del presente año.

Por otra parte, lamento que en –el marco de la violencia generalizada que vive el país– elementos de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada de El Salvador también hayan sido víctimas de la delincuencia y muchos perdieran la vida en el cumplimiento de su deber; es por ello que esta Procuraduría reiteradamente ha recomendado tecnificar a la PNC dotándola del equipo idóneo y los recursos necesarios para el mejor cumplimiento de su labor; sin embargo, también se ha señalado que en el cumplimiento de sus obligaciones, los cuerpos de seguridad deben ceñirse a lo que establece la Constitución de la República, las leyes y tratados internacionales, particularmente a lo establecido en el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley; y Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.

En consecuencia de lo anterior, conforme al mandato constitucional de velar por el respeto y garantía de los derechos humanos, previsto en el artículo 194 romano I de la Constitución de República ordinales 1°, 5°, 7°, y 11°, como Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos:

- a. Exhorto al señor Presidente de la República, Nayib Armando Bukele Ortiz, a ceñirse a la Constitución de la República, la normativa nacional e internacional y la jurisprudencia en cuanto al cumplimiento de sus deberes.
- b. Solicito al Ministro de Justicia y Seguridad Pública que informe: 1) si a la fecha cuenta con un plan integral de seguridad a efecto de salvaguardar la vida de los habitantes de este país; y 2) las medidas e instrucciones giradas a la Policía Nacional Civil y a la Dirección General de Centros Penales para dar cumplimiento a lo ordenado por el señor Presidente de la República.
- c. Solicito al señor Fiscal General de la República que realice una investigación efectiva para llevar ante los estrados judiciales a todos los responsables de los asesinatos ocurridos en este país, particularmente aquellos ocasionados durante la emergencia nacional generada por el COVID-19.

27 de abril de 2020

I) Trabajo y derechos sindicales

1. Conmemoración del “Día del Sindicalista Salvadoreño”

Según el Informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador –hecho público el 15 de marzo de 1993– el local de la Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños (FENASTRAS), el 31 de octubre de 1989 sufrió un atentado del cual resultaron nueve personas fallecidas y más de 40 heridas; y en memoria de las víctimas, la Honorable Asamblea Legislativa decretó la referida fecha como “Día del Sindicalista Salvadoreño”.

Como Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos estoy consciente que, los retos que enfrenta el sector laboral ante las actuales crisis socio-económicas tanto nacionales como internacionales, la lucha de las organizaciones sindicales debe ser, no solo para la reivindicación de sus derechos laborales y la de sus representados, sino también para la búsqueda de transformaciones sociales que tiendan a la mejora de las condiciones de vida del sector; debiendo ser proactivas y propositivas, con planes, estrategias y acciones que tengan como objetivo lograr cambios en las decisiones políticas, sociales y económicas del país, priorizando para ello, la utilización de métodos alternos de solución de conflictos como el diálogo, la negociación y las vías legales establecidas en el ordenamiento jurídico vigente.

En ese contexto, hago propicia la ocasión para expresar mi reconocimiento y admiración a las personas que desempeñan labores de defensa de los derechos de las trabajadoras y trabajadores; a la vez que reconozco el avance de las organizaciones sindicales en el empoderamiento y exigencia de sus derechos, tanto a nivel nacional como internacional: mediante el mecanismo de Queja ante la Organización Internacional del Trabajo; la lucha reivindicativa por medio de la manifestación pacífica y otras acciones en el ejercicio de la libertad sindical, derechos consagrados en la Constitución de la República e instrumentos internacionales de protección de derechos laborales, todo ello con el fin de obtener condiciones dignas y satisfactorias de trabajo, el desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales, así como la defensa de los intereses de los trabajadores ante los diferentes abusos y arbitrariedades ejercidas por sus empleadores.

Finalmente, y de acuerdo al mandato constitucional conferido me uno a las trabajadoras y trabajadores pertenecientes a las diferentes organizaciones sindicales, a la lucha por la defensa y ejercicio de los derechos laborales y sindicales, en el marco del respeto a la Constitución de la República, tratados internacionales de derechos humanos y la ley,

privilegiando el diálogo, la concertación y las relaciones armónicas; asimismo asumo con toda determinación, la responsabilidad de mantener una vigilancia activa de la actuación de las instituciones del Estado a efecto de que los derechos laborales y sindicales sean ejercidos y gozados en forma efectiva por la persona trabajadora.

31 de octubre de 2019

2. Supresión de las plazas de cargos de los trabajadores y trabajadoras de las Secretarías de la Presidencia de la República

El día uno de junio del presente año, el señor Presidente de la República Nayib Armando Bukele Ortiz, dio a conocer por medio de diferentes plataformas digitales, que realizaría cambios en la Estructura Orgánica de la Presidencia de la República, quien entendió que la creación de las Secretarías de Estado y, en general, la reestructuración de la Administración Pública es materia organizativa que debe estar contenida en el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, debiéndose realizar los ajustes pertinentes para su buen funcionamiento y coordinación; pero dicha reestructuración llevaría consigo la supresión de diferentes Secretarías de esa Presidencia, siendo las siguientes: Secretaría Técnica y de Planificación, Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción, Secretaría de Gobernabilidad y Secretaría de Inclusión Social y de Vulnerabilidad; y que, en reunión de fecha dos de junio de dos mil diecinueve, el Consejo de Ministros acordó reformar el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo y reestructurar las dependencias de esa Presidencia.

La decisión antes mencionada, generó incertidumbre en las y los trabajadores de las distintas Carteras de Estado, por lo que en fecha cuatro de junio del presente año, muchos de ellos se apersonaron a esta Procuraduría, por lo que se les brindó el acompañamiento respectivo, constatando que ciertamente empleados de las citadas Secretarías habían recibido una notificación de la Jefa del Departamento de Recursos Humanos de Casa Presidencial, licenciada Norma Vásquez, en la que se confirmaba la información expuesta en redes sociales por el mandatario, que mediante Decreto Ejecutivo No. 1, de fecha dos de junio de dos mil diecinueve, el Consejo de Ministros realizó reformas al Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, modificando su estructura orgánica a través de la supresión de plazas de las Secretarías, afectando a 389 empleadas y empleados, distribuidos de la siguiente manera: 160 en la Secretaría Técnica y Planificación, 60 en la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción, 49 en la Secretaría de Gobernabilidad y 120 en la Secretaría de Inclusión Social, por considerarse plazas innecesarias.

En ese contexto, esta Procuraduría en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, requirió al señor Presidente de la República y al señor Ministro de Hacienda, remitir el acuerdo de disolución de las Secretarías de la Presidencia de la República, así como el estudio técnico para justificar la medida adoptada y las acciones a realizar para reubicar o resarcir a los empleados removidos de sus cargos; petición que se reiteró al señor Ministro de Hacienda, mediante oficio número PADESC 085/2019, de fecha quince de noviembre del presente año. A la vez y en atención al derecho a la estabilidad laboral en favor de los empleados cesados, esta Procuraduría recomendó la creación de una Comisión Especial para evaluar el historial laboral y las competencias a efecto que estos fuesen reubicados en otras unidades o dependencias pertenecientes al Órgano Ejecutivo; sin embargo, tanto el señor Presidente de la República como el señor Ministro de Hacienda, no remitieron copia del informe técnico que les fue requerido de manera reiterada, y únicamente señalaron que la medida se adoptó atendiendo a las potestades constitucionales de organización interna que le asisten y conforme a los objetivos prioritarios y funciones identificadas en el Plan de Gobierno, en la procuración de una adecuada y eficiente gestión de los negocios públicos.

Por su parte, el Ministro de Hacienda, señor Nelson Fuentes, el día doce de junio del presente año, remitió a la Asamblea Legislativa una solicitud de iniciativa de Ley identificándose como proyecto de Decreto que contiene modificaciones a la Ley de Salarios vigente de 2019, en la parte que corresponde a la Presidencia de la República emitido después que se realizara la primera reunión del Consejo de Ministros que se llevó a cabo el día dos de junio del presente año, donde se realizaron las respectivas modificaciones a la estructura

de la Presidencia y se reorganiza el Órgano Ejecutivo, con lo cual se preveía el pago de las respectivas indemnizaciones para 736 personas que salieron afectadas con la medida adoptada.

Como Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, considero, que de conformidad a los artículos 37 y 219 de la Constitución de la República, el *derecho al trabajo* es esencial para la realización de otros derechos humanos y constituye una parte inseparable e inherente de la dignidad humana, mediante la cual toda persona tiene derecho a trabajar para poder vivir con dignidad, en tanto que el trabajo es libremente escogido o aceptado, a su plena realización y a su reconocimiento en el seno de la comunidad⁵⁰, ello implica no solo a escoger empleo, sino también a ser protegido por el Estado, protección que no debe ser entendida como inamovilidad absoluta, sino como una garantía para el normal desarrollo de preceptos jurídicos que garantiza la carrera administrativa.

Dicho lo anterior, la estabilidad laboral no consiste en una permanencia irrestricta en el puesto de trabajo, sino de respetar este derecho, entre otras medidas, otorgando debidas garantías de protección al trabajador a fin que, en caso de despido o supresión de plazas, se realice bajo causas justificadas, lo cual implica que el empleador acredite las razones suficientes, respetando el debido proceso con las garantías constitucionales que éste merece; en consecuencia, si bien la figura de la supresión de plazas es una facultad de la Presidencia de la República para modificar su estructura organizativa, dicha atribución no puede ejercerse de forma arbitraria. Por ello, tal como lo ha dicho de manera reiterada la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, previo a ordenar la supresión de una plaza de trabajo se requiere que se haga por la autoridad competente, la elaboración de un estudio técnico de justificación, basado exclusivamente en aspectos de presupuesto, necesidades del servicio y técnicas de análisis ocupacional; adoptar medidas compensatorias de incorporación a empleos similares o de mayor jerarquía o únicamente cuando esto no sea posible, conceder la indemnización; reservar los recursos económicos necesarios para efectuar las indemnizaciones y levantar el fuero sindical.

Ante ello, sobre la base de lo establecido en los artículos 1, 2, 11, 37, 86, 131 ordinal 9º y 219 inciso 2 de la Constitución de la República, 10 y 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 6 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el suscrito Procurador advierte que al no justificarse la existencia de un Estudio Técnico previo a la medida adoptada por parte del Consejo de Ministros, y no existir intervención de la Asamblea Legislativa para garantizar la estabilidad laboral de la que gozan los empleados públicos, dicha medida, se constituye en una vulneración a los derechos humanos.

En consecuencia, y en atención al mandato constitucional y legal, que me ha sido conferido, de velar por el respeto y garantía de los derechos humanos, de supervisar la actuación de la administración pública frente a las personas, de promover y proponer las medidas necesarias para prevenir violaciones a los mismos, así como de formular conclusiones y recomendaciones, todo de conformidad a lo establecido en el artículo 194 romano I ordinales 1º, 7º, 10º y 11º de la Constitución de la República, emito las siguientes

RECOMENDACIONES:

1. Al señor Presidente de la República, Nayib Armando Bukele Ortiz y su Consejo de Ministros, adopten las medidas que en atención a su mandato constitucional, garanticen el respeto a los derechos humanos, revisando y modificando si fuese necesario el Decreto Ejecutivo No. 1, mediante el cual se reformó el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, respetando el debido proceso; exhortándoles a instalar una mesa de diálogo conformada por representantes del señor Presidente de la República con capacidad de decisión, representantes de las trabajadoras y trabajadores afectados, con la verificación y mediación de esta Procuraduría y la Procuraduría General de la República; todo con el fin de evaluar la medida adoptada y realizar un estudio técnico

⁵⁰ ONU. Observación General 18 "Derecho al Trabajo" aprobada por el Comité de Derechos Económicos Sociales Culturales el día 24 de noviembre de 2005.

a fin de reincorporar o restablecer los derechos de las personas que han resultado afectadas y así garantizar el derecho a la estabilidad laboral.

2. A las Señoras Diputadas y Señores Diputados de la Honorable Asamblea Legislativa, analicen y estudien de manera especial la pieza de correspondencia presentada por el señor Ministro de Hacienda, en lo relativo a la modificación a la Ley de Salario vigente 2019 y al proyecto de presupuesto 2020, en lo que refiere a la Presidencia de la República, donde se debe priorizar la garantía del derecho al trabajo, y la estabilidad laboral de las trabajadoras y trabajadores.
3. Solicitar a los Organismos Regionales e Internacionales de Protección a Derechos Humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Relatoría Especial de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la OEA y representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, se mantengan vigilantes de la situación antes señalada para que en su momento realicen visitas o pronunciamientos sobre el caso.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, continuará con el trámite y el seguimiento de los expedientes abiertos con ocasión de las separaciones del cargo de las personas trabajadoras de la Presidencia y se mantendrá vigilante de la actuación de las decisiones adoptadas por el señor Presidente de la República y los Diputados y Diputadas de la Honorable Asamblea Legislativa, en defensa de los derechos de las personas trabajadoras afectados.

03 de diciembre de 2019

3. Remoción de los trabajadores y las trabajadoras de las diferentes Dependencias del Órgano Ejecutivo

El 1 de junio de 2019, la Presidencia de la República; anunció la supresión de algunas Secretarías de Casa Presidencial, lo cual se concretizó en reunión del Consejo de Ministros el día 2 de junio de 2019, acordando reformar el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo y reestructurar las dependencias de la Presidencia, por lo que esta Procuraduría en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, requirió al señor Presidente de la República y al señor Ministro de Hacienda, se remitiera una copia del acuerdo de disolución de las Secretarías suprimidas, del Estudio Técnico que justificaba la medida adoptada y se nos informara sobre las acciones a realizar para reubicar o resarcir a los empleados removidos de sus cargos; sin embargo, tanto el señor Presidente de la República como el señor Ministro de Hacienda, no remitieron copia del informe técnico que les fue requerido de manera reiterada, y únicamente señalaron que la medida se adoptó atendiendo a las potestades constitucionales de organización interna que le asisten y conforme a los objetivos prioritarios y funciones identificadas en el Plan de Gobierno, en la procuración de una adecuada y eficiente gestión de los negocios públicos, por lo que el 3 de diciembre de 2019, como Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos emití un pronunciamiento en el que expresé que tal medida constituía una vulneración de los derechos humanos, sustentado en:

1. Que de conformidad a los artículos 37 y 219 de la Constitución de la República, el *derecho al trabajo* es esencial para la realización de otros derechos humanos y constituye una parte inseparable e inherente de la dignidad humana, mediante la cual toda persona tiene derecho a trabajar para poder vivir con dignidad, en tanto que el trabajo es libremente escogido o aceptado, a su plena realización y a su reconocimiento en el seno de la comunidad, ello implica no solo a escoger empleo, sino también a ser protegido por el Estado, protección que no debe ser entendida como inamovilidad absoluta, sino como una garantía para el normal desarrollo de preceptos jurídicos que garantiza la carrera administrativa;
2. La estabilidad laboral no debe entenderse solo como una permanencia irrestricta en el puesto de trabajo, sino respetarse el derecho al trabajo y la estabilidad laboral, y si se va a prescindir de los servicios del trabajador, se debe garantizar el debido Proceso a fin

de que la remoción, despido o supresión de plazas, se realice bajo causas justificadas, lo cual implica que el empleador acredite las razones suficientes y respete las garantías constitucionales; y

3. La figura de la supresión de plazas es una facultad de la Presidencia de la República para modificar su estructura organizativa, pero dicha atribución no puede ejercerse de forma arbitraria, tal como lo ha dicho de manera reiterada la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, es decir, que previo a ordenar la supresión de una plaza de trabajo se requiere que se haga por la autoridad competente un **“Estudio Técnico de Justificación”**, basado exclusivamente en aspectos de presupuesto, necesidades del servicio y técnicas de análisis ocupacional; adoptar medidas compensatorias de incorporación a empleos similares o de mayor jerarquía o únicamente cuando esto no sea posible, conceder la indemnización; y reservar los recursos económicos necesarios para efectuar las indemnizaciones.

A pesar de lo anterior, las denuncias por remoción de empleadas y empleados de las diferentes dependencias del Órgano Ejecutivo han aumentado; y hasta la fecha en esta Procuraduría se han recibido 1047 denuncias por violaciones a los derechos humanos relacionados al trabajo y a la estabilidad laboral en contra de las autoridades de Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción; Secretaría de Inclusión Social; Secretaría de Gobernabilidad; Secretaría Técnica y de Planificación; Secretaría de Comunicaciones de Presidencia de la República; CORSATUR; Ministerio de Educación; Ministerio de Relaciones Exteriores; ANDA; Ministerio de Obras Públicas; Ministerio de Cultura; Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial; INSAFORP; Ministerio de Salud; Dirección General de Centros Penales; Ministerio de Turismo; ISRI; Dirección General de Correos; Dirección General de Centros Penales; e INJUVE, que forman parte del Órgano Ejecutivo, afectando directamente a 1269 personas, lo cual es preocupante porque se expresan dos elementos recurrentes **“no haberles seguido el debido proceso”**; y **“ser supresión de plazas”** lo que denota el no acatamiento a los fundamentos establecidos por este Procurador en el pronunciamiento arriba mencionado.

Ante todo lo anterior y convencido que al no garantizar el proceso debidamente configurado para remover a empleados y empleadas del sector público; y suprimir plazas sin el debido estudio técnico, los titulares de las diferentes dependencias del ejecutivo, están generando violaciones a los derechos humanos, tales como: al trabajo y estabilidad laboral, según lo establecido en los artículos 1, 2, 11, 37, 86, 131 ordinal 9° y 219 inciso 2 de la Constitución de la República, 10 y 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 6 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales

En consecuencia, y en atención al mandato constitucional y legal, que me ha sido conferido, de conformidad a lo establecido en el artículo 194, romano I, ordinales 1°, 7°, 10° y 11° de la Constitución de la República, **EXHORTO** a los titulares de las distintas dependencias mencionadas, que respeten los derechos humanos al trabajo y a la estabilidad laboral de todos los trabajadores y las trabajadoras del Órgano Ejecutivo y si por circunstancias administrativas se hace necesario remover empleados, se cumpla con todas las garantías del debido proceso y en irrestricto apego al marco constitucional y la Ley.

20 de diciembre de 2019

J) Verdad, justicia y reparación

1. La impunidad en la ejecución extralegal de Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, en el marco del aniversario 40 de su martirio

El 24 de marzo de 1980, en la capilla del Hospital de la Divina Providencia, en San Salvador, mientras celebraba misa, fue asesinado Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez;

de acuerdo con el Informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador, las personas responsables de dicha ejecución extralegal son: el ex Mayor Roberto D'Aubuisson, los capitanes Álvaro Saravia y Eduardo Ávila, además Fernando Sagrera, Mario Molina, Amado Antonio Garay y Walter Antonio "Musa" Álvarez. Asimismo se hace ver que la Corte Suprema de Justicia es responsable de asegurar la impunidad respecto a la autoría intelectual del asesinato⁵¹.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe de fondo 37/00 de 13 de abril del año 2000, le ordenó al Estado salvadoreño: investigar, juzgar y sancionar a los responsables de la ejecución extralegal de Monseñor Romero, reparar las consecuencias de las violaciones cometidas y adecuar la legislación interna a la Convención Americana de Derechos Humanos, a fin de dejar sin efecto la Ley de Amnistía General de 1993.

En julio de 2016 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia expulsó del ordenamiento jurídico la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, normativa que impidió durante más de 23 años el acceso a la verdad, a la justicia, a la reparación y a garantías de no repetición para los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad cometidos por ambas partes en el contexto del conflicto armado.

Ahora se cumplen 40 años del momento aquel en que fue segada la vida física del más representativo de los defensores de derechos humanos de este país, por parte de un grupo armado ilegal con apoyo y aquiescencia del Estado. Desde esa fecha han pasado casi 20 años desde que el organismo regional de Derechos Humanos ordenara al Estado salvadoreño esclarecer, investigar, sancionar y reparar la grave violación cometida, y más de 3 años desde que se dejó sin efecto la ley de amnistía de 1993 sin que se conozcan mayores avances en la investigación de los hechos.

He constatado la poca voluntad del Órgano Legislativo de garantizar los derechos de las personas ofendidas por las atrocidades cometidas en el contexto del conflicto armado interno, a pesar de que las propias víctimas les han hecho llegar propuestas pertinentes y de existir una orden de la Sala de lo Constitucional de promulgar una normativa que garantice el acceso a la verdad, que se aplique la justicia a los responsables, se generen garantías de no repetición y se repare el daño causado a las víctimas.

En cuanto al Órgano Judicial y Fiscalía General de la República, aunque es positiva la reapertura y continuación de la investigación del cruel asesinato de Monseñor Romero y Galdámez en el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador, dada en mayo de 2017, aquella no avanza, a pesar de tener claras pistas, nombres e indicios para avanzar en las pesquisas. A partir del 22 de octubre de 2018, el proceso judicial se dividió en dos: el proceso histórico que el referido juzgado lleva contra Álvaro Saravia y las investigaciones que éste ha ordenado a Fiscalía General de la República para enjuiciar a otros autores ya mencionados.

El 4 de este mes el juzgado de la causa tomó declaración de una abogada que participó en el juicio contra Álvaro Saravia implicado en la ejecución extralegal de Monseñor Romero.

Estimo que no se está cumpliendo el principio de debida diligencia en realizar una investigación exhaustiva, completa, imparcial, de forma inmediata y sin dilaciones.

Por lo anterior, con base en mis atribuciones conferidas por el artículo 194 romano I, ordinales 1º, 3º y 7º de la Constitución de la República, en mi calidad de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, RECOMIENDO:

1. Al señor Fiscal General de la República, doctor Raúl Ernesto Melara Morán, que desarrolle una investigación seria, eficaz, oportuna y concluyente sobre la ejecución extralegal de Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez, ya que tanto la legislación procesal penal de 1974 como la vigente le otorgan amplias facultades de investigación.
2. Al señor Juez Cuarto de Instrucción de San Salvador, licenciado Rigoberto Chicas, cumpla su obligación de proteger los derechos de las víctimas, impulsando una

⁵¹ P. 132

investigación seria, eficaz, oportuna, exhaustiva y concluyente, ordenando al señor Fiscal General de la República todas las diligencias útiles para el esclarecimiento de los hechos, la investigación y sanción de todas las personas responsables de la ejecución extralegal de Monseñor Romero.

3. Al presidente de la República, haga uso de su investidura para impulsar la investigación de esta y todas las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto del conflicto armado y asegure la confluencia de cualquier información que obre en los archivos de instituciones bajo su responsabilidad para que las víctimas del conflicto armado tengan acceso a la Verdad.

24 de marzo de 2020

2. Asistencia al 38 aniversario de la masacre de El Mozote

El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, José Apolonio Tobar Serrano, acompañó en un acto conmemorativo a las víctimas de la masacre de El Mozote y lugares aledaños al cumplirse 38 años de ser perpetrada entre los días 10, 11, 12, 13 y 14 de diciembre de 1981, por la Fuerza Armada de El Salvador con el apoyo de la Fuerza Aérea Salvadoreña, cuyos elementos realizaron de manera consecutiva una serie de asesinatos, violaciones sexuales, desplazamiento forzado, quema y destrucción de casas, de animales domésticos, de cultivos y de la vida en los caseríos El Mozote, Ranchería, Los Toriles y Jocote Amarillo y en los cantones Cerro Pando y La Joya y en una cueva del Cerro Ortiz, de los municipios de Meanguera y Arambala, en el Departamento de Morazán.

Este episodio lamentable en la historia y que tuvo lugar en el contexto del conflicto armado en El Salvador, ya obtuvo en el año 2012 una sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, (Corte IDH), que condenó al Estado salvadoreño por las graves violaciones comprobadas y le ordenó llevar adelante una serie de medidas de reparación para las víctimas sobrevivientes y sus familiares.

De igual manera en 2016, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, tras una profunda investigación, dictó resolución final sobre el caso de Las Masacres de El Mozote y Lugares Aledaños, declarando en ese momento que el Estado salvadoreño continuaba incumpliendo el deber inderogable de investigar, procesar y sancionar a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario perpetradas durante las Masacres aludidas.

A su llegada a la institución, el pasado mes de octubre, el Procurador Apolonio Tobar brindó impulso a un seguimiento de cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Corte IDH y la PDDH, esto como parte del compromiso que tiene con las víctimas, sobrevivientes y sus familias, con el objetivo claro que tengan acceso a la justicia, a la verdad, la reparación y la no repetición de los hechos.

El Defensor del Pueblo, ha expresado en diferentes ocasiones que se mantiene vigilante que se apruebe una Ley de Reparación que cumpla los estándares establecidos por la Corte Suprema de Justicia, al establecer la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía.

Como punto final, el Procurador invitó a los sobrevivientes y sus familias a no desmayar en las justas aspiraciones de obtener verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, asegurándoles que en ese camino cuentan con su total respaldo.

7 de diciembre de 2019

3. Mensaje en el XXVIII Aniversario de los Acuerdos de Paz

El 16 de enero de cada año El Salvador conmemora uno de los hechos más significativos de su historia contemporánea: la conclusión de un proceso de negociación sin precedentes que hizo posible la firma de los Acuerdos de Paz y la terminación definitiva del conflicto armado por la vía del diálogo y la concertación.

Si bien el triunfo de la política sobre la violencia bélica permitió finalizar con el militarismo, fortalecer el equilibrio entre los distintos poderes públicos y aceptar la reconciliación nacional como objetivo supremo, la vinculación de dicho proceso con el respeto y garantía de los derechos humanos es sin duda una de sus características fundamentales.

En este sentido, la creación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos supone uno de los logros más relevantes de los mencionados acuerdos políticos y el de mayor trascendencia en materia de protección institucional de los derechos humanos y libertades fundamentales de la población salvadoreña. Su rango constitucional reiteró el compromiso social y político de que nunca volverían a repetirse impunemente las graves violaciones a derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado y que el respeto a la dignidad de las personas, sin exclusión, se constituiría en el instrumento fundamental y más confiable de una democracia real y duradera.

La fecha también es propicia para evaluar y reivindicar la significación de los Acuerdos de Paz en el marco de su finalidad intrínseca: hacer de El Salvador un país libre de violencia y con las instituciones fundamentales para dirimir sus diferencias de manera racional, civilizada y pacífica en la búsqueda del bienestar común. Esta es una responsabilidad ética y fundamental para todos los sectores públicos y privados en el marco de una lógica equivalente a lograr que la paz anhelada sea justa, permanente, centrada en la satisfacción de las necesidades de las personas, desde su participación activa y sus derechos.

Para ello es esencial y urgente la adopción de medidas concretas tendientes a garantizar la atención de todas las situaciones que generan violencia, odio y exclusión, a través de políticas públicas concretas e integrales ligadas a la realización efectiva de los derechos humanos y la modificación de actitudes y prácticas políticas, económicas y socioculturales que los vulneran, teniendo como base un verdadero, transparente y robusto sistema de información, así como los recursos materiales, técnicos y presupuestarios adecuados.

La centralidad humana, la equidad e integración intergeneracional y el enfoque diferencial con énfasis territorial, particularmente para atender las problemáticas de las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad (mujeres, niños, niñas y adolescentes, pueblos indígenas, personas LGBTI+, personas con discapacidad y la población rural), bajo un proceso de amplia participación, establecerán las condiciones necesarias para superar la exclusión estructural, generadora de conflicto social y mejorar la promoción y protección de los derechos humanos; creando estructuras nacionales adecuadas que eliminen las causas de las violencias, así como todo obstáculo que se oponga a su realización.

De igual manera, resulta también urgente la adopción de medidas que garanticen oportunidades reales para el ejercicio adecuado de la participación política, trascendiendo del desencanto y la frustración hacia un ejercicio ético, responsable e informado de las propuestas y acciones públicas, teniendo como premisa que el ejercicio de los derechos políticos no son un fin en sí mismo sino un medio fundamental para garantizar los demás derechos. Y, por lo tanto, toda oportunidad concreta y efectiva que se garantice, fortalece la democracia, promueve una sociedad sin discriminación y fomenta la protección y promoción de los derechos humanos en todos los contextos.

Para ello, es fundamental la promoción de los derechos humanos, como medio para conocer su alcance y contenido y los mecanismos para su protección. Esto constituye una apuesta esencial de esta Procuraduría bajo el convencimiento que solo desde la toma de conciencia y la práctica permanente de participación en todos los ámbitos de los asuntos públicos nos permitirá construir una democracia amplia e incluyente.

Por otro lado, no puede olvidarse la deuda histórica del Estado salvadoreño en relación a los derechos a la justicia, la verdad, la reparación integral, así como las garantías de no repetición de las graves violaciones a derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado. Sin duda alguna esta tarea es muy compleja y requiere de la comprensión adecuada del contexto histórico, jurídico y político en el que tales hechos se enmarcaron, su caracterización como parte de patrones sistemáticos de actuación de ambos bandos, la

identificación y superación de los obstáculos estructurales que mantienen la impunidad y la comprensión adecuada de los impactos individuales, comunitarios y sociales generados.

Debe aclararse que la legitimidad y eficacia de los esfuerzos que se realicen requiere del respaldo integral de los tres poderes del Estado, dado que solo desde una política estatal sustentable podrá avanzarse en la consolidación de un verdadero proceso de verdad, justicia y reparación que tenga como base la participación efectiva de las víctimas y la adopción de medidas que ofrezcan la posibilidad real de cumplir y poner en práctica los estándares nacionales e internacionales en esta materia.

En tal sentido, la tarea fundamental está en manos de la Asamblea Legislativa a través de una pronta, adecuada, amplia y participativa discusión y aprobación de una ley que, según los parámetros de la Sentencia de Inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, regule las acciones estatales necesarias y efectivas para superar todas las acciones u omisiones que han propiciado, tolerado y favorecido la impunidad y la falta de atención adecuada a las víctimas del conflicto. La oportunidad es nuevamente histórica para lograr un reproche social y judicial de las conductas más graves cometidas contra los derechos humanos en el país, reconociendo los valores que emanan de la dignidad de las personas en un clima compatible con las obligaciones internacionales, reforzando los comportamientos que toda sociedad democrática demanda de quienes actúan bajo el amparo del poder público y por ende creando las condiciones para que este tipo de hechos no se repitan en el futuro.

Finalmente, esta ocasión debe ser aprovechada para refrendar nuestro compromiso firme por un proceso permanente de paz, reconciliación y concertación que día a día supere nuestro pasado de violencia, autoritarismo e imposición, velando por el respeto y garantía de los derechos humanos y orientando nuestros esfuerzos hacia la formación de una cultura y una forma de vida que asume sus valores y principios bajo el imperativo ético del respeto a la dignidad humana y la convivencia sana entre las personas y las instituciones del Estado, cumpliendo con los aspectos señalados de manera constructiva, proactiva y corresponsable, uniendo nuestras capacidades y esfuerzos en torno a la construcción de un El Salvador respetuoso y garante de los derechos de todas y todos.

16 de enero 2020

4. Consulta Territorial para escuchar a Víctimas del Conflicto Armado

El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, José Apolonio Tobar, junto a su equipo de trabajo, inició este viernes 31 de enero, una gira territorial, a efecto de conocer de primera mano las necesidades de víctimas del conflicto armado, en las comunidades La Limonera, El Zamorano y aledañas a la zona del Bajo Lempa, Jiquilisco, Usulután.

En este importante encuentro, el Procurador reafirmó el compromiso de cumplir su mandato constitucional y escuchar a familias afectadas durante la guerra civil y sus requerimientos concretos, que permitan restablecer los derechos humanos vulnerados durante el conflicto armado interno.

“Esta es la primera visita que como Procurador de Derechos Humanos realizaré en el territorio nacional para conocer el sentir y pensar de las víctimas y sus familias; seré el portavoz de lo que esperan en materia de reparación y justicia”, señaló el titular de la PDDH.

En la consulta realizada por la PDDH, las comunidades asistentes señalaron dificultades para acceder a servicios básicos, educación, salud, infraestructura vial, programas sociales y de desarrollo local, entre otros, demandas que no han sido solventadas por las instituciones del Estado Salvadoreño.

El acercamiento con las víctimas responde al interés del Procurador Tobar, para trasladar el legítimo sentir de las víctimas, en un informe que será presentado de forma pública, con el objetivo que su contenido se incluya en la Ley de Reconciliación Nacional, que tiene por obligación aprobar la Asamblea Legislativa, como ordenó la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, al emitir una sentencia que dejó sin validez la Ley de Amnistía.

Para el titular de la PDDH es importante que la Asamblea Legislativa apruebe una normativa que garantice el cumplimiento de los derechos humanos de todas las víctimas, con el fin de restablecer las afectaciones sufridas durante el conflicto armado.

31 de enero de 2020

5. Proyecto de Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional

Este día 25 de febrero de 2020, a través de correo electrónico se recibió invitación por parte de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, a efectos de que en esta misma fecha se cómo institución realicemos “observaciones puntuales al articulado del proyecto de LEY ESPECIAL DE JUSTICIA TRANSICIONAL, REPARACIÓN Y RECONCILIACIÓN NACIONAL”, del que se adjuntó copia. Más allá de las pertinentes valoraciones sobre la poca antelación en la invitación y los errores y vicios de fondo que un inadecuado proceso de consulta de un instrumento normativo de tal importancia conlleva; pretendo ocupar las siguientes líneas para esbozar algunos de los aspectos del citado proyecto de ley, que revisten preocupación en tanto distan de los estándares nacionales e internacionales en la materia⁵², de lo expresado por la Sala de lo Constitucional en su sentencia⁵³ y de lo expresado por las víctimas en este contexto⁵⁴.

Es importante señalar, que el sentido de la justicia transicional es favorecer cambios estructurales en aspectos relacionados con la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición, es decir superar las normas y prácticas que generan agravios a las víctimas. Ninguna acción estatal enmarcada en la justicia transicional puede prescindir de reconocer y valorar el impacto de las graves violaciones a derechos humanos ocurridas en el contexto del conflicto armado, las cuales no solo transgredieron enormemente la dignidad de las personas, sino que además suponen hasta el día de hoy consecuencias en sus condiciones de vida y graves afectaciones en sus proyectos individuales, familiares y comunitarios. Aporte que a nuestro criterio deben quedar explícitos en los considerandos o en el título preliminar del correspondiente proyecto de ley.

En nuestro diálogo con las víctimas advertimos reiteradamente su profundo sentimiento de insatisfacción y desesperanza ante la impunidad, y su absoluto malestar ante la falta de reconocimiento institucional y social de los dolores padecidos. Además, refirieron que al hablar sobre su historia frecuentemente son tratadas como “sospechosas o mentirosas”, lo cual las ha estigmatizado públicamente, ello ante la falta de acción estatal que atienda los efectos acumulativos de tales agravios.

El presente proyecto de ley debería partir de esta premisa ineludible: los daños causados han sido consecuencia de violaciones a derechos humanos, a las que se suman los agravios ocasionados por años de impertinentes acciones y omisiones que han repercutido en la vida íntima, social, política, cultural y de desarrollo individual y colectivo de las víctimas. Por lo tanto, la labor de legislar en torno a dichas víctimas, debe responder a esas experiencias, ser auténticamente reparadora desde una visión integral, histórica y multidisciplinaria; debe **poner al centro a las víctimas y garantizar su adecuada participación en las decisiones que les afecten** y garantizar siempre la **interpretación a favor de sus derechos** y a la **intervención sin daño**. A estos principios –hasta ahora ausentes en el proyecto de ley– debe sumarse el de la **debida diligencia**, ampliamente desarrollado en la jurisprudencia interamericana y referido a una obligación ética o legal desarrollada con cuidado, prontitud, agilidad y eficiencia.

La consolidación de los procesos de verdad, justicia y reparación, únicamente es sustentable en la medida que el comportamiento de todas las instituciones públicas involucradas,

⁵² Fuentes de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

⁵³ Sentencia de Inconstitucionalidad 44-2013/145-2013, de 13.07.16.

⁵⁴ Entre el 31 de enero y el 20 de febrero de 2020, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos organizó 12 talleres contando con la participación de más de 600 víctimas directas o familiares de víctimas directas de graves violaciones a derechos humanos ocurridas en el contexto del conflicto armado.

refleja una política estatal orientada a remover todos los obstáculos que impiden la justa satisfacción de los derechos de las víctimas y crean las condiciones necesarias para evitar la repetición de los hechos. Por ello considero oportuno que se revise la integración del Consejo Nacional para la Reparación, en dicho proyecto.

Respecto a las medidas para la reparación integral, debe eliminarse cualquier esbozo o referencia al trato igualitario entre víctimas y veteranos y excombatientes del conflicto armado, pues esta consideración ignora las cuestiones históricas que han mantenido la impunidad, los agravios cometidos, los patrones de actuación y las relaciones de poder ejercidas en la configuración de tales hechos. La cuota indemnizatoria debe responder a la gravedad y los efectos producidos por los crímenes.⁵⁵

En mi calidad de procurador, en funciones y en nombre del señor procurador Apolonio Tobar, veo con agrado que se ha dado carácter oficioso a la información relativa a operativos militares vinculados públicamente a la comisión de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, sin embargo y ante la tradicional denegación de esa información, estimo pertinente contemplar una sanción ante el incumplimiento de la obligación de difundir tal información, de manera similar a lo establecido en el artículo 334 del Código Penal vigente, mismo que refiere la infidelidad en la custodia de registros o documentos públicos.

En nuestra calidad de defensores del pueblo, es objeto de especial preocupación la omisión en este proyecto de ley para dotar de los recursos financieros necesarios para el fiel cumplimiento de todo lo estipulado en el mismo. Resulta inaceptable condicionar el “otorgamiento de los beneficios previstos en esta ley” a la “disponibilidad financiera del Estado”. Por lo que condenamos una vez más esta inapropiada óptica: No se trata de “beneficios” concedidos por gracia y voluntad Estatal, es la necesaria reparación ante los más nefastos crímenes de lo que hablamos.

Respecto del derecho a la verdad y la obligación de juzgar -como ya en otras oportunidades esta Procuraduría ha referido⁵⁶- el legislador debería valorar la creación de una Jurisdicción Especial de Justicia Transicional. La complejidad para el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra y de manera especial, habiendo transcurrido décadas desde que se cometieron, impone la exigencia de conocimientos y aptitudes particulares. La saturación en la carga de trabajo de juezas y jueces ordinarios, la limitación en sus recursos abona a la referida necesidad.

En tanto las víctimas se encuentran al centro de este esfuerzo, resulta menester facilitarles vías y medios para que puedan acceder al sistema de justicia. A ese respecto propongo que quien se considere víctima pueda comparecer de forma personal o a través de apoderado a interponer su denuncia ante la Fiscalía General de la República o podrá presentar querrela ante los Juzgados Especiales; también podrá hacerlo ante cualquier juez de paz, que, teniendo conocimiento, deberá remitir el caso al Juzgado Especial correspondiente, para que éste ordene dar inicio al proceso judicial y emplace a Fiscalía General de la República para comparecer.

Propongo además -como sucede actualmente con personas desaparecidas⁵⁷- que las víctimas puedan comparecer ante la Procuraduría General de la República o la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, quienes deberán asesorarles y tendrán la obligación de dar aviso a Fiscalía General de la República, y facilitar el contacto con la presunta víctima, para que esta pueda iniciar las acciones de su competencia. Corresponde a Fiscalía General de la República la obligación de investigar de forma seria, imparcial y efectiva, orientada a la determinación de la verdad y a la persecución, captura, enjuiciamiento y eventual castigo de los autores de crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra objetos de este proyecto de ley.

El legislador en este proyecto restringe el derecho de acceso a la justicia únicamente para los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en el marco del conflicto

⁵⁵ Ver artículos 43 y 70 del proyecto Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional.

⁵⁶ Ver conferencia de prensa de viernes 21 de febrero de 2020.

⁵⁷ Ver Protocolo de Acción Urgente y Estrategia de Búsqueda de Personas Desaparecidas en El Salvador

armado interno, del 1 de enero de 1980 al 16 de enero de 1992. La Sala de lo Constitucional por su parte, no ha restringido la investigación de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra al período indicado, su criterio presente en la sentencia fue tomar como base el Informe de la Comisión de la Verdad, y referir que quedan excluidos de amnistía los hechos de "...igual o mayor gravedad y trascendencia, que pudieran ser imputados a ambas partes...". En tal sentido señalo que la exclusión de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos fuera de este margen temporal, pudiese ser discriminatoria y contraria a derechos humanos y constitucionales de sus víctimas.

Adicionalmente, debe revisarse el procedimiento referido a la política especial y selección de casos que debe hacer la fiscalía. La doctrina de la PDDH y la jurisprudencia de la Corte IDH han sido consecuentes y reiteradas en el sentido de que, tratándose de crímenes de lesa humanidad y de guerra, no es procedente aplicar medidas que impidan la investigación, y la priorización de casos (si no se hace de manera adecuada) puede ser un obstáculo para garantizar que las víctimas y sus familiares accedan a recursos judiciales adecuados y efectivos para denunciar las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, solicitar la investigación, la sanción correspondiente y las medidas de reparación pertinentes. En tal sentido, debe regularse la situación de los casos que no sean seleccionados para la jurisdicción especial, debiendo garantizar los derechos de las víctimas en la jurisdicción ordinaria.

En ese mismo orden de ideas, las penas deben ser establecidas en proporción a la gravedad y a los efectos producidos, individual y colectivamente. Una disminución automática de la pena, conmutación u otra forma sustitutiva de la ejecución de la pena también es un efecto judicial de la amnistía⁵⁸. Por lo tanto, no es compatible ni con los estándares internacionales de derechos humanos, la doctrina de la PDDH ni las exigencias confirmadas por las víctimas en el proceso de consulta.

La exclusión de participación en cargos públicos es otra sanción para quienes hayan sido encontrados como responsables de los crímenes que nos ocupan, y que ha sido comúnmente adoptada por sociedades que han enfrentado procesos como el que ahora nuestro Estado inicia.

En relación a los derechos de las víctimas debe incorporarse el reconocimiento como tales, aportar pruebas, interponer recursos, recibir asesoría, orientación, acompañamiento psicológico y jurídico, ser tratadas con justicia, dignidad y respeto, mantenerlas informadas.

Además de la adopción de un enfoque diferenciado de víctimas para atender las necesidades de las mujeres y las personas adultas mayores.

Considero oportuno hacer una revisión de la configuración del Registro de víctimas del Centro de documentación de la memoria histórica del Banco Genético, e incluir la asistencia para restaurar la identidad de todas las víctimas y no solo la de las personas reencontradas;

Finalmente, exhorto a las señoras y señores diputados de la Asamblea Legislativa, que garanticen el cumplimiento del mandato constitucional que les vincula, y el estricto apego a lo dispuesto en la sentencia de la Sala de lo Constitucional pronunciada contra la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, que estableció la obligación de legislar en pleno respeto de la dignidad de las víctimas y de sus derechos humanos y de manera especial, los derechos de acceso a la justicia y a la tutela judicial, el derecho a la reparación integral, el derecho a la verdad y la garantía de no repetición de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones al derecho internacional humanitario, solo ello posibilitará una auténtica transición democrática hacia la paz.

27 de febrero de 2020

⁵⁸ Ver artículos 60 y 66 del proyecto Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional.

6. Conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas

El 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas, profundamente preocupada por el aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en el mundo, así como por los arrestos, las detenciones y los secuestros cuando son parte de las desapariciones forzadas o equivalen a ellas, y por el creciente número de denuncias de actos de hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigos de desapariciones o familiares de personas que han desaparecido, decidió⁵⁹ declarar el 30 de agosto de cada año Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

Según Naciones Unidas, se entiende por desaparición forzada todo arresto, detención o traslado contra su voluntad a las personas, o que estas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley⁶⁰, constituye un ultraje a toda la humanidad.

Desafortunadamente El Salvador no es ajeno a dicho fenómeno y en el contexto del conflicto armado dicho delito tuvo una práctica sistemática, utilizada como estrategia de terror por parte de agentes del Estado, lo que la convirtió en un crimen de lesa humanidad, sujeto en todo tiempo y lugar a su persecución, enjuiciamiento y sanción; sin embargo, el Estado salvadoreño no ha tenido la voluntad de romper con la impunidad y la injusticia que aquellas conductas representan, por lo que al día de hoy tales hechos continúan sin ser investigados, sancionados sus autores, ni reparadas las víctimas.

Consciente de la gravedad de las desapariciones forzadas, el concierto de naciones del mundo, aprobó la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas⁶¹ cuya entrada en vigor inició el 23 de diciembre de 2010. Por su parte, en el ámbito de las Américas en junio de 1994 se adoptó la Convención interamericana sobre desaparición forzada de personas; ambos instrumentos internacionales no ha sido suscritos por el Estado salvadoreño⁶² y constituyen herramientas valiosas para combatir dicho delito.

Por lo anterior, con base en las atribuciones otorgadas en el artículo 194 romano I de la Constitución de la República, exhorto al señor Presidente de la República, Nayib Armando Bukele Ortiz, que instruya a la Ministra de Relaciones Exteriores que proceda de inmediato a la firma de la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y de la Convención interamericana sobre desaparición forzada de personas y las someta a la ratificación de la Asamblea Legislativa a fin de memorar la protección jurídica de las víctimas.

A los familiares de las víctimas de desaparición forzada externo mi solidaridad y mi compromiso de seguir velando por que el Estado salvadoreño cumpla sus obligaciones de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de tales conductas que constituyen una afrenta al género humano.

30 de agosto de 2020

⁵⁹ Por medio de la resolución A/RES/65/209.

⁶⁰ Declaración sobre la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas n° 47/133 de 18.12.1992, párrafo 4° del preámbulo.

⁶¹ Estado de ratificación de la Convención internacional https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=55&Lang=SP

⁶² Estado de ratificación de la Convención Interamericana <https://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/a-60.html>

K) Personas migrantes, refugiadas, salvadoreñas en el exterior y retornadas

1. Conmemoración del día Internacional de la Persona Migrante

En mi calidad de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Migrante, declarado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el año 2000, para celebrarse el 18 de diciembre de cada año, con la finalidad de visibilizar la contribución que las personas migrantes realizan en diversos ámbitos: sociales, culturales, económicos, entre otros, en los países de tránsito y destino. Al respecto, expongo lo siguiente:

Sobre los flujos migratorios mixtos, el Salvador forma parte de los países con población migrante en los diferentes flujos. La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) reportó que 3,078 personas migraron en 8 salidas masivas entre los años 2018 y 2019. Por su parte, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en su esfuerzo de sistematizar características de la población involucrada en las mismas, reporta datos estadísticos representativos en los que indica que las personas consultadas expresaron como causas principales de la salida: el mejorar condiciones de vida, la inseguridad, la violencia y la reunificación familiar⁶³.

Esta dinámica colectiva permitió poner en evidencia aspectos que constituyen puntos de preocupación durante mi gestión, entre ellos se encuentran: la falta de mecanismos y respuestas estatales de atención humanitaria en situaciones de crisis o emergencias, lo cual no permite un registro detallado de las personas, la caracterización de perfiles de vulnerabilidad y la identificación de necesidades de protección. Los flujos migratorios masivos, saliendo de Honduras, Guatemala y El Salvador en ocasiones de forma coordinada, generaron reacciones y medidas con un enfoque de seguridad nacional, por parte de los diferentes gobiernos, iniciando con México y posteriormente Estados Unidos a efectos de contener esta modalidad de migración.

En relación a las políticas migratorias regionales, es oportuno destacar que las medidas ejecutivas y administrativas adoptadas por el Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, denominadas “Cero Tolerancia” son aplicadas desde mediados del año 2018.

Según datos de la Conferencia Regional para las Migraciones, celebrada en noviembre del presente año, en el periodo fiscal del año 2018, la U.S Customs and Border Protection detuvo 396, 579 inmigrantes en la frontera; y para el año 2019 reportó 851,508 detenciones de personas⁶⁴. De la cifra del año 2019, el 56% corresponde a grupos o unidades familiares, el 9% corresponde a niñez y adolescencia no acompañados y un 35% a adultos viajando solos. Debe ser objeto de preocupación, los datos que la autoridad migratoria reportó para el año fiscal del 2019, sobre la detención de 12,021 niñas, niños y adolescentes no acompañados; 56,897 grupos familiares y 20, 893 adultos.⁶⁵

Las medidas previamente citadas, indican que el cierre de fronteras garantizado por medio de la militarización ha provocado, que las personas migrantes busquen rutas alternas para ingresar, generando con ello un entorno de inseguridad al transitar en condiciones de máxima vulneración y de menor control de las autoridades. Además, la práctica en la frontera sur de EE.UU. de separar a la niñez y adolescentes de sus madres, padres o responsables, al momento de su detección e intercepción, incluso en periodos indefinidos, en la frontera sur de los Estados Unidos, conlleva graves afectaciones a sus derechos humanos.

⁶³ Organización Internacional para las Migraciones (2018), Encuesta de Caracterización de Personas Migrantes en Tránsito, recuperado de <https://reliefweb.int/report/el-salvador/dtm-ronda-2-el-salvador-encuesta-de-caracterizaci-n-de-personas-migrantes-en-tr>

⁶⁴ Conferencia Regional sobre Migración, Estado de los Flujos Migratorios en la Región, XXIV, Conferencia Regional sobre Migración, Ciudad de Cáyala, Guatemala, noviembre 2019.

⁶⁵ Ibid

Sobre las personas migrantes desaparecidas, es preciso señalar que en el marco de las migración internacional, una cantidad considerable de personas migrantes no son encontradas, principalmente en tránsito por países como Guatemala, México y Estados Unidos, por ello resalto la importancia que el Estado Salvadoreño adopte los *“Principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas”⁶⁶*.

Como defensor del pueblo considero necesario que la búsqueda de los migrantes desaparecidos por parte del Estado Salvadoreño se realice también bajo la presunción de vida, independientemente de las circunstancias de la desaparición o el tiempo que haya transcurrido. Ante ello, es importante, el accionar directo y permanente del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la República, para apropiarse con una amplia participación del Mecanismo de Apoyo Exterior (MAE) de México, el cual impulsa un conjunto de acciones y medidas tendientes a facilitar el acceso a la justicia de las personas migrantes y sus familias; a la fecha esta Procuraduría ha proporcionado asistencia y acompañamiento a familiares de personas desaparecidas, en 43 casos, ante autoridades Mexicanas.

En respuesta a esta realidad de migrantes desaparecidos, la Asamblea Legislativa, realizó una reforma al artículo 30-A de la Ley Especial para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y su Familia, la cual mandata la creación de un “Banco de Perfiles Genéticos” al Instituto de Medicina Legal. Sobre este punto, estimo pertinente, que la creación de un banco para la identificación de migrantes desaparecidos debe contener el empleo de técnicas forenses que permitan garantizar con altos estándares científicos la identificación de restos localizados que trascienden la genética forense. Además de la implementación de protocolos tendientes a garantizar a las familias sus derechos: a la atención psicoemocional, a la participación e información, entre otros.

Al cierre del año 2019 y en lo que respecta a datos de personas retornadas a El Salvador, la OIM⁶⁷ refleja un incremento alarmante del 52.1% de migrantes retornados, tanto de México como de Estados Unidos, en comparación al año anterior. Esta situación es aún más grave en casos de la niñez y adolescencia al observar un aumento considerable en el periodo de enero a octubre del año 2019 con un total de 6,081 niñez retornada, en comparación de 1,979 en el mismo periodo del año anterior.

Por lo antes expuesto en mi calidad de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, en atención al mandato constitucional, que se me ha conferido de conformidad al artículo 194, I, 1º, 7º, 10º y 11º de la Constitución de la República, recomiendo:

- a. Al Señor Presidente de la República, Nayib Armando Bukele y a la Señora Ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill Tinoco, realizar las acciones pertinentes, que permitan que las políticas exteriores en materia de migración, se basen en todo momento en el respeto y garantía de los estándares internacionales de derechos humanos e interpongan como fin primordial el cumplimiento y protección de los derechos fundamentales de las salvadoreñas y salvadoreños, con especial énfasis en las personas con necesidades de protección.
- b. A las autoridades supra citadas, se les recomienda generen los mecanismos de coordinación urgente con las entidades competentes, a efecto de exigir a las autoridades de los Estados Unidos de Norteamérica, que proporcionen condiciones humanitarias y dignas a la niñez y adolescencia no acompañada, que se encuentran en centros de detención, para que se cumpla lo relativo del principio universal del interés superior de la niñez.

⁶⁶ Naciones Unidas, Comité contra la Desaparición Forzada, *“Principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas”* CED/C/7 (19 de abril del 2019).

⁶⁷ OIM (2019), *“Iniciativa de Gestión de Información de Movilidad Humana en el Triángulo Norte”*, recuperado de <https://mic.iom.int/webntmi/descargas/sv/2019/10/ESoct2019.pdf>

- c. **Que las autoridades nacionales lideradas por el Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y su Familia (CONMIGRANTES)**, revisen o en caso de ser necesario reestructuren una política migratoria integral, que posibilite obtener los recursos financieros para las instituciones integrantes del Consejo, para atender a las diferentes poblaciones y perfiles de migrantes más vulnerables en las diferentes etapas del contexto migratorio.
- d. **Insto a la señora Ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill Tinoco y al señor Fiscal General de la República, doctor Raúl Ernesto Melara Morán, a adherirse en atención a sus atribuciones constitucionales a** mecanismos transnacionales, regionales y bilaterales ya creados para intercambiar información y datos de los migrantes para la intervención efectiva e investigación de delitos en perjuicio de personas migrantes salvadoreñas en países de tránsito, para garantizar a las familias afectadas el derecho de acceso a la justicia. Así como establecer cauces o rutas para la coordinación transnacional, incluso mediante la cooperación consular, y designar puntos de contacto para que las familias que busquen a migrantes desaparecidos puedan mantenerse al corriente del estado de la búsqueda y obtener otra información pertinente.⁶⁸
- e. Finalmente le recomiendo a la señora Ministra de Relaciones Exteriores, gire instrucciones a la red consular en México y Estados Unidos, para generar acuerdos o mecanismos fidedignos y científicos para recuperar, identificar y repatriar a El Salvador los restos de los migrantes fallecidos, respetando las costumbres de sus familias, y, en el caso de las personas no identificadas, facilitar la búsqueda e identificación y posterior recuperación de los restos mortales, asegurándose de que reciban un trato digno, respetuoso y adecuado. Así como garantizar los fondos necesarios para los trámites de repatriación de los restos de migrantes fallecidos en contextos migratorios, en adhesión al Pacto Mundial para la Migración Segura Ordenada y Regular.

En esta fecha significativa como titular, de esta institución defensora de derechos humanos, reitero mi compromiso constitucional en seguir velando por la garantía, promoción y defensa de los derechos humanos en los diversos contextos y situaciones migratorias.

18 de diciembre de 2019

F) Derechos de las personas LGBTQ+

1. Homicidio de persona trans ocurrido durante la madrugada del domingo 27 de octubre, en el Bulevar de los Héroes, San Salvador

A través de noticias publicadas en diferentes medios de comunicación⁶⁹, se tuvo conocimiento que en horas de la madrugada del día veintisiete de octubre de dos mil diecinueve, fue asesinada Anahy Miranda Rivas, mujer trans integrante de la población LGBTQ+ de El Salvador, quien desde un vehículo fue sujeta y arrastrada varios metros sobre el bulevar de Los Héroes; y cuyo cuerpo fue encontrado con lesiones en el cráneo y marcas de arrastre en el pavimento en un tramo de dicho bulevar.

En el informe realizado por esta Procuraduría que presido y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo⁷⁰ denominado “Situación de las mujeres trans en El Salvador”, se señaló que la población LGBTQ+, sigue siendo víctima de discriminación, rechazo e intolerancia, ello puede evidenciarse en las graves violaciones a derechos humanos que dicha población sufre, entre ellas, violencia basada en género, violencia sexual, agresiones físicas y verbales, estigmatización y la más grave expresión de rechazo, los homicidios motivados por odio.

⁶⁸ Acuerdos tomados del Pacto Mundial para la Migración Segura Ordenada y Regular, de Marrakech, Marruecos del 11 de diciembre de 2018.

⁶⁹ Véase en la prensa gráfica.com, <https://t.co/5xKkA654f0>, Solo Noticias, <https://www.solonoticias.com/2019/10/27/matan-a-homosexual-frente-a-disco-teca-de-san-salvador/>

⁷⁰ “Informe de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre la situación de los Derechos Humanos de las Mujeres Trans en El Salvador”. San Salvador, 2015.

Así también, entre enero de dos mil nueve y marzo de dos mil diecisiete, esta institución documentó veintiún casos de vulneración del derecho a la vida de la población LGBTIQ+⁷¹, cifra que desde ese entonces, lamentablemente se ha incrementado en ocho casos; todos ellos con coincidentes características de haberse perpetrado por razones de odio. Las débiles, infructuosas o insuficientes investigaciones de tales crímenes, han generado la impunidad para los perpetradores y la violación del derecho de acceso a la justicia para las víctimas, en la inmensa mayoría de casos⁷².

Hechos como el citado, evidencian la más grave intolerancia e irrespeto a derechos fundamentales en nuestra sociedad, y la impunidad casi generalizada respecto de estos casos es simplemente inexcusable. En virtud de lo anterior, y en cumplimiento de mi mandato Constitucional y legal, se ha iniciado de manera oficiosa la correspondiente investigación y se ha sostenido comunicación con familiares y personas allegadas a la víctima, a efecto de poner a su disposición nuestros servicios institucionales y expresando nuestra más amplia solidaridad.

Por todo lo anterior y con base en las atribuciones expresadas en el artículo 194 romano I, ordinales 1°, 3°, 7° y 11° de la Constitución de la República y artículo 11 ordinal 11° de la ley que rige a esta Institución, en mi calidad de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos.

RECOMIENDO:

1. A los funcionarios antes citados, garanticen el derecho de acceso a la justicia para la víctima, sus familiares y población LGBTIQ+ de El Salvador, de manera pronta, eficaz y oportuna, a fin de llevar a los autores y partícipes del hecho ante los tribunales competentes. De igual forma les insto a verificar la totalidad de procesos de investigación activos, en delitos graves cometidos contra la población LGBTIQ+, a fin de garantizar como es debido, el acceso a la justicia para las víctimas.
2. A las autoridades del Gabinete de Seguridad, elevar las acciones necesarias para prevenir la ocurrencia de hechos como el supra citado y refuerquen de forma general, la situación de seguridad de la población LGBTIQ+, enfocándose no solamente en la represión del delito, sino también y como eje prioritario en la protección a las víctimas, sus familiares y población en general.

Como defensor de los derechos humanos, reitero a la población LGBTIQ+, mi compromiso de verificar y dar seguimiento de cerca a los procesos de esclarecimiento de éste y demás hechos de violencia en su contra; así como, continuar impulsando, acciones que visibilicen, reconozcan y protejan sus derechos.

29 de octubre de 2019

2. Desaparición y posterior hallazgo del cuerpo sin vida de una persona trans, en el río Torola, departamento de Morazán

En cumplimiento de las atribuciones conferidas en los artículos 194 romano I ordinales 1°, 7°, 10° y 11° de la Constitución de la República de El Salvador y 11 ordinales 11° y 12° de la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

En mi calidad de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos EXPRESO:

Que el día sábado 9 de noviembre, a través de diferentes medios de comunicación, se tuvo conocimiento que en horas de la mañana fue localizado en el río Torola, Departamento de Morazán, con evidentes señales de tortura⁷³, el cuerpo sin vida de Jade Camila Díaz, mujer

⁷¹ Primer Informe Situacional sobre Crímenes de Odio cometidos en contra de la Población LGBTI. Marzo 2017.

⁷² De 29 casos documentados por PDDH, 21 se encuentran en investigación en FGR, 2 se han archivado provisionalmente y sólo 6 de ellos se encuentran judicializados.

⁷³ Véase en <https://lanoticiasv.com/localizan-el-cadaver-de-una-mujer-trans-con-evidentes-senales-de-tortura-la-victima-habia-sido-repor>

trans integrante de la población LGBTIQ+, quien se encontraba desaparecida desde el día miércoles 6 de noviembre de 2019, y presuntamente en esa fecha tras recibir una llamada en su teléfono celular en horas de la tarde, salió de su casa y desde entonces su familia ya no supo más de ella, ante esto, denunciaron su desaparición en el puesto policial del municipio de Lolotiquillo, departamento de Morazán, sin embargo, la denuncia no fue recibida por autoridades policiales de dicho puesto policial, argumentando los agentes de la PNC que no podían hacer nada pues “había transcurrido muy poco tiempo entre la desaparición y el aviso que presentaban”.

Sobre lo anterior, debo señalar que recientemente me pronuncié por el homicidio de otra persona trans ocurrido durante la madrugada del domingo 27 de octubre del presente año, en el boulevard de los Héroes de San Salvador, por lo que una vez más expreso mi repudio y enérgica condena⁷⁴ ante éste tan reprochable y atroz hecho que deja en evidencia la crueldad, odio y barbarie con la que se comenten los crímenes en contra de la población LGBTIQ+, especialmente contra las mujeres trans, población vulnerable por su identidad y expresión de género. Como ya antes se ha expresado desde PDDH, este tipo de crímenes deben ser fuente de grave preocupación e indignación, pues queda en evidencia que la inseguridad y violencia de la que son víctimas tanto mujeres como hombres trans, ha provocado el dolor irreparable para la familia de Jade Díaz⁷⁵, por lo anterior, externo mis sentidas condolencias y solidaridad a su familia y a las diferentes organizaciones de la población LGBTIQ+ , a la vez reitero mi compromiso de velar por la garantía y respeto a sus derechos fundamentales.

Como Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, muestro mi preocupación ante la negligente actuación de la Policía Nacional Civil en el hecho antes citado, en virtud de no haber garantizado una respuesta oportuna y eficaz a los familiares de Jade Camila Díaz, omisión que si hubiera sido pertinente y efectiva posiblemente se pudo haber evitado el hecho que ahora debemos lamentar. Por lo cual, me he obligado a destacar que existe el “Protocolo de Acción Urgente y Estrategia de Búsqueda de Personas Desaparecidas en El Salvador”⁷⁶, orientado a garantizar los derechos de personas desaparecidas, proceder a su búsqueda inmediata y realizar las diligencias de investigación necesarias para lograr su localización, mismo que tuvo que haberse activado al momento de la primera denuncia.

Por lo anterior, en mi calidad de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, y de conformidad a la normativa constitucional referida y la Ley que rige a esta Procuraduría, hago un enérgico y contundente llamado:

- a. Al señor Fiscal General de la República, doctor Raúl Ernesto Melara Morán y al señor Director General de la Policía Nacional Civil, comisionado Mauricio Antonio Arriaza Chicas, en el sentido que garanticen que la investigación de este homicidio sea realizada con diligencia, celeridad y efectividad, debiendo tomar en cuenta dentro de sus actuaciones la permanente discriminación y el odio que lamentablemente algunas personas realizan en contra de la población con identidad o expresión de género diversa.
- b. A las autoridades supra citadas les recomiendo, garanticen la seguridad de los miembros de la familia de Jade Camila Díaz y en general de personas que puedan favorecer el derecho de acceso a la justicia en el presente caso.
- c. Al señor Director General de la Policía Nacional Civil, comisionado Mauricio Antonio Arriaza Chicas, y a la señora Inspectora General de Seguridad Pública licenciada Carol Beatriz Murcia, se les recomienda que investiguen la presunta omisión del personal

⁷⁴ Pronunciamiento del Señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, licenciado José Apolonio Tobar Serrano, ante el homicidio de personas trans ocurrido durante la madrugada del domingo 27 de octubre en el bulevar de los Héroes, San Salvador. 29-10-2019.

⁷⁵ / “Informe de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre la situación de los Derechos Humanos de las Mujeres Trans en El Salvador”. San Salvador, 2013.

⁷⁶ /Suscrito por la PDDH, FGR, PNC y otras instituciones del Estado, en el marco del Proyecto “Fortalecimiento institucional para casos de desapariciones asociadas al crimen organizado, para reducir la impunidad en El Salvador. 2018.

policial en el municipio de Lolotiquillo, departamento de Morazán quienes se negaron a recibir el primer aviso sobre la desaparición de la persona ahora asesinada; debiendo girar instrucciones a todo el personal policial en el sentido de adoptar las medidas pertinentes para garantizar que a futuro la respuesta policial frente a denuncias o avisos de esta naturaleza deben de ser atendidas de inmediato.

- d. A las autoridades del Gabinete de Seguridad, se les recomienda que articulen acciones de protección urgentes y eficaces para prevenir que continúen ocurriendo hechos como el señalado; resultando imperioso e impostergable impulsar desde el Estado, acciones que garanticen los derechos humanos a la vida, integridad personal y seguridad de la población LGBTIQ+. Así como garantizar que cesen los delitos contra el fundamental derecho a la vida e integridad física de todas las personas víctimas por el actuar delincuencia que genera luto y dolor a las familias y sociedad salvadoreña en general.

Finalmente, junto a mi enérgica condena ante este crimen de odio y mi absoluto repudio frente a toda forma de discriminación en contra de la población LGBTIQ+, deseo expresar la más amplia solidaridad personal e institucional y nuestra completa disposición para el necesario trabajo conjunto y articulado entre PDDH, organizaciones y activistas que velan por el irrestricto respeto de sus derechos fundamentales.

10 de noviembre de 2019

3. Reactivación de la Mesa de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, sobre derechos de la población LGBTIQ+

En cumplimiento de la atribución contenida en el artículo 12, ordinal 8° de la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, referida a *“Crear, fomentar y desarrollar nexos de comunicación y cooperación con organismos de promoción y defensa de los derechos humanos, gubernamentales, intergubernamentales y no gubernamentales, tanto nacionales como internacionales, y con los diversos sectores de la vida nacional”*, en mi calidad de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, expreso con beneplácito:

Que ayer once de noviembre de dos mil diecinueve, junto a organizaciones y activistas independientes que integran la Mesa Permanente de la PDDH sobre Derechos de la Población LGBTI, sostuve nuestra primera reunión de coordinación, en la que se adoptó el acuerdo de reactivar de forma inmediata el trabajo en dicho espacio democrático; ello con el objeto de realizar acciones de coordinación, análisis e incidencia política a favor de la defensa, promoción y garantía de los derechos humanos de esta importante grupo poblacional.

En dicha reunión reiteré mi compromiso de trabajar y acompañar sus reivindicaciones conforme al principio de legalidad y al mandato constitucional a mi conferido. Recalqué mi absoluta solidaridad con las víctimas de crímenes de odio y otros graves actos de discriminación, así como mi contundente condena y rechazo hacia este tipo de hechos atroces, expresando además mi compromiso para la investigación de dichas violaciones a derechos humanos y la vigilancia institucional que sostendré en garantía del derecho de acceso a la justicia.

Por su parte, representantes de organizaciones y activistas compartieron sus expectativas respecto del trabajo institucional, expresaron su disponibilidad para elevar acciones conjuntas de incidencia en la vigencia de sus derechos e hicieron algunas propuestas y recomendaciones para mejorar la articulación del trabajo en común, mismas que recibo con agrado y que serán objeto de mi absoluta consideración.

En atención a sus planteamientos expresé además que he girado instrucciones a Procuradurías Adjuntas, Departamentos del sistema de Protección y Delegaciones Departamentales, para brindar acompañamiento y favorecer el goce de los derechos humanos de todas las personas sin excepción, debiendo prestar un servicio con calidad y eficacia en todo el territorio nacional.

Estoy seguro que este esfuerzo acomedido, comprometido y articulado entre sociedad civil y Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, se traducirá a futuro en progresos en la vigencia de los derechos humanos de la población LGBTIQ+ y en la construcción de una sociedad más respetuosa e inclusiva.

12 de noviembre de 2019

4. Asesinato de persona LGBTIQ+ ocurrido en la madrugada del 16 de noviembre de 2019, en el cantón Cara Sucia, municipio de San Francisco Menéndez, departamento de Ahuachapán

En cumplimiento de las atribuciones conferidas en el artículo 194 romano I ordinal 1°, 7°, 10° y 11° de la Constitución de la República de El Salvador, el señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos en funciones, licenciado Julio Guillermo Bendek Panameño, externa que:

Esta Procuraduría tuvo conocimiento que en horas de la madrugada del dieciséis de noviembre de dos mil diecinueve, en el barrio San Martín, cantón Cara Sucia, municipio de San Francisco Menéndez, departamento de Ahuachapán; fue encontrado el cuerpo sin vida de una persona conocida socialmente como Victoria, integrante de la población LGBTIQ+. Según se informó, su cuerpo se encontraba completamente desnudo y con evidentes señales de violencia.

Este condenable crimen, perpetrado con señales de odio, es el tercer homicidio cometido en las últimas tres semanas⁷⁷ y el cuarto en el presente año contra personas LGBTIQ+. Por ello, además de generar indignación y reproche social, debe ser objeto de la inmediata y urgente acción estatal para frenar la vorágine de violencia y discriminación que dicha población sufre, con investigaciones efectivas que conduzcan al procesamiento y sanción de los responsables de tales delitos.

Este día, en horas de la mañana, personal de esta Procuraduría constató que la Oficina Fiscal de Ahuachapán aún no había identificado a la persona asesinada, a pesar de haber transcurrido más de cuarenta y ocho horas de haber sido encontrado su cuerpo. En similar situación se encontraba la Policía Nacional Civil de dicha localidad, donde se informó al personal de esta institución que desconocían la identidad de la persona y su pertenencia a la población LGBTIQ+; a pesar de que varias organizaciones a favor de los derechos de la referida población, se pronunciaron ampliamente en redes sociales lamentando este nuevo homicidio, publicando fotografías recientes de la víctima e información valiosa sobre su identidad.

Ante tal situación, expreso mis condolencias y solidaridad a los familiares de la víctima y a todas las organizaciones del colectivo LGBTIQ+, a la vez que condeno estos abominables actos de odio y violencia. Asimismo, externo mi preocupación por la poca o nula adopción de medidas de prevención y protección a favor de este grupo y por la débil respuesta de autoridades demostrada hasta ahora para garantizar su derecho a la vida e integridad, así como el acceso a la justicia para sus familiares.

Por lo tanto, con base en las atribuciones expresadas en el artículo 194 romano I, ordinales 1°, 3°, 7° y 11° de la Constitución de la República **RECOMIENDO:**

1. Al señor Fiscal General de la República, doctor Raúl Ernesto Melara Morán y al señor Director General de la Policía Nacional Civil, comisionado Mauricio Arriaza Chicas, garanticen que la investigación de este homicidio sea realizada con diligencia, celeridad, efectividad y sin discriminación, tomando en cuenta las manifestaciones de rechazo,

⁷⁷ / Pronunciamiento del Señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, licenciado José Apolonio Tobar Serrano, ante el reciente asesinato de persona trans ocurrido durante la madrugada del domingo 27 de octubre en el bulevar de Los Héroes, San Salvador, del 29/10/2019; y Pronunciamiento del Señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, licenciado José Apolonio Tobar Serrano, ante la desaparición y posterior hallazgo del cuerpo de persona trans, en el río Torola, departamento de Morazán. 10/11/2019.

odio e intolerancia que algunas personas muestran a otras por su identidad y/o expresión de género; así también, investigar las razones por las cuales, presuntamente, hubo tardanza para identificar a la víctima.

2. Asimismo, garantizar la seguridad de los familiares de Victoria y a otras personas que puedan favorecer el acceso a la justicia en el desarrollo de la investigación.
3. A las autoridades del Gabinete de Seguridad, reitero el llamado realizado por el señor Procurador, José Apolonio Tobar Serano, para que se adopten las acciones necesarias tendientes a prevenir que hechos como el narrado sigan sucediendo y reforzar, de forma general, la seguridad de la población LGBTIQ+, enfocándose no solamente en la persecución del delito; sino también, y como eje prioritario, en la protección de las víctimas, sus familiares y la población en general.

Como Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos en funciones, reafirmo a la población LGBTIQ+ el compromiso asumido por el señor Procurador de verificar y dar seguimiento cercano a los procesos de esclarecimiento de este y demás hechos de violencia en su contra; así como, de continuar impulsando acciones que visibilicen, reconozcan y protejan sus derechos humanos.

Asimismo, comunico que esta Procuraduría ha iniciado expediente para dar seguimiento a las investigaciones y determinar la responsabilidad a la que hubiere lugar por incumplimiento de deberes por parte de las instituciones involucradas, a quienes oportunamente se solicitarán los informes correspondientes.

19 de noviembre de 2019.

5. Asesinato de persona integrante LGBTIQ+ ocurrida el 7 de marzo de 2020 en Intipucá, La Unión

En cumplimiento de las atribuciones conferidas en el artículo 194 romano ordinal 1°, 7°, 10° y 11° de la Constitución de la República, externo que:

Esta Procuraduría tuvo conocimiento del hallazgo del cuerpo calcinado de persona integrante de la población LGTBIQ+, conocida como Tita, el siete de marzo del corriente año, en el caserío La Agencia, Cantón La Leona, municipio de Intipucá, Departamento de La Unión, quién, según información recabada, fue reportada como desaparecida el 6 de marzo por su familia.

Hecho que reviste para este servidor, una grave preocupación por la poca o nula adopción de medidas de prevención y protección a favor de esta población, y por la débil respuesta de las autoridades demostrada hasta ahora para garantizar sus derechos a la vida e integridad y acceso a la justicia para sus familias.

Como Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, repudio y condeno tal acción, la cual se suma a los crímenes cometidos durante los años 2019 y 2020 que están siendo investigados por las autoridades competentes.

En virtud de lo anterior, además de expresar mis condolencias y solidaridad a los familiares de la víctima y organizaciones de la población LGBTIQ+, en cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales a mi conferidas, he girado instrucciones de registrar el caso de manera oficiosa, investigar y verificar la actuación de la Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República y demás autoridades competentes.

Por tanto, con base en las atribuciones expresadas en el artículo 194, romano I, ordinales 1,3,7 y 11 de la Constitución de la República, RECOMIENDO:

1. Al Fiscal General de la República, doctor Raúl Ernesto Melara Morán, y al Director General de la Policía Nacional Civil, Comisionado Mauricio Arriaza Chicas, garantizar que la investigación de este homicidio se realice con la debida diligencia, sensibilidad, celeridad y sin discriminación.

2. Tomar en cuenta el odio, rechazo e intolerancia hacia la identidad y expresión de género diversa que sufre tal población, agotar las posibles líneas de intervención que surjan en el caso y de haber personas detenidas, garantizar el debido proceso a las partes, la seguridad de los familiares de Tita y demás personas que pudieran favorecer el acceso a la justicia.
3. A las autoridades del gabinete de seguridad reitero, el llamado a adoptar las acciones necesarias tendientes a prevenir que hechos como el narrado sigan sucediendo, reforzar de forma general al seguridad de la población LGBTIQ+, enfocándose no solamente en la persecución del delito, sino también, a la protección de las víctimas, sus familiares y población en general.

10 de marzo de 2020

6. Día Internacional contra la Homo, Lesbo, Bi y Transfobia

En cumplimiento de las atribuciones que me han sido conferidas en el artículo 194 romano I ordinal 1°, 7°, 10° y 11° de la Constitución de la República de El Salvador, este 17 de mayo, día internacional contra la homo, lesbo, bi y transfobia, es importante reconocer que si bien es cierto, el artículo 3 de nuestra Carta Magna se refiere al principio de igualdad y no discriminación, en nuestro país a la fecha, aún persisten prácticas sistemáticas discriminatorias hacia la Población LGBTIQ+.

Cada 17 de mayo, debe ser una oportunidad para incrementar la sensibilización y respecto a los derechos humanos de tal población, así como reconocer que en el Estado salvadoreño existe la diversidad, por lo tanto, es necesario fomentar el respeto a la orientación sexual y expresión de género.

En ese sentido, desde el inicio de mi gestión como Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, en noviembre del año 2019, en cumplimiento a la atribución contenida en el artículo 12 ordinal 8° de la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, sostuve reunión con organizaciones y activistas independientes que integran la Mesa Permanente de la PDDH sobre Derechos de la Población LGBTI, reactivándose de forma inmediata dicho espacio de trabajo, reiterando mi compromiso de acompañarles en sus justas reivindicaciones, conforme al principio de legalidad y mandato constitucional a mi conferido.

En virtud de lo anterior, en tan importante fecha, reitero como motivos de preocupación:

La aún pendiente discusión del Proyecto de “Ley de Identidad de Género”, presentado por la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género en El Salvador, propuesta que se encuentra en la Comisión de Mujer e Igualdad de Género de la Asamblea Legislativa.

La desaparición de la Dirección de Diversidad Sexual por la eliminación de la Secretaría de Inclusión Social, instancia encargada de promover la erradicación de la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la administración pública y en la población en general; atribución asumida por la Unidad de Género y Diversidad del Ministerio de Cultura.

La ausencia de aplicación real y efectiva del Decreto Ejecutivo N° 56, y otras políticas públicas y buenas prácticas, ya existentes a favor de la población LGBTIQ+, especialmente de las personas trans.

La falta de investigación diligente y objetiva, juzgamiento, sanción y reparación a las víctimas y sus familiares, de crímenes cometidos por odio, lo que ha propiciado un clima de impunidad, que continua beneficiando a los responsables de estos horrendos y atroces hechos.

En el marco de la crisis sanitaria a raíz del COVID 19, esta Procuraduría ha evidenciado, la ausencia de medidas efectivas o programas de asistencia y protección por parte del Estado, dirigidas específicamente a la población trans, y más a las personas adultas mayores y las que ejercen el trabajo sexual.

Por lo tanto, con base en las atribuciones expresadas en el artículo 194 romano I ordinales 1, 3, 7 y 11 de la Constitución de la República. Recomiendo:

A la Comisión de Mujer e Igualdad de Género de la Honorable Asamblea Legislativa, retomar la discusión objetiva y apegada a derecho con las organizaciones de personas trans, sobre el Proyecto de Ley de Identidad, para su futura aprobación.

Al Fiscal General de la República y al Director General de la Policía Nacional Civil, investigar los crímenes cuyas víctimas son personas LGBTIQ+, con la debida diligencia, sensibilidad y conforme al artículo 129 numeral 11 del Código Penal, en vista que éstos pudieron ser motivados por odio hacia la identidad y expresión de género de las víctimas.

Al Señor Presidente de la República, crear, adoptar y continuar con las buenas prácticas y políticas públicas necesarias, para evitar toda forma de rechazo e intolerancia hacia tal población, por parte de agentes del Estado.

Al Ministerio de Salud, Ministerio de Gobernación y Ministerio de Cultura, como la instancia rectora en la atención a dicha población, les reitero mi recomendación de asegurarles, en este contexto de emergencia, los programas o medidas necesarias que les garanticen los derechos a la alimentación, salud, asistencia económica, seguridad y no discriminación.

A la población en general, respetar los derechos humanos de la Población LGBTIQ+, con miras a erradicar la violencia y la discriminación en su contra

Finalmente, aprovecho la oportunidad para felicitar a las organizaciones y activistas independientes LGBTIQ+, en esta fecha, enfatizando mi compromiso de velar por el cumplimiento, garantía y respeto de sus derechos humanos.

17 de mayo de 2020

7. Día Orgullo LGBTIQ+

Esta conmemoración se remonta al mes de junio del año 1969, con los disturbios de Stonewall Inn en Nueva York, considerados el origen de la lucha de la población LGBTIQ+ por la reivindicación de sus derechos, lo cual es importante conocer con el objeto de contribuir a eliminar el estigma y discriminación hacia dicha población, siendo la manifestación de rechazo más grave, los crímenes de odio de los que han sido víctimas, especialmente las mujeres trans.

Como Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, en cumplimiento de las atribuciones que me han sido conferidas en el artículo 194 romano I ordinal 1°, 7°, 10° y 11° de la Constitución de la República, en el marco de este día, en aras de lograr el justo reconocimiento, cumplimiento y protección de los derechos humanos de la población LGBTIQ+, expreso lo siguiente:

Con respecto de la situación actual de dicha población en el ejercicio de sus derechos civiles e individuales, existe una doble vulnerabilidad por la discriminación a la que a diario se enfrentan en los diferentes ámbitos de su vida y en el marco de esta crisis sanitaria a raíz del COVID 19; en esto último, la Procuraduría ha evidenciado la ausencia de medidas efectivas o programas de asistencia y protección por parte del Estado, dirigidas a favor de este colectivo, y más a las personas trans adultas mayores y las que ejercen el trabajo sexual, razón por la que fue requerido de la titular del Ministerio de Cultura, informe sobre las políticas, buenas prácticas y programas de asistencia o protección integral impulsados por la Unidad de Género y Diversidad de tal cartera de Estado a favor de tal población, reiterando la recomendación de adoptar de manera urgente, las medidas necesarias que garanticen los derechos a la alimentación, salud, asistencia económica, seguridad y no discriminación; sin embargo, se recibió como respuesta en fecha 02/06/2020, que por motivos de atención a la pandemia y cumplimiento al Decreto Legislativo en ese momento vigente, no era posible dar respuesta a esta Procuraduría a corto plazo, sino hasta estar habilitados para reanudar los plazos procesales y administrativos suspendidos.

A la fecha aún no se ha iniciado -en la Asamblea Legislativa- la discusión para posterior aprobación de la Ley de Identidad, la cual contribuiría al goce de derechos civiles, políticos e individuales, así como a evitar la discriminación, en ese sentido, esta Procuraduría ha reiterado a la Comisión de Mujer e Igualdad de Género de la Asamblea Legislativa que inicie la discusión de una manera objetiva y apegada a derecho en donde se involucre a las organizaciones de personas trans.

En virtud de lo anterior, con base en las atribuciones arriba expresadas, en mi calidad de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos Reitero y Recomendando:

A las señora Ministra de Cultura Suecy Callejas Estrada, adoptar las medidas necesarias, con enfoque inclusivo y de respeto a la diversidad, para garantizar la protección integral de la población LGBTIQ+, durante y después a esta crisis sanitaria, así como dar continuidad a las políticas, buenas prácticas y normativa, orientada a contrarrestar cualquier acto de estigma y discriminación en contra de dicha población, recordándole que el cumplimiento de derechos humanos no puede esperar a que se habiliten plazos administrativos.

A la Comisión de Mujer e Igualdad de Género de la Asamblea Legislativa, iniciar a la brevedad posible, la discusión objetiva y apegada a derecho del Proyecto de Ley de Identidad, involucrando a las organizaciones de personas trans.

A la sociedad en general, respetar los derechos humanos de la población LGBTIQ+, en aras de contrarrestar actos de violencia, intolerancia y discriminación que pongan en peligro a dicho colectivo.

Finalmente, aprovecho la ocasión para felicitar a todas las organizaciones sociales por el trabajo realizado como defensoras y defensores de derechos humanos de la población LGBTIQ+, reiterándoles el compromiso de seguir acompañando sus reivindicaciones conforme al principio de legalidad y mandato constitucional que me ha sido conferido.

28 de junio de 2020

G) Pueblos indígenas

1. Conmemoración del 88° Aniversario del Genocidio-Etnocidio de 1932 fosa común, Izalco

El año de 1932 debe traer a la memoria del pueblo salvadoreño, uno de los momentos más cruentos y vergonzosos de toda su historia. Debemos recordar con tristeza e indignación el aniquilamiento masivo de indígenas, particularmente en el occidente del país, bajo el régimen militar del General Maximiliano Hernández Martínez.

El 22 de enero de 1932, en los municipios de Ahuachapán, Juayúa, Tacuba, Izalco, Nahuizalco, entre otros, militares iniciaron la ejecución de grupos de indígenas desarmados, sin distinción de edad o sexo. Eran fácilmente identificables, por su fiel apego a costumbres, su lengua, su forma de vestir, su forma de relacionarse con la tierra, su forma de comprender la salud y la educación, su vida comunitaria, su “buen vivir”, su forma de relacionarse con las fuerzas y las energías creadoras. Los militares mostraron especial saña contra líderes indígenas como Feliciano Ama, quienes fueron capturados y ejecutados con barbarie públicamente, con el objeto de infundir terror y acallar sus voces. Los aniquilamientos fueron sumándose hasta alcanzar cifras que algunos analistas calculan entre 10 mil y 30 mil personas⁷⁸.

Despojarles de sus tierras fue la mayor de las causas, explotarles económicamente hasta el grado de acercarse a la esclavitud fue una práctica común en las siguientes décadas en las que la represión, la discriminación, las burlas, el engaño, el olvido, fueron el pan de cada

⁷⁸ / Fuente, H. y otros. “Recordando 1932: La Matanza, Roque Dalton y la Política de la Memoria Histórica”. FLACSO, El Salvador, 2010. Pág. 39.

día. Aún ahora encontramos lamentables vestigios que dan cuenta de tales atrocidades; buena parte de la población adulta y de la juventud actual, desconoce la riqueza de sus raíces y sus orígenes. Los gobiernos suelen impulsar políticas indigenistas⁷⁹, imponiéndolas sin la menor consulta, intentando cosificar, banalizar y explotar con beneficio de mercado, la pureza de espíritu y las tradiciones ancestrales.

Y la impunidad dolorosa pero común y ya acostumbrada consecuencia de los más impensables crímenes, aún ahora se levanta con miserable menosprecio del derecho y la sed de justicia y reparación de nuestro pueblo.

Pero afortunadamente la historia no acabó ahí, ni todo el poder militar, ni décadas de esas prácticas salvajes e inhumanas consiguieron alcanzar la médula de nuestros pueblos, su esencia.

Debemos reconocer con júbilo importantes pasos que en la historia reciente nuestros pueblos han dado al país. Parece mentira que hace tan solo poco más de una década, algunos funcionarios públicos aseveraron de manera oficial ante la comunidad internacional que en El Salvador no había pueblos indígenas, que se habían extinguido. Ahora, gracias al esfuerzo de los pueblos mismos, sus organizaciones, cooperantes nacionales e internacionales, e instituciones aliadas como la que ahora con humildad dirijo; los pueblos indígenas gozan de reconocimiento constitucional y el Estado está obligado a adoptar políticas a fin de mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores y espiritualidad.

Contamos también con un Plan de Acción Nacional de Pueblos Indígenas, del cual han surgido un sistema de indicadores y módulos de formación en derechos humanos y derechos indígenas con un particular enfoque en la situación de las mujeres indígenas, mismos que a través de la Escuela de Derechos Humanos de PDDH y de forma conjunta con líderes, lideresas indígenas, y otros actores, serán fuente de importantes conocimientos para el ejercicio de nuestros derechos.

Presenciamos pues como la grandeza de nuestra ancestral herencia resurge, ahora los tatas y las nantsin nos transmiten el conocimiento y ayudan a comprender la cosmovisión, abren nuestros ojos y estrechan nuestras manos, invitándonos a reencontrarnos, a reconocernos, hoy como antaño, como hermanos.

Las mujeres indígenas asumen importantes liderazgos y responsabilidades en pleno ejercicio de sus derechos, reconozco su importante papel como portadoras de saberes y conocimientos ancestrales, dadoras y sostenedoras de vida desde la cosmovisión de los Pueblos Indígenas.

Muchos de nuestros jóvenes no se ocultan más y levantan su frente orgullosos de su identidad, involucrándose en actividades como ésta, que dignifican nuestra historia.

Nuestra niñez aprende la lengua de los abuelos y abuelas desde “Las Cunas Nahuat”, verdaderos espacios de transmisión de milenaria sabiduría e importante iniciativa y patrimonio de comprometidas nantsin, como la señora Juliana Ama, a quien ahora en representación de todas saludo; a ustedes mi más sincero respeto.

Son diferentes pero sobre todo esperanzadores estos nuevos tiempos, contruidos con el esfuerzo de muchos que con incontables sacrificios han pintado este nuevo paisaje. Pero nos quedan por delante importantes batallas:

- a. Debemos garantizar que la Asamblea Legislativa emita una Ley Secundaria sobre Derechos de Pueblos Indígenas, a través de una bien realizada consulta libre, previa e informada.

⁷⁹ /El Indigenismo, implica políticas concebidas y diseñadas por los no indios, para ser aplicadas a los otros; constituyendo una negación sistemática y del algún modo planeada, de cualquier autonomía para los grupos socioculturales diferenciados. Díaz Polanco H. “Autonomía Regional: la autodeterminación de los pueblos indios, Siglo XXI”, México, 2ª Edición, 1996. P. 42.

- b. Es menester realizar acciones de incidencia en aras de lograr, la pronta firma y ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.
- c. Debemos asegurarnos que el Estado ejecute como es debido el Plan Nacional de Pueblos Indígenas, la Política Nacional de Salud de Pueblos Indígenas y la Política Pública de Pueblos Indígenas.
- d. El Estado debe atender las observaciones y recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, entre ellas: Contar con información desglosada sobre la población, datos fiables, actualizados y completos; debiendo garantizar la participación de los pueblos indígenas en la validación e implementación de la metodología del próximo Censo y asegurando la incorporación del principio de auto identificación.
- e. Debemos fomentar la participación de las mujeres indígenas en el ejercicio de sus derechos y en la vida política. A ello contribuirá la Escuela Permanente de Formación sobre Derechos de Pueblos Indígenas, hoy bajo la responsabilidad de esta Procuraduría, a través de los módulos de formación en derechos humanos con enfoque de género desde la cosmovisión de la mujer indígena, que antes mencioné.
- f. Debemos garantizar el derecho a la verdad y a la reparación, frente a las graves violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad perpetrados en 1932. Es necesario dignificar nuestra historia y que el Estado reconozca la senda que jamás debe volver a pisar.

Presento finalmente mis respetos a todas y todos los presentes, agradezco que ahora me reciban y me escuchen, y en este lugar sagrado elevo a ustedes mi compromiso de acompañarles y trabajar de manera conjunta e incansable para su dignificación y la consecución de nuestros derechos.

25 de enero de 2020

H) Personas con discapacidad

1. Homicidio del señor Elías Antonio Hernández Campos, hijo del defensor de derechos humanos de las personas con discapacidad y miembro de la junta directiva departamental de Sonsonate de la Asociación de Lisiados de Guerra de El Salvador “héroes de noviembre de 1989” – ALGES, señor Lorenzo Hernández

En mi calidad de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y Coordinador de la Mesa Permanente de la PDDH de las Personas con Discapacidad, lamento el homicidio del señor Elías Antonio Hernández Campos, de 36 años de edad, quien es hijo del señor Lorenzo Hernández, defensor de derechos humanos de las personas con discapacidad y miembro de la Junta Directiva Departamental de Sonsonate de la Asociación de Lisiados de Guerra de El Salvador “Héroes de Noviembre de 1989” – ALGES, reconocida organización por su trayectoria en la defensa los derechos de las personas con discapacidad a consecuencia del conflicto armado.

El hecho aconteció la mañana del sábado 09 de noviembre del presente año, en el Cantón La Guacamaya, jurisdicción de Nahuizalco, Sonsonate, mientras el señor Hernández Campos, realizaba sus labores de transporte privado. Según la información obtenida por esta Procuraduría, hombres desconocidos esperaban a la víctima en el lugar de los hechos, quienes procedieron a bajarlo de su vehículo, ocasionándole varias heridas, presuntamente con arma de fuego y arma blanca, que le produjeron la muerte de inmediato. Acto seguido los responsables del hecho, procedieron a incendiar su vehículo de trabajo.

Como defensor del pueblo, manifiesto mi condena total, ante el hecho acontecido y particularmente por la continuidad de la situación de violencia e inseguridad social que impacta gravemente a nuestro país, la cual violenta diariamente los derechos humanos, como lo es el derecho a la vida, a la integridad, seguridad personal y a la propiedad, entre otros. Situación que en esta ocasión ha afectado a la familia del señor Hernández, un defensor permanente en la lucha del respeto y garantía de los derechos humanos de las personas con discapacidad, quien desde hace varios años contribuye con la reivindicación de los derechos y libertades fundamentales de ese colectivo, en su calidad de dirigente departamental de ALGES.

En esta oportunidad expreso al señor Lorenzo Hernández, a la familia doliente, a los miembros y miembros de ALGES, mis sentidas condolencias por la irreparable pérdida del señor Hernández Campos, y al mismo tiempo les exhorto a continuar su trabajo reivindicativo a favor de los derechos humanos.

En consecuencia, en el marco del amplio mandato constitucional que me ha sido conferido, de conformidad con lo establecido en los artículos 194, romano I, 1 ordinal 1°, 7°, 10° y 11° de la Constitución de la República de El Salvador y 11 literal 11° y 12° de la Ley que rige a ésta Procuraduría, **INSTO:**

Al señor Fiscal General de la República, doctor Raúl Ernesto Melara Morán, que de acuerdo a sus facultades constitucionales y desde la política de persecución penal, realice las acciones pertinentes, que permitan esclarecer el hecho acontecido y se garantice el derecho a una pronta y cumplida justicia a las víctimas.

Al señor Director General de la Policía Nacional Civil, Comisionado Mauricio Antonio Arriaza Chica, que, de acuerdo a sus facultades legales, realice las coordinaciones correspondientes con la Fiscalía General de la República, con el objetivo de obtener resultados efectivos en la investigación del suceso antes señalado, así mismo se garanticen las medidas de seguridad pertinentes a favor de las víctimas.

Finalmente, como Procurador, reitero mi compromiso de velar por el cumplimiento y respeto de los Derechos Fundamentales, de la población salvadoreña.

10 de noviembre de 2019

2. En ocasión de conmemorarse el 03 de diciembre como Día Nacional e Internacional de las Personas con Discapacidad

En mi calidad de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y coordinador de la Mesa Permanente de la PDDH de las Personas con Discapacidad, en esta fecha 03 de diciembre, en la que se conmemora del Día Nacional e Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, EXPRESO:

Que el 14 de octubre de 1992, la Organización de las Naciones Unidas, mediante la resolución 47/3, proclamó el 3 de diciembre, como **Día Internacional de las Personas con Discapacidad**. La misma, *“insta a los gobiernos, organizaciones nacionales, regionales e internacionales, a que presten su total cooperación en la observancia de esta fecha”*. De tal manera, que el Estado salvadoreño pocos años después esa conmemoración internacional, mediante decreto legislativo número 483, de fecha 03 de noviembre de 1995, declaró el 03 de diciembre como **Día Nacional de las Personas con Discapacidad**.

Estando próximos a cumplir tres décadas de esas declaraciones tanto a nivel internacional como nacional, reconozco que en el ámbito interno el Estado salvadoreño ha ejecutado algunas medidas tendentes a avanzar en el respeto y garantía de los derechos humanos y libertades fundamentales de la población con discapacidad en El Salvador, que conforme a las estadísticas resultantes de la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad realizada en el año 2015, reflejó que el 6.4% del total de la población tiene discapacidad,

representando con los datos recabados en aquel momento un total de 410,798 personas. De esas 260,915 se encuentran en la zona urbana, mientras que 149,883 en la zona rural.

La realización misma de esa Encuesta Nacional y el documento “Análisis de Caracterización de las Personas con Discapacidad” a partir de esa Encuesta, presentado hace exactamente un año, debe evidenciarse como un avance importante propiciado por el Estado para asegurar los derechos humanos de la población con discapacidad, al igual que lo es que la Lengua de Señas Salvadoreña haya sido reconocida como lengua natural y oficial de las personas sordas y que se haya dado apertura a la petición de las organizaciones de personas con discapacidad para el retiro de la reserva genérica a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en febrero de 2015. Asimismo, debe considerarse un paso trascendental la aprobación de legislación reciente que transversaliza en su generalidad a la población con discapacidad como: la Ley de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia – LEPINA, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia y la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, entre otras. No menos importante han sido las reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y su Reglamento General de Transporte Terrestre, destinada reducir las barreras de accesibilidad en el transporte público.

Pese a esos progresos también es necesario reflexionar sobre las obligaciones de respeto y garantía pendientes de cumplir por el Estado salvadoreño ante las personas con discapacidad. Precisamente como Procurador comparto las preocupaciones expresadas recientemente por el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad a través de las Observaciones Finales sobre los Informes Periódicos Segundo y Tercero Combinados de El Salvador, emitidas en octubre de este año. Entre esas destaco la persistencia de prácticas de exclusión y discriminación, incluso a través de la denegación de la capacidad jurídica, del irrespeto de su autonomía en la toma de decisiones y del acceso a la justicia, por condición de discapacidad. La falta de participación política y pública, la ausencia de medidas destinadas a promover la vida independiente de las personas con discapacidad y para garantizar la inclusión en la educación, empleo, formación profesional y vocacional; pero también de las referidas a la protección contra el maltrato, el abuso y toda forma de violencia en contra de las personas con discapacidad, incluso la privación de libertad por condición de discapacidad, particularmente agravado en el caso de mujeres y niñez con discapacidad. Asimismo, las graves omisiones para garantizar en igualdad de condiciones el acceso a la salud, a la rehabilitación, a la protección social, a la vivienda, a formar una familia, entre otros derechos.

Esos incumplimientos comprometen al Órgano Legislativo, al Ejecutivo y al Judicial, así como a las demás instituciones que no han logrado comprender el alcance de sus responsabilidades para prever en sus presupuestos la inclusión de personas con discapacidad, estableciendo también planes y estrategias institucionales concretas para asegurar sus derechos y libertades fundamentales. Todo lo anterior, deriva en el sostenimiento de una sociedad altamente excluyente, que percibe a las personas con discapacidad desde el enfoque asistencialista para “ayudarlas” o del enfoque médico para “normalizarlas”, sin considerar que son personas sujetas de derecho. Esto se observa cuando siguen empleándose términos peyorativos para referirse a las personas con discapacidad, inclusive en la normativa; pero, además, que les invisibiliza y discrimina por su discapacidad cuando concibe la accesibilidad física, urbanística, arquitectónica, de la comunicación, de la información o en el transporte, como un “gasto innecesario”.

A excepción de la legislación antes referida, la mayoría de nuestras normas como: el Código de Familia, Ley Procesal de Familia, Ley de Salud Mental, Ley Especial de Adopciones, Código Penal, el Código Electoral, incluso la Constitución de la República, inhiben el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad, al considerarlas “incapaces” de tomar sus propias decisiones. Todavía no hemos trascendido de los mecanismos legales de sustitución de la voluntad como la declaratoria judicial de incapacidad, negando el ejercicio de derechos a través de los mecanismos de apoyo para la toma de decisiones, con énfasis para las personas con discapacidad intelectual o psicosocial. Esta es una de las recomendaciones modulares para el avance sustancial de los derechos humanos que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reiteró este año al Estado salvadoreño.

Lo expuesto en los párrafos anteriores, es motivo de grave preocupación para este Procurador, puesto que he observado que los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad son sistemáticamente violentados en nuestro país. Considero un parámetro revelador del nivel de cumplimiento o incumplimiento de los derechos de esta población, las recomendaciones que el Comité en mención realizó a El Salvador en septiembre de 2013 y sobre las que insistió en octubre de este año, puesto que el Estado no logró demostrar ante ese órgano de ONU que había acatado las recomendaciones anteriores. Esta Procuraduría constató que fue reducido el número de instituciones que conocieron estas recomendaciones, ya que las instituciones responsables de su divulgación, no lo consideraron relevante sino hasta aproximarse el término para el rendir nuevamente el informe periódico de país ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Estoy plenamente convencido que un paso significativo para el progreso de los derechos de esta población está por concretarse cuando sea aprobado el ahora proyecto de Ley de Inclusión de las Personas con Discapacidad, que actualmente está en su última etapa de análisis y debate en el seno de la Comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad. Proceso que inició desde febrero de 2019, luego de tres años de espera para que iniciara, y que a partir de marzo fue abierto a la participación de una representación de organizaciones de la Mesa Permanente de la PDDH de las Personas con Discapacidad, con el apoyo técnico de personal de esta institución.

En tal sentido, reconozco la apertura y el esfuerzo que desde esa Comisión legislativa se realiza para culminar ese proceso y saldar esa deuda pendiente desde 2015. No obstante, también estoy obligado a reiterar la importancia de que el contenido esencial de ese proyecto de ley sea respetado en consideración que es una ley destinada a garantizar derechos de las personas con discapacidad, con énfasis en el reconocimiento de su capacidad jurídica y la adopción de medidas legales para facilitarla, incluyendo la creación de mecanismos de apoyo para la toma de decisiones con plena autonomía y los ajustes de procedimiento para el efectivo acceso a la justicia, la designación en los presupuestos institucionales para financiar el cumplimiento efectivo de la ley, el replanteamiento del Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad – CONAIPD como ente autónomo y rector de la política pública en discapacidad, así como la responsabilidad en el cumplimiento de esa ley por las Municipalidades y entidades privadas, derivándose además el establecimiento de infracciones, sanciones y medidas de reparación por la vulneración de derechos a las personas con discapacidad.

Como Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, reafirmo mi apoyo decidido a los esfuerzos que las organizaciones de y para personas con discapacidad realizan en la exigencia de sus derechos, así como en la promoción de los mismos. Durante mi gestión quiero potenciar acciones para que la población con discapacidad acuda a esta Procuraduría a interponer sus denuncias por la violación de sus derechos humanos, así como también asistiéndoles para la activación de los mecanismos existentes, así como los que surgirán con la aprobación del proyecto de ley, para la reclamación por afectación de derechos que sea cometida tanto por las instituciones públicas como por particulares.

No desaprovecharé esta fecha importante para alentar a las personas con discapacidad, sus familiares y sus organizaciones a continuar exigiendo decididamente sus derechos humanos y libertades fundamentales, sabiendo que han sido sus esfuerzos incansables los que han permitido vislumbrar la aprobación de la Ley de Inclusión de las Personas con Discapacidad. Por ello, reitero mi firme compromiso y el respaldo de esta Procuraduría para acompañar sus acciones de incidencia ante el Estado, que una vez aprobada y vigente esa Ley se concrete las medidas oportunas para su cumplimiento efectivo.

Por todo lo anterior, en mi calidad de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, con base en el mandato constitucional, que se me ha conferido de conformidad al artículo 194, romano I de la Constitución de la República, recomiendo:

- a. A la Honorable Asamblea Legislativa:** 1. Para que la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad, culmine el proceso de

análisis y aprobación del dictamen favorable del proyecto de Ley de Inclusión de las Personas con Discapacidad, privilegiando a la persona con discapacidad como sujeto de derechos. 2. Al Pleno de esa Honorable Asamblea Legislativa, una vez presentado el dictamen favorable proceder sin dilación a la aprobación del proyecto de Ley de Inclusión.

- b. Al Órgano Ejecutivo:** 1. A través de todas las instituciones que conforman dicho Órgano de Estado y sus entidades autónomas, establecer e implementar planes, programas, proyectos y cualquier otra medida para garantizar efectivamente los derechos de las personas con discapacidad; incluyendo las asignaciones presupuestarias destinadas a la atención e inclusión de este colectivo. 2. Adoptar medidas urgentes para la promoción y divulgación de las recomendaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en sus Observaciones Finales de octubre de 2019. 3. Actualizar la Política Nacional de Atención Integral a las Personas con Discapacidad, estableciendo plazos y responsables institucionales de su ejecución. 3. Respaldar en su momento, conforme a las atribuciones de la Presidencia de la República conferidas en los artículos 135 y siguientes de la Constitución de la República, el proceso de promulgación y vigencia de la Ley de Inclusión de las Personas con Discapacidad.
- c. Al Órgano Judicial:** 1. Promover reformas legales destinadas a regular los ajustes de procedimiento para asegurar el efectivo acceso a la justicia sin discriminación por condición de discapacidad y propiciar el respeto de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. 2. Realizar acciones inmediatas para la contratación de intérpretes de Lengua de Señas Salvadoreña para asegurar a las personas con discapacidad el acceso a justicia y el respeto de las garantías judiciales en igualdad de condiciones, asimismo la adquisición de impresoras Braille y otras acciones necesarias.

03 de diciembre de 2019

I) Niñas, niños y adolescentes

1. Muerte Violenta de una Adolescente encontrada en Santo Tomás

En cumplimiento de las atribuciones conferidas en el artículo 194 romano 1 ordinal 1º, 7º, 10º y 11º de la Constitución de la República de El Salvador, externa que:

El sábado 26 de octubre de este año, se tuvo conocimiento a través del periódico digital Diario1.com⁸⁰ del hallazgo del cadáver de una joven entre 15 y 20 años de edad, en el kilómetro 15 de la carretera que conduce de Comalapa hacia San Salvador, quien probablemente fue estrangulada. Se reportó que el cuerpo estaba semidesnudo y mostraba varias perforaciones en su rostro, presuntamente cometidas con arma corto punzante.

Al respecto, conforme al mandato constitucional que me fue conferido, en esta ocasión, condeno este hecho bárbaro que refleja el odio y menosprecio hacia la mujer y particularmente, la ahora víctima; demostrando una vez más, indicios de actitudes misóginas contra las mujeres en El Salvador en todas las etapas de su vida. Por ello, resulta de suma importancia que las autoridades correspondientes cumplan con sus obligaciones a la luz de lo establecido en el marco jurídico nacional e internacional en materia de derechos específicos de las mujeres, de niñez y adolescencia.

A treinta años de conmemorar la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, este tipo de hechos evidencian la necesidad que se realice un trabajo coordinado por parte de las instituciones estatales, en materia de protección de la niñez y adolescencia, por lo que es necesario exhortar a las mismas para que este tipo de casos no queden en impunidad.

En consecuencia, para garantizar el derecho de acceso a la justicia de la víctima y sus familiares, la investigación habrá de conducirse bajo los parámetros de respeto al interés superior de la adolescente y su familia, libre de patrones estereotipados y prejuicios que,

⁸⁰ Ver: <http://diario1.com/nacionales/2019/10/desfiguran-con-picahielos-el-rostro-de-una-adolescente-y-dejan-cadaver-en-santo-tomas/>

lejos de permitir obtener la verdad real sobre lo sucedido, culpabilicen a la víctima e intenten justificar la conducta de las personas agresoras.

Por lo tanto, en mi calidad supra indicada, de conformidad a la normativa constitucional referida, y de la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, insto:

Al Fiscal General de la República, doctor Raúl Ernesto Melara Morán, y al Director General de la Policía Nacional Civil, Comisionado Mauricio Antonio Arriaza Chicas, a que investiguen este hecho con objetividad, garantizando la debida diligencia, y el enfoque de género desde la perspectiva interseccional. Además, exhorto a que adopten las medidas para garantizar la seguridad, reparación integral, y derecho a la verdad de las personas familiares de la víctima, así como la reserva de su identidad, para evitar futuras transgresiones a sus derechos humanos.

Manifiesto mis condolencias a la familia afectada, y reitero mi indignación y cero tolerancia hacia la violencia contra las mujeres y niñas, comprometiéndome a mantenerme vigilante a que las instituciones cumplan sus atribuciones de Ley, con respeto a los estándares internacionales de Derechos Humanos para que éste y todos los casos de violencia no sean más cifras o emblemas de impunidad.

28 de octubre de 2019

2. Resolución de la Cámara Primero de lo Penal de la Primera Sección del Centro, en relación al caso del Segundo Magistrado de la Cámara Tercero de lo Civil de la Primera Sección del Centro, licenciado Eduardo Jaime Escalante Díaz, por atribuírsele el delito de agresión sexual en perjuicio a una niña de 10 años de edad

En mi calidad de Procurador, ante la resolución de la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro de San Salvador, que resolvió sobre los hechos atribuidos por la Fiscalía General de la República (FGR) al Magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz, quien el pasado 19 de febrero del año 2019, fue acusado de agredir sexualmente a una niña de diez años. Expreso lo siguiente:

Que de acuerdo al mandato constitucional que me ha sido conferido, a efecto de vigilar el cumplimiento de los derechos humanos y libertades fundamentales de la población salvadoreña. En ese sentido, deseo pronunciarme una vez más sobre las obligaciones del Estado de El Salvador en cuanto a respetar, proteger y garantizar a todas las niñas, adolescentes, y mujeres, una vida libre de violencia y discriminación, de conformidad a los estándares reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y otros instrumentos internacionales que son ley de la República.

Durante mi gestión, he instruido trabajar para erradicar cualquier forma de maltrato y/o abuso hacia la niñez, incidiendo para articular esfuerzos y superar prácticas de abuso de poder que afectan directamente la integridad física y emocional de las niñas, niños y adolescentes.

La violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres tiene su asidero en la existencia de una estructura androcéntrica y misógina que reproduce estereotipos sexistas; lo cual es un hecho discriminatorio y, por tanto, una grave violación a los derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres; y por ello estoy en contra de cualquier situación y acción de maltrato y abuso realizado a una niña, niño o adolescente, sin importar la condición social.

Lamento que en nuestro país las niñas, niños y adolescentes sigan siendo víctimas de trata, homicidios, suicidios, lesiones, desapariciones, violaciones, agresiones sexuales, privaciones de libertad, mutilaciones, desamparo, maltrato, entre otras abominables acciones que les niegan sus elementales derechos humanos. *“Que el día 31 de octubre del corriente año, en el cumplimiento de mi mandato Constitucional, manifesté mi preocupación que*

*un funcionario judicial exprese que el tocamiento a una niña no sea considerado como delito y que esta Procuraduría estará vigilante del respeto y la garantía de los Derechos Humanos, de toda niña víctima de delito, en concordancia con los instrumentos protectores de los derechos de la niñez, adolescencia y de las mujeres*⁸¹. Posición que ratifiqué El 1 de noviembre del presente año, en una entrevista durante el acto de “presentación de respeto a las víctimas de muerte y desaparición forzosa en el contexto del conflicto armado, realizado en el Monumento a la Memoria y la Verdad”, en el Parque Cuscatlán”.⁸²

De igual manera en fechas tres y cuatro de este mes, manifesté, mediante publicaciones en redes sociales que, *todos los funcionarios y funcionarias estamos obligados a garantizar los derechos de la niñez; las niñas deben crecer y desarrollarse en ambientes sanos; nadie debe tocar a una niña o niño*. Con el hashtag #TOCARNIÑASSÍEDELITO.

De acuerdo a información de la Fiscalía General de la República, de los casos registrados por delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, el 93.02% corresponden a niñas, adolescentes y mujeres; la misma situación se presenta en los casos de agresiones sexuales, pues de 991 casos registrados, el 80.93% ocurrió en niñas, adolescentes y mujeres.

Cabe mencionar que, en el año 2018, el Ministerio de Salud Pública registró 665 inscripciones prenatales de niñas y adolescentes de 10 y 14 años; de igual manera se ha identificado que otra forma de violencia física y sexual, son las uniones tempranas, señalándose que 17,746 niñas y adolescentes entre 12 y 17 años viven en dicha condición.⁸³

Convencido que debe de existir el pleno cumplimiento de la norma jurídica encaminada a la garantía de derechos de la niñez y, principalmente al cumplimiento del interés superior de dicha población, por parte de las instituciones administrativas y judiciales, aunado al respeto del derecho de las Mujeres a vivir una vida libre de violencia y discriminación, en todas las etapas de su vida, es importante que se judicialicen todos los casos de violencia sexual, en aras de garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas, en donde imperen las reglas del debido proceso, el enfoque de género, y, en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes, el interés superior de este grupo poblacional.

Es cuestionable que en la sentencia se enfoquen los hechos denunciados sin la perspectiva interseccional, que permita visibilizar las diferencias entre la niña y el supuesto agresor, ya que se afirma en la sentencia que el ánimo lúbrico no podía satisfacerse en las condiciones en las que se dio el hecho, escudándose en la tradicional denominación de estos delitos como de alcoba, de tal manera que según lo expuesto- el hecho de que los tocamientos hayan sucedido en la vía pública, a una hora iluminada, desacreditan que éstos pudieran tener como “fin perseguido por el sujeto activo, que es la satisfacción”⁸⁴, llama la atención que si ese no era el fin, ¿cuál sí lo era?

La Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció sobre la naturaleza discriminatoria de los estereotipos de género en las investigaciones conducidas por los entes estatales. En esa línea, expresó que: “La Corte ya ha señalado cómo justificar la violencia contra la mujer y, de alguna manera, atribuirles responsabilidad en virtud de su comportamiento es un estereotipo de género reprochable que muestra un criterio discriminatorio contra la mujer por el solo hecho de ser mujer.”

De lo anterior se desprende que el Estado debe dirigir las investigaciones desde una perspectiva de género, a saber: a través de actuaciones alejadas de aquellas que pretendan justificar la conducta de los agresores, y en vez, busquen culpabilizar a la víctima. Siento afirmar que lo anterior es lo que proyecta la lectura de la sentencia en comento, que no abona a generar las condiciones para que la persona afectada se sienta protegida por el sistema.

Lamento, de sobremanera, que, la decisión judicial publicada, genere una conmoción social de la envergadura mostrada por diferentes instituciones del Estado, organizaciones de la

⁸¹ @PDDH EL SALVADOR, de fecha uno de noviembre de 2019.

⁸² @PDDH EL SALVADOR, de fecha uno de noviembre de 2019.

⁸³ <http://www.conna.gob.sv/>

⁸⁴ Ver: Sentencia de la Audiencia Preliminar, de la Cámara Primera de lo Penal, de la Primera Sección del Centro, pronunciado en el expediente referencia 75-Antej.-2019, párrafo 2.19.

sociedad civil y otros organismos internacionales. Es especialmente preocupante que la postura adoptada por los Magistrados de la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro envíe un mensaje de desesperanza a la niñez, puesto que su lectura desalienta la denuncia y normaliza que cualquier tipo de vulneración hacia la niñez deba mantenerse en secreto por las víctimas y sus familiares, analizarse en apego al principio de legalidad, considerando éste, basado en la normativa penal nacional vigente, y no en respeto y ejercicio del control convencional.

A 30 años de la conmemoración de la Convención sobre los Derechos del Niño, la resolución dictada por la referida Cámara evidencia que a pesar que se avanzó en la regulación de normativas para la garantía de derechos y especialmente el Derecho al Debido Proceso, al promulgarse la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, que en su artículo 52 relaciona que, en cualquier procedimiento, judicial o administrativo, las niñas, niños y adolescentes tienen derecho al debido proceso, en los términos consagrados en la Constitución de la República, especialmente en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico.

Condeno enérgicamente cualquier acto constitutivo de violencia de género contra las niñas, adolescentes y mujeres, particularmente en este mes en que se conmemora el Día Internacional y Nacional de la No Violencia contra las Mujeres, e incito a las instituciones del Estado a garantizar sus derechos a una vida libre de violencia y discriminación, de acceso a la justicia, garantía de la debida diligencia; de conformidad con los parámetros nacionales e internacionales de Derechos Humanos. Por mi parte, reitero mi compromiso de mantenerme vigilante de las actuaciones de las diferentes instituciones, dentro de mis atribuciones constitucionales, para asegurar que prevalezca la justicia y el interés superior de la niñez.

Por lo tanto, con base en las atribuciones relacionadas en el artículo 194 romano I, ordinales 1°, 3°, 7° y 11° de la Constitución de la República, en mi calidad de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, RECOMIENDO:

1. Al Estado salvadoreño a cumplir la “Observación 5 del Comité de los Derechos del Niño, sobre la insuficiente aplicación de la LEPINA, y en particular del Sistema Nacional de Protección de la Niñez y la Adolescencia, en el que se hace referencia al Estado Parte, que asigne los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para su aplicación y revise las disposiciones sobre los procedimientos administrativos y judiciales para garantizar el acceso y protección a la justicia de los niños y niñas a los servicios de protección y a la justicia”.
2. A la Fiscalía General de la República para que de acuerdo a su mandato constitucional interponga el respectivo recurso de apelación, para asegurar una resolución con enfoque de derechos humanos de la niñez y adolescencia, de género y victimológico; aplicando las leyes, sin importar la procedencia del imputado, garantizando la aplicación de la Política de Persecución Penal en Materia de Violencia contra las Mujeres.
3. Al Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, CONNA, para que desde su competencia continúe ejerciendo irrestrictamente la plena vigilancia de las distintas políticas y acciones de omisión en las que se hubiesen incurrido y emitir las recomendaciones pertinentes.

Exhorto, a la sociedad civil, para que rompa paradigmas, basados en el adulto-centrismo, de manera que se exija el cumplimiento de las normas regulatorias por parte de las instituciones judiciales. Reafirmo mi compromiso de velar por el respeto irrestricto a los derechos de las niñas a una vida libre de violencia y discriminación, acceso a la justicia, y reparación integral.

7 de noviembre de 2019

3. 30° Aniversario de la Convención Sobre los Derechos del Niño

Cada 20 de noviembre se conmemora el reconocimiento de los derechos humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes a nivel mundial, por la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, por parte de la Organización de las Naciones Unidas en el año de 1989, esta celebración constituye un avance significativo en la protección de las garantías mínimas que la niñez y adolescencia debe tener en el mundo. Convirtiéndose además en el tratado de derechos humanos más ampliamente ratificado de la historia y que ha logrado que los gobiernos reconozcan, explícitamente, que los niños, niñas y adolescentes tienen los mismos derechos humanos que los adultos.

Para nuestro país, esta celebración constituye el compromiso que debemos asumir todas y todos, en la protección y defensa de los derechos de este grupo etario de la población; pero, además el compromiso del Estado salvadoreño, por mejorar el nivel de vida, a través de sus diferentes políticas, programas e instituciones.

A 30 años de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, por la Asamblea General de las Naciones Unidas y 29 años que El Salvador le ratificó, el 27 de abril de 1990 por Decreto Legislativo N° 487, reconozco de que han existido avances en el cumplimiento de este tratado internacional, tal como la creación de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, el Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, y la reforma al Código de Familia, en la que se prohíbe las uniones matrimoniales con personas menores de edad. No obstante, a ello, aún existen graves carencias y obstáculos para la protección y cumplimiento de los derechos emanados en la misma.

En consonancia con lo anterior, expreso que si bien es cierto un aniversario más de la Convención sobre los Derechos del Niño es motivo de alegría y regocijo al recordar esa memorable fecha, también constituye un momento propicio para hacer un balance de los avances y retrocesos en la aplicación de dicho tratado, a fin de tomar las medidas oportunas que nos permitan celebrar en un contexto más justo e inclusivo para la niñez y adolescencia

Por lo anterior, en cumplimiento de las atribuciones establecidas en la Constitución de la República, en los artículos 194 romano I ordinales 1°, 7°, 10° y 11° y 11 ordinales 1°, 7°, 10° y 11° de la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en mi calidad de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos RECOMIENDO:

1. Al presidente de la República, señor Nayib Bukele, crear las políticas públicas específicas y la designación de los recursos necesarios, para garantizar las condiciones mínimas de los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes, especialmente en las áreas de salud, alimentación, educación, vivienda, seguridad y protección en concordancia además con la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia;
2. Al señor Fiscal General de República, doctor Raúl Melara, a efecto que genere todas las condiciones que permitan garantizar la efectiva investigación y judicialización de casos sobre niñas, niños y adolescentes, apelando al principio de su Interés Superior y asegurando, así mismo, la reparación integral del daño causado a las víctimas;
3. A la señora directora Ejecutiva Interina ad honorem del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, licenciada Yúdice Abigail Sánchez, para que, a partir de sus atribuciones, de cumplimiento a la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia y la Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, garantizando la eficaz y pronta respuesta de las Juntas Departamentales de Protección, designando mayor recurso para los mismos. De igual forma, garantizar el buen funcionamiento de los Comités Locales de Derechos y la conformación de los que hacen falta por ser creados, Artículo 154 LEPINA;
4. Y al Órgano Judicial por medio del Presidente en cuanto a garantizar el acceso a la justicia de forma pronta y eficaz, asegurando, asimismo, la reparación efectiva e integral.

Exhorto a la sociedad civil y familias salvadoreñas, para conforme el principio de corresponsabilidad, adopten todas las medidas de cuidado y resguardo de nuestras niñas, niños y adolescentes, para hacer mejores ciudadanas y ciudadanos.

20 de noviembre de 2019

4. Día Internacional de la lucha contra el Cáncer Infantil

Cada 15 de febrero se conmemora en todo el mundo, el día internacional de la lucha contra el cáncer infantil, que como objeto tiene sensibilizar y concientizar, a la población y los Estados, sobre los desafíos a los que se enfrentan día a día niñas, niños y adolescentes, con una enfermedad desgarradora y muy destructiva; y de la que nuestro país también padece.

Según la Organización Mundial para la Salud, la frecuencia del cáncer del infantil es baja, pues sólo representa entre el 0.5% y el 4.6% de la carga total de morbilidad por esta causa. Las tasas mundiales de incidencia oscilan entre 50 y 200 por cada millón de niñas y niños en las distintas partes del planeta.

En nuestro país, según la Fundación Ayúdame a Vivir, existen un aproximado de 800 Niñas, Niños y Adolescentes padeciendo algún tipo de cáncer, que atienden en colaboración con el Hospital Nacional Benjamín Bloom. Y aun cuando la leucemia y el osteosarcoma son los tipos de cáncer con mayor padecimiento, existen otros tipos de cáncer, que también cobran la vida de nuestras niñas, niños y adolescentes.

Por lo anterior, considero, que cualesquiera que sean las cifras de Niñas, Niños y Adolescentes padeciendo cáncer en nuestro país, en concordancia con el Interés Superior del Niño y el Derecho a la Vida y Supervivencia, reconocido en la Convención sobre los Derechos del Niño, en los artículos 3 y 6; y en la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, 12 y 16, el Estado y sociedad salvadoreña, deben destinar todos los recursos y esfuerzos, para ayudar a sobrellevar y salvar las vidas de cada Niña, Niño y Adolescente que padezca algún tipo de cáncer.

Por lo anterior, en mi calidad de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, hago el siguiente llamado:

A la señora Ministra de Salud, doctora Ana Bendek y al señor Ministro de Hacienda, licenciado Nelson Eduardo Fuentes, destinar más recursos para la atención exclusiva, tratamiento y combate de todos los tipos de cáncer en Niñas, Niños y Adolescentes, especialmente los recursos destinados al Hospital Nacional Benjamín Bloom.

Al señor director del Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, doctor Ángel Ernesto Alvarado Rodríguez, mantener acciones prioritarias para la atención, tratamiento y curación de las y los pacientes de todo tipo de cáncer que se presenten a dicho nosocomio

Reconozco el heroico y admirable trabajo que realiza la Fundación Ayúdame a Vivir, en su contribución para la lucha de todo tipo de cáncer infantil en El Salvador y les animo a continuar con su trabajo.

Me solidarizo y aliento a cada Niña, Niño, Adolescente y familia que lucha contra esta enfermedad, a continuar con los diferentes tratamientos, pues la mayoría de los cánceres detectados a tiempo son curables, y que cuenten con esta Procuraduría para la garantía de sus derechos fundamentales, si así fuera necesario.

15 de febrero del 2020

5. Día Nacional e Internacional contra el Trabajo Infantil

A nivel nacional e internacional, cada 12 de junio se conmemora el “Día Mundial Contra el Trabajo Infantil”, como iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para recordar la situación de millones de niñas, niños y adolescentes en el mundo y exigir a los Estados partes, garantizar la erradicación del Trabajo Infantil en todas sus expresiones y prevenir así graves violaciones a sus derechos humanos.

En nuestro país, se reconoce el “Día Nacional contra el Trabajo Infantil”, según Decreto Legislativo No 953, de fecha 3 de febrero del año 2006., como forma de reconocer el deber del Estado de luchar por erradicar y prevenir este problema.

En ese sentido, el Comité de Derechos del Niño de la ONU, señaló a El Salvador en el año 2018 que: (...) a pesar de los esfuerzos realizados para reducir el trabajo infantil, el número de niños que trabajan, es sistemáticamente elevado, y recomienda al Estado parte que refuerce sus medidas para luchar contra la explotación económica de los niños, especialmente en las zonas rurales, y en particular de las niñas que trabajan en el servicio doméstico y de los niños varones que trabajan en la agricultura y el comercio.

Según el informe de la Organización Internacional del Trabajo, “COVID-19 and Child Labour: a Time of Crisis, a time to Act [COVID-19 y trabajo infantil: En tiempos de crisis”, es hora de actuar]; el trabajo infantil ha disminuido en 94 millones de niños y niñas trabajando desde 2000, una mejora que ahora podría verse amenazada debido a que las estimaciones globales en 2017 indicaban que 152 millones de niños trabajaban en todo el mundo.

De acuerdo al documento “Magnitud y características del trabajo infantil en El Salvador 2015”, el porcentaje de la población infantil y adolescente en El Salvador, de edades comprendidas entre los 5 y 17 años, rondaba en 1,587,456 de personas; estando conformada mayormente por población masculina, concentrada en las zonas urbanas. Las actividades a las que se dedica la población infantil y adolescente de 5 a 17 años de edad, son la producción económica (10,5%), la asistencia a la escuela (87,0%) y la prestación de apoyo en las tareas domésticas del hogar (71,8%). Del total de niños, niñas y adolescentes, 193,677 realizan tareas peligrosas en su propio hogar.

Para el año 2015, la tasa de trabajo infantil fue del 8.9 %, y se encontraban en esta situación 140,700 niños, niñas y adolescentes. Esta población se concentraba principalmente en el grupo de adolescentes de 14 a 17 años de edad, siendo en su mayoría del sexo masculino. De la población en trabajo infantil, 123,259 realizaban trabajos peligrosos –que incluye también al grupo de 5 a 13 años de edad, que desempeñan tareas peligrosas–. De este total, 67,148 estaban expuestos a trabajo peligroso “por su naturaleza”, 33,663 desarrollaban labores peligrosas “por su naturaleza y por sus condiciones”, y 22,448 estaban involucrados en trabajo peligroso “por las condiciones en las que realizaba la actividad laboral”.

Es oportuno y debo señalar que, no existen datos actualizados sobre la problemática real del trabajo infantil por parte del Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía o Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia.

Instancias a las cuales les debo recordar que nuestra legislación regula y les mandata su deber de protección de la Niñas, Niños y Adolescentes contra el trabajo infantil o la erradicación del mismo; así lo estipula la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA), desde su artículo 59 al 71.

Por lo antes expuesto, como Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, veo con preocupación que desde hace varios años, el Estado salvadoreño a través de sus instituciones, no ha impulsado políticas y programas, para atender la problemática; permitiendo caer en la peligrosa posibilidad de “naturalizar” el fenómeno, especialmente en la coyuntura durante y post la emergencia causada por el COVID-19, en el que los niveles de pobreza, se han incrementado.

Por lo anterior, en uso de mis facultades Constitucionales establecidas en el artículo 194 romano I hago un llamado a las siguientes autoridades:

1. Al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, retomar la lucha contra el trabajo infantil y las peores formas de trabajo infantil, crear y fortalecer espacios institucionales para atender la problemática y la protección para nuestras niñas, niños y adolescentes. Y actualizar las cifras sobre niñas, niños y adolescentes víctimas de trabajo infantil y peores formas de trabajo infantil en El Salvador.
2. A la señora Ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, incluir en sus políticas de atención y trabajo, programas y mecanismos, para combatir y erradicar, la deserción escolar a causa del trabajo infantil.
3. A la señora Directora Ejecutiva Ad-honorem del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, incorporar dentro de la Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, acciones concretas, para prevenir y erradicar, las distintas formas de trabajo infantil, especialmente de las peores formas de trabajo infantil. Además, a contribuir con la actualización de las cifras sobre niñas, niños y adolescentes víctimas de trabajo o peores formas de trabajo infantil en El Salvador.
4. A la señora Ministra de Economía, que la Dirección General de Estadísticas y Censos, actualice los datos y estadísticas, sobre el número de Niñas, Niños y Adolescentes, que desempeñan algún trabajo, formal o no formal en El Salvador.

Asimismo, hago un llamado a la sociedad salvadoreña, para unirse a la lucha contra el trabajo infantil, en cualquiera de sus expresiones, denunciarlo y a proteger a nuestra niñez y adolescencia.

12 de junio de 2020

6. Celebración del Día Internacional de la Juventud

El 12 de agosto de cada año, se celebra el “Día Internacional de la Juventud”, según resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, emitida en 1999 y siguiendo las recomendaciones de la Conferencia Mundial de Ministros de la Juventud (Lisboa, 1998).

Dicha celebración busca promover el papel de las juventudes como socias esenciales en los procesos de cambio y generación de espacios para la reflexión y participación proactiva ante los desafíos y problemas a los que se enfrentan. En ese sentido, el lema de este año es **“El compromiso de la juventud por la acción mundial”**, para destacar el papel protagónico asumido con conciencia y responsabilidad por parte de la juventud a nivel local, nacional y mundial, con el objetivo de enriquecer los procesos y las instituciones nacionales y multilaterales, así como identificar aquellos aspectos que se requieren mejorar para una efectiva representación y participación en vida pública de la sociedad.

Este año, nos enfrentamos a la peor emergencia humanitaria mundial a consecuencia de la pandemia de COVID-19, la emergencia climática y a condiciones económicas mundiales desfavorables, lo cual, sin duda también ha afectado directamente a nuestro país. Por lo tanto, es importante insistir en que las juventudes de El Salvador, siendo tan diversas, merecen ser atendidas, escuchadas e incluidas, con políticas públicas acordes a su heterogeneidad y que estén encaminadas a la satisfacción de sus derechos humanos en este contexto actual, desde cada una de sus expresiones y/o necesidades.

Por otra parte, respecto a las implicaciones que la pandemia traerá a la humanidad en aspectos socioeconómicos, es importante mencionar que el desempleo juvenil en América Latina ha llegado a la tasa más alta en los últimos 20 años. En el caso de El Salvador, donde la juventud comprende a personas entre los 15 y 29 años y constituye el 28% del total de la población, ha habido un significativo incremento de jóvenes que no estudian ni trabajan, alcanzándose el 23.8% de jóvenes de 15 a 24 años. Así, el 71.7% de este sector poblacional

está fuera del sistema educativo, mientras que el 13.6% está desempleado; por lo que las posibilidades de desarrollo de sus capacidades y de progreso son limitadas.

A esta realidad se suman los obstáculos de la población joven para realizar sus estudios y conseguir metas académicas. Para el caso, solo la Universidad de El Salvador (UES) ha experimentado un 18 % de abandono universitario en el ciclo dos de este año, a raíz de la crisis económica por la pandemia, la falta de equipo tecnológico para adaptarse a la modalidad de clases en plataformas digitales y los problemas de conectividad a la red.

Si bien, históricamente las juventudes han enfrentado situaciones particularmente difíciles, no tengo duda que han sido impulsoras de grandes cambios sociales en El Salvador, por ser un sector con profundas convicciones de necesidad de transformaciones estructurales, además de la esperanza dentro del bono demográfico. Pero también, es una población donde se reflejan los resultados de la desatención estatal y la falta de inversión estratégica para el cumplimiento de los derechos humanos con enfoque de ciclo de vida, por ende, son altamente vulnerables ante los problemas sociales del país; asimismo, en esta población se logra evidenciar la perpetuación de los ciclos de pobreza en la sociedad.

Por ende, es prioritario que en el país se reconozca a este grupo de la población como sujetos sociales de derecho, actores de procesos de cambio, ciudadanos activos, corresponsables y protagonistas clave en el desarrollo; para que se impulsen estrategias con su participación libre ante los desafíos que como sociedad se nos presentan, a efectos de fortalecer la contraloría social, la transparencia en la rendición de cuentas, ser parte de procesos de toma de decisiones, potenciarse como promotores de diálogo y consenso sobre los temas de su interés y para el bien común.

Por lo anterior y en el marco de mis atribuciones expuestas en el artículo 194 romano I, de la Constitución de la República, **exhorto:**

1. Al señor *Presidente de la República*, Nayib Armando Bukele, promover y aprobar políticas públicas en favor de la juventud, que potencien sus derechos fundamentales y además se incluya la participación de este sector, sin discriminación, en la toma de las decisiones que a ellas y ellos benefician o afectan.
2. A la señorita directora del *Instituto Nacional de Juventud*, Marcela Pineda, que desarrolle efectivamente la Política Nacional de Juventud, para articular acciones en cumplimiento de derechos; se promueva el trabajo y participación real del Consejo Nacional de la Persona Joven; además, que se promuevan acciones sustanciales y concretas para beneficio de todas las juventudes de El Salvador.
3. A la señora *Ministra de Educación, Ciencia y Tecnologías*, Carla Hanania de Varela, que genere todas las acciones que garanticen el acceso a la educación media, técnica y superior a nuestra juventud, sin ningún tipo de discriminación.
4. Al señor *Ministro de Salud*, Francisco Alabi, para crear o fortalecer políticas de atención especializada, con calidad, calidez y prioridad en la prevención y atención de enfermedades que padezcan las y los jóvenes.

Aprovecho la oportunidad para enviar un fraternal saludo a cada joven en El Salvador, especialmente al comprometido grupo de adolescentes y jóvenes de las 14 Unidades Juveniles de Difusión de Derechos Humanos que, como experiencia exitosa de voluntariado, cumple al pie de la letra el lema de este año, a través de su compromiso por realizar acciones de cambios sociales en nuestro país. Finalmente, reconozco el potencial que hay en este sector de la población, sus virtudes y la capacidad por hacer de El Salvador un mejor lugar.

12 de agosto del 2020

7. Investigación de la Fiscalía General de la Republica sobre el homicidio del niño Erick G., San Salvador

El 16 de julio del presente año, esta Procuraduría emitió un pronunciamiento por la localización del cuerpo sin vida del niño Erick G.1, de tres años de edad, mediante el cual se recomendó al señor Fiscal General de la República que girase instrucciones específicas para darle prioridad al caso, a efectos de individualizar a los responsables del hecho, de conformidad a la normativa legal y constitucional del país.

Expreso mi reconocimiento a la eficiencia de las actividades realizadas por las entidades encargadas de la investigación del delito, pues como resultado de ello, la Fiscalía General de la República, el pasado 22 de agosto, hizo del conocimiento público la captura de la principal sospechosa del homicidio del niño Erick G., a quien se le acusa del delito de Homicidio Agravado; siendo esta, una familiar cercana que se encontraba en la vivienda donde el niño había sido visto por última vez.

Si bien, ahora este caso se encuentra en manos de la justicia, es importante destacar que hechos como el acontecido con el niño Erick G. exponen la cruel realidad que viven las niñas, niños y adolescentes de nuestro país, en entornos desfavorecidos para su desarrollo integral y expuestos a diversas situaciones de violencia que atentan contra sus derechos fundamentales.

Estos hechos, aunque parecieran ser aislados, lamentablemente no lo son; sin embargo, la conmoción es más evidente cuando las consecuencias son extremas y se atenta contra el derecho a la vida, como en el caso en cuestión. No obstante, el Estado salvadoreño está al tanto de la situación que atraviesan las niñas, niños y adolescentes respecto a las amenazas y vulneraciones a su integridad personal. En este sentido, las estadísticas del Sistema de Información de la Niñez y de la Adolescencia en El Salvador, muestran que el 56.50% de casos atendidos por las Juntas de Protección de la Niñez y de la Adolescencia, desde el año 2012 al 2018, han sido por presuntas amenazas o vulneraciones a este derecho. Estas cifras se incrementaron para el año 2019, al alcanzar el 57.09% de la totalidad de casos, correspondiendo el 50.91% a la integridad física y el 24.3% a la integridad sexual². En definitiva, estos datos nos deben llevar a la reflexión de que algo no está funcionando en el país en materia de protección de la niñez y de la adolescencia, pese a la existencia de un Sistema Nacional de Protección Integral, marcos legales especializados y de políticas - incluso de primera infancia-, cuando el espacio en el cual la niñez debería estar más segura es donde tienen lugar estos lamentables sucesos. Y es que, casos como el del niño Erick G., son el resultado del abandono de la infancia, la falta de aplicación de políticas públicas multisectoriales que involucren a la familia, a la sociedad, a los actores territoriales correspondientes, para identificar las causas de toda forma de violencia y construir mecanismos efectivos de prevención y de atención oportuna, considerando el ciclo de vida y los diferentes contextos en que se desarrolla la niñez de nuestro país.

En virtud de lo anterior, en el año 2018 el Comité de los Derechos del Niño instó al Estado salvadoreño³ a investigar, enjuiciar y sancionar rápidamente los casos de asesinatos de niñas, niños y adolescentes; estudiar a fondo las causas fundamentales de estos homicidios y tomar medidas para prevenirlos; establecer una base de datos nacional sobre todos los casos de malos tratos, descuido de niñas y niños, y llevar a cabo una evaluación exhaustiva del alcance, las causas y el carácter de este tipo de violencia; entre otras medidas.

Por lo tanto, el Estado debe proporcionar mecanismos efectivos de protección especial a la niñez que se encuentra en situaciones desfavorecidas que les impliquen un significativo riesgo de ser víctimas de violencia, para lo cual es prioritario que se identifiquen los factores de riesgo personales, familiares o de sus cuidadores, relacionales, sociales o comunitarios, para atenderlos oportunamente y prevenir daños mayores e irreversibles.

Por todo lo antes expresado, y de conformidad a mis atribuciones reguladas en el artículo 194 romano I ordinales 1°, 2° y 7° de la Constitución de la República, **recomiendo:**

1. Al Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia:

- b. Que en cumplimiento de sus funciones, recopile y analice la información sobre el estado de los derechos de la niñez y adolescencia en el país, con particular atención en los factores de riesgo de este grupo de la población ante la violencia en todas sus manifestaciones, que impacta en su derecho a la integridad personal y a la vida, según cada etapa del ciclo de vida de las niñas, niños y adolescentes. Asimismo, que se obtengan y desagreguen datos sobre la violencia contra niñas, niños y adolescentes de manera directa o indirecta.
- c. Que adopte medidas encaminadas a fortalecer los mecanismos de protección especial para la niñez y adolescencia, entre ellos, el funcionamiento de las Juntas de Protección, a efectos de que se atiendan oportunamente los casos de violencia contra la niñez que ocurren en el seno de la familia, con el soporte psicosocial que dicha atención requiere; esto, en razón a la alta demanda por afectaciones a la integridad personal y la reducida capacidad en cuanto a recursos humanos y programas de los que pueden hacer uso las Juntas de Protección para responder, según lo amerite, cada caso recibido.
- d. Que desde los Comités Locales de Niñez y Adolescencia se propongan políticas locales que atiendan la realidad de los contextos territoriales en que se desarrollan las niñas, niños y adolescentes, encaminadas a la prevención y atención de la violencia desde un enfoque transformador de las relaciones entre la familia, la sociedad y la niñez, a efectos de potenciar el rol de corresponsabilidad en la protección de los derechos de esta población.
- e. Que por medio de la coordinación del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia, se promueva el diálogo multisectorial para el estudio, elaboración e implementación de medidas de índole legislativas, educativas, sociales y culturales, institucionales y especiales de protección para la niñez y adolescencia, orientadas a la prevención y atención ante cualquier forma de violencia hacia esta población.

2. A la Fiscalía General de la República:

Que con el respeto de las garantías constitucionales y legales de la persona acusada por el crimen del niño Erick G., se continúe con las acciones pertinentes a efectos de obtener una resolución judicial que contenga decisión sobre la responsabilidad o no de la misma y la reparación para la familia de la víctima. Finalmente, expreso mi más profundo rechazo a cualquier forma de violencia en nuestro país. Por lo que también hago el llamado a la sociedad en general, a que asuma su rol de corresponsabilidad en la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

28 de agosto de 2020

8. Reiterando llamado a las autoridades gubernamentales, sobre la atención que debe darse, para bajar los altos índices de embarazos en niñas y adolescentes, durante el primer trimestre del año 2020

El pasado 15 de junio de 2020, suscribí un pronunciamiento en el que señalaba y condenaba los altos índices de embarazos en niñas y adolescentes registrados en los primeros cuatro meses del año 2020; siendo preocupante y alarmante las considerables inscripciones prenatales y partos en el grupo de niñas y adolescentes de los 10 a los 14 años, dado que además de constituir el delito de violación sexual, son el resultado de múltiples afectaciones a derechos humanos de la niñez, que tienen como consecuencia el menoscabo de su desarrollo integral y su proyecto de vida.

En las últimas semanas, he tenido conocimiento de publicaciones en diferentes medios de comunicación en las que se refieren al mismo comportamiento en las cifras de embarazos

en niñas y adolescentes en el contexto de la pandemia por COVID-19. De manera que, la violencia sexual sigue presente y no se han observado acciones estratégicas contundentes que garanticen entornos seguros para su prevención; asimismo, no se cuenta con mecanismos eficaces, entre ellas el cumplimiento de políticas públicas articuladas, para que los derechos de las niñas y adolescentes sean protegidos ante estas situaciones que menoscaban sus derechos fundamentales, de modo que se potencia la existencia de otras amenazas a su integridad, tales como uniones forzadas, infecciones de transmisión sexual y violencia de género.

Por otra parte, es preocupante que el estado de los derechos de niñas y adolescentes sea conocida a través de las estadísticas sobre embarazos, siendo esta una de las consecuencias más notorias de las afectaciones a sus derechos; sin embargo, se debe tener en cuenta las múltiples vulneraciones que atentan contra la integridad y desarrollo de esta población, producto de las desigualdades de género, socioeconómicas e intergeneracionales, que no en todos los casos derivan en maternidad temprana, pero la vuelven vulnerable a abusos y embarazos.

En virtud que el Estado salvadoreño no ha respondido los requerimientos solicitados previamente, **reitero** mi petición para que las instituciones públicas asuman su responsabilidad en la prevención y erradicación de este fenómeno; ejecuten acciones eficaces para la persecución de los agresores o abusadores sexuales de niñas y adolescentes; e implementen medidas efectivas encaminadas a restituir y proteger los derechos de las víctimas.

Por lo antes expuesto y en base a las atribuciones que me confiere la Constitución de la República, en el artículo 194 romano I, EXHORTO:

1. A la Junta Directiva y Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, para que en cumplimiento de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia y de la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, elaboren y presenten un plan nacional para la prevención del acoso, agresiones y abusos sexuales, así como de embarazos en niñas y adolescentes. Asimismo, que generen acciones y orientaciones para que las Juntas de Protección de la Niñez y de la Adolescencia fortalezcan sus procesos administrativos para salvaguardar la integridad de niñas, niños y adolescentes víctimas de agresiones y abusos sexuales, así como la posible restitución de derechos de forma ágil y oportuna. Además, para que se promueva la denuncia de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, a través de medios accesibles y disponibles, en coordinación con el Sistema de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia.
2. Al señor Ministro de Salud, doctor Francisco José Alabí Montoya, para que en el marco de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia y de la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, oriente los recursos y capacidades técnicas suficientes para robustecer los mecanismos de coordinación interinstitucional encaminados al abordaje de la violencia sexual en niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual identificados en los establecimientos de salud; asimismo, que se adopten medidas urgentes y prioritarias para salvaguardar la salud e integridad de las niñas y adolescentes embarazadas, sin ningún tipo de discriminación y garantizando calidad y calidez en los servicios prestados.
3. Al señor Fiscal General de la República, doctor Raúl Ernesto Melara Moran, para que, además de la persecución efectiva del delito contra agresores y abusadores sexuales de niñas, niños y adolescentes, informe a esta Procuraduría, en un **plazo de quince días**, estadísticas sobre los casos de violencia sexual en perjuicio de niñas, niños y adolescentes que han sido del conocimiento de la institución que dirige, durante el presente año; así como las acciones penales iniciadas y resultados de las mismas; de igual forma, las condenas logradas en el año 2020 en este tema.

26 de agosto del 2020

9. 11 de octubre, Día Internacional de la Niña

Por medio de la Resolución 66/170 del 19 de diciembre de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 11 de octubre como el Día Internacional de la Niña, con el objetivo de crear conciencia sobre la situación de las niñas en todo el mundo, reconocer la importancia del empoderamiento de las niñas y la inversión en ellas, romper el ciclo de discriminación y violencia, y promover el goce pleno y efectivo de sus derechos humanos.

Al respecto, el lema para este año “Mi voz, nuestro futuro en común”, es un llamado a los Estados a que aseguren los derechos humanos de las niñas, se fomente su participación en toma de decisiones y se invierta en su desarrollo. Asimismo, en esta ocasión se invita a centrar la atención en tres aspectos principales en los cuales las niñas de todo el mundo reivindican su poder como impulsoras de cambio, a través de sus peticiones consistentes en vivir libres de violencia por razón de género, de las prácticas nocivas y del VIH; aprender nuevas habilidades para el futuro que ellas elijan; y dirigir una generación de activistas para acelerar el cambio social.

Por tal motivo, es fundamental examinar el estado de cumplimiento de los derechos humanos de las niñas; a su vez, poner especial atención en situaciones particularmente difíciles y complejas que se propician en nuestro país, tales como los suicidios, embarazos, violencia sexual y trabajo doméstico infantil. En este sentido, es urgente tomar acción para generar condiciones estructurales que favorezcan la plena participación de las niñas y adolescentes en la toma de decisiones de los asuntos que sean de su interés, a fin de garantizar el ejercicio de su ciudadanía social, como protagonistas de su desarrollo y bienestar.

Por consiguiente, es imprescindible contar con políticas públicas, planes y programas que se traduzcan en acciones concretas en favor de este sector poblacional que garanticen su derecho a la participación, asegurando la satisfacción de sus necesidades concretas, según edad y contextos en que se desenvuelven.

Aún tenemos grandes retos y deudas con nuestras niñas y adolescentes, como prevenir la violencia física, sexual, embarazos y uniones forzadas. Estas afectaciones al derecho a una vida libre de violencia y la falta de atención en salud mental, pueden derivar en que tomen decisiones como el suicidio, tal como ha ocurrido en cuatro ocasiones que han enlutado a las familias salvadoreñas y al país durante el 2020.

Por lo anterior, en el marco de las atribuciones conferidas en el artículo 194 romano I de la Constitución de la República, exhorto:

Al Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, que genere políticas reales para la inclusión y pleno desarrollo de todas las niñas y adolescentes en el país, asegurando su derecho a la participación en las diferentes tomas de decisiones, para garantizar igualdad y equidad en nuestra sociedad.

A la señora Directora Ejecutiva del ISDEMU licenciada María Lilian López, que oriente los esfuerzos institucionales en garantizar el respeto a una vida libre de violencia para las niñas y las adolescentes en el país, como ente rector de la Política de la Mujer.

Al señor Ministro de Salud Dr. Francisco José Alabí Montoya que priorice la atención de las niñas y las adolescentes en todas las áreas de salud, en especial en la mental, en respeto al ejercicio progresivo de sus derechos, con calidad y calidez.

Envío un saludo a cada niña y adolescente del país, reiterando mi compromiso de acompañarles en sus luchas y la defensa de sus derechos fundamentales.

12 de octubre de 2020

10. Homicidio del niño Alexis A D A

El pasado 5 de septiembre de 2020, a través de medios de comunicación digital y redes sociales, se conoció sobre la desaparición en la playa San Diego del departamento de La Libertad, del niño Alexis ADA; ante lo cual las autoridades policiales y fiscales retomaron el caso y al realizar las diligencias correspondientes, el viernes 11 de septiembre de 2020, encontraron el cuerpo del niño Alexis ADA enterrado en la casa de habitación de su madre, ubicada la colonia Vista al Lago del municipio de Ilopango, descartando que hubiera sido extraviado como inicialmente se había señalado; y por ello se procesa como imputados a la madre y su pareja sentimental.

Ante el hecho anterior y en el marco de las facultades constitucionales establecidas en el artículo 194 romano I de la Constitución, como Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, expreso mi total condena y repudio ante ese homicidio; no solo por la forma en que se presume sucedieron los hechos, sino por tratarse nuevamente de otro ataque contra la niñez, en menos de un mes; y al parecer perpetrados o al menos en complicidad por familiares del niño, que hoy se suma al ejército de ángeles víctimas de actos delictivos cometidos por adultos.

Aprovecho para reconocer y felicitar el actuar diligente y oportuno del personal de la Policía Nacional Civil y Fiscalía General de la República que tramitan el caso, ya que, con la búsqueda del niño, la ubicación del cuerpo e investigación, se generan antecedentes ejemplarizantes para prevenir que más niños y niñas sean víctimas de todo tipo de delitos y se mandan mensajes claros que los delitos cometidos contra la niñez no quedarán en la impunidad.

Asimismo, exhorto y hago el llamado a la sociedad y familias salvadoreñas para que nos unamos en el combate y prevención de delitos contra nuestra niñez, y que exijamos se respeten los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes.

Por último, reitero mi compromiso de seguir señalando, denunciando y pidiendo se investiguen todos aquellos delitos similares, y seguiré acompañando a las víctimas de violencia, sobre todo cuando se trate de niñas, niños y adolescentes.

14 de septiembre del 2020

j) Personas adultas mayores

1. “Mes de la Persona Adulta Mayor” sobre el Sistema Nacional de Protección hacia la Persona de Edad en El Salvador

La Honorable Asamblea Legislativa mediante Decreto Legislativo N°144, publicado en el Diario Oficial N° 23, Tomo N° 314 de fecha 5 de febrero de 1992, declaró a enero de cada año **“Mes de la Persona Adulta Mayor”** como un “reconocimiento a las personas que han llegado a esa etapa de su vida”.

La Constitución de la República en el artículo 3, establece que todas las personas son iguales ante la Ley y que para el goce de los derechos civiles no podrán establecerse restricciones que se basen en diferencias de nacionalidad, raza, sexo o religión.

El Código de Familia, reconoce como imperativo la protección integral de las personas adultas mayores, la cual debe basarse en principios fundamentales como universalidad, autonomía y autorrealización, democratización, equidad, corresponsabilidad y en el reconocimiento irrestricto de los derechos fundamentales de los adultos mayores.

La Ley de Atención Integral para la Persona Adulta Mayor determina como objetivo fundamental de la ley, la atención integral de las personas definidas como “Personas Adultas Mayores”, es decir aquellas con 60 años y más, y sienta las bases para establecer

la obligación del Estado de procurar servicios que permitan a esta población el goce y ejercicio de sus derechos. Creándose el Consejo Nacional de Atención Integral a las Personas Adultas Mayores (CONAIPAM), compuesto por titulares de diversas instituciones públicas y privadas que tienen incidencia directa en temas de envejecimiento, el cual tiene como objetivo primordial colaborar estrechamente con la disuelta Secretaría de Inclusión Social (SIS), en la planificación, desarrollo y evaluación de los programas y proyectos integrales que satisfagan necesidades inmediatas de los mismos y además coordinar acciones que respondan a las necesidades sociales y de salud de la población.

Dicha Secretaría de Inclusión Social (SIS) nació a partir del Decreto Ejecutivo N° 1 del primero de Junio de 2009, mediante el cual se reformó el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, constituyéndose como una unidad de apoyo destinada al servicio de la Presidencia de la República, para el cumplimiento de sus atribuciones y funciones. Inicialmente la Secretaría de Inclusión Social se conformaba por diferentes direcciones programáticas, dentro de las cuales se encontraba la DIRECCIÓN DE LA PERSONA ADULTA MAYOR, como la encargada de impulsar políticas, normas y planes en materia de Personas Adultas Mayores y encargándose de asesorar y supervisar la ejecución del Programa Presidencial Nuestros Mayores Derechos, cuyo objetivo fue la protección de la Persona Adulta Mayor y en la promoción de su ejercicio de derechos, partiendo de la premisa básica que esta población ha sido históricamente excluida de todos los espacios de derechos. También se constituyó como un ente asesor y capacitador para los hogares, instituciones y asociaciones que se dedican al cuidado y albergue de dicha población. La obligación de promover y proteger los derechos de las personas adultas mayores se encuentra reconocida dentro del marco normativo nacional.

En vista de las responsabilidades que la Ley de Atención Integral para la Persona Adulta Mayor y su respectivo Reglamento, le confiere a la Secretaría de Inclusión Social y al CONAIPAM y el impacto que sus funciones generan en la población adulta mayor, es que se produce la inquietud por parte de esta Procuraduría y de las Asociaciones de Personas Adultas Mayores que conforman la Mesa de Trabajo sobre la Situación de las Personas Adultas Mayores en El Salvador de la PDDH, de conocer a profundidad los diversos aspectos que se relacionan con el accionar del CONAIPAM, específicamente en lo que se refiere al proceso de desarrollo del quehacer del ente rector en el marco de la supresión de la Secretaría de Inclusión Social (SIS) de la nueva estructura del Órgano Ejecutivo.

Aunado a lo anterior, como Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, considero importante resaltar la respuesta institucional del señor Presidente de la República, Nayib Armando Bukele Ortiz, a través del Secretario Jurídico Presidencial, Conan Tonathiu Castro, en su escrito de fecha 25 de septiembre de 2019, por medio del cual se informó a esta Procuraduría que de conformidad al artículo 9, del Decreto de Consejo de Ministros N°1, de fecha 2 de junio de 2019, que contiene reformas al Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, según el artículo 45-E, numeral 5), de dicho cuerpo normativo, le corresponderá al nuevo Ministerio de Desarrollo Local: “Coordinar el programa social de Ciudad Mujer, con un enfoque al desarrollo local de la población; así como cumplir las atribuciones establecida en las leyes o reglamentos a cargo de las antiguas Secretaría Nacional de la Familia o Secretaría de Inclusión Social.”

Al respecto, es de considerar que, las Personas Adultas Mayores, han sido uno de los colectivos que por décadas ha permanecido excluido del quehacer Estatal. Por lo cual como Procuraduría se ha señalado en varias ocasiones, la difícil problemática que enfrentan este importante sector de la población salvadoreña, el cual lamentablemente, se ha visto marginado de las prioridades y políticas públicas gubernamentales de nuestro país. Dicha marginación, ha implicado que casi un millón de salvadoreñas y salvadoreños, no tengan el debido acceso a programas que los dignifiquen y que por lo tanto no se les haga realidad el disfrute de derechos fundamentales como los relacionados a los servicios de salud especializados, el goce de una seguridad económica por medio de pensiones o montos de retiro dignos, al disfrute de un trabajo conforme a sus posibilidades físicas y psíquicas, a la protección en contra de toda forma de maltrato y abandono y a las formas preferenciales para el logro de servicios como el transporte público, entre otros.

Algo muy importante que hay que reconocer en el tema del envejecimiento desde un enfoque de derechos humanos, es la ratificación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, convirtiéndose El Salvador el pasado 18 de abril de 2019, en el sexto país en depositar dicho instrumento en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington, DC., por medio del cual se ha adquirido el compromiso internacional de avanzar hacia cambios que reivindiquen los derechos humanos y fundamentales de las Personas Adultas Mayores de nuestro país, reconociéndose que el tema de envejecimiento debe ser una prioridad en las políticas públicas y que debe haber una gestión responsable de recursos humanos, materiales y financieros necesarios.

En consonancia con lo anterior, en mi calidad de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y a la vez coordinador de la Mesa sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores de la PDDH, con el único objetivo de que nuestro país se distinga como un Estado interesado en reconocer verdaderamente el valioso aporte que a favor del desarrollo nacional han entregado éstas personas a lo largo de toda su vida, y en cumplimiento del mandato que me ha sido conferido, en base al artículo 194, romano I, ordinales 1°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11° y 12° de la Constitución de la República, **demando lo siguiente:**

A. Al señor Presidente de la República, Nayib Armando Bukele Ortiz:

1. Priorizar la reactivación del funcionamiento de la Dirección de la Persona Adulta Mayor en la estructura organizativa del nuevo Ministerio de Desarrollo Local, con el objetivo de construir bases sólidas para la instauración de una fuerte institucionalidad de protección de derechos y una adecuada Política Nacional que aborde las diferentes reivindicaciones de las Personas Adultas Mayores;
2. Impulsar la elaboración y ejecución inmediata de una Política Nacional de Atención Integral a la Persona Mayor, en la cual se incluya la situación de pobreza, la cual se relaciona directamente con la ausencia de oportunidades económicas y de autonomía personal, la falta de acceso a los recursos económicos, incluidos al crédito y recibir una pensión económica digna, la falta de acceso a la educación y a los servicios básicos; por lo que las acciones estén dirigidas a contrarrestar y erradicar la pobreza en la Población Adulta Mayor;

B. A la señora María Ofelia Navarrete de Dubón, como la encargada de la nueva cartera de Estado a través del Ministerio de Desarrollo Local:

3. La pronta reactivación de la Dirección de la Persona Adulta Mayor y del Consejo Nacional de Atención Integral a los Programas de los Adultos Mayores (CONAIPAM), en el cual se incluya una representación del sector organizado de personas adultas mayores a través del cual sean actores reales del proceso de diagnóstico, análisis y generación de propuestas de sus diversas problemáticas, y a la vez partícipes directos de la elaboración de la “Política Nacional de Atención Integral a la Persona Mayor”;
4. Promover la difusión y análisis del nuevo Proyecto de Ley de Atención Integral para la Persona Adulta Mayor, presentado a la Honorable Asamblea Legislativa;
5. Fomentar la participación activa de las Personas Adultas Mayores en los debates locales y nacionales de política social y desarrollo; donde se analice y se discuta el funcionamiento del Sistema Nacional de Protección de las y los Adultos Mayores, a fin de identificar sus debilidades y las causas que las originan, buscando con ello remover los obstáculos políticos e institucionales que no permiten una actuación eficiente y eficaz de éste sistema en la implementación de las diferentes políticas y programas en beneficio de este sector tan vulnerable de la población;

C. A las personas Adultas Mayores:

Que acompañen y den seguimiento a las demandas presentadas por esta Procuraduría y que denuncien y exijan sus derechos reconocidos en la normativa nacional e internacional y se organicen para defenderlos.

13 de enero de 2020

2. “Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez”, y “Día Nacional en favor de la Eliminación del Abuso, Maltrato, Discriminación y Negligencia contra las Personas Mayores”

El 19 de noviembre de 2011, la Asamblea General de la ONU, en su 66 período de sesiones, emitió la Resolución 66/127, mediante la cual designó el 15 de junio como Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, e invitó a sus Estados Miembros, a las Organizaciones del Sistema de Naciones Unidas y a otras Organizaciones Internacionales y Regionales y a la Sociedad Civil, para que lo observen debidamente; como también, exhorta a sus Estados miembros para que se ocupen del bienestar y la atención adecuada de las personas de edad, así como a la formulación y ejecución de estrategias preventivas más eficaces y leyes y políticas más firmes.

En el marco de esa exhortación, y que los derechos humanos son la expresión máxima de la dignidad de la persona humana que deben protegerse, garantizando que las Personas Adultas Mayores, dentro de su diversidad y heterogeneidad, los ejerzan plenamente y sin discriminación dentro de una sociedad más inclusiva; en junio de 2017, se promovió desde la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y las Organizaciones que conforman la Mesa de Personas Mayores de la PDDH, la iniciativa del Decreto Legislativo N° 704, por medio del cual se declaró el día 15 de junio de cada año como el “Día Nacional en favor de la eliminación del abuso, maltrato, discriminación y negligencia contra las Personas Mayores”, como una de las formas de rechazar todo tipo de maltrato contra las Personas Mayores y el trabajo por su erradicación.

En ese sentido y ante el contexto actual de la Pandemia, el Secretario General de la ONU, António Guterres, expresó que “La pandemia del COVID-19 está causando temor y sufrimiento indescribibles a las personas de edad en todo el mundo. Más allá de su impacto inmediato en la salud, la pandemia coloca a las personas de edad en una situación de mayor riesgo de pobreza, discriminación y aislamiento. Es probable que tenga un efecto particularmente devastador para las personas de edad de los países en desarrollo”.

En el mismo contexto, la Comisionada Relatora para las Personas Mayores desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)¹, Julissa Mantilla Falcón, hace señalamientos sobre la discriminación múltiple, pues el ser mayor, no solo se discrimina por edad, sino por ser mujeres, personas con discapacidad, indígena, privados de libertad, etc. Asimismo, la CIDH está promoviendo para que no se normalice situaciones de estigma, ni de violencia o maltrato hacia Personas Mayores, haciendo un cuestionamiento sobre las medidas de aislamiento social, ya que, se coloca en posiciones difíciles a las Personas Mayores, quienes se ven obligadas a alejarse de sus familias, y de beneficios sociales, como asociaciones municipales, grupos religiosos, actividades físicas, entre otros, por lo que hace un llamado adicional a los Estados a prestar atención privilegiada a Personas Mayores en situación de calle, en situación de abandono, privadas de libertad, Personas Mayores sin pensión contributivas u otro sistema de protección social.

Ante el manejo de la pandemia, como Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos quiero expresar mi profunda preocupación por la situación de discriminación y abandono que están sufriendo muchas Personas Mayores en nuestro país, especialmente quienes se encuentran en situación de discapacidad, dependencia, abandono o soledad.

k) Personas con VIH

1. Día Mundial de la Respuesta al VIH

El 1 de diciembre, Día Mundial de la Respuesta al VIH, surgió en el año 1988 por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud. Desde entonces se conmemora esta fecha con el propósito de recordar a las personas fallecidas por el VIH, hacer conciencia sobre la epidemia y reconocer los avances encaminados a la prevención oportuna, el tratamiento integral, el acceso al mismo y a la reducción de muertes por esta causa.

Ocasión que es propicio para reflexionar sobre el liderazgo de las organizaciones de la sociedad civil en la progresividad de los derechos de las personas con VIH. Por este constante trabajo, base fundamental de todos los adelantos en esta materia, El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida ONUSIDA ha seleccionado el lema *“Las comunidades marcan la diferencia”*, como homenaje a su persistente labor.

Como Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, me sumo a ese reconocimiento a las comunidades de las poblaciones clave, organizaciones de personas con VIH y activistas que por años se han involucrado activamente en la respuesta al VIH, impulsado cambios en la forma de responder ante este reto que desafía a la humanidad desde hace más de 35 años. Así, con su destacado rol han revolucionado la atención en salud y el funcionamiento de toda la institucionalidad, principalmente, al impulsar la contraloría social y convertir la participación ciudadana en un pilar fundamental de las estrategias adoptadas para la atención integral del VIH.

Si bien, las comunidades están marcando la diferencia y son claves para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con los cuales se pretende poner fin al VIH como un problema de salud pública para el año 2030, actualmente se enfrentan a múltiples limitantes, entre ellas, la discriminación y falta de mecanismos para protegerles ante las violaciones a sus derechos fundamentales, la carencia de recursos financieros para desempeñar su labor y los obstáculos para acceder a información pertinente, oportuna y transparente.

Por esta razón, es importante que en el país se reconozca y promueva la participación de la ciudadanía; asimismo, que se implementen políticas de datos abiertos que abarquen la información relativa a la situación actual sobre el VIH y las estrategias para la atención integral, a efectos de garantizar que la población cuente con las herramientas para involucrarse en la toma de decisiones.

Por otra parte, aprovecho la ocasión para hacer un llamado a las organizaciones sociales con ámbito de acción a nivel local, para que incluyan en sus ejes de trabajo la prevención y la atención del VIH, en razón a las realidades y necesidades de sus contextos, sobre todo, por las consecuencias socioeconómicas del VIH en las comunidades con mayores índices de pobreza. En este sentido, es de suma importancia que las municipalidades y demás actores locales, de manera coordinada, asuman su rol al respecto, a manera de no dejar a nadie atrás en el fortalecimiento de las capacidades de la ciudadanía en materia de derechos y VIH.

Por lo antes expuesto, en mi calidad de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, reitero mi pleno compromiso de continuar acompañando las luchas y reivindicaciones sociales que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población con VIH y que favorezcan la implementación de políticas encaminadas a alcanzar las metas de cero nuevas infecciones, cero discriminación y cero muertes relacionadas al VIH.

Finalmente, en el marco de esta conmemoración, hago una extensiva invitación a que valoremos el trabajo que algunas personas con VIH públicamente realizan para exigir el cumplimiento de los derechos humanos de toda la población afectada, puesto que se han convertido en la voz y el rostro de quienes viven su diagnóstico en la clandestinidad, debido al estigma, la discriminación y la exclusión social, que se suman al impacto emocional de contraer el VIH; así, con su valiente lucha contribuyen a una sociedad más justa e inclusiva.

i) Otros

1. La PDDH y la Fundación Latitudes inauguran primer hubs para protección de periodista en coberturas de alto riesgo

El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Lic. José Apolonio Tobar, acompaña la iniciativa de Fundación Latitudes, en la creación del Primer Hubs para periodistas en Latinoamérica, mismo que estará instalado en la Delegación Departamental de la PDDH, San Miguel, mismo que será inaugurado el 05 de diciembre de 2019.

Este Hubs consiste en dotar de un Casillero, en las instalaciones de la PDDH de San Miguel, con material especializado para la protección de periodistas de toda América Latina que pertenezcan al Programa denominado Riesgo Cruzado, en el cual se entrena a las y los periodistas a efecto de prepararlos para situaciones de riesgo.

Entre los principales factores que generan riesgo a los periodistas están el tráfico ilícito de droga, el tráfico ilegal y la trata de personas. A esto, se suma la actividad de los grupos delincuenciales como una amenaza, tanto en el ejercicio de la profesión, como en los lugares de residencia de los comunicadores. Es por ello que desde Riesgo Cruzado se les enseña a convivir con el riesgo y a actuar con conocimiento desde los límites de lo permitido.

Desde la PDDH, el personal de la Delegación estará encargado de resguardar los materiales del Hubs y proveer a estas personas de los mismos, en caso que sea necesario.

¿Para qué sirven los hubs de Riesgo Cruzado?

Los hubs son centros logísticos que conectan experiencias, recursos y buenas prácticas para resolver problemas de violencia y agresión contra las y los periodistas. La instalación que se busca de los mismos en la región centroamericana permitirá tener una cadena de suministro a la que difícilmente puede acceder un periodista de manera individual. El objetivo es poder dar una respuesta eficiente y rápida a la persona comunicadora cuando se presente una crisis.

Se espera que este centro logístico cuente con un stock básico que permita colaborar con la red de periodistas de Riesgo Cruzado, incluyendo equipos como máscaras antigás, filtros, chalecos antibalas A4, cascos, y en el futuro se espera sumar camillas plegables y materiales para abastecimientos de botiquines personales.

Este espacio permitirá generar sinergias, en la cooperación, pertenencia y responsabilidad sobre el uso de estos equipos, para optimizar inversión. Dicho equipamiento ha sido auspiciado por el Gobierno de Holanda.

Como Procuraduría, es de mucha satisfacción ser la oficina sede para el resguardo de este recurso, pues a la vez alimenta el mandato constitucional de esta entidad en garantizar la protección y respeto de la población salvadoreña. Finalmente reitero mi compromiso en velar por el respeto irrestricto a los derechos humanos de los profesionales del periodismo.

5 de diciembre de 2019

2. Fallecimiento del Jurista y Defensor de Derechos Humanos, Pedro Nikken

“La noción de derechos humanos se corresponde con la afirmación de la dignidad de la persona frente al Estado. El poder público debe ejercerse al servicio del ser humano: no puede ser empleado lícitamente para ofender atributos inherentes a la persona y debe ser vehículo para que ella pueda vivir en sociedad en condiciones cónsonas con la misma dignidad que le es consustancial.” **Pedro Nikken**

El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, licenciado José Apolonio Tobar Serrano, expresa su profundo pesar por el fallecimiento del reconocido jurista venezolano Pedro Nikken, quien fuera un importante promotor del Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos, de manera especial en nuestro continente, integrando en distintos periodos la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Además, el Profesor Nikken fue un excelente académico, educador de distintas generaciones de personas defensoras de derechos humanos y una persona comprometida desde diversos espacios por la causa de la paz en El Salvador, siendo consejero legal del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas y posteriormente, nombrado experto independiente para nuestro país, funciones que ejerció con absoluta responsabilidad y teniendo en el centro de su mandato a la población más vulnerable.

Sin duda alguna su partida deja un vacío importante en el movimiento internacional de los derechos humanos pero su enorme experiencia nos mantiene con la esperanza de un país donde la paz sea la regla y su legado nos compromete e impulsa a luchar por la defensa y promoción de los derechos humanos, la justicia y la dignidad en condiciones de igualdad y sin discriminación para todas y todos.

9 de diciembre de 2019

3. Día de los Derechos Humanos 2019

Cada 10 de diciembre se celebra el Día de los Derechos Humanos coincidiendo con la fecha en que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948. Aprovecho la ocasión para reiterar mi firme compromiso de velar y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y los principios de dignidad, universalidad, igualdad, no discriminación, indivisibilidad e interdependencia.

Este año, el mensaje central de Naciones Unidas, está basado en destacar el papel de liderazgo de la juventud en los movimientos colectivos y como fuente de inspiración para un futuro mejor. Hoy en día, en diversos lugares del mundo y en las cada vez más constantes movilizaciones multitudinarias, la juventud valientemente se opone a la injusticia estructural, las relaciones desiguales de poder, el racismo, los discursos de odio y el cambio climático, entre otras muchas temáticas. En nuestro país, contamos además con un claro ejemplo de liderazgo a través de las Unidades Juveniles de nuestra Procuraduría que arduamente trabajan en la promoción y difusión de los derechos humanos, llegando a ser agentes constructivos de cambio enfocándose en sectores específicos más vulnerables como mujeres, infantes, adolescentes, personas LGBTI+, entre otros.

En un tiempo en el que se cuestiona la legitimidad y efectividad de los derechos humanos, resulta imprescindible analizar que, si bien la brecha entre el comportamiento estatal y el cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos no solo existe sino que tiene el potencial de expandirse, debe entenderse que el progreso de los derechos es siempre un proceso y no un punto de llegada⁸⁵. Aunado a ello, la juventud nos confirma que el hábito, la actitud y el cumplimiento de los derechos humanos son el indicador oportuno que permite conocer el grado de humanización de una sociedad, de su clase política y empresarial. Al final, lo que buscamos obtener es una población cada vez más consciente, comprometida y convencida sobre la importancia, esencia y fundamento de los derechos humanos que deviene del principio de la dignidad humana. Nunca se es demasiado joven para cambiar el mundo! La participación de los jóvenes es esencial en la consecución de un desarrollo sostenible. Ellos pueden jugar un papel crucial para conseguir impactos positivos.

De nuestra parte, en el marco de la conmemoración del Día de los Derechos Humanos, reiteramos nuestro propósito de hacer cada vez más palpable el compromiso de tener como parte de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, un equipo empático, respetuoso y sensible que trabaje hombro a hombro con todas las personas que

⁸⁵ Sikkink, Katherine, Razones para la esperanza, la legitimidad y efectividad de los derechos humanos de cara al futuro.

necesiten apoyo en materia de protección de derechos humanos y resuelva de manera eficaz, eficiente y oportuna.

10 de diciembre de 2019

4. Hechos relacionados con el 9 de febrero de 2020 en la Asamblea Legislativa

El 7 de febrero de 2020, tuve conocimiento a través de diferentes medios de comunicación de dos eventos de trascendencia nacional, que merecen ser analizados y desde la facultad que me confiere la Constitución de la República hacer los requerimientos pertinentes.

El primer evento es que el señor presidente de la República Nayib Armando Bukele Ortiz informó que su Consejo de Ministros, haciendo uso del artículo 167 ordinal 7° de la Constitución de la República, ha convocado a la Asamblea Legislativa a una sesión extraordinaria el día 9 de este mes y año a las quince horas, con la única finalidad que se someta a votación la aprobación o no de la autorización al Órgano Ejecutivo para que realice contratación de un crédito por \$109,000,000.00.

El segundo evento es que, casualmente, la Asamblea Legislativa se encontraba en sesión ordinaria al momento de recibir la correspondencia en que se hacía del conocimiento de la referida convocatoria y luego de un receso emitieron y aprobaron con 64 votos un documento en el cual declararon improcedente la solicitud realizada por el Consejo de Ministros ya que estimaron que transgrede la independencia de los Órganos de Estado.

De acuerdo a cómo se fueron dando los eventos, como ha acostumbrado el señor presidente de la República, en otra publicación en redes sociales, dijo que la no asistencia de los diputados que conforman la Asamblea Legislativa a la convocatoria hecha por el Consejo de Ministros constituiría un rompimiento del orden constitucional y que ello habilitaría al pueblo para hacer uso del artículo 87 de la Constitución de la República, el cual establece la facultad del pueblo a la insurrección.

Finalmente se ha conocido que el señor presidente de la República ha convocado al pueblo salvadoreño para que el próximo domingo 9 de este mes y año a las quince horas se presente a la Asamblea Legislativa a presenciar la sesión extraordinaria que ha convocado el Consejo de Ministros; ante lo cual han surgido en las diferentes plataformas digitales audios en que empleados del Ministerio de Salud y Ministerio de Trabajo están siendo obligados y manipulados para que asistan a tal concentración amenazándoles con perder sus empleos.

Frente a estas situaciones, este procurador hace las siguientes consideraciones:

La semana anterior atentamente solicité al señor Ministro de Justicia y Seguridad Pública una copia del Plan Control Territorial con el propósito de estudiarlo para verificar sus metas, objetivos y alcances, pues el mismo no debe contener acciones encaminadas a generar ni promover violaciones a derechos humanos; sin embargo, hasta este día no he recibido ninguna respuesta.

La CIDH en su informe preliminar, luego de realizar su visita in loco durante los primeros días del mes de diciembre del año anterior, recomendó al Órgano Ejecutivo que publique el Plan Control Territorial y, hasta hoy, ello no se ha cumplido a pesar que las autoridades de Seguridad Pública afirman que se está desarrollando la fase II de dicho Plan y el préstamo de \$109,000,000.00. es para cubrir la fase III.

El ordinal 7° del artículo 167 de la Constitución de la República establece la facultad del Consejo de Ministros para convocar a la Asamblea Legislativa a sesión extraordinaria cuando los intereses de la República lo demanden. Es importante resaltar que, debe entenderse que una sesión extraordinaria puede llevarse a cabo porque exista una eventualidad de interés nacional inminente, cuya discusión no pueda esperar. En tal sentido, el acuerdo del Consejo de Ministros, a través del cual se hace la convocatoria, debe contener explícitamente las razones justificantes por las cuales se considera urgente una sesión extraordinaria.

Según la información conocida en los diferentes medios de comunicación las razones extraordinarias que habilitan al Consejo de Ministros a realizar la citada convocatoria han sido la atención e intervención de la seguridad pública con la fase III del Plan Control Territorial; sin embargo, en este momento tal situación no constituye un elemento extraordinario, debido que, según las estadísticas oficiales en todos los delitos penales (homicidios, extorsión, desapariciones, desplazamiento forzado, entre otros) ha habido considerables reducciones, tan ampliamente publicitadas por el gobierno central; por tanto, afirmar que existe emergencia en ese tema sería una contradicción de las autoridades de seguridad; y además después de ocho meses de escuchar sobre la existencia de un Plan de Control Territorial, el mismo aún no se conoce.

Si bien es cierto que el Consejo de Ministros tiene la facultad contenida en el ordinal séptimo del artículo en comento, también es cierto, que debe elaborar el plan de gobierno tal como lo establece el ordinal segundo del mismo artículo, mismo que debe ser del conocimiento de las demás instituciones del Estado para la coordinación del trabajo interinstitucional.

Así las cosas, al no existir motivos extraordinarios por los cuales se habilite al Consejo de Ministros para que haga uso de la facultad prevista en el artículo 167 ordinal 7° de la Constitución de la República, ha actuado dentro del marco Constitucional la Asamblea Legislativa al aprobar un documento en el que se informa a la población en general que no se realizará la sesión extraordinaria convocada por el Consejo de Ministros; y ello no constituye rompimiento del orden constitucional que habilite al pueblo para que se haga uso del derecho a la insurrección, pues para que esto ocurra se debe generar algunos de los siguientes supuestos: a) que ocurran graves violaciones a derechos humanos; b) se cambie la forma de gobierno; o c) se cambie el sistema político.

Como se advierte con facilidad, el hecho que los señores diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa hayan aprobado no realizar la sesión extraordinaria convocada por el Consejo de Ministros no constituye grave violación de derechos humanos, no se cambia el sistema de gobierno ni se cambia el sistema político, por lo tanto, es grave, temerario e irresponsable que se haga un llamado a la insurrección en el escenario descrito.

Como Procurador de Derechos Humanos advierto que ese llamado a la insurrección en ausencia total de condiciones constitucionales para que ello ocurra puede llevar a este país a una confrontación más radical de la que ya se tiene; y más pareciera que se pretende crear condiciones parecidas a las que han ocurrido en Sur América en donde la conflictividad social ha llegado al exceso de derrumbar parlamentos cuando éstos no han sido anuentes a las iniciativas de ley del Ejecutivo, con la finalidad de instaurar un nuevo parlamento afín.

Es importante en este punto resaltar que El Salvador es una REPÚBLICA sustentada en la existencia de tres órganos fundamentales, entre los cuales debe existir total independencia para generar pesos y contrapesos que generen un balance en el uso de poder de cada uno de ellos, a través de los límites establecidos en la Constitución de la República mediante el principio de legalidad. Es válido que cualquier funcionario de la República convoque al pueblo salvadoreño a una concentración en cualquier lugar del territorio salvadoreño, pero la asistencia de todas las personas debe ser voluntaria e informada; por lo tanto, al existir un llamado a empleados públicos para que se presenten a las quince horas del 9 de este mes y año a presenciar la sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa que ha convocado el Consejo de Ministros, con la advertencia que se “pasará lista” y su asistencia o inasistencia será tomada en cuenta para futuras evaluaciones, constituye una grave violación al derecho humano de la estabilidad laboral, a la libre asociación y demás libertades contenidas en la Constitución de la República

Por todo lo antes mencionado, sustentado en la facultad que me confiere el artículo 194 romano I ordinales 1°, 7°, 10° y 11° de la Constitución de la República emito las siguientes recomendaciones públicas:

1. Al Consejo de Ministros, que hagan uso de las facultades constitucionales conferidas con estricto apego a las condiciones exigidas para cada caso en particular y no se

intente sorprender al pueblo salvadoreño con la aplicación de figuras jurídicas en contextos sociales diferentes para justificar una injerencia en las actuaciones de otros órganos de Estado.

2. Al señor presidente de la República Nayib Armando Bukele Ortiz, que no realice llamamientos al pueblo salvadoreño que pongan al país en condiciones de vulnerabilidad social mayor a la que se ya se tiene, cuando no existen condiciones constitucionales para el ejercicio de la insurrección, por el contrario se le insta a que cumpla a cabalidad el mandato que le impone el artículo 168 ordinal 3° de la Constitución de la República, pues DEBE procurar la armonía social, conservar la paz, tranquilidad y la seguridad de la persona humana como miembro de la sociedad.
3. A la Fuerza Armada, aun cuando esté subordinada a la autoridad del Presidente de la República, que mantenga el cumplimiento del Art. 211 de la Constitución salvadoreña, que establece que debe mantenerse en servicio permanente a la Nación, que es apolítica y no deliberante. Aunado a ello, la misma Constitución indica que el Presidente de la República puede disponer de manera excepcional de la Fuerza Armada para mantener la paz interna no para promover la insurrección.
4. A todos los Ministros, Directores y Presidentes de instituciones autónomas, que se abstengan de realizar manipulación en los empleados y empleadas para que asistan de manera coaccionada a la concentración convocada por el señor Presidente de la República, pues constituye violación al derecho humano de estabilidad laboral y libre asociación consignados en la Constitución de la República.
5. A la población salvadoreña en general, que mantengamos la tranquilidad y serenidad ante evidentes contradicciones en la forma de pensar y administrar el poder por parte de los órganos Legislativo y Ejecutivo; pues la independencia en el funcionamiento de los mismos es un requisito esencial para la subsistencia de la democracia.

Finalmente hago un vehemente llamado a la comunidad internacional en general; y particularmente a organismos internacionales como OEA, ONU, FIO, GANRHI, CIDH, CCPDH y RINDHCA a estar vigilantes de las condiciones actuales de El Salvador, pues un llamado a la insurrección por parte del ciudadano presidente puede desembocar en un escenario de convulsión social como se ha estado viviendo en los últimos meses en el sur de América, lo que conllevaría de una manera automática a una grave violación de derechos humanos.

8 de febrero de 2020.

5. Procuradoras y Procuradores de Centroamérica alcanzan acuerdos en materia de Derechos Humanos para la región

El Consejo Centroamericano de Procuradores y Procuradoras de los Derechos Humanos (CCPDH), sostuvo una reunión en Copán, Honduras, del 24 al 26 de febrero del 2020, donde se abordó temas de especial interés, respecto al goce efectivo de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales de los habitantes de la región.

Este encuentro permitió reactivar las actividades de la CCPDH, bajo el liderazgo del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, Dr. Roberto Herrera Cáceres y en el cual se tomaron importantes acuerdos.

El Consejo de Procuradores se comprometió a mantener observación activa ante la crisis entre poderes del Estado en la República de El Salvador. Además, ratificó su solidaridad con el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, José Apolonio Tobar Serrano y equipo de trabajo, al reconocer que ha ejercido su labor constitucional con independencia, ofreciendo mediación para el logro de la paz social, la libertad y el diálogo pacificador.

De igual forma, los defensores nacionales de derechos humanos lamentan y condenan la

muerte del líder indígena Jerhy Rivera Rivera, ocurrida en circunstancias aún no esclarecidas, por lo que de manera respetuosa instan a las autoridades costarricenses, a realizar una efectiva investigación del caso.

El Consejo Centroamericano también tomó acuerdo respecto a la expansión del dengue y la amenaza que representa el virus COVID-19 conocido como Coronavirus, exhortando a los gobiernos de la región a activar las debidas alertas tempranas para prevenir y tomar medidas sanitarias.

Asimismo, los ombudsmen hacen un llamado a los Estados a brindar difusión y poner en práctica, la “Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales”, ante el incremento de la pobreza que afecta la vida digna y los derechos humanos, en especial del sector campesino, lo que provoca migración forzada.

El CCPDH hace un nuevo llamado a los Estados a brindar debida protección a las personas migrantes y crear condiciones especiales para la niñez migrante. Desde las Defensorías Nacionales se contribuirá con la conformación de un Grupo de Trabajo en Temas de Movilidad Humana.

Finalmente, los Procuradores de Derechos Humanos destacan la importancia que reviste el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), como estructura de desarrollo integral de la región. Al respecto, la CCPDH ejercerá la correspondiente vigilancia sobre este sistema, respecto a las decisiones que involucren el disfrute de los derechos humanos de la región.

28 de febrero de 2020



Medidas cautelares





IV. Medidas Cautelares

Las resoluciones de medidas cautelares son pronunciamientos excepcionales que proceden en caso de urgencia o gravedad en orden a prevenir daños irreparables o de difícil reparación a las presuntas víctimas, con base en los artículos 11 ordinal 10° y 36 de la Ley de la Procuraduría. Puede emitirse en cualquier estado del procedimiento, ya sea de oficio o a petición de persona interesada. Art. 78 del Reglamento para la Aplicación de los Procedimientos del Sistema de Protección de la PDDH

1. Medida Cautelar para la protección de las personas trasladadas a cuarentena en el Hospital “Dr. José Antonio Saldaña”

PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS. San Salvador, a las catorce horas, del día treinta y uno de marzo del dos mil veinte.

Con la implementación de las medidas gubernamentales ante la pandemia COVID-19, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en atención a su mandato constitucional y legal, ha realizado a nivel nacional la supervisión permanente de la actuación de las instituciones del Estado para la asistencia y protección de personas que fueron enviadas a los Centros de Contención del Coronavirus, (en adelante CCC) y las que han sido referidas a hospitales nacionales.

Se ha tenido conocimiento a través de diferentes denuncias y de noticias periodísticas, la situación de las personas que se encuentran ingresadas en el Hospital Nacional General de Neumología y Medicina Familiar “Dr. José Antonio Saldaña”, (en adelante Hospital Saldaña), las cuales se exponen a continuación:

HECHOS

- a. Entre el 25 y 26 de marzo del dos mil veinte, personal de esta Procuraduría, recibió las siguientes denuncias:
 1. Persona que se acogió al derecho a que su identidad se mantenga en reserva de confidencialidad, sobre la base del artículo 34 inciso último de la Ley que rige a esta institución, manifestó que labora en una aerolínea como parte de la tripulación, al principio cumplió cuarentena domiciliar en su residencia, posteriormente fue llevada a cuarentena junto con su esposa al Hospital Nacional de Neumología, expresó que les realizaron exámenes y que les informaron que resultaron fueron negativos, pero que debían hacerles exámenes adicionales, y desde entonces no tienen información.
 2. El señor Ángel Emilio Zedan Serpas, quien ingresó al país el doce de marzo del presente año, procedente de San Pedro Sula, fue remitido al CCC de Villa Olímpica, el dieciocho del mismo mes, al presentar síntomas de alergia y gripales, fue trasladado al hospital Saldaña y se encuentra en el pabellón de Ginecología, expresó que el personal médico no les ha informado cuanto tiempo permanecerán en el mismo, ni los resultados de las pruebas que les han realizado.
 3. El señor Manuel Alejandro Araujo Rivera, quien ingresó al país procedente de México fue enviado el catorce de marzo del presente año, a cuarentena al CCC ubicado en Hotel La Palma, Chalatenango, luego lo trasladaron junto a otras

personas al Hospital Saldaña, donde les realizaron pruebas y les informaron resultados negativos, sin embargo, permanece en el pabellón de ginecología sin que le informen su diagnóstico.

4. Adulto mayor que tiene un cuadro de salud de diabetes e hipertensión, y que ingresó al país junto a su nieto proveniente de Brasil, fueron remitidos a cuarentena en el CCC con sede al INJUVE en la colonia Zacamil, posteriormente, fue trasladado al Hospital Saldaña, por problemas respiratorios, donde le realizaron un examen con resultado negativo. Según noticias periodísticas⁸⁶ se ha tenido conocimiento que la persona falleció el veintisiete de marzo del presente año, pero fue hasta el veintinueve del mismo mes que se notificó a la familia sobre el fallecimiento, presuntamente por un paro cardiorrespiratorio.

Según testimonio de familiar recopilado en dicha noticia periodística, pasaron dos o tres días que a la persona fallecida no lo atendieron y que cuando le comenzaron a dar asistencia estaba complicado con el problema del azúcar y respiratorio que tenía, el cual se había agravado.

5. La segunda semana de marzo, ingresaron al hospital Saldaña, dos mujeres embarazadas, Modesta Rivera y Gloria Esperanza Díaz, quienes dieron a luz en partos por cesárea, les hicieron exámenes de COVID-19 que resultaron negativos, pero tanto ellas como sus hijos recién nacidos permanecen en el pabellón de Ginecología, junto a otras personas, no les proporcionan sábanas, pañales, ni ningún implemento para los neonatos. Ante esta situación por medio de oficio DD y DH No 005/2020, del veintisiete de marzo del dos mil veinte, se solicitó informe a la entonces Ministra de Salud, Ana del Carmen Orellana Bendek, sobre la presunta desatención de las mencionadas señoras y sus respectivos hijos recién nacidos e información detallada de la condición de salud y el pronóstico médico de cada uno.
 6. Pacientes que se encuentran en el área de Emergencias manifestaron que algunas personas han permanecido ingresadas en dicho hospital desde el trece de marzo, han sido trasladadas en cinco ocasiones a diferentes áreas de ese nosocomio, les realizaron las pruebas respectivas, que resultaron negativas, por lo que fueron informadas que serían trasladadas a un CCC pero aún no se ha hecho efectivo; que por el contrario, han seguido ingresando a más pacientes sin haberles realizado aún las aludidas pruebas, por lo que sienten temor de contraer el virus u otras enfermedades.
 7. El señor José Hernández, expresó que personas que ingresaron al Hospital Saldaña, desde el inicio de la medida y que tienen más de doce días en ese lugar, les realizaron el examen con resultado negativo, pero se encuentran hospitalizadas en las mismas salas de personas que están ingresando día con día, que no tienen el examen realizado, por lo que consideran que no se cumple el protocolo de ser trasladadas a un CCC.
- b. El veintisiete de marzo del presente año se recibió información de casos que fueron considerados de suma gravedad, los cuales son los siguientes:
1. Mujer quien manifestó ser una madre lactante, con dieciséis días en cuarentena, y se encuentra en el pabellón de cirugía del Hospital Saldaña, no tiene visita médica según expresó solo les llegan a “tirar” la comida, las consultas las realizan a través de una ventana, y no tienen ninguna información sobre los resultados de sus exámenes.
 2. Persona adulta mayor que permanecía en el pabellón de cirugía, quien expresó afectaciones a su salud, desde el veintiséis de marzo, las otras personas que se encontraban en el mismo lugar, se comunicaron con los médicos y las enfermeras

⁸⁶<https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/cuarentena-anciano-muerte-albergue-hospital-saldana-falta-atencion/700984/2020/>

para que la atendieran, pero no llegaron. Según la información recibida, fue la noche del veintisiete de marzo, que se dieron cuenta que la señora falleció.

Posteriormente, de acuerdo a noticia periodística⁸⁷ se tuvo conocimiento que mientras estuvo en el referido hospital, la señora identificada como M. M. de C, siempre mantuvo comunicación con el esposo, a quien le contaba que no recibía atención médica, que sentía un dolor en el pecho pero que no había médicos ni nadie con quien hablar. De acuerdo a la noticia el esposo fue notificado de la muerte de la señora por medio de una funeraria.

De acuerdo con las fuentes periodísticas, a ambos adultos mayores les hicieron la prueba de COVID-19 mientras estaban en el centro de contención Alicante, habiendo resultado, ambos, negativos. De manera extraoficial, fuentes del Ministerio de Salud que pidieron el anonimato, afirmaron que la causa de la muerte de la señora fue por cetoacidosis diabética, una afección que afecta a personas con diabetes.

c. El 28 y 29 de marzo del presente año, esta Procuraduría recibió la siguiente información:

1. La señora María Yesenia Beltrán, de nacionalidad estadounidense, manifestó que ingresó al país el diez de marzo, y no fue puesta en cuarentena, fue remitida al Hospital Saldaña el veinte de marzo, por un problema estomacal del cual ya se ha recuperado. Se encuentra en el pabellón de Ginecología, y señaló que no le han dado el alta y tampoco le explican los motivos.
2. Se expuso el caso de la señorita Jennifer Castillo, quien ingresó al país en horas de la mañana del día que ordenaron cerrar el aeropuerto, en migración le hicieron varias preguntas: de donde procedía y donde había estado, porque en su pasaporte constaba que ella viajó a China en el año 2017, al final no la detuvieron, pero horas más tarde la llegaron a buscar a su casa, no la llevaron a cuarentena a un CCC, porque fue referida directamente al Hospital Saldaña. Se encuentra preocupada porque supuestamente dos personas han dado positivo el COVID-19 y todos conviven en el mismo lugar y están usando el mismo baño.
3. La señora Lourdes López, expuso que su hermano, Mauricio Eduardo López Avilés, que es un doctor en odontología, de 50 años de edad, quien primero estuvo en el CCC del INJUVE de la colonia Zacamil, y cuando amaneció con síntomas de gripe fue ingresado en el Hospital Saldaña, le hicieron el examen del COVID-19, y resultó negativo y no ha sido dado de alta.

d. Esta institución puso a disposición de la población mecanismos de comunicación por medio de una aplicación virtual, para facilitar la recepción de denuncias, con este instrumento se obtuvo la siguiente información:

5. La señora Zoila Hernández, expresó que desde el trece de marzo se encuentra en el Hospital Saldaña, en fecha quince de marzo, le expresaron que su resultado era negativo. Desde entonces había sido trasladada cinco veces en el mismo hospital, le manifestaron que la llevarían a un lugar habilitado como CCC, pero no lo hicieron. Manifestó que el dicho nosocomio no es un lugar adecuado para cuarentena, que no había agua potable, ni artículos personales y la familia ya no puede salir a proveerles nada. Expresó que ella, junto a nueve personas más perciben trato discriminatorio, ya que muchos que entraron después de ellos ya han sido trasladados a un CCC. Agregó que en el área de emergencia donde se encontraba había una niña de siete años de edad, de nacionalidad española. Agregó también, que los médicos autorizaron la salida de todos los del área de emergencia, porque no tienen síntomas y con resultados negativos, pero, los tienen expuestos a cualquier enfermedad, como la conjuntivitis que ella adquirió.

⁸⁷ <https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/senora-muere-hospital-saldana/700753/2020/>

6. La señora Natalia Herrera expresó que su hermana estaba en cuarentena en el Hospital Saldaña, en su prueba de COVID-19 salió negativa, no obstante, le preocupaba que el área donde se encontraba pudieran sumar nuevos pacientes sin practicarles la prueba respectiva, porque no se sabía la situación médica de los mismos. Agregó falta de pruebas de COVID-19.
7. El señor Manuel de Jesús Orellana Orellana, informó que se encontraba ingresado en el área de Ginecología del Hospital Saldaña, que el resultado de su prueba COVID-19, resultó negativa, que en ese mismo hospital les daban la medicina para sus enfermedades crónicas, pero que era de forma irregular por lo que tenían descompensaciones lo que afectaba su salud. Informó además que el veintiocho de marzo del presente año, en horas de la mañana, la señora de nombre Emelina, no había sido tratada por ningún médico y que presentaba dolor de cuerpo, de cabeza, fiebre, a pesar que ellos ya habían hecho del conocimiento a la enfermera. En total son treinta y un personas que antes ya habían estado en otros albergues como la Villa Olímpica, hoteles y otros, que no les informaban si serían trasladados a otro centro de contención y que pasaban horas sin que nadie llegara a brindarles información de sus casos.

De todas las denuncias recibidas, se han encontrado situaciones comunes, tales como: la poca o nula atención del personal médico y de enfermería que se encuentra en dicho hospital, y que todos los pacientes ya han sido evaluados por los médicos, quienes les han informado que no presentan síntomas y sus resultados son negativos al COVID-19 pero permanecen en el hospital. La falta de información certera y accesible sobre la situación de cada persona no se ha proporcionado.

Las denuncias coinciden en señalar el hacinamiento, el mantener en un mismo lugar a personas adultas mayores, niñas y niños, y dos mujeres y recién nacidos, junto con personas que posiblemente han dado positivo al virus.

Además, se tiene una queja generalizada sobre las malas condiciones del lugar, no se cuenta con agua potable, ni con artículos de uso personal, la falta de limpieza en el hospital, no se cuentan con los insumos necesarios para tal fin, servicios sanitarios sucios o en mal estado, utilizados por veinticinco hombres y que poseen una sola ducha compartida y proliferación de zancudos.

CONSIDERACIONES

a) El derecho humano a la salud y el deber de garantía del Estado

El derecho a la salud no es un derecho a estar sano, pero si es el derecho a que se realicen todas las acciones dirigidas a lograr el más alto nivel de salud posible en todos los ámbitos que sean necesarios. Como bien ha destacado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (en adelante “CDESC”), el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel posible de salud (Observación General 14, pr. 9 in fine). En otras palabras, dada una afección a la salud de una persona, este derecho implica que, si existen alternativas científicas aplicables, viables y consentidas, el Estado realice el máximo de sus esfuerzos para facilitar a tal persona el acceso a esas alternativas, si con ello puede mejorar su salud, siendo que tales alternativas pueden ser bienes, servicios, o simplemente información.

En lo que se refiere al ejercicio del derecho a la salud de las personas mayores, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conforme a lo dispuesto en los párrafos 34 y 35 de la Observación General N°6 (1995), reafirma la importancia de un enfoque integrado de la salud que abarque la prevención, la curación y la rehabilitación. Esas medidas deben basarse en reconocimientos periódicos para ambos sexos; medidas de rehabilitación física y psicológica destinadas a mantener la funcionalidad y autonomía de las personas mayores; y la prestación de atenciones y cuidados a los enfermos crónicos y en fase terminal, ahorrándoles dolores evitables y permitiéndoles morir con dignidad.

En el marco de la gravedad de la pandemia COVID-19 es innegable el incremento de la amenaza a la salud pública, que podrían justificar en alguna medida restricciones a la libertad de circulación, tal es el caso de la cuarentena o ingresos hospitalarios preventivos.

Sin embargo, desde ningún punto de vista se justifica la vulneración de la dignidad humana de las personas en cuarentena preventiva, presuntamente contagiadas o las confirmadas del contagio, así como tampoco un trato que no sea adecuado, oportuno y sin discriminación, de conformidad a la normativa internacional de los derechos humanos. Todo lo contrario, se vuelve imperativo e inexcusable para el Estado salvadoreño, por medio de todas las dependencias involucradas, desde la primera línea de salud, personal administrativo y logístico el cumplimiento de las obligaciones para respetar y garantizar el derecho humano a la salud, con especial atención a los grupos en condición de vulnerabilidad.

El derecho a la salud se vincula directamente con el derecho a la vida y por lo tanto es deber de garantía del Estado que se cumpla y se efectúen todas las acciones necesarias y de manera prioritaria y urgente. El fallecimiento de dos personas con al parecer enfermedades crónicas, presume una negligencia estatal, al no brindarles la atención médica necesaria para estabilizar sus padecimientos, de acuerdo a las denuncias y noticias periodísticas, las afecciones de las personas que fallecieron fueron agravándose sin que el personal médico del Hospital Saldaña las atendiera, no obstante, las peticiones de los mismos afectados y otros pacientes que presenciaron los acontecimientos, por lo que es deber del Estado investigar estos hechos de forma eficaz y con el principio de debida diligencia, individualizar presuntos actores y que previo el debido proceso penal, se puedan establecer las responsabilidades correspondientes y el resarcimiento a las familias.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como el Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establecen el derecho de las personas al “disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social”. Por lo tanto, en el caso de las personas que se encuentran en cuarentena preventiva es indispensable no solamente la atención médica de calidad en el aspecto físico, sino garantizar la salud psicosocial, ante las circunstancias extraordinarias que les ha tocado experimentar en el contexto de la pandemia del COVID-19.

Reconociendo que la salud como un bien público, por lo que se exige a los Estados una serie de medidas de conformidad al artículo 10 del referido Protocolo Adicional, para garantizar ese derecho:

“... a. La atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad; b. la extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado; c. la total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas; d. la prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole; e. la educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud, y f. la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables”.

MEDIDAS CAUTELARES

Dentro de las atribuciones asignadas a esta Procuraduría, el ordinal décimo del artículo 194.I de la Constitución habilita a promover y proponer medidas que estime necesarias en orden a prevenir violaciones a los derechos humanos. Esta potestad es amplia y permite una gama de mucha diversidad de acciones que la Procuraduría puede adoptar. No obstante, la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en su artículo 36, concretiza aún más esta potestad, habilitando la emisión de las medidas cautelares.

Adicionalmente el modelo de medidas cautelares que asume la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos es completamente amplio, es decir basado en el esquema *numerus apertus*. De manera que como Procurador no estoy obligado a seguir un listado taxativo de medidas, sino que debo adoptar las que considere conveniente según las circunstancias.

Lo anterior da pie a una tercera característica que es su necesidad o circunscripción teleológica, de modo que una medida cautelar no se puede considerar como un fin en sí mismo, sino que está justificada y limitada a lograr necesariamente un propósito que está determinado por la ley: “evitar que se consuman daños irreparables a las personas”. En ese sentido, si bien se adscribe –como fue apuntado previamente– al modelo de *numerus apertus* la medida escogida debe tener el potencial de lograr el propósito señalado, y no exceder del mismo.

Destaca la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, también, que la medida cautelar debe ser eficaz, con capacidad de lograr el efecto que persigue, y esto significa dos cosas: por una parte, pertinencia, y por la otra potencial de transformación de la realidad. Este último elemento, dada la naturaleza de la Procuraduría en el sentido de no ser un órgano jurisdiccional, significa que, si bien no puede imponer coactivamente el logro o cumplimiento de la finalidad propuesta, sí puede supervisar su cumplimiento y utilizar o desplegar cualquier mecanismo que la Ley le ofrece para propiciar el cumplimiento de su recomendación.

Por otra parte, de la naturaleza de una medida cautelar surge la exigencia de la concurrencia de dos condiciones. La primera, denominada peligro de daño inminente o *periculum in mora*; y la segunda, denominada apariencia jurídica de veracidad o *fumus boni iuris*.

En el presente caso se ha tenido conocimiento que las personas que han sido trasladadas en el marco de las medidas de contención y prevención por el COVID-19 a cuarentena al Hospital Saldaña, no cuentan con la información adecuada sobre su situación clínica, sobre su diagnóstico, sobre los resultados de sus pruebas realizadas para detectar el coronavirus y en los casos en que ya se les ha brindado los resultados, desconocen respecto a su estancia o no en el lugar, sobre todo los que resultaron negativos, generándoles incertidumbre, agravando más su situación de salud física, mental y social en cuarentena.

También, se tiene conocimiento que junto a las personas que ya tienen resultados negativos a COVID-19 en el Hospital Saldaña, están ingresando a las nuevas personas que trasladan para guardar la cuarentena, de quienes no se sabe si están contagiadas, situación que preocupa a ambos grupos por la posibilidad de reinfección del virus, de adquirir otras enfermedades dadas las variadas veces que han sido trasladados internamente y las autoridades no han atendido esa situación.

Se conoce, además, que hay personas que tienen resultados positivos y conviven con personas que no se les ha hecho la prueba, situaciones que no cumplen con la finalidad de una cuarentena.

La falta de pruebas para detectar COVID-19 ha sido la constante expresada por muchas personas en cuarentena en el Hospital Saldaña, el hacinamiento y la no separación adecuada de los grupos especialmente de aquellos en condición de vulnerabilidad como niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas con VIH y otras enfermedades asociadas, siendo de vital importancia dada la cuarentena que cumplen separar los positivos de aquellos que no lo están, para que se logren los fines que se persiguen.

Más grave aún parece para esta Procuraduría los hechos denunciados sobre el trato inadecuado y negligente del personal de salud (entiéndase personal médico, de enfermería, de servicios generales entre otros profesionales de la salud), lo que ha llevado incluso a personas hasta la muerte durante en su estancia en cuarentena en ese hospital, tal como se estableció en el apartado de las consideraciones.

Según los protocolos internacionales la cuarentena⁸⁸ implica una serie de medidas que se deben implementar para que la misma sea efectiva, expertos en salud mencionan

⁸⁸ Reglamento Sanitario Internacional (RSI), cuarentena significa la restricción de las actividades y/o la separación de los demás de personas que no están enfermas, pero respecto de las cuales se tienen sospechas, o de equipajes, contenedores, medios de transporte, o mercancías sospechosos, de forma tal que se prevenga la posible propagación de la infección o contaminación.

requisitos esenciales que deben adecuarse para todas las personas en cuarentena como la clasificación adecuada, separación a una distancia de un metro, creación de un expediente clínico por persona, elaboración de una historia clínica, realización de examen físico y para detectar el coronavirus, considerando que pueden haber muchas personas positivas, pero asintomáticas, mismas que pueden contagiar a otros sino se advierte que son portadores del virus, entre otros aspectos que el protocolo debe contener.

En el documento denominado: Lineamientos Técnicos para la atención clínica de personas con enfermedad COVID-19, de marzo de 2020, emitido por el Ministerio de Salud, se establecen medidas de prevención y control, reconocimiento temprano de signos y síntomas y gravedad en los pacientes (mediante un sistema de clasificación basado en el nivel de gravedad al momento de la consulta médica y el reconocimiento de la sintomatología y examen físico, por lo que se clasificarán en los grupos de leve, moderado y severo), implementación de precauciones estándar para la atención de todos los pacientes, aislamiento inmediato de casos sospechosos o confirmados de COVID-19, siendo el Hospital Saldaña el primer centro de atención para dichos casos, estableciéndose en este documento, las medidas específicas a cumplir, siendo de rigor que los pacientes de preferencia deben estar en habitaciones individuales, las camas al menos un metro de distancia entre ellas, el paciente usará mascarilla, se brindará información a los familiares sobre la evolución del paciente, entre otras medidas que se deben abordar, para prevenir y controlar la infección; sin embargo, de la información obtenida se establece un incumplimiento a protocolos y lineamientos por parte del personal de salud. Dejando en grave riesgo los derechos de las personas en cuarentena.

Respecto al acceso a la información, el paciente o personas en cuarentena, así como sus familiares tienen derecho a que se les exprese de forma accesible sobre su diagnóstico, lo que implica la realización de los exámenes que corresponden, el objetivo, método, duración probable, beneficios y riesgos del tratamiento propuesto en caso se deba brindar, y para el caso que nos ocupa, toda la información posible en el marco de atención de la pandemia por COVID-19, información que se presume no ha sido brindada por parte del personal de salud.

Esta Procuraduría considera de vital importancia destacar que la prestación de los servicios de salud debe ser aceptable, con calidad, calidez y efectivo, lo que implica contar con personal de salud (médico, de enfermería, auxiliares, entre otros) con la debida acreditación profesional, con los conocimientos, diligencia y pericia suficientes para garantizar seguridad en la atención que se brinda, por ello, resulta grave para el suscrito advertir posibles muertes por negligencia en el Hospital Saldaña según las denuncias recibidas, de personas en cuarentena, al no brindárseles la atención médica adecuada y oportuna, así como los medicamentos de calidad, insumos y equipo necesario para minimizar el riesgo para su vida, integridad personal y su salud.

Por tales razones reconozco y afirmo que existe un peligro de daño inminente que incluso pudiera ser irreversible si las situaciones señaladas continúan como hasta el momento en las instalaciones del Hospital Saldaña para las personas en cuarentena.

Adicionalmente hay elementos que llevan a suponer, aunque pueden resultar desvirtuados de conformidad con las investigaciones posteriores, que no siguieron todas las precauciones propias de las personas en cuarentena, lo cual pudo haber sido el factor más influyente que desencadenara la actual situación de las personas en cuarentena, lo cual en caso de ser cierto, podría implicar una violación al derecho a la vida, a la integridad personal y a la salud de las personas antes mencionadas y de otras que se encontraren el lugar. Consecuentemente, reconozco y afirmo que existe, en este momento y en las circunstancias actuales, una apariencia jurídica de veracidad.

Concurriendo lo anterior es procedente emitir una medida cautelar, la cual debe estar dirigida a realizar todas las gestiones que sean necesarias para dar efectivo cumplimiento a los protocolos de atención establecidos, a brindar un trato digno a los pacientes en cuarentena, a brindar los insumos médicos necesarios, a brindar la información a personas en cuarentena y a sus familiares, así como actuar con la debida diligencia por parte del personal de salud que brinda la atención.

En consecuencia y de conformidad con las atribuciones otorgadas en el artículo 194. romano I, ordinal 1º, 2º, 3º, 7º y 10º de la Constitución de la República y sobre la base de las facultades contenidas en los artículos 11, 27, 28, 36 y 45 de la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en mi calidad de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, resuelvo y emito la siguiente medida cautelar:

- a. Reconocer la complejidad que enfrentan los Estados y las sociedades a nivel mundial debido a las medidas excepcionales que requiere la pandemia global ocasionada por el COVID-19, lo que supone desafíos extraordinarios desde el punto de vista de los sistemas sanitarios, la vida cotidiana de las personas y para la vigencia de los derechos humanos.
- b. Declarar que en las condiciones actuales y de acuerdo con las informaciones existentes en este momento, las personas afectadas aquí relacionadas en el marco de la atención de la pandemia por COVID-19, se encuentran en una situación de peligro o daño inminente en su vida, integridad personal y a su salud, resultado que debe ser prevenido por medio del proceder de las autoridades de salud, quienes deberán ajustar su conducta a las obligaciones de medio de conservar (asegurar efectividad) y defender (garantizar sin discriminación) el derecho humano a la vida, a la integridad personal y a la salud física y psicosocial de las personas en cuarentena.
- c. Al señor Ministro de Salud, doctor Francisco José Alabí Montoya, que adopte con carácter de urgentes e imposterables, las medidas de su competencia en el marco de los protocolos de atención internacionales y nacionales existentes para la atención de las personas en cuarentena preventiva o diagnosticadas con COVID-19 que se encuentran en el Hospital Nacional General de Neumología y Medicina Familiar “Dr. José Antonio Saldaña”, para prevenir afectaciones más graves a la salud y la vida.
- d. A la misma autoridad se le previene que debe garantizar de forma urgente el acceso a la información, de las personas que se encuentran en el Hospital Saldaña, sobre sus tratamientos, estados de salud y permanencia en dicho nosocomio.
- e. Asimismo, se le exhorta a que de inmediato adopte las medidas para la atención urgente a pacientes en condición de vulnerabilidad, particularmente niñez, neonatos, personas adultas mayores, mujeres, mujeres embarazadas o en estado post parto, personas con discapacidad, personas con VIH y a quienes presentan condiciones de salud adyacentes, como enfermedades crónicas. Por otra parte, deberá proporcionar los insumos necesarios para la protección y bioseguridad del personal médico, enfermeras y demás personal de apoyo hospitalario.
- f. A la señora Directora del Hospital Nacional General de Neumología y Medicina Familiar “Dr. José Antonio Saldaña” doctora Carmen Guadalupe Melara de García, que adopte las medidas urgentes en el marco de los protocolos y lineamientos internacionales y nacionales de contención, prevención y tratamiento de casos frente al COVID-19, garantizando con el ello, el derecho a la vida, a la integridad física y a la salud de las referidas personas en cuarentena.
- g. Al señor Presidente de la República Nayib Armando Bukele, realizar las acciones de su competencia a efectos de garantizar las condiciones adecuadas en el Hospital Nacional General de Neumología y Medicina Familiar “Dr. José Antonio Saldaña” así como demás hospitales de la red nacional del país que sean destinados para contener, detectar y brindar el tratamiento adecuado a las personas frente al COVID-19, lo que implica además, garantizar al personal de salud de todos los insumos, equipos e infraestructura necesaria para el buen desempeño de sus labores.
- h. Instar a las autoridades precitadas asegurar las perspectivas de protección integral de los derechos humanos y de la salud pública, frente a la pandemia del COVID-19.
- i. Se solicita al señor Presidente de la República Nayib Armando Bukele, al señor Ministro de Salud doctor Francisco José Alabí Montoya y a la directora del Hospital Nacional General de Neumología y Medicina Familiar “Dr. José Antonio Saldaña” doctora Carmen

Guadalupe Melara de García que rindan un informe de cumplimiento sobre la presente medida cautelar en el plazo de tres días posteriores a la notificación de la presente resolución en la que de manera detallada expongan las acciones realizadas para darle cumplimiento, incluyendo información actualizada de la condición de salud de las personas afectadas al inicio mencionadas.

- j. Al señor Fiscal General de la República le insto a realizar las acciones de investigación de su competencia sobre las dos muertes que hasta la fecha han ocurrido en el contexto de la pandemia COVID-19, dentro del Hospital Saldaña, aplicando en todo momento el principio de debida diligencia, ante la gravedad y circunstancias en que se suscitaron. Para lo cual le solicito informar sobre el resultado de sus acciones en el plazo de diez días contados a partir de la notificación de la presente resolución.
- k. Declarar, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, literales a, b y f; 24 literales, b y c; y 25 de la Ley de Acceso a la Información Pública, que la presente resolución, por contener datos personales sensibles, es confidencial, y en consecuencia no puede ser difundida ni publicitada por ninguna de las autoridades públicas a las que se les notifique, ni por aquellos otros servidores públicos que tengan acceso a la misma por ocasión de participar en todo o en parte de su proceso de cumplimiento.

2. Medidas cautelares para la protección de las personas en Centros de Contención durante la emergencia sanitaria por COVID-19

PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS. San Salvador, a las quince horas, de fecha dos de abril de dos mil veinte.

HECHOS

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, desde que entró en vigencia la declaratoria del “Estado de Emergencia Nacional por la Epidemia por COVID-19” ha recibido diversas denuncias telefónicas respecto a las personas que debido a la misma se encuentran en diferentes Centros de Contención del Coronavirus, en adelante CCC, en donde guardan cuarentena obligatoria ante el COVID-19 desde el 12 de marzo. De las denuncias recibidas y las verificaciones realizadas, así como del monitoreo de medios de comunicación y redes sociales, nos han permitido contar con información de que desde su confinamiento hasta la fecha un gran número de personas permanecen aún en internamiento y 20 días después permanecen en expectativa e incertidumbre ya que siguen sin que se les practiquen pruebas de laboratorio de COVID-19. De igual manera hay otro grupo de personas a quienes habiéndoles practicado la misma, no han recibido información alguna sobre los resultados. En dichos centros, se han detectado la mayoría de contagios, y solo las personas con síntomas evidentes han sido trasladadas al hospital designado para tratar a pacientes portadores.

Desde el doce de marzo el suscrito junto con el personal de esta institución realizamos verificación en el Aeropuerto Internacional El Salvador San Oscar Arnulfo Romero y Galdámez, a efecto de constatar los procedimientos realizados por las autoridades con las personas que ingresaban al país vía aérea, dado que en fecha once de ese mismo mes en horas de la noche, el señor Presidente de la República, Nayib Bukele, anunció en cadena nacional de radio y televisión que las personas que ingresaran al país por cualquier vía (terrestre, aérea o marítima) deberían entrar a cuarentena de treinta días como medida de prevención para evitar la propagación del coronavirus.

Asimismo, personal de las diferentes Delegaciones Departamentales de esta Procuraduría también realizó verificación en las distintas fronteras terrestres desde el doce de marzo, pudiendo constatar que las personas que ingresaban al país eran retenidas, sin haber establecido previamente los lugares a donde se les trasladaría para cumplir la cuarentena señalada. Desde entonces, las personas que ingresaban al país y sus familiares denunciaron la falta de información respecto al lugar a donde serían trasladadas éstas para cumplir la medida, reteniéndoles los pasaportes y teniendo dificultad para comunicarse con

sus familiares. Se dijo que al no tener información sobre sus traslados para cumplir la cuarentena muchas personas se vieron obligadas a dormir hacinados en el suelo dentro de las instalaciones del aeropuerto, sin colchonetas, desprovistos de mascarillas y guantes.

De igual manera, desde esa fecha, personal de esta Procuraduría a nivel nacional realizó verificación en los diferentes CCC que fueron habilitados para recibir a las personas que eran trasladadas hacia los mismos desde el aeropuerto y fronteras terrestres, a efecto de constatar las condiciones de infraestructura de los lugares, condiciones de salud e higiene, la alimentación que se les proporcionaba, entre otros. Estas verificaciones posibilitaron comprobar diferentes carencias y negligencias por parte de las autoridades que están a cargo de los CCC, debido al hacinamiento, falta de condiciones higiénicas, ausencia de medicamentos o tratamientos médicos para personas con enfermedades crónicas, atención inclusiva a grupos en condición de vulnerabilidad (personas adultas mayores, personas con VIH, personas con discapacidad, personas trans, niñez, entre otros).

Entre los hechos denunciados en los diferentes CCC a nivel nacional, coincide el trato discriminatorio, la omisión de la prueba del Coronavirus y el encierro a pesar de que ha transcurrido el término que señalan organismos especializados de salud. Además de que se ha solicitado por las personas en cuarentena que el período de la misma sea contado a partir de su ingreso al país y habiendo cumplido los treinta días señalados sin que presenten síntomas o hayan tenido pruebas con resultado negativo sean enviados a sus residencias a continuar con la cuarentena domiciliar correspondiente. A pesar de ello, las personas no han sido informadas por los personeros del Ministerio de Salud – MINSAL sobre cuál será el procedimiento a seguir una vez hayan cumplido su tiempo de cuarentena, expresando que el personal médico de los CCC no hace más que toma de temperatura diaria.

A la fecha, según datos oficiales contenidos en el sitio web covid19.gob.sv, a nivel nacional existen 98 Centros de Contención del Coronavirus – CCC, totalizando 4,303 personas en cuarentena sanitaria obligatoria por haber ingresado al país proveniente de diferentes destinos, de estos 2,845 son hombres y 1,455 son mujeres; sin embargo, en los datos no se desglosa la edad de las personas, además en ese mismo sitio oficial se refleja que suman un total de 712 personas que desde el 21 de marzo del presente año, fueron “retenidas” por el presunto incumplimiento de la cuarentena domiciliar, de estas 641 son hombres, mientras que 71 son mujeres. El sitio web no especifica en donde están esos centros, pero debido a las denuncias recibidas conocemos de algunos ubicados en San Salvador, habilitados como CCC para personas retenidas: el Palacio de los Deportes del Instituto Nacional de los Deportes – INDES; Ciudad Mujer Lourdes, Colón y Ciudad Mujer San Martín.

INFORMACIÓN OBTENIDA Y GESTIONES INSTITUCIONALES

a. Villa Centroamericana, conocida como Villa Olímpica, San Salvador.

Un número de 255 personas guardaban cuarentena inicialmente en este centro de contención, habilitado sin ningún criterio sanitario desde la noche del once de marzo de este año. Se verificó que nunca existió coordinación por parte del personal de salud y de protección civil, solo se instruyó a la Fuerza Armada para adecuar una edificación en desuso, sin condiciones higiénicas o sanitarias, fueron las personas que retenidas en ese lugar quienes se organizaban para el aseo de las diferentes áreas, para la toma de alimentos en grupos y el lavado de ropa, entre otras actividades.

Se dijo que el pasado veintisiete de marzo del presente año, fueron informados por personal de salud que “debido al hacinamiento” que existía en ese centro serían trasladadas a otros CCC, en los departamentos de Sonsonate, La Paz, La Libertad y San Salvador. No obstante, se supo por información proporcionada por las mismas personas en cuarentena en la Villa los traslados obedecían a que un hombre quien estuvo entre los pabellones B-5 y B-6, quien presuntamente había resultado positivo a la prueba de contagio COVID-19, pero que al resto nunca les fue realizada la prueba. Tuvimos conocimiento de la nota, de fecha veintitrés de marzo, que un grupo considerable de personas en ese CCC enviaron a los correos electrónicos oficiales de la entonces Ministra de Salud con copia a esta Procuraduría, en la que expresaban la desmejora en la cantidad y calidad de alimentación, solicitando la

realización urgente de la prueba para descartar o confirmar el contagio. Dieron a conocer los firmantes que en fecha diecisiete de marzo, ya habían realizado una petición similar, pero que de ninguna de ellas los peticionarios recibieron respuesta alguna.

Una de las personas que también suscribió esa nota fue el señor Óscar Antonio Méndez Beltrán, quien habiendo estado en la Villa Centroamericana fue trasladado al Hotel Beverly Hills, lugar donde el pasado 01 de abril falleció al parecer por otras complicaciones de salud.

Por otra parte, se conoció que en ese CCC también estuvo inicialmente la primera paciente fallecida por coronavirus, pero que fue trasladada también al Hotel Beverly Hills y por último se le ingresó al Hospital Nacional General de Neumología y Medicina Familiar “Doctor José Antonio Saldaña” debido a que presentaba síntomas del contagio, lugar en donde falleció días después.

En ese sentido, las condiciones de este CCC deben ser analizadas a profundidad en vista a las medidas que deben adoptarse para garantizar la salud de las personas que se encontraron en el mismo y con el propósito de prevenir mayor contagio del COVID-19, dado que la vía de transmisión del virus es aérea y en este centro las personas tenían una constante interacción entre ellas y realizando traslados, sin medios de protección adecuados. Además, considerando los casos positivos la mayoría proviene del CCC Villa Olímpica, donde continuamente se han venido rompiendo las disposiciones propias de una cuarentena, debe considerarse y tomar especial atención sobre el tiempo que la cuarentena debe extenderse una vez se instalaron a pacientes en otros centros; así como las medidas para garantizar que las pruebas les sean realizadas a la mayor brevedad posible, con el objetivo de una atención oportuna, por el particular riesgo que representó haber permanecido en Villa Olímpica.

b. Hotel Serena, San Salvador

Se recibió denuncia que en ese lugar fue alojado un grupo familiar integrado por tres personas. Un hombre, una mujer y un joven, hijo de ambos, estos dos últimos presentan discapacidad física, usuarias de sillas de ruedas. Se informó que tanto la señora como el muchacho tienen el diagnóstico médico de “osteogénesis imperfecta”, además de presentar el joven de 24 años, problemas en la vesícula y del riñón, por lo cual requiere de una dieta especial baja en sodio y grasas. Debido a las dificultades de salud del grupo familiar fueron trasladados en repetidas ocasiones hasta que finalmente fueron llevados al Hotel Serena. Estas personas incluso solicitaron la práctica de los exámenes respectivos al cumplir los catorce días, para que en el caso de resultar negativas las pruebas, esta familia fuera enviada a concluir la cuarentena en su residencia.

A través del oficio No. DIE-036/2020, girado el veintisiete de marzo del año en curso, por el suscrito Procurador a la entonces Ministra de Salud, doctora Ana del Carmen Orellana Bendek, planteándole del trato excluyente de ambas familias, puesto que no se consideró la atención especializada para garantizar efectivamente el ejercicio del derecho a la salud y a la integridad física de ambas familias, solicitándole que proporcionara la alimentación especial, que priorizara de manera inmediata la realización de los pruebas para descartar o confirmar el contagio del COVID-19, atendiendo a las condiciones de vulnerabilidad de esta familia y de las personas adultas mayores, así como de personas con discapacidad y a quienes presentan cuadros de enfermedades crónicas. Asimismo, en el oficio en mención solicité informar oportuna y adecuadamente a las personas de los diagnósticos de salud y el resultado de las pruebas, sugiriendo que de ser negativas se evaluara la posibilidad de ser enviados a cumplir la cuarentena domiciliar a sus respectivas residencias. También se solicitó que mientras las personas de los grupos en condición de vulnerabilidad antes mencionados permanezcan en los centros de contención, debían ser atendidos con prioridad, suministrados de los medicamentos y de la alimentación especial correspondiente a sus diagnósticos; habiéndole requerido dicho informe en un plazo de setenta y dos horas dada la particularidad y urgencia de los casos, de lo cual no se ha recibido respuesta al respecto. Por el momento en esta Procuraduría no se ha recibido respuesta alguna a lo solicitado, a pesar de la urgencia de las acciones que se recomendaron.

El otro es el caso del señor A.C.A, quien se encuentra en el mismo CCC, junto a su esposa y su hijo. El señor manifestó tener setenta y tres años de edad, y 9 Stents en el corazón, además de padecer de diabetes, hipertensión y problemas digestivos, refirió que explicó al personal médico del Ministerio de Salud su condición médica y que por precaución debería estar cerca de un hospital de primer orden. Además, por su misma situación de salud, una nutricionista le prescribió una dieta especial que no está siendo cumplida.

El señor referido en este caso interpuso el proceso el Hábeas Corpus 152-2020, sobre el cual la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolvió con fecha veintisiete de marzo pasado, decretar auto de exhibición personal de la familia y dictó medida cautelar a favor de los tres a fin de disponer urgentemente las condiciones de resguardo de la salud y la integridad personal de todos ellos. Incluyendo “practicarles con urgencia e inmediatamente la prueba respectiva para determinar si presentan COVID-19 y en caso de ser negativa deberán ser remitidos a guardar cuarentena domiciliar. Y en caso de resultar positivo deberán ser derivados al centro hospitalario... para los enfermos con COVID-19”.

Este día hubo una queja de las personas en ese hotel, de que se les interrumpen reiteradamente la señal de internet, considerando que lo hacen para que ya no se sigan denunciando en las redes sociales el maltrato que se les dan en los CCC.

c. Centro Obrero doctor Mario Zamora, La Palma, Chalatenango

Cuenta con un total de 140 personas en cuarentena obligatoria y solamente se le ha practicado la prueba a siete de ellas.

d. Hotel La Palma, Chalatenango.

Desde el quince de marzo del presente año, este hotel tiene 108 personas bajo la medida de cuarentena, habiéndosele realizado la prueba a 19 personas, a quienes no se les ha brindado respuesta sobre su resultado.

e. Polideportivo de Merliot, Santa Tecla, La Libertad.

La Delegación Departamental de La Libertad verificó que hay un total de 103 personas guardando cuarentena, pero únicamente a 2 personas se le ha practicado la prueba

f. Centro Zaragópolis, Zaragoza, La Libertad.

Un total de siete personas en cuarentena con alrededor de dieciocho días bajo esa medida sin que se les haya practicado la prueba del covid.

g. Segunda Brigada Aérea de la Fuerza Armada de El Salvador, La Paz.

Cuenta con 39 personas en cuarentena a quienes no se les ha hecho la prueba del COVID-19. Se tiene conocimiento que este centro de contención será destinado para recibir a personas confirmadas con el virus.

h. Hotel Beverly Hills, La Libertad.

Mediante denuncia recibida en esta Procuraduría se tuvo conocimiento del caso señor Óscar Antonio Méndez Beltrán, persona que en fecha 13 marzo regresaba de un viaje de la ciudad de Panamá, al llegar estuvo guardando cuarentena en el centro de contención de la Villa Olímpica, iniciando con síntomas de fiebre, luego dolor de cabeza, le practicaron un examen de orina y resultó que tenía infección en las vías urinarias, suministrándole trimetropim y acetaminofén, luego fue trasladado al centro de contención Hotel Beverly Hills, persona que manifestó a su familiar que se le había practicado la prueba del COVID-19, pero en fecha 01 de abril el señor Méndez Beltrán ya no tuvo más comunicación con su familia. La esposa del señor Méndez Beltrán, señora Dina de Méndez luego de insistir en el centro

de contención se les brindara información, una doctora le manifestó que su esposo había fallecido, diciéndole que el cuerpo de su esposo sería trasladado al “Hospital Saldaña” y le entregaron sus pertenencias. La señora de Méndez vio el celular de su esposo y encontró que aparecía un mensaje de voz que éste envió a un teniente que anteriormente era el encargado de ese centro, en el cual se le escucha pidiéndole ayuda para que el personal médico llegara a auxiliarlo. La ahora viuda de Méndez dijo que un médico asignado en el Hotel Beverly Hills había encontrado el cuerpo de su esposo en el suelo a la 1:30 pm, del día miércoles 01 de abril. Agregó la denunciante que a su esposo no le dieron atención médica y que trató de comunicarse al Hospital Saldaña y no le habían dado información, asegurando que la muerte de su esposo se debió “al mal manejo del MINSAL”.

En mi calidad de Procurador establecí comunicación inmediata con el señor Ministro de Salud sobre el caso expuesto sobre el señor Méndez Beltrán, solicitándole brindara la respuesta del examen del COVID-19, quien se comprometió a proporcionar la información a la familiar del señor Méndez Beltrán. Luego de una segunda gestión a efectos de obtener información esta Procuraduría verificó la información brindada a la señora de Méndez, la cual fue que el resultado del examen era negativo a COVID-19 y la causa de muerte fue paro respiratorio.

En el marco del mandato de la Procuraduría, la Delegación Departamental de La Libertad, a través del oficio LL-0068/2020, este día ha solicitado informe detallado sobre el fallecimiento del señor Méndez Beltrán, a la Directora Regional de Salud Central del Ministerio de Salud, doctora Roxana Ivonne Morán de Santos.

Otro caso es el de la señora señora Rosa Elia Mejía Navarrete, persona adulta mayor de 69 años de edad, quien ingreso al país proveniente de los Estados Unidos de América, siendo remitida a cuarentena en el Centro de Contención del Coronavirus de la Villa Olímpica, donde presentó fiebre y síntomas de gripe; luego fue trasladada al Hotel Beverly Hills, lugar donde se complicó su estado de salud, y según la información recibida en esta Procuraduría en ninguno de los CCC antes mencionados recibió la atención médica oportuna ni se le realizaron los correspondientes exámenes; posterior a ello, fue trasladada al hospital Saldaña, lugar donde falleció, según la información brindada por la denunciante en ningún momento recibieron información del estado de salud de la señora Mejía Navarrete, realizando llamadas telefónicas en las cuales únicamente se les informaba que no podían dar ningún tipo de información, luego recibieron llamada telefónica de la Unidad Médica de Salud de San Luis la Herradura, donde al hacerse presente se les informó del fallecimiento de la señora Mejía Navarrete, sin tampoco darles la información a sus familiares de la causa de la muerte.

En fecha 02 de abril del presente año, se dirigió el Oficio DIE N° 047/2020, dirigido a la señora Directora del Hospital Nacional General de Neumología y Medicina Familiar “Dr. José Antonio Saldaña”, Doctora Carmen Guadalupe Melara de García, a quien se le solicitó un informe detallado con la siguiente información: 1. El Plan de contingencia y los Protocolos para la atención de la población adulta mayor que en dicho hospital se aplican; antes, durante y después de la emergencia, a partir de los decretos propuestos por el Órgano Ejecutivo en el marco del Estado de Emergencia Nacional por la Epidemia del COVID-19. Remitir la versión electrónica del plan y los protocolos; 2. Copia certificada del informe médico, bajo el cual fue trasladada la señora Mejía Navarrete a dicho hospital; 3. Copia certificada y debidamente foliada del expediente clínico de la persona fallecida en ese centro hospitalario; 4. Informe detallado de personas adultas mayores ingresadas a la fecha en dicho hospital, especificando la edad, género, padecimiento de enfermedades crónicas; 5. Informe del mecanismo de información para con los familiares de los pacientes ingresado en dicho hospital, y el registro de la información brindada a los familiares de la señora Rosa Elia Mejía Navarrete.

En este mismo centro de contención se encuentran personas a quienes se les ha realizado la prueba de COVID-19 en dos ocasiones, con resultados negativos, sin que les hayan permitido continuar la cuarentena en sus domicilios, situación que genera incertidumbre sobre los protocolos que se están aplicando para la toma de la prueba y los criterios para determinar las condiciones de la cuarentena.

i. Hotel Capital, San Salvador

Dos personas alojadas en el mismo, guardando la cuarentena obligatoria, denunciaron que desde hace tres días el hotel no les suministra alimentación, sino que la llevan de otro lugar. Dijeron que los alimentos que reciben están descompuestos y no los consumen por temor a enfermarse; indicando que cuando se han expresado su inconformidad las enfermeras les amenazan que si siguen quejándose “los enviarán al Hospital Saldaña”. Dijeron que a nadie se le realizó la prueba y que varias personas han expresado tener una dieta diferente a la que les dan por haberles extirpado la vesícula o por tener diagnósticos de diabetes e hipertensión.

j. Hotel Izalco Cabaña Club, Costa del Sol, La Paz.

El Señor O.F. informo que su amigo Luis Alonso Navarrete, ingresó al país proveniente de Panamá, que permaneció desde el trece de marzo en la Villa Centroamericana, pero que la semana pasada lo trasladaron al Hotel Izalco y a pesar de que es hipertenso y desde que está en los CCC no le suministran su medicamento y no le hacen el control médico de su enfermedad. Indicó que ya la practicaron la prueba y salió negativa, según le informaron; no obstante, le expresaron que deben practicarle otras pruebas más y por tanto debe permanecer en ese hotel.

k. Sede Ciudad Mujer Lourdes, Colón, La Libertad (personas retenidas por presunto incumplimiento de la cuarentena domiciliar).

Familiares del joven O.E.F, estudiante de 22 años de edad, fue retenido por policías de la Sección Táctica Operativa (STO) cuando descansaba en las gradas de su casa en Cima de San Bartolo, Ilopango y llevado junto a otros jóvenes más hacia la Delegación de la Policía Nacional Civil de Ilopango. Indicó que durante todo el trayecto hacia la delegación eran insultados y amenazados por el grupo de agentes uniformados con trajes grises y cubiertos del rostro con gorros y mascarillas.

Situación similar a la anterior expresó familiares del joven J.A.G, también de 22 años de edad, estudiante universitario y quien en una gasolinera, mientras abastecía de combustible su vehículo, ubicada en la carretera Panamericana a la altura de San Martín, fue retenido por un grupo de policías y soldados cubiertos con mascarillas, quienes lo condujeron a la Delegación policial de Ilopango. Dijeron ambas familiares que los jóvenes junto a otras personas más no tenían alimentos ni dejaban que se les llevara, así también explicaron que sus familiares estaban durmiendo en el suelo de la delegación y esposados.

Recientemente se informó el joven O.E.F. que los policiales los amenazan de que no publiquen nada de ese CCC pues de lo contrario “les van a quitar lo celulares y los van a llevar al hospital”. Explicó que la cantidad y calidad de comida está cada vez peor, puesto que son 37 hombres y apenas les dan de desayuno un pan pequeño con queso y un pan dulce, para el almuerzo les dan unos trocitos de pollo y un poquito de arroz y una tortilla. Dijo que no les proporcionan guantes, mascarillas ni alcohol gel, solo jabón. Aclarando que solo cuando las enfermeras escuchan toser a alguien le dan mascarilla.

También expresaron que no les han practicado la prueba a ninguno, pero que llegan todos los días a tomarles la temperatura. No les permiten que la familia les lleve alimentos o medicinas.

En estos casos, se debe tomar en cuenta que el decreto ejecutivo número 12 del ramo de salud contiene excepciones que permiten transitar por el territorio nacional, siendo estas actividades a las que dedican algunas de las personas que actualmente están en cuarentena por haber incumplido, según las autoridades, esa normativa. Entre ellas, hay personas que se encontraban en sus negocios de comida rápida, otras se dirigían a los supermercados donde laboraban, entre otras, que fueron retenidas y están cumpliendo con cuarentena en esos centros de contención, como resultado de una decisión arbitraria de parte de las autoridades.

Por otra parte, se conoció a través de los medios de comunicación que la señora alcaldesa de Santa Ana, ante los primeros casos anunciados por las autoridades de Salud con COVID-19 positivo en dos personas en el municipio de Santa Ana, denunció que no ha recibido información de parte del Gobierno Central, la cual ha requerido con diferentes autoridades, a efectos de realizar acciones de prevención sanitaria en los sectores del municipio reportados con el virus, sin obtener ninguna respuesta, denunciando que la información está siendo centralizada.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

El derecho humano a la salud y las obligaciones generales a cargo del Estado

El derecho a la salud no es un derecho a estar sano, pero si es el derecho a que se realicen todas las acciones dirigidas a lograr el más alto nivel de salud posible en todos los ámbitos que sean necesarios. La mera existencia de un problema en la salud de una persona no conlleva per se la responsabilidad del Estado; sin embargo, como bien ha destacado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (en adelante “CDESC”), el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel posible de salud (Observación General 14, pr. 9 in fine). En otras palabras, dada una afección a la salud de una persona, este derecho implica que si existen alternativas científicas aplicables, viables y consentidas, el Estado realice el máximo de sus esfuerzos para facilitar a tal persona el acceso a esas alternativas, si con ello puede mejorar su salud, siendo que tales alternativas pueden ser bienes, servicios, o simplemente información. Todo dependerá de las circunstancias, por supuesto.

No se debe perder de vista que El Salvador es un Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante “PIDESC”) y del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante “PSS”), en los cuales se contempla el derecho a la salud (artículo 12 PIDESC, artículo 10 PSS). Lo mismo se puede decir del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “CADH”) interpretado a la luz de los mismos artículos ya citados. El reconocimiento de este derecho, por provenir de tales tratados de derechos humanos, les da una puerta de entrada hacia la protección constitucional, en su texto literal, no se refiere al derecho a la salud, tal derecho está implícitamente incorporado en ella, por el efecto jurídico que producen los artículos 1, 2, 144 y 146 conforme con los cuales la protección de los derechos humanos es un valor constitucional que se traduce normativamente en la ampliación del catálogo de derechos expresamente establecidos en la constitución a través del reconocimiento de derechos implícitos, y en la aplicación a estos derechos de la protección reforzada dispuesta en el diseño constitucional.

El Comité DESC interpreta el derecho a la salud, definido en el apartado 1 del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales como un derecho inclusivo que no solo abarca la atención de salud oportuna y apropiada, sino también los principales factores determinantes de salud, como el acceso al agua limpia potable, y a condiciones sanitarias adecuadas, el suministro adecuado de alimentos sanos, una nutrición adecuada, una vivienda adecuada, condiciones sanas en el trabajo, y el medioambiente, y acceso a la educación e información sobre cuestiones relacionada con la salud, incluida la salud sexual y reproductiva. Otro aspecto importante es la participación de la población en todo el proceso de adopción de decisiones sobre las cuestiones relacionadas con la salud en los planos comunitario, nacional e internacional⁸⁹.

El derecho a la salud en todas sus formas y a todos los niveles abarca elementos esenciales e interrelacionados (Disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad), cuya aplicación dependerá de las condiciones prevalecientes en cada Estado Parte⁹⁰. La accesibilidad, como

⁸⁹ Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Observación General N° 14, “El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) párrafo 11, pág. 3/21, 22° período de sesiones.

⁹⁰ Ídem, párrafo 12, pág. 3/21, 22° período de sesiones.

uno de los elementos esenciales implica que los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles a todos, sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado Parte. La accesibilidad presenta cuatro dimensiones superpuestas: No discriminación, Accesibilidad económica, Accesibilidad física y Acceso a la información. En cuanto a las dos primeras dimensiones se establece:

No discriminación: los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles, de hecho y de derecho, a los sectores más vulnerables y marginados de la población, sin discriminación alguna por cualquiera de los motivos prohibidos.

La Constitución, además, en su artículo 2 establece dos obligaciones generales que se tienen de parte del Estado hacia cualquiera de sus habitantes y respecto de sus derechos, a saber: conservarlos y defenderlos. En otras palabras, es obligación estatal conservar los derechos de las personas, y también es obligación defender tales derechos. Es claro que la obligación de conservar implica permitir que los derechos no sean violentados, afectados o que la persona no sea privada de gozarlos o ejercerlos. Es igualmente claro que la obligación de defender los derechos supone que ante cualquier amenaza o ante cualquier violación, afectación o privación, existan mecanismos que permitan la protección de los derechos y su eventual reparación.

Son derechos de los pacientes⁹¹: El derecho de atención, que implica ser atendido de manera oportuna, eficiente y con calidad, por un prestador de servicios de salud cuando lo solicite o requiera, que comprende acciones destinadas a la promoción, prevención, curación, rehabilitación de la salud y cuidados paliativos de acuerdo a las normas existentes. Derecho a trato igualitario. El paciente recibirá en todo momento de su atención un trato digno, con respeto, esmero, cortesía, resguardando su dignidad humana e intimidad y sin ningún tipo de discriminación por razones de raza, sexo, religión, edad, condición económica, social, partidaria, política e ideológica. Derecho a una atención calificada, lo que implica que el paciente tiene derecho a una atención en salud con calidad y calidez, con profesionales y trabajadores de salud debidamente acreditados, certificados y autorizados por las autoridades competentes para el ejercicio de sus tareas o funciones, en el ámbito público y privado.

El derecho a la información implica que el paciente o su representante, deberá recibir en forma verbal y escrita, del prestador de servicios de salud, durante su atención, la siguiente información, de manera oportuna, veraz, sencilla y comprensible de acuerdo a su problema:

a) Nombre completo del profesional de la salud que lo atenderá y su número de registro en la Junta de Vigilancia; b) Su diagnóstico, tratamiento, alternativas, riesgo, evolución y pronóstico respectivo; c) Recibir la información y explicación de manera oportuna y lo más clara posible de su diagnóstico, de sus exámenes de laboratorio, de su tratamiento, imágenes, biopsias; así como de los efectos secundarios de medicamentos y procedimientos; d) Duración estimada de estadía en caso de hospitalización y tratamiento; en los casos que se puedan precisar; e) Las posibilidades de éxito, riesgo y las consecuencias de rechazar o interrumpir un tratamiento; y, f) En el ámbito privado el paciente tiene derecho a conocer, en cualquier momento, los costos estimados de su hospitalización, tratamiento y honorarios médicos, considerando las circunstancias del mismo. Toda información antes mencionada será proporcionada al representante, cuando el paciente no se encuentre en uso de sus plenas facultades.

En lo que se refiere al ejercicio del derecho a la salud de las personas mayores, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conforme a lo dispuesto en los párrafos 34 y 35 de la observación general N°6 (1995), reafirma la importancia de un enfoque integrado de la salud que abarque la prevención, la curación y la rehabilitación. Esas medidas deben basarse en reconocimientos periódicos para ambos sexos; medidas de rehabilitación física y psicológica destinadas a mantener la funcionalidad y autonomía de las personas mayores; y la prestación de atenciones y cuidados a los enfermos crónicos y en fase terminal, ahorrándoles dolores evitables y permitiéndoles morir con dignidad.

⁹¹ Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes y Prestadores de Servicios de Salud, emitida por medio del Decreto Legislativo número 307, de fecha 10 de marzo de 2016, publicada en el D.O. 64, Tomo 411, de fecha 8 de abril de 2016. Arts. 10, 11, 12 y 13.

En el marco de la gravedad de la pandemia COVID-19 es innegable el incremento de la amenaza a la salud pública, que podrían justificar en alguna medida restricciones a ciertos derechos, tal es el caso de la cuarentena o ingresos hospitalarios preventivos. Esto desde ningún punto de vista justifica la vulneración de la dignidad humana de las personas presuntamente contagiadas o confirmadas del contagio, así como tampoco tolerar la omisión de un trato adecuado, oportuno y sin discriminación, de conformidad a la normativa internacional de los derechos humanos. Todo lo contrario, se vuelve imperativo e inexcusable hacia los Estados el cumplimiento de las obligaciones de respetar y garantizar los derechos humanos a la salud, a la integridad personal y a la vida, con especial atención a los grupos en condición de vulnerabilidad.

En relación con las medidas de contención, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH y su Relatoría Especial para los Derechos Económicos, Sociales Culturales y Ambientales, REDESCA, urgen a los Estados que observen, en cualquier acción dirigida a la reducción de los factores de contagio, el estricto respeto a los tratados y estándares internacionales en materia de derechos humanos, las garantías del Estado de Derecho y el cumplimiento de la obligación de cooperación de buena fe, particularmente en contextos transnacionales de alto riesgo para la salud pública y la vida de las personas.

Resalta también que deben tutelarse los derechos de todas las personas que se vean afectadas por las medidas de contención que se impongan, especialmente aquellas cuya subsistencia peligre al someterse a un régimen de cuarentena, por la pérdida de sus ingresos, amenazas a sus necesidades vitales básicas, riesgo de ser desalojadas o ausencia de redes institucionales de apoyo.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como el Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido como “Protocolo de San Salvador”, establece el derecho de las personas al “disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social”.

Reconociendo que la salud como un bien público, por lo que se exige a los Estados una serie de medidas de conformidad al artículo 10 del referido Protocolo Adicional, para garantizar ese derecho, entre ellas: “... a. la atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad; b. la extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado; c. la total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas; d. la prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole; e. la educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud, y f. la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables”.

MEDIDAS CAUTELARES

Dentro de las atribuciones asignadas a esta Procuraduría, el ordinal décimo del artículo 194.I de la Constitución habilita a promover y proponer medidas que estime necesarias en orden a prevenir violaciones a los derechos humanos. Esta potestad es amplia y permite una gama de mucha diversidad de acciones que la Procuraduría puede adoptar. No obstante, la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en su artículo 36, concretiza aún más esta potestad, habilitando la emisión de las medidas cautelares.

Adicionalmente el modelo de medidas cautelares que asume la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos es completamente amplio, es decir basado en el esquema *numerus apertus*. De manera que como Procurador no estoy obligado a seguir un listado taxativo de medidas, sino que debo adoptar las que considere conveniente según las circunstancias.

Lo anterior da pie a una tercera característica que es su *necesidad o circunscripción teleológica*, de modo que una medida cautelar no se puede considerar como un fin en sí mismo, sino que está justificada y limitada a lograr necesariamente un propósito que está determinado por la ley: “evitar que se consuman daños irreparables a las personas”. En ese sentido, si

bien se adscribe –como fue apuntado previamente- al modelo de *numerus apertus* la medida escogida debe tener el potencial de lograr el propósito señalado, y no exceder del mismo.

Destaca la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, también, que la medida cautelar debe ser eficaz, con eficacia, *i.e.*, con capacidad de lograr el efecto que persigue, y esto significa dos cosas, por una parte pertinencia, y por la otra potencial de transformación de la realidad. Este último elemento, dada la naturaleza de la Procuraduría en el sentido de no ser un órgano jurisdiccional, significa que, si bien no puede imponer coactivamente el logro o cumplimiento de la finalidad propuesta, si puede supervisar su cumplimiento y utilizar o desplegar cualquiera de los mecanismos que la Ley le ofrece para propiciar el cumplimiento de su recomendación.

Por otra parte, de la naturaleza de una medida cautelar surge la exigencia de la concurrencia de dos condiciones. La primera, denominada peligro de daño inminente o *periculum in mora*; y la segunda, denominada apariencia jurídica de veracidad o *fumus boni iuris*.

En el presente caso se ha tenido conocimiento que de las personas que cumplen el régimen de cuarentena la prueba del COVID-19 no se ha realizado a la totalidad de las personas que están bajo ese régimen, ni tampoco a las personas que han sido trasladadas en el marco de las medidas de contención y prevención por el COVID-19 a cuarentena al Hospital Saldaña, no cuentan con la información adecuada sobre su situación clínica, diagnóstico o resultados de sus pruebas realizadas para detectar el coronavirus y en los casos en que ya se les ha realizado la prueba a algunos no se les ha informado adecuadamente del resultado y/o habiéndosele brindado los resultados, desconocen respecto a su estancia o no en el lugar, sobre todo los que resultaron negativos, generándoles incertidumbre y agravando más su situación de salud física, mental y social en cuarentena.

También, se tiene conocimiento que junto a las personas que ya tienen resultados negativos a COVID-19 en el Hospital Saldaña, están ingresando a las nuevas personas que trasladan para guardar la cuarentena, de quienes no se sabe si están contagiadas, situación que preocupa a ambos grupos por la posibilidad de reinfección del virus, de adquirir otras enfermedades dadas las variadas veces que han sido trasladados internamente y las autoridades no han atendido esa situación. Se conoce además, que en igual sentido, hay personas que ya tienen resultados positivos y conviven con personas que no se les ha hecho la prueba, situaciones que no cumplen con la finalidad de una cuarentena.

La falta de pruebas para detectar COVID-19 ha sido la constante expresada por muchas personas en cuarentena tanto en el Hospital Saldaña como en los diferentes centros de contención, el hacinamiento y la no separación adecuada de los grupos especialmente de aquellos en condición de vulnerabilidad como niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas con VIH y otras enfermedades asociadas, siendo de vital importancia dada la cuarentena que cumplen, separar los positivos de aquellos que no lo están, para que se logren los fines que se persiguen.

Según los protocolos internacionales la cuarentena⁹² implica una serie de medidas que se deben implementar para que la misma sea efectiva, expertos en salud mencionan requisitos esenciales que deben implementarse para todas las personas en cuarentena como la clasificación adecuada, separación a una distancia de un metro, creación de un expediente clínico por persona, elaboración de una adecuada historia clínica, realización de examen físico, así como la realización del examen para detectar el coronavirus, considerando que pueden haber muchas personas positivas, pero asintomáticas, mismas que pueden contagiar a otros sino se advierte que son portadores del virus, entre otros aspectos que el protocolo debe contener.

En el documento denominado: Lineamientos Técnicos para la atención clínica de personas con enfermedad COVID-19, de marzo de 2020, emitido por el Ministerio de Salud, se

⁹² Reglamento Sanitario Internacional (RSI), cuarentena significa la restricción de las actividades y/o la separación de los demás de personas que no están enfermas, pero respecto de las cuales se tienen sospechas, o de equipajes, contenedores, medios de transporte, o mercancías sospechosos, de forma tal que se prevenga la posible propagación de la infección o contaminación.

establecen medidas de prevención y control, reconocimiento temprano de signos y síntomas y gravedad en los pacientes (mediante un sistema de clasificación basado en el nivel de gravedad de los pacientes al momento de la consulta médica y el reconocimiento de la sintomatología y examen físico se clasificarán en los grupos de leve, moderado y severo), implementación de precauciones estándar para la atención de todos los pacientes, aislamiento inmediato de casos sospechosos o confirmados de COVID-19, siendo el Hospital Saldaña el primer centro de atención para dichos casos, estableciéndose en este documento, las medidas específicas a cumplir, siendo de rigor que los pacientes de preferencia deben estar en habitaciones individuales, las camas al menos un metro de distancia entre ellas, el paciente usará mascarilla, se brindará información a los familiares sobre la evolución del paciente, entre otras medidas que se deben abordar, para prevenir y controlar la infección; sin embargo, de la información obtenida se establece un incumplimiento a protocolos y lineamientos por parte del personal de salud. Dejando en grave riesgo los derechos de las personas en cuarentena.

Respecto al acceso a la información, el paciente o personas en cuarentena, así como sus familiares tienen derecho a que se les informe al menos sobre su diagnóstico, lo que implica la realización de los exámenes que corresponden, el objetivo, método, duración probable, beneficios y riesgos del tratamiento propuesto en caso se deba brindar, y para el caso que nos ocupa, toda la información posible en el marco de atención de la pandemia por COVID-19, información que se presume no ha sido brindada por parte del personal de salud.

Esta Procuraduría considera de vital importancia destacar que la prestación de los servicios de salud debe ser aceptable, con calidad, calidez y efectivo, lo que implica contar con personal de salud (médico, de enfermería, auxiliares, entre otros) con la debida acreditación profesional, con los conocimientos, diligencia y pericia suficientes para garantizar seguridad en la atención que se brinda, por ello, resulta grave para el suscrito advertir que los posibles contagios detectados a futuro sean provenientes de los centros de contención por no haberse realizado el procedimiento ni el tratamiento adecuado entre las personas que guardan cuarentena.

Más grave aún es para el suscrito, que personas que se encuentran en los centros de contención, que no presentan enfermedades asociadas, que según las pruebas realizadas han resultado negativas a COVID-19, pero que debido a la omisión de atención médica diligente y oportuna, hayan perdido su vida.

Por tales razones reconozco y afirmo que existe un peligro de daño inminente que incluso pudiera ser irreversible si las situaciones señaladas continúan como hasta el momento en los CCC en donde las personas están cumpliendo la cuarentena.

Adicionalmente hay elementos que llevan a suponer, aunque pueden resultar desvirtuados de conformidad con las investigaciones posteriores, que no siguieron todas las precauciones propias de las personas en cuarentena, lo cual pudo haber sido el factor más influyente que desencadenara la actual situación de las personas en cuarentena, lo cual en caso de ser cierto, podría implicar una violación al derecho a la vida, a la integridad personal y a la salud de las personas antes mencionadas y de otras que se encontraren en el lugar. Consecuentemente, reconozco y afirmo que existe, en este momento y en las circunstancias actuales, una apariencia jurídica de veracidad.

Concurriendo lo anterior es procedente emitir una medida cautelar, la cual debe estar dirigida a realizar todas las gestiones que sean necesarias para dar efectivo cumplimiento a los protocolos de atención establecidos, a brindar un trato digno a los pacientes en cuarentena, a brindar los insumos médicos necesarios, a brindar la información a personas en cuarentena y a sus familiares, así como actuar con la debida diligencia por parte del personal de salud que brinda la atención.

Así también, a garantizar el acceso al agua limpia potable para la higiene en cada centro de contención, lo cual es básico y vital para la contención del COVID-19, a condiciones sanitarias adecuadas, al suministro adecuado de alimentos sanos y al acceso a la información.

En consecuencia y de conformidad con las atribuciones otorgadas en el artículo 194. romano I, ordinal 1º, 2º, 3º, 7º y 10º de la Constitución de la República y sobre la base de las facultades contenidas en los artículos 11, 27, 28, 36 y 45 de la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en mi calidad de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, resuelvo:

A) Reconocer la complejidad que enfrentan los Estados y las sociedades a nivel mundial debido a las medidas excepcionales que requiere la pandemia global ocasionada por el COVID-19, lo que supone desafíos extraordinarios desde el punto de vista de los sistemas sanitarios, la vida cotidiana de las personas y para la vigencia de los derechos humanos.

B) Declarar que en las condiciones actuales y de acuerdo con las informaciones existentes en este momento, las personas afectadas aquí relacionadas en el marco de la atención de la pandemia por COVID-19, se encuentran en una situación de peligro o daño inminente en su vida, integridad personal y a su salud, resultado que debe ser prevenido por medio del proceder de las autoridades de salud, quienes deberán ajustar su conducta a las obligaciones de medio de conservar (asegurar efectividad) y defender (garantizar sin discriminación) el derecho humano a la vida, a la integridad personal y a la salud de las personas en cuarentena.

Emitir con carácter de urgente la siguiente medida cautelar, recomendando⁹³:

Al señor Ministro de Salud, doctor Francisco José Alabí Montoya:

1. Que adopte con carácter de urgente las medidas de su competencia en el marco de los protocolos de atención internacional y nacional existentes para la atención de las personas presuntamente contagiadas o confirmadas del contagio de COVID-19 que se encuentran en los centros de contención del país, sin distinción de aquellos en donde se albergan personas “retenidas” que incumplieron presuntamente la cuarentena domiciliar, realizando las siguientes acciones:

- a. Se practique la prueba de COVID-19, de manera urgente, a todas las personas en los Centros de Contención del Coronavirus, considerando que pueden haber muchas personas positivas, pero asintomáticas, mismas que pueden contagiar a otros sino se advierte que son portadores del virus.
- b. Se brinde el resultado de las pruebas de COVID-19 a todas las personas a quienes se le ha practicado;
- c. Una vez se conozca el resultado positivo, activar de inmediato el protocolo de atención para ello;
- d. En los casos negativos, se valore el cumplimiento de la cuarentena domiciliar, con asistencia ambulatoria de los profesionales de la salud;

Que a las personas a las que se les haya realizado en dos ocasiones la prueba de COVID-19 y hayan resultado negativas, que no han tenido contacto con otras personas durante la cuarentena, se les permita continuarla en sus domicilios.

Que se garantice el periodo estricto de cuarentena, de tal manera que a las personas que hayan cumplido con todos los protocolos sanitarios de continuidad del aislamiento dentro de los centros de contención, y hayan verificado su tiempo completo, se les faciliten los medios para trasladarlos a su domicilio; a su vez, que con suficiente anticipación se les informe a las personas en esta situación, los mecanismos utilizados para su traslado a sus respectivos domicilios.

- e. Se brinde atención médica y tratamientos médicos urgentes a las personas en los Centros de Contención del Coronavirus, especialmente en los casos de población de mayor vulnerabilidad y con enfermedades crónicas.

⁹³ Art. 36.- Al recibir la denuncia, tener conocimiento de los hechos o en cualquier estado del procedimiento, para evitar que se consumen daños irreparables a la persona, el Procurador podrá adoptar las medidas cautelares que estime necesarias y eficaces. La adopción de tales medidas no prejuzgará la materia de la resolución final.

- f. Se brinde la alimentación adecuada y de calidad a todas las personas en los centros de contención, considerando las condiciones de salud específicas que demandan de una dieta especial;
 - g. Se establezcan mecanismos adecuados para evitar el hacinamiento en los centros de contención y se determinen los criterios sobre los periodos de cuarentena que deberán cumplir las personas que han estado en los centros de contención donde se rompió con el aislamiento y las medidas sanitarias.
 - h. Se realice una clasificación adecuada: respecto a los positivos y negativos, el lugar de procedencia y se asegure el distanciamiento adecuado;
 - i. Se establezca una atención diferenciada e inclusiva a la población de niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas con VIH, mujeres embarazadas, entre otros grupos vulnerables. Obviamente ello implicará previamente la realización de un censo de estas poblaciones en cada uno de los CCC;
 - j. Se haga efectivo un mecanismo de información para todas las personas que se encuentran en los centros de contención, con su familia y para con el personal de salud, se informe sobre los protocolos que se están utilizando, sobre los decretos en el contexto, o sobre cualquier situación legal que les atañe, en el marco de la pandemia;
 - k. Se brinden insumos de protección frente al COVID-19 a las personas en cuarentena, y al personal encargado de garantizar la salud, la higiene y la seguridad de los centros de contención.
2. Que inicie la investigación administrativa que le compete, en el caso del señor Óscar Antonio Méndez Beltrán, así como de los otros casos aquí relacionados de personas fallecidas en los centros de contención para que se deduzcan las responsabilidades y se tomen las medidas correctivas de conformidad a los resultados de la investigación, debiendo remitir copia certificada y debidamente foliada de los expedientes clínicos que corresponden.
 3. Que tome las medidas para la atención urgente a personas en condición de vulnerabilidad, particularmente niñez, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas con VIH y a quienes presentan condiciones de salud adyacentes, como enfermedades crónicas.
 4. Haga del conocimiento los mecanismos de información a los familiares en todos aquellos casos de personas fallecidas por COVID-19, sobre el manejo, traslado y disposición final del cadáver.
 5. Informar sobre el mecanismo de cumplimiento de cuarentena, verificando la fecha de ingreso y finalización de la misma, y sobre la base de los resultados negativos del COVID-19 y del cumplimiento del tiempo establecido para la cuarentena, se autorice el traslado de las personas a su respectivo domicilio, estableciendo el procedimiento para ello.

Al señor Presidente de la República, Nayib Armando Bukele:

Realizar las acciones de su competencia a efectos de garantizar las condiciones adecuadas en los centros de contención del país para contener, detectar y brindar el tratamiento adecuado a las personas frente al COVID-19, lo que implica, además, garantizar al personal de salud de todos los insumos, equipos e infraestructura necesaria para el buen desempeño de sus labores.

A la señora Procuradora General de la República, Máster Miriam Gerardine Aldana Revelo:

Brinde asistencia jurídica necesaria a las personas que soliciten acompañamiento para la elaboración de procesos de habeas corpus o amparos ante la Sala de lo Constitucional, a

efecto de iniciar el trámite jurisdiccional para garantizar los derechos a la libertad personal, libertad de tránsito, salud, vida e integridad personal de las personas que, una vez hayan finalizado el término de 30 días para guardar su cuarentena no se les permita salir de los centros de contención a continuar cumpliendo la cuarentena domiciliar. Asimismo, que dicha asistencia legal sea aplicable también para las personas que presuntamente han violentado la cuarentena domiciliar y han sido retenidas y llevadas a centros de contención. Lo anterior, no es óbice para que la asistencia referida se inicie de forma oficiosa.

Instar a las autoridades precitadas asegurar las perspectivas de protección integral de los derechos humanos y de la salud pública, frente a la pandemia del COVID-19.

Supervisar el cumplimiento de la presente medida cautelar, para lo cual se solicita al señor Presidente de la República, Nayib Armando Bukele; al señor Ministro de Salud, doctor Francisco José Alabí Montoya, que rindan un informe de cumplimiento sobre la presente medida cautelar en el plazo de tres días posteriores a la notificación de la presente resolución en la que de manera detallada expongan las acciones realizadas para darle cumplimiento.

Declarar, de conformidad con lo establecido en los artículos 6 literales a, b y f, 24 literales b y c, y 25 de la Ley de Acceso a la Información Pública, que la presente resolución, por contener datos personales sensibles, es confidencial, y en consecuencia no puede ser difundida ni publicitada por ninguna de las autoridades públicas a las que se les notifique, ni por aquellos otros servidores públicos que tengan acceso a la misma por ocasión de participar en todo o en parte de su proceso de cumplimiento.

b. PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, San Salvador, a las once horas del veintidós de mayo del dos mil veinte.

HECHOS:

El 18 de mayo de 2020, a través de múltiples llamadas realizadas por personas en situación de confinamiento en las instalaciones de los centros de contención de COVID-19 (CCC), del Gimnasio Nacional Adolfo Pineda y del Centro de Atención Integral para Personas Extranjeras y Migrantes (CAIPEM), esta Procuraduría tuvo conocimiento de los siguientes hechos:

Las personas confinadas en el Gimnasio Nacional expresaron su inconformidad ante las medidas anunciadas por autoridades responsables de dichos centros (canchas de básquetbol y de voleibol), respecto de la extensión de forma general de su restricción a la libertad por un período adicional de aproximadamente diez días, tras haber resultado algunas personas positivas a COVID-19 en las últimas pruebas PCR practicadas.

Detallaron que alrededor de 105 personas se encuentran en reclusión en las canchas de básquetbol del Gimnasio Nacional desde hace 42 días, tiempo en el que se les han practicado dos pruebas de COVID-19, con resultados negativos para casi la totalidad de los presentes; sin embargo, durante todo ese tiempo las autoridades no han cesado la situación de confinamiento a las personas que obtuvieron resultados negativos en sus pruebas, alegando que en el período de entre 5 y 8 días que demoró la recepción de las respuestas del laboratorio, algunas de las personas que resultaron positivas pudieron haber contagiado a quienes al momento de la toma de la muestra no lo estaban.

Dichas personas también elevaron quejas sobre las pésimas condiciones en las que se encuentran, que imposibilitan la separación social para evitar el contagio, a la vez que lamentaron las situaciones de insalubridad y los insuficientes recursos para aseo de instalaciones e higiene personal.

Similares quejas expresaron las personas con libertad restringida en las instalaciones del CAIPEM. Una persona que se acogió al derecho de confidencialidad, denunció que comparte habitación con 26 más en inapropiadas condiciones de distanciamiento e higiene. Que ese mismo día realizaron una protesta que consistió en desplazarse hacia un área cuyo acceso

no está permitido para personas en confinamiento. Que la protesta tuvo como base la exigencia de dotación de insumos de higiene personal, debido a que en la última de las ocasiones únicamente les entregaron 4 rollos de papel higiénico y una cantidad limitada de jabón de baño que la persona declarante junto a las 26 personas restantes en su habitación debían compartir. Agregó en su declaración que se encuentran cansados del maltrato y la indiferencia de las autoridades, que no brindan insumos básicos ni la información pertinente, sobre su estadía y retorno a sus lugares de residencia.

A raíz de su inconformidad, esa misma fecha, personal policial de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO), se hizo presente en ambos centros de contención, con la presunta intención de disuadirlos de las protestas.

GESTIONES REALIZADAS E INFORMACIÓN OBTENIDA POR ESTA PROCURADURÍA

Ante dicha situación personal de turno de PDDH se desplazó hacia ambos lugares, obteniéndose los siguientes resultados:

En el Gimnasio Nacional Adolfo Pineda, se informó que el responsable de la seguridad del CCC correspondía al Sub Inspector Luna, pero que éste no se encontraba presente, por lo que fuimos atendidos por personal de Policía Nacional Civil y uno de los médicos del Ministerio de Salud (MINSAL). Al ser cuestionados sobre lo expresado por los denunciantes confirmaron que ninguno de los sectores del lugar reúne las condiciones para el distanciamiento físico efectivo y que las personas en cuarentena no suelen respetar las normas y recomendaciones impuestas por autoridades del ramo de salud para evitar nuevos contagios.

Agregaron que efectivamente la UMO se hizo presente ante amenazas de posibles intentos de fuga y desórdenes, por la inconformidad de las personas reclusas tras notificárseles que su tiempo de restricción de libertad se extendería al menos por diez días más, tras haber encontrado algunas personas positivas al COVID-19 en la última prueba practicada.

Destacaron que el sector 2, con 103 personas reclusas durante 42 días, recibió esa información sobre la segunda prueba PCR practicada, resultando algunas de ellas positivas. Mientras que a las personas del sector 1 se les ha practicado prueba de COVID-19 en tres ocasiones, debido a que fue el primer grupo en llegar al lugar y que, por haber obtenido algunos resultados positivos en cada ocasión, su puesta en libertad no era posible, pues por las razones supra relacionadas, su exposición al contagio es latente.

Explicaron que las personas que resultan positivas a la prueba PCR son inmediatamente separadas del grupo y enviadas a otros centros.

En CAIPEM, personal de PDDH fue atendido fuera de las instalaciones por el señor Víctor Arias, agente de seguridad institucional de la Dirección General de Migración y Extranjería (en adelante Migración), quien a su vez se comunicó telefónicamente con la persona a cargo del CCC por parte del Ministerio de Salud. Éste le refirió no poder recibirles ni brindarles ningún tipo de información y que ésta debía ser requerida a la dirección departamental del MINSAL, dicha persona se negó a ser identificada. De igual forma, el señor Arias sostuvo comunicación con la persona a cargo del CCC por parte de Migración quien, en respuesta, denegó el ingreso de personal de PDDH y solicitó se les comunicara que la información requerida debía ser solicitada al Despacho de la Dirección General de Migración y prohibió revelar su identidad.

Confirmó haber tenido conocimiento sobre la extraordinaria presencia policial en el lugar sin poder precisar sus motivos.

PDDH constató que el abordaje de la situación en ambos centros tuvo un enfoque meramente de seguridad, a cargo de personeros de la corporación policial, y a pesar de que no se registraron actos de violencia de ninguna índole, las personas reclusas no obtuvieron ningún tipo de respuesta por parte de responsables de los centros a cargo de la Dirección General de Migración y Extranjería.

Con anterioridad personeros de Migración a cargo de los CCC, expresaron a personal de PDDH haber recibido directriz de no proporcionar ningún tipo de información sobre presuntas afectaciones a derechos humanos cometidas en dichos Centros, ello a pesar de haber sido advertidos de la violación a la ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos que ello comportaba, y de las potenciales repercusiones, incluso en materia penal que ello conllevaría.

Nuestro personal intentó a su vez gestionar la información requerida en investigaciones sobre violaciones a derechos humanos, por medio de la Jefa de la Dirección de Atención al Migrante de Migración, quien a su vez confirmó la instrucción recibida de indicar a PDDH solicitar cualquier información sobre la temática al Director General de Migración.

En atención a las facultades conferidas constitucional y legalmente, en días pasados el suscrito envió comunicación oficial urgente al licenciado Ricardo Ernesto Cucalón Guzmán, Director General de Migración y Extranjería; en ella se hizo referencia a circunstancias específicas y entre otros aspectos se solicitó brindar información concreta sobre personas retornadas y varadas en el exterior, además de datos específicos referidos a algunos aspectos de centros de contención habilitados, informar las razones de la omisión de aplicar medidas para el distanciamiento social al interior de Centros de Contención de personas retornadas, por parte de dicha cartera de Estado, solicitando adoptar las medidas necesarias bajo estándares de protección para garantizar los derechos a la salud y a la seguridad de personas con libertad restringida en Centros de Contención.

Además se solicitó garantizar el derecho a la información de las personas retornadas, y de manera particular a lo referido a los resultados de pruebas COVID-19 y sus resultados, facilitar la comunicación oportuna y eficaz entre la Dirección General de Migración y Extranjería y esta Procuraduría e informar sobre las acciones adoptadas frente a esos y otros requerimientos y recomendaciones de PDDH.

Remité además un nuevo oficio al funcionario en referencia, con motivo del caso específico del CCC del Gimnasio Nacional, mediante el que requerí generar las condiciones necesarias para que las personas albergadas en este centro de contención, cuenten con instalaciones que cumplan con estándares de protección, cumplan con las medidas sanitarias necesarias y se garantice su derecho a la salud y seguridad, además de garantizar el derecho a la información de las personas retornadas, expresándoles si se les practicará la prueba de COVID-19 y todo lo relativo a su proceso de cuarentena. Debido a que continúan retenidos a pesar de permanecer por más de treinta días en confinamiento; mencionar por qué no se han adoptado medidas de distanciamiento social entre otras acciones de prevención dentro del centro, medidas adoptadas para enfrentar situaciones como las generadas, así como cualquier otro dato que estime pertinente sobre el caso.

Al momento de la firma de la presente resolución, no se cuenta con respuesta por parte del funcionario referido, y por tanto los plazos otorgados a tales efectos, en virtud del marco jurídico que rige las actuaciones de esta procuraduría ya han precluido.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Respecto del deber de respeto y garantía de los derechos humanos en el marco de la pandemia COVID-19.

La pandemia del COVID-19 ha demostrado tanto nacional como internacionalmente su alta capacidad de afectación de la plena vigencia de los derechos humanos, y de manera particular de los derechos a la vida, la salud e integridad personal. Sin embargo, no es menos cierto que las acciones u omisiones estatales, en tanto sean o no acertadas y oportunas, comportan factores determinantes que condicionan su efectivo ejercicio y goce. En tal sentido, las medidas adoptadas por los Estados en la atención y contención del virus deben tener como centro la obligación reforzada de respetar y garantizar los derechos humanos.

El artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, establece que corresponde a los Estados la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos de

la población. Respetar implica la obligación del Estado en su conjunto, de no violar, directa ni indirectamente, mediante acciones u omisiones, los derechos y libertades reconocidos en la Convención; implica la restricción al ejercicio del poder estatal, obligando a cualquier órgano o funcionario del Estado a abstenerse de violar los derechos humanos. En tanto, el deber de garantía, implica organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras que conllevan una manifestación del ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.

Tal y como lo establece el artículo 1 inc. 3º de la Constitución de la República “es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República el goce de la libertad, la salud”, lo anterior y en coherencia con los preceptos supra citados, implica la obligación de dedicar el máximo de recursos de que el Estado disponga a la plena realización del derecho humano a la salud sin discriminación alguna.

Asimismo, incluye la atención en salud oportuna y apropiada, así como los elementos esenciales e interrelacionados de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad (referida también a la expresión de consentimiento libre e informado) y calidad de los servicios, bienes e instalaciones de salud. El contenido de dichos elementos debe incluirse respecto de los medicamentos y las medidas de contención implementadas por los Estados.

En otras palabras y para el caso que nos ocupa, el cumplimiento de tales deberes respecto de las personas retornadas y reclusas en centros de contención, supone que el Estado garantice las condiciones elementales, materiales, estructurales y en disponibilidad e idoneidad del recurso humano; a efectos de que quienes se encuentran con libertad restringida bajo la responsabilidad del Estado, no solo eviten el contagio de COVID-19, si no puedan gozar del más alto nivel posible de bienestar físico, mental y social.

En la actual coyuntura, resultan contrarias al objeto del confinamiento las circunstancias que fueron amplia y constantemente denunciadas por personas retornadas y que a su vez fueron confirmadas por personal médico y policial, respecto de las inadecuadas condiciones de los centros de contención que, entre otras afectaciones, imposibilitan el distanciamiento social como medida para evitar el contagio.

La salud como bien público debe ser protegida por todos los Estados. La salud, en tanto derecho humano, es de carácter inclusivo e indivisible, lo que implica que guarda absoluta correspondencia con el goce de otros derechos, entre ellos el derecho a la integridad personal y a la vida; en tal sentido, las afectaciones provocadas a la misma por la acción directa u omisión del Estado, no deben ser menospreciadas.

La confirmación de personas con resultados positivos en las pruebas PCR para la detección de COVID-19 en dichos centros de contención, ha puesto en especial condición de vulnerabilidad a quienes enfrentan este tipo de reclusión forzada. La omisión de las autoridades en el aislamiento de los nexos epidemiológicos, no solo ha tenido el efecto denunciado de prolongar en forma indefinida la situación de confinamiento, si no, ha expuesto en forma temeraria al resto de personas a la contaminación con el virus. Tal situación, absolutamente condenable, ha sido insistentemente señalada por el suscrito, al evidenciarse con anterioridad en otros centros de contención, que se convirtieron en verdaderos centros de contagio del virus y cuyas consecuencias, ahora lamentablemente también se cuentan en decesos.

Resulta muy inapropiado el hecho que, tras más de 50 días en confinamiento en algunos centros, las autoridades responsables hayan omitido generar las condiciones básicas para evitar el contagio al interior de dichos lugares, entre ellas el distanciamiento físico de todas las personas y de manera primordial el de los nexos epidemiológicos, algunos de los cuales lógicamente han resultado positivos en las nuevas pruebas. La decisión de mantener a alguien en cualquier forma de reclusión es arbitraria, si su justificación no se reevalúa periódicamente, y peor aún, si tal medida compromete superiores bienes jurídicos.

De igual forma, en nuestra atención diaria de personas usuarias hemos evidenciado diferentes afectaciones a derechos humanos, devenidas de hechos como la omisión de dar a conocer a cada persona los resultados de las pruebas que le fueron practicadas, la omisión de informar a cada persona en confinamiento sobre las proyecciones en la duración de su cuarentena, la nefasta omisión de informar a familiares sobre resultados de la prueba PCR practicada a parientes que fallecieron. Tras nuestra interlocución con autoridades de salud pública, hemos evidenciado la pretensión de justificar tales omisiones en el retraso en los procedimientos de laboratorio, alegando sobrecarga o falta de autorización de funcionarios superiores.

Asimismo, en nuestra diaria interlocución con servidores públicos que constituyen la primera línea Estatal de respuesta y protección contra el contagio, PDDH constató con grave preocupación las precarias condiciones en las que dicho personal realiza sus funciones. Nuevamente la dotación de equipo de bioseguridad es insuficiente y tampoco tienen garantizados los elementos para su adecuada higiene y salubridad. Resulta en tal sentido evidente el potencial de afectación directa e indirecta sobre el derecho humano a la salud, por el riesgo sanitario inherente en la transmisión y adquisición de la infección, ante su continua exposición.

Ello expone la innegable necesidad de nuestro Estado de revisar sus procedimientos y adecuarlos de manera que sean respetuosos y garantes de los derechos fundamentales de la persona humana, objeto y fin de su actividad.

Respecto de la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la medida de confinamiento en centros de cuarentena de personas retornadas

Como he afirmado, las medidas que sean adoptadas por el Estado deben tener una doble finalidad, resulta menester la protección de los derechos de cada persona, y simultáneamente, debe protegerse la salud pública colectiva como un bien jurídico en sí mismo, evitando la propagación y buscando la mitigación de los efectos del COVID-19.

Los derechos humanos son tales por emanar directamente como atributos esenciales de la dignidad humana y constituir límites a la soberanía del Estado. Se configuran dentro del Estado constitucional de derecho como normas jurídicas supremas, lo que implica la prevalencia de ellos sobre toda norma anterior o sobreviviente. La Constitución y el derecho internacional de derechos humanos enuncian los derechos, fijan sus atributos, alcances y determinan límites ordinarios y extraordinarios, o bien, autorizan al legislador para establecer limitaciones. En tal sentido son de carácter inviolable y su afectación inadecuada, ilegítima, debe siempre derivar en la determinación de responsabilidades.

En ese orden de ideas, y tal y como lo ha afirmado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las medidas adoptadas por los Estados en la atención y contención del virus deben tener como centro el pleno respeto de los derechos humanos. Dicho esto, en algunas ocasiones nos encontramos frente a circunstancias en las que derechos humanos entran en colisión, y se vuelve necesaria la provisional limitación o intervención de uno o varios de ellos; a este fin sirve el principio de proporcionalidad, que posibilita la interpretación de principios constitucionales, para aportar soluciones válidas y maximizar sus posibilidades fácticas y jurídicas.

Dicho principio comporta tres juicios: a) Idoneidad, b) necesidad y c) proporcionalidad en sentido estricto. Mediante el primero se pretende determinar si el fin de una intervención estatal en los derechos humanos tiene fundamento constitucional y convencional; el segundo posibilita evaluar si la alternativa de intervención estatal en los derechos es la menos gravosa; mientras que el tercero nos permite escoger el principio constitucional y convencional que debe prevalecer en el caso concreto.

No obstante no es el objeto del presente documento el análisis exhaustivo y técnico desde enfoques epidemiológicos o meramente de salud, respecto de la cuestionada pertinencia de la medida de confinamiento en centros de contención; si haré un análisis de ella a la luz

de las denuncias recibidas y la información constatada por personal institucional, que dan cuenta de numerosas circunstancias y formas en las que el Estado ha ejecutado la restricción de libertad de las personas retornadas y su internamiento en centros de cuarentena, y que resultan completamente adversas a los fines de la medida misma, a saber:

Los traslados e ingresos en centros de contención se hicieron sin la debida clasificación y sin tomar en cuenta factores de riesgo como origen y comorbilidades. Se denunció que, en algunos casos, las condiciones previas a su ingreso a los centros imposibilitaron las medidas preventivas de contagio. El pasado cuatro de abril se recibió denuncia de persona que se acogió al derecho a la confidencialidad, establecido en el inciso final del artículo 34 de la ley que rige esta Procuraduría, quien señaló su ingreso al país el veintisiete de marzo del presente año, procedente de Estados Unidos de Norteamérica reportó que tras su arribo fue llevado a un albergue para personas migrantes ubicado sobre el Boulevard Venezuela, luego fue trasladado a una bartolina policial, y finalmente lo remitieron a las instalaciones del Palacio de los Deportes el día miércoles veintinueve de marzo. Agregó el denunciante que las personas que se encontraban al interior de ese centro de contención se sentían en gran riesgo, porque en estas instalaciones las personas no se encontraban aisladas las unas de las otras, y en su mayoría no portaban mascarillas, guantes ni ningún otro insumo de bioseguridad.

Otras personas albergadas en CCC refirieron que la única diferenciación que efectuaron de parte de Migración fue la clasificación en grupos de hombres y mujeres. El abordaje de las autoridades de salud y migración omitió la aplicación de perspectivas interseccionales que posibilitaran atender las necesidades particulares y el impacto diferenciado que las medidas y la pandemia revierten por la confluencia de otras situaciones de riesgo en personas mayores, mujeres, personas con comorbilidades, personas LGBTI niñas, niños y adolescentes, pueblos indígenas, etc.

De acuerdo a las denuncias, la mayor parte de instalaciones carecen de las condiciones necesarias para la separación y el distanciamiento físico exigido para evitar la propagación del virus. En algunos centros se duerme en canchas techadas, en condiciones de hacinamiento.

Otros centros cuentan con habitaciones comunes en las que albergan hasta 30 personas sin la adecuada separación. A tales efectos la Organización Mundial de la Salud ha expresado: “Las personas privadas de libertad se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad al contagio del COVID-19 en comparación con la población en general dado que viven en espacios confinados con muchas otras personas por periodos de tiempo prolongados”. Como lo ha afirmado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el hacinamiento en espacios de reclusión propicia la propagación de enfermedades, dificulta el acceso a los servicios básicos y de salud, y constituye un factor de riesgo para la ocurrencia de calamidades.

En verificación de personal de PDDH, durante entrevista a personal del MINSAL y de la Policía Nacional Civil, del CCC Gimnasio Nacional “Adolfo Pineda” estas refirieron “ que en ambas instalaciones hay 103 personas y que el lugar no reúne condiciones mínimas para distanciamiento social según Protocolos de MINSAL, todos están en el mismo espacio y se mezclan entre ellos lo cual facilita los contagios ” No todos los centros cuentan con la infraestructura sanitaria adecuada que posibilite condiciones de higiene y salubridad ante estadías prolongadas. De forma particular, se reportó- el caso del Centro Pedro Pablo Castillo, que en fecha veintisiete de abril sufrió anegación a causa de copiosas lluvias. Tampoco se da la suficiente provisión de artículos de higiene personal.

En dicho caso, personal de este Procuraduría realizó gestiones, por medio de comunicaciones oficiales al Ministerio de Salud Pública, con copia al Director de Migración, y gestiones de monitoreo remoto, por lo que fueron trasladados a otro centro que reunía mejores condiciones.

Por otro lado, el ocho de abril del presente año, se tuvo conocimiento que Edwin A. L., persona que fue retornada de Estados Unidos de Norteamérica, fue conducido al Centro

de Convivencia Municipal Pedro Pablo Castillo, de San Salvador. Tras la denuncia pública sobre las condiciones de hacinamiento en el lugar, finalmente fue trasladado a la Casa del Migrante, de San Salvador.

A ello se agrega que el pasado 6 de mayo, se recibió reporte de personas retornadas que se encuentran en el Centro de Contención “La Satélite”, quienes señalaron que en dicho Centro las condiciones de salubridad son muy deplorables y que no reunía las condiciones mínimas de dignidad para albergar a personas, lo cual pone en riesgo la condición general de salud para los retornados.

En ese mismo contexto, otra persona señaló que en el CCC 5 de Noviembre, la infraestructura de los sanitarios era deficiente, había problemas de fuga de agua. En ese mismo lugar se denunció que un grupo de hombres quebró unas ventanas para poder acosar a las mujeres durante la ducha o su aseo personal. Ante esto, las mujeres víctimas de acoso, solicitaron a la Policía Nacional Civil (PNC) unas tablas de madera para impedir que fueran observadas, dicha solicitud tardó 15 días en ser atendida. Durante todo ese tiempo, el acoso continuó ante la impasible actitud de las autoridades.

Los centros no cuentan con la provisión suficiente de mascarillas adecuadas, alcohol gel, guantes, y otros implementos recomendados y en ocasiones exigidos por las mismas autoridades del ramo de salud para evitar el contagio. Tal como se registró el veintidós de marzo en el que se recibió reporte de usuaria que se acogió a derecho de confidencialidad, denunciando que su hermano llegó en vuelo federal, procedente de Estados Unidos, sin portar ropa de cambio, ni implementos personales de aseo y necesitaba medicamentos. Las autoridades, a pesar de haberle tratado con cortesía, le afirmaron no poder subsanar tales necesidades ni autorizar que su familia lo hiciera. La persona retornada afirmó que no recibieron de parte de autoridades artículos para evitar el contagio más allá de agua y jabón; y les solicitaron que estuviera distanciado uno de otros, en un lugar que no era adecuado para el número de personas ahí albergadas. De igual forma, dicha persona reportó que el mismo personal de Migración y Extranjería que estaba en custodia, no poseía kits de protección, sino únicamente estaban tomando medidas de distanciamiento con los retornados.

Otras tres personas de diferentes CCC, al ser consultadas señalaron que se les dotaba de 1 o 2 mascarillas semanales y que se les colocó un recipiente con alcohol gel en el centro de contención.

La calidad de los alimentos o la entrega de los mismos se hace en horas fuera del horario habitual. Se cuenta con registros de al menos cuatro CCC a cargo de la Dirección General de Migración, en los que se reportó que la alimentación que se provee llega en mal estado, o es entregada a las personas pasada la hora de los respectivos tiempos de comida. De acuerdo a la información recibida en el CCC, 5 de Noviembre, la alimentación por lo general era buena y en porciones adecuadas. Sin embargo, la persona entrevistada manifestó que debido a su condición de hipertensión requería alimentos sin sal, por lo cual el Ministerio de Salud se los proporcionó, sin embargo, estos se encontraban en mal estado.

La vigilancia y atención médica no es idónea. La disponibilidad del personal técnico en salud es limitada lo que obvia la garantía de respuesta apropiada ante emergencias y casos de gravedad. Según los registros de PDDH varias personas migrantes retornadas señalaron que al ingresar al centro de contención el personal del Ministerio de Salud entrevistó a los ciudadanos, los datos requeridos fueron: nombre, edad, dirección y número de teléfono. Agregaron que únicamente tomaron la temperatura corporal de las personas, sin indagar sobre enfermedades crónicas, padecimientos previos u otros factores de riesgo.

Una migrante retomada que estuvo en CCC 5 de Noviembre, manifestó que padece de problemas de presión arterial, lo cual fue informado al personal del centro, un día después de su ingreso. Dicha situación es medicada con Losartán, la cual no fue proporcionada por el MINSAL; por lo cual tuvo que adquirirla por medio de sus familiares, no obstante, debió omitir varias dosis. Otra persona del sexo femenino en el mismo lugar, denunció haber presentado problemas estomacales durante una noche y en el centro no contaban con el medicamento para el abordaje de su condición.

Otra persona albergada en Dirección de Atención al Migrante de Migración, señaló, “...No se indaga si tienen enfermedades crónicas o padecimientos anteriores, la entrevista está más enfocada a seguridad (antecedentes penales), pero en el CCC el personal médico si consulta si padecen enfermedades crónicas, pero no es obligación asistir”.

No se realiza la debida aplicación de lineamientos técnicos de atención para personas en centros de contención: No se brinda información oportuna sobre resultados de pruebas, fechas previstas para práctica de nueva prueba, ni para la terminación de cuarentena. Para el supuesto referido, en reporte de personal de PDDH, del pasado diecinueve de mayo, una joven migrante retornada manifestó que a la fecha les han realizado dos pruebas del COVID-19 y que “costó que les dieran los resultados”, finalmente tras obtenerlos, y a pesar de haber salido negativos, no habilitaron su salida. Agregó que les habían notificado que le realizarían una tercera prueba “en los próximos días”.

Frente a algunos casos específicos, PDDH recibió denuncias de posibles omisiones a la garantía de trato digno y sin discriminación, por parte de autoridades de los centros. En denuncia recibida la primera semana de mayo, dos personas que solicitaron confidencialidad, señalaron que personas cuyo comportamiento se alejaba de las exigencias del personal de Migración, fueron retiradas del centro de contención, y trasladadas a un sótano, como castigo. En dicho lugar se encontraron a su vez con otras personas aparentemente en similar condición. De igual forma, en otros reportes de los CCC Satélite y Gimnasio Nacional, personas sufrieron amenazas del personal a cargo, mediante las que manifestaron que, si persistían sus quejas a nivel de redes o al interior del centro, retardarán aún más su salida, o serían enviadas a otros lugares con mayor riesgo de contagio.

La atención psicosocial es inadecuada en algunos casos y en otros inexistente. Según los reportes del personal esta atención no ha sido considerada como un derecho a la salud en ningún centro. Por otra parte, el aspecto de atención psicosocial, no es contemplado ampliamente dentro del protocolo, siendo un componente determinante en el proceso de cuarentena de personas que han sido retornadas y que seguramente se encontraba detenidas en estaciones migratorias en EEUU.

El monitoreo de las Centros para personas retomadas ha sido periódico de parte de esta Procuraduría, según información obtenida, se cuentan con 10 Centros de Contención, en los cuales se implementó un mecanismo de monitoreo semanal, mediante el que se solicitaba información específica sobre la situación en la que se encontraban los ahí resguardados, no obstante pese a la insistencias por parte del personal de esta entidad, la información no nos ha sido proporcionada en su totalidad, a excepción del Centro de Contención, “Katia Miranda”, en el cual se obtuvieron los siguientes hallazgos:

Desde la perspectiva de la salud mental, el COVID-19 ha generado una perturbación psicosocial que excede la capacidad de manejo de la población afectada. En el caso de la población retornada se ha presentado un episodio de agresiones físicas entre tres personas que se encuentran en resguardo y cuya respuesta fue la intervención de agentes de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO). Estas acciones responden a una perspectiva represiva y no se ha considerado que tales acciones pueden responder al alto grado de estrés al cual se ve expuesto los connacionales retornados u otros elementos que pueden tener a la base el desgaste en la salud mental.

Si bien el centro “Katia Miranda” cuenta con una profesional en el campo de la salud mental, no se nos ha informado sobre los protocolos de actuación que rigen el accionar de las atenciones psicológicas ni de las demás acciones administrativas que rigen el centro. Únicamente se ha indicado al personal de esta Procuraduría que tales indicaciones han sido transmitidas al personal de la Dirección General de Migración y Extranjería verbalmente.

Según la información referida por el responsable del centro, las pruebas del COVID-19, de acuerdo a argumentos por parte de autoridades del Ministerio de Salud, estas no se han practicado, en virtud de la ausencia de sintomatologías que orienten posibles contagios del coronavirus en los resguardados.

El centro Katia Miranda no resguarda a niñez, adolescencia y/o grupos familiares. No obstante, no se cuenta con un registro estadístico exacto de otros grupos en condición de vulnerabilidad tales como: adultos mayores, personas con discapacidad, etc.

Los hechos y omisiones descritas comportan una posible afectación al derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que, según la Observación General 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (CDESC), éste comprende: la atención de la salud, los factores determinantes básicos de la salud y los derechos humanos vinculados. Aspectos fundamentales relacionados con las condiciones socioeconómicas esenciales de las personas tienen que ver con “toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel posible de salud”. Estos factores incluyen “el acceso al agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas, el suministro adecuado de alimentos sanos, una nutrición adecuada, una vivienda adecuada, condiciones sanas en el trabajo y en el medio ambiente.

En el orden previo de ideas —juicios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad— en la ponderación en materia de derechos humanos de esta Procuraduría, se advierte que la medida de obligar guardar cuarentena en dichos centros resulta en principio proporcional en sentido estricto. Tal disposición restringe el derecho a la libertad personal con la finalidad de salvaguardar los derechos también fundamentales a la salud, integridad personal e incluso el derecho a la vida. La importancia de la protección y satisfacción de estos derechos puede bien justificar la limitación o restricción temporal del primero. No obstante, la precaria e inadecuada aplicación de esta medida pone en riesgo los derechos fundamentales que pretende proteger y otros conexos.

Dicha forma de confinamiento tiene teleológica apariencia de idoneidad, en tanto persigue un fin convencional y constitucionalmente legítimo, entendiéndose éste como la salvaguarda de la salud como bien público. Sin embargo, nuevamente su aplicación con tales características es absolutamente contraria al objeto esgrimido.

Como antes mencioné, tales condiciones han probado ser factores multiplicadores de contagios, volviendo inapropiada e ineficaz, la medida de confinamiento en dichos centros y, por tanto, carente de la idoneidad inicialmente presumida.

La disposición de destinar de manera generalizada a las personas retornadas a guardar confinamiento en estos centros tampoco resulta ser necesaria, en el sentido de no ser absolutamente indispensable y tampoco ser la medida menos gravosa a derechos fundamentales. El Órgano Ejecutivo, bajo ciertas circunstancias optó por ordenar cuarentena domiciliar a personas específicas, con razones poco claras que no necesariamente se encontraban relacionadas a fines de salud o epidemiológicos.

De igual forma decretó en repetidas ocasiones la obligación de guardar cuarentena domiciliar en grupos poblacionales específicos e incluso, de forma absoluta y general para toda la población del país, a fin de alcanzar los mismos objetivos perseguidos mediante la restricción de libertad en centros de contención.

La salida de numerosas personas que ingresaron a dichos centros, una vez cumplido el tiempo (que generalmente superó al previsto inicialmente y que tampoco respondió a criterios de orden técnico, si no a aspectos meramente circunstanciales), luego de múltiples pruebas PCR y sin haber éstas resultado positivas a COVID-19 en ninguna de ellas, dan cuenta clara de una privación de libertad que en la inmensa mayoría de casos pudo ser obviada y, en consecuencia, fue innecesaria como tal. En ese sentido, dicha alternativa causó (y continúa haciéndolo) mayor agravio a derechos fundamentales y ha resultado no sólo ineficiente excesivamente costosa, desde un punto de vista económica sino además y bajo las circunstancias narradas, ineficaz para garantizar y obtener el resultado esperado.

Exponer a personas retornadas a contraer COVID-19, en condiciones similares a las de presidio, en las cuales las medidas de distanciamiento social son de imposible cumplimiento, genera además un riesgo sobre la salud pública, favoreciendo con ello la expansión del coronavirus.

A manera de corolario, retorno la afirmación de la Corte IDH respecto de la obligación de los Estados de garantizar el derecho a la salud “respetando la dignidad humana y observando los principios fundamentales de la bioética, de conformidad con los estándares interamericanos en cuanto a su disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, adecuados a las circunstancias generadas por esta pandemia.

Respecto de las necesidades especiales de protección de personas retornadas para su integración a la sociedad

Por medio de pronunciamiento de fecha veintinueve de marzo del presente año, recomendé a las autoridades de migración, protección civil, administradores de centros de contención de personas reportadas y personal médico adscrito a los mismos, se les garantizara la protección necesaria no solamente en el tema de salud física y mental, sino también identificando otras necesidades de protección, si migraron por tener un temor fundado de persecución por violencia social o de género y por lo tanto al finalizar las restricciones por las medidas, se necesitarían otras acciones adicionales para proteger su integridad y proporcionarles los medios necesarios de acceso al trabajo para su integración a la sociedad.

Es importante establecer que las personas retornadas tienen derecho a recibir una atención integral y diferenciada que identifique algunas necesidades especiales de protección, tal es el caso de las personas que han migrado por causa de la violencia de género o violencia social, quienes no pueden regresar de forma automática a sus comunidades o entorno familiar y social, por lo que es indispensable que las autoridades de la Dirección de Migración y Extranjería, realicen las coordinaciones necesarias con la Dirección de Atención a Víctimas y otros actores para previa identificación de necesidades o riesgo pueda realizarse un plan de acción para otorgar soluciones duraderas y evitar que existan afectaciones a su vida o integridad personal por parte de sus agresores.

Respecto de la obstaculización a la labor de esta Procuraduría.

De conformidad con los artículos 10, 34, 35, 38 y 46 de la Ley que rige a esta Procuraduría, cualquier órgano del Estado, autoridad o funcionario civil, militar o de seguridad pública y cualquier persona, está obligada a prestar colaboración con carácter prioritario e inmediato a sus peticiones y recomendaciones; y en caso que el mismo hecho violatorio esté siendo investigado por otra autoridad, el Procurador tendrá acceso a toda la información pertinente.

Respecto a la naturaleza y competencia de esta institución, la Sala de lo Contencioso Administrativo ha señalado en su jurisprudencia lo siguiente: “...se trata, más bien de un órgano con características propias encargado de fiscalizar que el Poder Público, desarrollado por los diferentes órganos e instituciones, no irrespete los derechos humanos”

En tal sentido, la Procuraduría, como consecuencia de su diseño constitucional e independencia, supervisa no sólo la actuación de la Administración Pública sino también la del resto de órganos principales, aún en aquellas manifestaciones ligadas directamente al núcleo esencial de su actividad.

Con base en lo anterior, y tal como lo ha reiterado esta Procuraduría ninguna institución o entidad dentro de la estructura del Estado se encuentra exenta de la supervisión que debe realizar esta institución como parte de su función constitucional. En ese sentido, tanto los Órganos fundamentales (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) como los restantes órganos constitucionales y aquellos creados por fuentes de derecho infraconstitucionales, son objeto de la acción de supervisión de la PDDH. Lo anterior, es conforme con lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de Ley Orgánica de esta Procuraduría, los cuales establecen lo siguiente:

Art. 10- “El Procurador actuará en forma independiente en el ejercicio de su cargo y no podrá ser impedido ni coartado por ninguna autoridad. En el desempeño de sus funciones podrá requerir ayuda, cooperación, informes o dictámenes a los órganos del Estado, autoridad

o funcionario civil, militar o de seguridad pública y a cualquier persona, quienes estarán obligados a prestar colaboración con carácter prioritario e inmediato a sus peticiones y recomendaciones.”

Art. 46.- “Toda persona que impidiere, coartare u obstaculizare en cualquier forma, no enviare los informes que el Procurador le solicite, negare su acceso a expedientes, lugares, documentos e investigaciones necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones, incurrirá en las responsabilidades penales o administrativas correspondientes.

En cualquiera de los casos precitados el Procurador dará aviso inmediatamente al Fiscal General de la República de los hechos respectivos, para que ejerza la acción penal pertinente y en su caso, a la autoridad administrativa competente.

En la labor de verificación del cumplimiento del respeto y garantía de los derechos humanos, como antes se refirió, personal bajo mi coordinación, sostuvo múltiples comunicaciones con personas responsables de los centros de contención Satélite, Monserrat, Pedro Pablo Castillo, CAIPEM, 5 de Noviembre y San Francisco, en fechas: 3, 7, 21, 22, 24, 27 y 30 de abril de 2020. Dichas personas refirieron en forma unísona haber recibido instrucciones de no brindar ningún tipo de información a esta institución e indicar que la misma debía ser solicitada al despacho del Director General de Migración.

Sin menoscabo de los graves efectos que en materia de tutela de derechos humanos, ocasiona esa directriz impráctica, poco funcional y vejatoria del mandato constitucional y legal de PDDH, y en razón de la urgencia misma de salvaguardar derechos humanos, en dos oportunidades remití oficios al licenciado Ricardo Ernesto Cucalón Guzmán, Director General de Migración y Extranjería, requiriendo importante información y realizando algunas recomendaciones. Requerimientos que el obligado omitió responder.

Es oportuno destacar que esta institución ha realizado una labor de supervisión constante de la actuación de la mencionada autoridad y de las instancias bajo su responsabilidad en el contexto de la pandemia. Sin embargo, el señalado incumplimiento sistemático de sus obligaciones constitucionales y legales atentan contra la labor de esta Procuraduría e impiden el eficaz cumplimiento de nuestro mandato de velar por el respeto y garantía de los derechos humanos, lo cual, constituye un elemento indispensable dentro de una sociedad democrática; más grave aún, los hechos permiten presumir no solo la aquiescencia del más alto nivel institucional si no, su responsabilidad directa.

Respecto de la naturaleza de las medidas cautelares de PDDH.

La naturaleza teleológica de las medidas cautelares emitidas por esta Procuraduría comprende el impedir afectaciones irreparables o de difícil reparación sobre derechos humanos de las personas. Estas encuentran su base en el artículo 36 de la ley de la Procuraduría para la Defensa de los derechos Humanos, el cual establece que:

“Al recibir la denuncia, tener conocimiento de los hechos o en cualquier estado del procedimiento, para evitar que se consumen daños irreparables a la persona, el Procurador podrá adoptar las medidas cautelares que estime necesarias y eficaces. La adopción de tales medidas no prejuzgará la materia de la resolución final.”

Su regulación es complementada mediante el artículo 17 del Reglamento para la aplicación de Procedimientos del Sistema de Protección de los derechos Humanos de PDDH, en el que se expone:

“Es un mecanismo excepcional y potestativo contemplado en los artículos 11 ordinal 10º y 36 de la Ley de la Procuraduría, a través del cual, en caso de urgencia y gravedad, el Procurador o Procuradora, quien realice sus funciones o quien tuviera delegación para ello, podrá promover y proponer medidas en orden a prevenir daños irreparables o de difícil reparación a las presuntas víctimas. Éstas pueden dictarse en cualquier fase del Procedimiento, ya sea de oficio o a petición de persona interesada”

Para el caso y en el presente documento, se ha evidenciado la grave condición de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas retornadas, privadas de su libertad por el Órgano Ejecutivo en centros de contención, debido a la imposibilidad material para el necesario distanciamiento físico y en algunos casos en debido a su reclusión en condiciones de hacinamiento, lo que da pie a la proliferación de enfermedades. El limitado acceso a los servicios básicos y de salud, y las condiciones de higiene y salubridad precarias, comprometen a su vez diversos derechos.

La inapropiada alimentación; la insuficiente dotación de implementos de bioseguridad; la incapacidad material de atender en forma debida y oportuna emergencias y casos de gravedad; la inadecuada aplicación de lineamientos técnicos en razón de problemas estructurales y de diseño mismo del sistema de abordaje de la crisis; las insuficientes garantías del derecho a la seguridad; la imposibilidad material de aislamiento de nexos epidemiológicos bajo condiciones dignas, ante la detección de casos positivos a las pruebas PCR (cada vez más numerosos); son todos aspectos evidenciados en los centros objeto de la presente resolución, que ponen en grave riesgo los derechos a la salud, a la integridad personal e incluso a la vida y que por tanto podrían ocasionar -como ya ha ocurrido en otros centros- daños irreparables o de difícil reparación.

En vista de lo anterior, es pertinente la emisión de medidas cautelares, dirigidas a la adopción de acciones necesarias para dar efectivo cumplimiento a la obligación de proporcionar un trato digno a las personas en cuarentena, y a garantizar el respeto y goce de los derechos a la seguridad, salud, integridad personal y vida.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Órgano Ejecutivo, a través de la Dirección General de Migración y Extranjería y del Ministerio de Salud, debido a una serie de inapropiadas acciones y omisiones, ha favorecido el contagio de personas retornadas dentro de centros de contención. Ello ha quedado evidenciado tras las múltiples denuncias recibidas al respecto y luego de la revelación de los resultados positivos obtenidos por personas en su segunda, o tercera prueba PCR practicada, cuando las anteriores (1, 2, 3 y hasta 4 pruebas, incluidas en algunos casos las practicadas antes de su ingreso al país) resultaron negativas a COVID-19.

Tales hechos constituyen una afectación directa al derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, que incluye la protección de la salud, y de elementos esenciales determinantes de ésta (alimentación, nutrición, vivienda, acceso a agua limpia y potable, condiciones seguras y sanas), así como otros derechos relacionados, entre ellos, el derecho a la integridad personal, el derecho a la no discriminación y el derecho a la vida. El derecho a la salud se encuentra regulado en los artículos 65 y 66 Constitución de la República, 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 10 del Protocolo de San Salvador, XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

En consecuencia y de conformidad con las atribuciones otorgadas en el artículo 194 romano I ordinales 1º, 2º, 3º, 7º y 10º de la Constitución de la República y sobre la base de las facultades contenidas en los artículos 11, 27, 28, 36 y 45 de la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en mi calidad de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, RESUELVO:

Emítanse las siguientes medidas cautelares:

Al señor Director General de Migración y Extranjería, licenciado Ricardo Ernesto Cucalón Guzmán, en el sentido que

1. Garantice con urgencia que la medida de confinamiento en centros de contención ordenada por el Ministerio de Salud para personas retornadas, se ejecute bajo las condiciones elementales materiales y estructurales adecuadas para la separación, distanciamiento físico, higiene y salubridad; lo anterior implica —aunque no se agota con- la existencia de habitaciones separadas (temporales o permanentes) y espacios idóneos para la atención de otras necesidades básicas.

2. Garantice condiciones dignas y seguras para la permanencia y desarrollo de funciones de las personas servidoras públicas dentro de las instalaciones.
3. Abordar y atender las necesidades especiales de protección de personas retornadas que concluyan su período de cuarentena en centros de contención, en tanto no todas pueden retornar a sus antiguos lugares de residencia en condiciones de seguridad.

Al señor Ministro de Salud, doctor Francisco José Alabí Montoya:

1. Atender con prioridad las necesidades en salud de las personas retornadas que se encuentran en confinamiento en centros de contención, debiendo corregir aquellas circunstancias o condiciones que han favorecido la proliferación del virus en dichas instalaciones y evitando con ello la innecesaria exposición y consecuente prolongación de la medida de internamiento.
2. Asegurarse que cada medida que restrinja derechos humanos y garantías, se ajuste a los principios «pro persona», de temporalidad y proporcionalidad, lo que implica garantizar su legitimidad, necesidad, idoneidad, eficacia, eficiencia; debiendo siempre privilegiar la alternativa menos gravosa a la persona y al marco de sus derechos.

Al señor Presidente de la República, Nayib Armando Bukele Ortiz:

1. Garantizar la protección de personas trabajadoras del ramo de salud, seguridad pública, producción y distribución de alimentos, sanitización de instalaciones, asistencia logística, y cualquier otra que por la naturaleza de las funciones que desempeña se encuentre en potencial exposición al contagio.

DECLARASE violación al derecho humano a la salud de las personas retornadas y confinadas en los CCC Satélite, Monserrat, Pedro Pablo Castillo, CAIPEM, 5 de Noviembre, Katya Miranda y San Francisco, que resultaron contagiadas por el virus COVID-19 o que han sufrido otros detrimentos en su salud durante su restricción de libertad. Determinase responsabilidad por dicha violación al Órgano Ejecutivo, a través de la Dirección General de Migración y Extranjería, y del Ministerio de Salud, en razón de la ejecución de las acciones y omisiones señaladas.

DECLARESE la violación a la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos por parte del señor Director General de Migración y Extranjería, licenciado Ricardo Ernesto Cucalón Guzmán, en razón de las directrices giradas a personal bajo su cargo para no brindar información requerida por personal de PDDH y ante su omisión directa de informar lo requerido mediante Oficio PADMSC/50/2020 y Oficio PADMSC No. 053/2020.

Hágase del conocimiento del señor Fiscal General de la República, licenciado Raúl Melara, la presente resolución, para la determinación de las responsabilidades penales derivadas de la obstaculización del trabajo institucional de PDDH, mediante el ejercicio de la acción penal correspondiente, de conformidad a lo previsto en el artículo 46 de la ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Así mismo, y conforme a lo previsto en el art. 37 del mismo cuerpo normativo, realice las acciones de su competencia para la posible determinación de responsabilidades estatales por los efectos de la violación al derecho humano a la salud y derechos conexos. Con base en ese mismo artículo, rinda dicha autoridad informe en un plazo prudencial sobre el desarrollo y los resultados de su gestión.

En virtud del artículo 30 ordinal 2º de ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, dictense las siguientes RECOMENDACIONES:

Al señor Presidente de la República, Nayib Armando Bukele Ortiz:

1. Verifique el actuar de cada uno de los funcionarios bajo su cargo, a efecto que en la medida de lo posible cumplan con los requerimientos que realizan los organismos de control y fiscalización de orden constitucional de nuestro país, para lo cual le

recomiendo gire las directrices pertinentes a los diferentes titulares de las carteras de Estado, en el sentido que cumplan con lo previsto en el artículo 10 de la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

Al señor Ministro de Salud, doctor Francisco José Alabí Montoya:

1. Revise y adecúe los diferentes lineamientos, protocolos, instructivos y cualquier otro tipo de instrumento que contenga normas en materia de salud para la atención de la emergencia, de manera que sean respetuosos y garantes de los derechos fundamentales de la persona humana, objeto y fin de su actividad.
2. Adopte con diligencia y celeridad todas las acciones de su competencia orientadas a la garantía del amplio espectro de derechos humanos de las personas restringidas en su libertad bajo su responsabilidad en dichos centros.
3. Garantice que el personal de salud a cargo de los centros, proporcione la información sobre el estado de salud de cada persona, las fechas previstas para la toma de muestras y para la obtención de resultados de las pruebas PCR, fechas de salida y cualquier otra información relevante. El referido personal deberá facilitar la comprensión de dichas comunicaciones y ante cualquier circunstancia que afecte cada proceso, obtener en la medida de lo posible, el consentimiento libre e informado.
4. Asegure la adecuada atención psicosocial de personas en centros de contención y de manera particular, a aquellas que enfrentan estancias prolongadas bajo las mencionadas condiciones.
5. Garantice la aplicación de perspectivas interseccionales en los centros de contención de personas en situación de movilidad humana, a fin de identificar y atender con enfoque de derechos humanos, las necesidades particulares y el impacto diferenciado, que las medidas y la pandemia revierten por la confluencia de otras situaciones de riesgo en personas mayores, mujeres, personas con comorbilidades, personas LGBTI niñas, niños y adolescentes, pueblos indígenas.

Al señor Director General de Migración y Extranjería, licenciado Ricardo Ernesto Cucalón Guzmán:

1. Asegure que la información que ha sido solicitada a su persona y a diferentes instancias bajo su coordinación, sea proporcionada de forma inmediata y oportuna a esta institución.
2. Deje sin efecto cualquier instrucción girada cuyo efecto constituya un obstáculo al cumplimiento del mandato institucional de esta Procuraduría.
3. Facilite la comunicación de forma eficaz entre la Dirección General de Migración y Extranjería y esta Procuraduría, a fin de garantizar el flujo de información en forma expedita, certera, precisa y oportuna, estableciendo un canal de comunicación, designado para que se proporcione información periódica sobre las condiciones de personas retornadas en CCC.

A las autoridades de Migración, Protección Civil, administradores de centros de contención de personas retornadas y personal médico adscrito a los mismos:

1. Identifiquen las necesidades de protección que personas que migraron debido a temor fundado a causa de persecución por violencia social o de género pudiesen tener.
2. Garanticen a esas personas -concluidas sus respectivas medidas de internamiento en centros de contención- su adecuada integración a la sociedad, a través de la adopción de medidas pertinentes que salvaguarden su vida e integridad personal, proporcionándoles además los medios necesarios de acceso al trabajo.

A las personas en situación de movilidad humana confinadas en centros de contención:

1. Se les exhorta al cumplimiento de las medidas de sanidad y de seguridad indicadas para evitar la transmisión del COVID-19 y cualquier otra enfermedad infectocontagiosa.
2. Se les exhorta a colaborar con las autoridades a cargo de los centros de contención y a mantener en todo momento una actitud y comportamientos respetuosos hacia ellas y para con el resto de personas que conviven en dichos espacios.
3. A mantenerse vigilantes del deber Estatal de respeto y garantía de derechos humanos, convirtiéndose en verdaderas personas defensoras a través de su respetuosa intervención con responsables y mediante la denuncia activa.

A efecto de supervisar el cumplimiento de las medidas cautelares y recomendaciones emitidas, rindan las citadas autoridades informe en el plazo de 5 días, contados a partir del siguiente día de la notificación de la presente resolución, en el que detallen las acciones adoptadas en virtud de su contenido.

En virtud del artículo 38° de ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, hágase la presente resolución del conocimiento de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a efectos de que pueda adoptar las acciones de su competencia.

c. PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS. San Salvador, a las quince horas, de fecha diecinueve de abril de dos mil veinte.

HECHOS Y GESTIONES INSTITUCIONALES REALIZADAS

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, desde que entró en vigencia la declaratoria del “Estado de Emergencia Nacional de la Pandemia por COVID-19” ha recibido diversas denuncias respecto a las personas que se encuentran en diferentes Centros de Contención del Coronavirus, en adelante CCC, centros de “retención” en donde guardan cuarentena obligatoria ante el COVID-19 desde el 12 de marzo del presente año, incluso de personas que se encuentran en los establecimientos de salud por sospecha o ser portadores del virus.

Las denuncias recibidas radican principalmente en la falta de atención médica, una adecuada alimentación, servicios de agua potable, hacinamiento, falta de condiciones higiénicas, la no realización de pruebas de laboratorio para detectar COVID-19 y la falta de información sobre los resultados de la misma, en aquellas personas a quienes ya se les había realizado, entre otras necesidades.

Esta Procuraduría realizó monitoreo de medios de comunicación, redes sociales, así como verificaciones a nivel nacional en los CCC de los Departamentos de Ahuachapán, Santa Ana y Sonsonate, siendo éstos Casa Blanca, Santa Leticia, Alicante Montaña, Misiones Ángeles, Cabañas de Apaneca, Hotel Mamapan, Santa Elena, El Atillo, Fleur de Liz; Hotel San José, Hotel San Cristóbal, Ciudad de la Niñez y Adolescencia, Centro Obrero Constitución, Hotel Cardedeum, Ciudad Mujer Santa Ana, Hotel Casa Verde, Hotel Las Palmeras, Hotel Plaza, Hotel Santa Leticia, Ágape. En los departamentos de La Libertad y Chalatenango el Hotel Zaragoza, Polideportivo Merliot, Hotel Capital, Hotel Sunrise, Linda Vista Garden, Hotel Siesta, Hotel Bervely Hills, Hotel Ayagualo, Atami, Hotel Holiday Inn, Hotel El refugio, Hotel La Palma, el Roble, en el Departamento de La Paz, los CCC Rancho Costa del Sol, Rancho Recreativo CEL, Bahía Dorada, Rancho CONAB, Bahía del Sol, Izalco, del Departamento de Usulután, San Miguel y La Unión, los CCC Ciudad Mujer, Hotel Floresta, Leones Marinos El Cuco, Hotel Sevilla, Hotel Tecape, Hotel Tamarindo, Hotel Torola, Centro Obrero. No reportándose la existencia de CCC en los departamentos de Cabañas, San Vicente, Cuscatlán y Morazán.

De la información obtenida, esta Procuraduría determina que las personas desde el momento en que ingresaron a los CCC o centros de “retención” para guardar cuarentena controlada, además de enfrentar una serie de dificultades como las denunciadas, a la fecha,

un gran número de ellas permanecen aún en internamiento, no obstante tener más de treinta días en los CCC con la expectativa e incertidumbre sobre su salida, ya que siguen sin que se les practiquen suficientes pruebas de laboratorio de COVID-19, de igual manera, hay otro grupo de personas a quienes habiéndoseles practicado la misma, no han recibido información alguna sobre los resultados.

La situación se agrava cuando personal responsable de los CCC, les informan que el tiempo que pasaron en otro CCC en donde resultaron casos sospechosos no les cuenta, tampoco el tiempo que muchos pasaron en cuarentena domiciliar, porque presumen que hubo un incumplimiento de la misma y luego ser llevados a los CCC, razón por la que se les estaba prolongando el tiempo de cuarentena a quince días más, sin embargo, esa información no ha sido trasladada a todas las personas en los referidos CCC, siendo lo común la falta de información sobre la realización y respuesta de pruebas, sobre tratamientos médicos, sobre el tiempo de salida de los CCC y sobre la posibilidad de poder continuar la cuarentena en sus domicilios.

Se tiene conocimiento que en los CCC, se han detectado la mayoría de contagios y solo las personas con síntomas evidentes han sido trasladadas a los establecimientos de salud designados para la atención de pacientes portadores del virus, evidenciado, no solo falta de información para las personas en cuarentena, sino también, falta de protocolos de atención para el cumplimiento de los fines que se persiguen en un período de cuarentena. Lo que ha llevado a las autoridades de salud no solo a prolongar el período de cuarentena de las personas en los CCC y centros de “retención”, sino también, a poner en grave riesgo su salud y su vida.

Se ha conocido además, que muchas de las personas que permanecen en los CCC y centros de “retención” son personas adultas mayores que padecen enfermedades crónicas, que necesitan medicamentos especiales que no les son proporcionados en el lugar de internamiento.

En relación a la falta de información a las personas en los CCC y centros de “retención” del país, sobre su situación de salud, las pruebas realizadas, el desconocimiento de los resultados, la no determinación del período de cuarentena así como la prolongación del mismo, esta Procuraduría tuvo conocimiento que toda esa información está siendo manejada de forma centralizada en el despacho del señor Ministro de Salud, en consecuencia, las decisiones sobre la misma son exclusivas de ese ente rector, no siendo compartida con los distintos enlaces Regionales, Departamentales y Locales de Salud, quienes se limitan a manifestar que desconocen la misma, que no han recibido directrices de la sede central, que no están autorizados para informarles a las personas en cuarentena y que no cuentan con lineamientos y protocolos de atención para las personas en cuarentena.

A través de los medios de comunicación, se ha tenido conocimiento de una protesta pacífica que un grupo de personas está realizando por la falta de información en el CCC Izalco Cabaña Club en Costa del Sol, en donde afirman que tienen más de treinta y seis días de permanencia, con dos pruebas realizadas de coronavirus y sin información sobre resultados de las pruebas realizadas y de su fecha de salida, tomando como medida la no ingesta de alimentos. Agregan que hay personas adultas mayores con enfermedades crónicas, situación por la que consideran deben regresar a sus hogares.

Según datos oficiales contenidos en el sitio web covid19.gob.py, a nivel nacional existen 86 Centros de Contención del Coronavirus. Hasta el día diecinueve de abril de 2020 se contabilizan 4,266 personas en cuarentena controlada por el Gobierno, que asegura que los 116 detectados con COVID-19 en los centros de contención llegaron de otros países y ya venían enfermos antes de ingresar a El Salvador.

INFORMACIÓN OBTENIDA Y CONSIDERACIONES:

- a) Desde el 11 y 12 de marzo fueron enviadas a los CCC, todas las personas que regresaban al país, vía aérea y terrestre y provenían de España, Italia, Alemania, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Perú, Panamá, Honduras, México, Costa Rica y Guatemala, entre otros. En el aeropuerto, todos permanecieron en el mismo sitio

- sin ser apartados según lugar de procedencia o sometidos a exámenes clínicos.
- b) Las autoridades de la Dirección General de Migración y la Policía Nacional Civil han sido las encargadas de retener a las personas en los diferentes puntos fronterizos y enviarlas a los CCC, amparados en el Decreto Legislativo número 593 que declara Estado de Emergencia Nacional por la Pandemia de COVID-19, que estableció cuarentena por 30 días y ha obligado a las personas que ingresaban al país, a someterse a los procedimientos de confinamiento, algunos firmaron documentos para una cuarentena domiciliar pero siempre fueron enviados a CCC y centros de “retención” improvisados.
 - c) Esta Procuraduría ha externado su preocupación por la falta de planeación del Órgano Ejecutivo en el Ramo de Salud, al abrir espacios sin condiciones higiénicas para albergados y personal de cuido, sin criterio alguno y sin mayor información, se confinó en lugares inadecuados a un gran número de viajeros desde los días 11, 12, 13 de marzo y siguientes, provocando hacinamiento e incertidumbre. No existen determinaciones individuales a cada persona sometida a cuarentena bajo criterios de necesidad y proporcionalidad.
 - d) Asimismo, existen preocupaciones en cuanto al período de duración de las retenciones de hasta treinta días. Se ha recibido información que indica que este promedio no refleja la realidad, además de vislumbrarse un posible aumento de los períodos, debido a la improvisación y al retraso de los procedimientos del Ministerio de Salud.
 - e) Preocupa además la falta de atención o tratamiento a personas que padecen de enfermedades crónicas o persistentes, una gran cantidad de personas son adultas mayores y también hay personas con discapacidad, mujeres embarazadas y niñas y niños que conviven con el resto de los confinados de manera inapropiada, lo que sumado a la incertidumbre del encierro conlleva profundos impactos físicos y psicológicos, particularmente en estos grupos en condición de vulnerabilidad.
 - f) De manera general, llama la atención de esta Procuraduría el daño significativo que el carácter indefinido de la retención sanitaria causa en las personas. Varios confinados han denunciado que uno de los aspectos más difíciles que están viviendo es la incertidumbre respecto de cuándo finalizará su cuarentena.
 - g) Otro aspecto preocupante es el incremento de las “retenciones” realizadas por autoridades policiales y militares, quienes por criterio de éstos últimos, no justifican su presencia en las calles y han sido enviados a centros de cuarentena, siendo un procedimiento arbitrario por parte de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, ya que se ha detenido a las personas sin haber valorado una situación de riesgo potencial o habérseles realizado la prueba que determine si es un portador del virus, y se ha enviado a delegaciones policiales de donde posteriormente, son trasladados a centros de contención a cumplir la cuarentena de treinta días.
 - h) Al respecto, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en razón de peticiones ciudadanas de habeas corpus se ha pronunciado sobre la ilegalidad de la medida (148/149-2020) y manda a las autoridades a respetar el derecho de libertad personal y libre tránsito, recomendando enviar a sus respectivos domicilios a las personas “retenidas”. Solo se puede conducir a los CCC a personas que muestren riesgo de contagio tras una evaluación objetiva. Ni el Código de Salud, ni los Decretos Ejecutivos ni la invocación del principio de primacía de interés público, facultan al Gobierno a realizar confinamientos sanitarios forzosos contra quienes incumplan la cuarentena.
 - i) Ese máximo Tribunal también, ha admitido diferentes hábeas corpus relacionados a demandas de personas que han exigido conocer los resultados de sus pruebas y otros, para pedir la evaluación de COVID-19 y así continuar la cuarentena en su domicilio si es posible, además de solicitar las condiciones necesarias y asistencia médica adecuada debido a padecimientos médicos que podrían poner en riesgo su salud.
 - j) Las personas que ya han cumplido la cuarentena y permanecen asintomáticos se encuentran en el hotel Alicante, en Atami, Ayagualo, hotel Kartagus, hotel Villa Terra, en San Salvador; en el Bahía del Sol de La Paz; hotel Plaza de Sonsonate y en uno de los albergues en el Lago de Coatepeque, entre otros.
 - k) Esta Procuraduría considera que prorrogar el confinamiento de personas que han resultado negativas de COVID-19 al aplicarles la prueba, y permanezcan de

manera indefinida en los Centros de Contención, argumentando interés del Estado, se estaría atentando contra los derechos establecidos en nuestra Constitución y demás instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos que reconoce al individuo, la dignidad de la persona, el derecho al debido proceso, a ser informado, a la familia, la vida familiar y la privacidad.

- l) Con respeto a las medidas generales de cuarentena reconocemos las facultades que las leyes le confieren al gobierno en casos de emergencia nacional por la pandemia, sin embargo, esta Procuraduría reitera que los medios que un Estado puede utilizar al ejercer esta facultad, deben ser siempre respetuosos de los derechos humanos, resulta preocupante que el gobierno continúe enviando a cuarentena obligatoria a personas que no presentan síntomas o no han estado en contacto con portadores del virus, sin considerar los efectos traumáticos para las personas afectadas que incluyen a niños y niñas. El Estado debe desplegar esfuerzos para alcanzar un mejor balance entre el interés de implementar medidas razonables para aplicar las restricciones y su obligación de garantizar los derechos humanos a todas las personas bajo su jurisdicción.
- m) En cuanto a las personas que son enviadas a Villa Centroamericana, conocida como Villa Olímpica, San Salvador, Un número de doscientos cincuenta y cinco personas guardaban cuarentena inicialmente (13 de marzo) en este centro de contención, habilitado sin ningún criterio sanitario desde la noche del once de marzo de este año. Se verificó que nunca existió coordinación por parte del personal de salud y de protección civil, solo se instruyó a la Fuerza Armada para adecuar una edificación en desuso, sin condiciones higiénicas o sanitarias, fueron las personas que retenidas en ese lugar quienes se organizaban para el aseo de las diferentes áreas, para la toma de alimentos en grupos y el lavado de ropa, entre otras actividades.
- n) Se conoció también que el pasado veintisiete de marzo del presente año, fueron informados por personal de salud que “debido al hacinamiento” que existía en ese centro serían trasladadas a otros CCC, en los departamentos de Sonsonate, La Paz, La Libertad y San Salvador. No obstante, se supo por información proporcionada por las mismas personas en cuarentena en la Villa que los traslados obedecían a que una persona quien estuvo entre los pabellones B-5 y B-6 presuntamente había resultado positivo a la prueba de contagio COVID-19, pero que al resto nunca les fue realizada la prueba.
- o) Considerando que la cuarentena obligatoria es una medida provisional a manera de medida de cautela para evitar daños mayores o irreparables, el efecto se ha visto desproporcionado ya que es precisamente de estos centros de donde salieron los primeros casos positivos estando toda la población confinada expuesta al contagio en razón de las condiciones en las que fueron albergadas. Además, considerando los casos positivos que han sido comprobados, la mayoría proviene del CCC Villa Olímpica, donde continuamente se han venido rompiendo las disposiciones propias de una cuarentena, por ello debe considerarse y tomar especial atención sobre el tiempo que la cuarentena debe extenderse una vez se instalaron a pacientes en otros centros; así como las medidas para garantizar que las pruebas les sean realizadas a la mayor brevedad posible, con el objetivo de una atención oportuna, por el particular riesgo que representó haber permanecido en Villa Olímpica, de tal forma que de manera supervisada y ordenada las personas que han cumplido con la cuarentena o no han resultado positivos ni presentan síntomas, sean enviados a sus casas.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

- 1) El derecho humano a la salud y las obligaciones generales a cargo del Estado.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (en adelante CDESC), señala que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarias para alcanzar el más

alto nivel posible de salud (Observación General 14, pr. 9 *in fine*). El Comité DESC también interpreta el derecho a la salud, como un derecho inclusivo que no solo abarca la atención de salud oportuna y apropiada, sino también los principales factores determinantes de salud, como el acceso al agua limpia potable, y a condiciones sanitarias adecuadas, el suministro adecuado de alimentos sanos, una nutrición adecuada, una vivienda adecuada, condiciones sanas en el trabajo y el medioambiente, y acceso a la educación e información sobre cuestiones relacionada con la salud, incluida la salud sexual y reproductiva.⁹⁴

La Constitución, además, en su artículo 2 establece dos obligaciones generales que se tienen de parte del Estado hacia cualquiera de sus habitantes y respecto de sus derechos, a saber: conservarlos y defenderlos. En otras palabras, es obligación estatal conservar los derechos de las personas, y también es obligación defender tales derechos.

Así mismo son derechos de los pacientes⁹⁵: El derecho de atención, que implica ser atendido de manera oportuna, eficiente y con calidad, por un prestador de servicios de salud cuando lo solicite o requiera, que comprende acciones destinadas a la promoción, prevención, curación, rehabilitación de la salud y cuidados paliativos de acuerdo a las normas existentes. Derecho a trato igualitario. El paciente recibirá en todo momento de su atención un trato digno, con respeto, esmero, cortesía, resguardando su dignidad humana e intimidad y sin ningún tipo de discriminación por razones de raza, sexo, religión, edad, condición económica, social, partidaria, política e ideológica y el derecho a una atención calificada, lo que implica que el paciente tiene derecho a una atención en salud con calidad y calidez, con profesionales y trabajadores de salud debidamente acreditados, certificados y autorizados por las autoridades competentes para el ejercicio de sus tareas o funciones, en el ámbito público y privado.

El derecho a la información implica que el paciente o su representante, deberá recibir en forma verbal y escrita, del prestador de servicios de salud, durante su atención, la siguiente información, de manera oportuna, veraz, sencilla y comprensible de acuerdo a su problema:

- Nombre completo del profesional de la salud que lo atenderá y su número de registro en la Junta de Vigilancia; b) Su diagnóstico, tratamiento, alternativas, riesgo, evolución y pronóstico respectivo; c) Recibir la información y explicación de manera oportuna y lo más clara posible de su diagnóstico, de sus exámenes de laboratorio, de su tratamiento, imágenes, biopsias; así como de los efectos secundarios de medicamentos y procedimientos; d) Duración estimada de estadía en caso de hospitalización y tratamiento; en los casos que se puedan precisar; e) Las posibilidades de éxito, riesgo y las consecuencias de rechazar o interrumpir un tratamiento; y, f) En el ámbito privado el paciente tiene derecho a conocer, en cualquier momento, los costos estimados de su hospitalización, tratamiento y honorarios médicos, considerando las circunstancias del mismo. Toda información antes mencionada será proporcionada al representante, cuando el paciente no se encuentre en uso de sus plenas facultades.

En lo que se refiere al ejercicio del derecho a la salud de las personas mayores, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conforme a lo dispuesto en los párrafos 34 y 35 de la observación general N°6 (1995), reafirma la importancia de un enfoque integrado de la salud que abarque la prevención, la curación y la rehabilitación. Esas medidas deben basarse en reconocimientos periódicos para ambos sexos; medidas de rehabilitación física y psicológica destinadas a mantener la funcionalidad y autonomía de las personas mayores; y la prestación de atenciones y cuidados a los enfermos crónicos y en fase terminal, ahorrándoles dolores evitables y permitiéndoles morir con dignidad.

En el marco de la gravedad de la pandemia COVID-19 es innegable el incremento de la amenaza a la salud pública, que podrían justificar en alguna medida restricciones a ciertos derechos, tal es el caso de la cuarentena o ingresos hospitalarios preventivos.

⁹⁴ Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Observación General N° 14, "El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) párrafo 11, pág. 3/21, 22° período de sesiones.

⁹⁵ Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes y Prestadores de Servicios de Salud, emitida por medio del Decreto Legislativo número 307, de fecha 10 de marzo de 2016, publicada en el D.O. 64, Tomo 411, de fecha 8 de abril de 2016. Arts. 10, 11, 12 y 13.

Esto desde ningún punto de vista justifica la vulneración de la dignidad humana de las personas presuntamente contagiadas o confirmadas del contagio, así como tampoco tolerar la omisión de un trato adecuado, oportuno y sin discriminación, de conformidad a la normativa internacional de los derechos humanos. Todo lo contrario, se vuelve imperativo e inexcusable hacia los Estados el cumplimiento de las obligaciones de respetar y garantizar los derechos humanos a la salud, a la integridad personal y a la vida, con especial atención a los grupos en condición de vulnerabilidad.

En relación con las medidas de contención, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH y su Relatoría Especial para los Derechos Económicos, Sociales Culturales y Ambientales, REDESCA, urgen a los Estados que observen, en cualquier acción dirigida a la reducción de los factores de contagio, el estricto respeto a los tratados y estándares internacionales en materia de derechos humanos, las garantías del Estado de Derecho y el cumplimiento de la obligación de cooperación de buena fe, particularmente en contextos transnacionales de alto riesgo para la salud pública y la vida de las personas.

Resalta también que deben tutelarse los derechos de todas las personas que se vean afectadas por las medidas de contención que se impongan, especialmente aquellas cuya subsistencia peligre al someterse a un régimen de cuarentena, por la pérdida de sus ingresos, amenazas a sus necesidades vitales básicas, riesgo de ser desalojadas o ausencia de redes institucionales de apoyo.

MEDIDAS CAUTELARES

Dentro de las atribuciones asignadas a esta Procuraduría, el ordinal décimo del artículo 194.I de la Constitución habilita a promover y proponer medidas que estime necesarias en orden a prevenir violaciones a los derechos humanos. Esta potestad es amplia y permite una gama de mucha diversidad de acciones que la Procuraduría puede adoptar. No obstante, la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en su artículo 36, concretiza aún más esta potestad, habilitando la emisión de las medidas cautelares.

Adicionalmente el modelo de medidas cautelares que asume la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos es completamente amplio, es decir basado en el esquema *numerus apertus*. De manera que como Procurador no estoy obligado a seguir un listado taxativo de medidas, sino que debo adoptar las que considere conveniente según las circunstancias.

Lo anterior da pie a una tercera característica que es su *necesidad o circunscripción teleológica*, de modo que una medida cautelar no se puede considerar como un fin en sí mismo, sino que está justificada y limitada a lograr necesariamente un propósito que está determinado por la ley: “evitar que se consuman daños irreparables a las personas”. En ese sentido, si bien se adscribe –como fue apuntado previamente– al modelo de *numerus apertus* la medida escogida debe tener el potencial de lograr el propósito señalado, y no exceder del mismo.

Destaca la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos también, que la medida cautelar debe ser eficaz, con eficacia, *i.e.*, con capacidad de lograr el efecto que persigue, y esto significa dos cosas, por una parte, pertinencia y por la otra potencial de transformación de la realidad. Este último elemento, dada la naturaleza de la Procuraduría en el sentido de no ser un órgano jurisdiccional, significa que si bien no puede imponer coactivamente el logro o cumplimiento de la finalidad propuesta, sí puede supervisar su cumplimiento y utilizar o desplegar cualquiera de los mecanismos que la Ley le ofrece para propiciar el cumplimiento de su recomendación.

Por otra parte, de la naturaleza de una medida cautelar surge la exigencia de la concurrencia de dos condiciones. La primera, denominada peligro de daño inminente o *periculum in mora*; y la segunda, denominada apariencia jurídica de veracidad o *fumus boni iuris*.

En el presente caso se ha evidenciado las condiciones inadecuadas en las que se encuentran las personas en confinamiento o internamiento sanitario obligatorio, mismas que de no ser atendidas podrían ocasionar graves violaciones al derecho a la vida, a la integridad física y a la salud; asimismo se ha evidenciado la falta de protocolos o lineamientos por parte

del personal de salud y demás personal responsable en los CCC o centros de “retención” a nivel nacional, quienes se han limitado a expresarles a las personas en confinamiento que no poseen la información, siendo las autoridades a nivel central del Ministerio de Salud quienes pueden brindar la misma, lo que ha llevado a dichas autoridades a prolongar de forma arbitraria el tiempo de cuarentena establecido.

La situación anterior ha implicado para todas las personas en confinamiento o internamiento sanitario obligatorio las circunstancias siguientes:

- a. La prolongación arbitraria del tiempo de cuarentena que deben cumplir;
- b. La falta de información sobre el inicio o finalización de la cuarentena, llevándolas a un estado de incertidumbre respecto a su salida, así como de la posibilidad de continuar una cuarentena sanitaria domiciliar;
- c. Que muchas personas que se encontraban en cuarentena domiciliar controlada por las autoridades locales de salud, sin ningún reporte de éstas de incumplimiento de su cuarentena domiciliar fueron trasladadas a CCC o centros de “retención”, en donde dan por cierto el incumplimiento, responsabilizándoles del mismo, dejándoles por tiempo indefinido en los lugares y sin la información adecuada y oportuna.
- d. La improvisación y retrasos en los procedimientos que realiza el personal del Ministerio de Salud, lo cual está determinado por la centralización de toda la información tanto clínica como logística de cada una de las personas en los CCC o centros de “retención”, derivando en falta de acceso a la información de forma oportuna.
- e. Falta de atención o tratamiento a personas que padecen de enfermedades crónicas o persistentes, siendo que una gran cantidad de personas adultas mayores, mujeres embarazadas y niñas y niños conviven con el resto de personas de los CCC o centros de “retención”, de manera inapropiada, lo que sumado a la incertidumbre del encierro conlleva profundos impactos físicos y psicológicos, particularmente en estos grupos en condición de vulnerabilidad.
- f. Que la mayoría de personas hayan sido llevadas a confinamiento o internamiento sanitario obligatorio sin que exista nexo epidemiológico, una prueba para determinar si es portador del virus, obligándolos a cumplir una cuarentena, sin los requisitos que determinan la misma. Como ya lo ha establecido la Sala de lo Constitucional “solo aquellas personas que muestren riesgo de contagio tras una evaluación objetiva”.
- g. Que la mayoría de personas en los CCC y albergues hayan sido llevadas por las autoridades policiales mediante un procedimiento sumario sin enfoques sanitarios, no cumpliéndose con la finalidad de la cuarentena, al contrario, exponiéndose a las personas a contraer el virus.
- h. El no acceso a las pruebas de COVID-19 por parte de las personas en los CCC, o centros de “retención” o establecimientos de salud y la falta de respuesta para aquellas quienes han tenido la suerte de realizárselas, ha implicado el no definir la continuidad de las medidas en las que se encuentran las personas, la posibilidad de contagio en dichos lugares, la imposibilidad de realizar cuarentena domiciliar, así como, permanecer sin las condiciones necesarias y de asistencia médica adecuada debido a los padecimientos que ponen en riesgo su salud.
- i. Que las personas en los CCC o centros de “retención”, ante la falta de información adopten medidas como no ingerir sus alimentos, hasta que sus peticiones sean escuchadas por las autoridades competentes.

La situación expuesta, ha sido hecha del conocimiento al señor Ministro de Salud doctor Francisco José Alabi Montoya, al señor Presidente de la República de El Salvador señor Nayib Armando Bukele por parte de esta Procuraduría, a través de las resoluciones de Medida Cautelares emitidas previamente⁹⁶, así también, por medio de los oficios en cada una de las denuncias recibidas, haciéndoles las recomendaciones que de manera urgente debían acatar en orden a prevenir violaciones a los derechos humanos de las personas en el marco de la pandemia por COVID-19.

⁹⁶ Resolución de Medida Cautelar con referencia Expediente SS-0171-2020, de fecha 31 de marzo de 2020, Resolución de Medida Cautelar con referencia Expediente SS-0171-2020, de fecha 02 de abril de 2020.

En tal sentido, no teniendo respuesta a la fecha de las acciones que como representantes del Estado hayan realizado y siendo más grave aún que las condiciones de las personas se hayan agudizado en los CCC, albergues, incluso en los establecimientos de salud por la falta de protocolos o lineamientos de atención y en el caso de existir éstos, la no aplicación por el personal competente, lo que también ha llevado a más personas a cuarentena como en el caso del personal de salud del Hospital Nacional General “Dr. Juan José Fernández” Zacamil y a poner en riesgo la vida de pacientes con padecimientos graves al ser expuestos junto a personas positivas a COVID-19, por tales razones:

Concluyo, reconozco y afirmo que existe un peligro de daño inminente que incluso pudiera ser irreversible que, ***mantenido en el tiempo y en concurrencia ha producido y continuará produciendo daños irreparables por acciones y omisiones negligentes del Estado en la atención*** de las situaciones antes descritas en los CCC, centros de “retención” y establecimientos de salud en donde las personas están cumpliendo cuarentena sanitaria y recibiendo atención médica.

Adicionalmente, a la fecha, hay elementos que llevan a suponer, en virtud de que no han sido desvirtuados de conformidad con las investigaciones que esta Procuraduría ha estado realizando, que no se han acatado las recomendaciones emitidas para mejorar las condiciones de las personas en los CCC, centros de “retención” y establecimientos de salud en donde están cumpliendo la cuarentena y están recibiendo atención médica, lo cual en caso de ser cierto, podría implicar una grave violación al derecho a la vida, a la integridad personal, a la salud y a la libertad de las personas antes mencionadas. Consecuentemente, reconozco y afirmo que existe, en este momento y en las circunstancias actuales, una apariencia jurídica de veracidad.

Concurriendo lo anterior es procedente:

Emitir una medida cautelar, la cual debe estar dirigida a realizar todas las gestiones que sean necesarias aplicando protocolos o lineamientos de atención para brindar un trato digno a las personas en cuarentena en los CCC, centros de “retención” y en los establecimientos de salud en el marco de la pandemia del COVID-19, a brindar la información a las personas en cuarentena y a sus familiares, así como actuar con la debida diligencia por parte del personal de salud que brinda la atención.

En consecuencia y de conformidad con las atribuciones otorgadas en el artículo 194. romano I, ordinal 1º, 2º, 3º, 7º y 10º de la Constitución de la República y sobre la base de las facultades contenidas en los artículos 11, 27, 28, 36 y 45 de la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en mi calidad de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, resuelvo:

A) Reconocer la complejidad que enfrentan los Estados y las sociedades a nivel mundial debido a las medidas excepcionales que requiere la pandemia global ocasionada por el COVID-19, lo que supone desafíos extraordinarios desde el punto de vista de los sistemas sanitarios, la vida cotidiana de las personas y para la vigencia de los derechos humanos. En ese sentido, reconozco los esfuerzos de los Estados para la prevención, contención, tratamiento y rehabilitación de la salud de las personas frente al COVID-19;

B) Declarar que en las condiciones actuales y de acuerdo con las denuncias e informaciones existentes en este momento, las personas en cuarentena en el marco de la atención de la pandemia por COVID-19, se encuentran en una situación de peligro o daño inminente en su vida, integridad personal, en su salud y en su libertad personal, resultado que debe ser prevenido por medio del proceder de las autoridades de salud, quienes deberán ajustar su conducta a las obligaciones de conservar (asegurar efectividad) y defender (garantizar sin discriminación) los derechos aludidos, aplicando los protocolos necesarios y los estándares establecidos internacionalmente, separando adecuadamente según el grado de riesgo a las personas de los CCC, albergues o establecimientos de salud.

C) Declarar que la prolongación del periodo de cuarentena, restringe la libertad personal y no contribuye a lograr los fines que esta persigue, misma que es preventiva y no punitiva.

D) Declarar que en las condiciones actuales de los CCC, albergues y establecimientos de salud, el prolongar el periodo de cuarentena, implica el no logro de los objetivos que en sí misma persigue, lo que nos conlleva a reconocer la inexistencia de límites objetivamente determinables para ella, lo que más bien permite, la prolongación de una medida de coerción personal, que se caracteriza por su excepcionalidad y necesidad, lo cual deviene de la acción u omisión propia del Estado, en cuanto la aplicación de los protocolos sanitarios correspondientes.

E) Declarar que la prolongación del periodo de cuarentena cuando no hay argumentos ni pruebas válidas es innecesario, volviéndose un medio de coerción cuyo mantenimiento está condicionado hacia el cumplimiento de fines específicos, por lo que, si el fin que se pretendía alcanzar ya se llevó a cabo, la misma pierde sentido. Es decir que, independientemente de que se señale un tiempo máximo de duración de la cuarentena, este solo constituye un límite extremo, pero aún sin haberse llegado al mismo, la medida puede desnaturalizarse si ha excedido el tiempo estrictamente necesario para lograr la finalidad concreta. Por lo que:

Emito con carácter urgente la siguiente medida cautelar, recomendando⁹⁷:

Al señor Ministro de Salud, doctor Francisco José Alabí Montoya:

1. Que adopte con carácter de urgente las medidas de su competencia sobre la base de los protocolos de atención nacional e internacional existentes, y en caso de no existir éstos, crearlos para brindar la atención urgente de las personas presuntamente contagiadas o confirmadas del COVID-19, así como de aquellas que se encuentran confinadas en los CCC, establecimientos de salud del país o centros de “retención”, sin que muestren riesgo de contagio tras una evaluación objetiva, realizando las siguientes acciones:

a) Brinde la información requerida a todas las personas en los CCC, centros de “retención”, así como en los establecimientos de salud de su situación clínica y respecto a sus tiempos de cuarentena, incluso domiciliar.

b) Abstenerse de exceder los tiempos de cuarentena establecidos según protocolos sanitarios, para no retener ilegalmente a las personas, vulnerando su derecho a la libertad personal, más aún cuando no se ha determinado riesgo de contagio tras una evaluación objetiva.

c) Atender de forma urgente a aquellas personas que, por acciones u omisiones del Estado como la falta de información y atención sobre su situación en los CCC y centros de “retención”, han sido afectadas psicológicamente, en su salud e incluso han llegado a perder su vida, específicamente aquellas que de forma desesperada protestan pacíficamente adoptando la medida de no ingerir alimentos.

d) Brinde la información de las pruebas de COVID-19 realizadas y realice la misma a todas aquellas personas retenidas sin riesgo de contagio, para determinar su tiempo de cuarentena.

e) Socialice los protocolos de atención al personal de salud que se encuentran en los CCC, centros de “retención” y establecimientos de salud, para que se traslade de forma oportuna, con certeza, calidad y calidez la información clínica y sobre el tiempo de su cuarentena, incluso para que se informe de forma inequívoca a las personas en cuarentena domiciliar su situación frente al COVID-19.

⁹⁷ Art. 36.- Al recibir la denuncia, tener conocimiento de los hechos o en cualquier estado del procedimiento, para evitar que se consumen daños irreparables a la persona, el Procurador podrá adoptar las medidas cautelares que estime necesarias y eficaces. La adopción de tales medidas no prejuzgará la materia de la resolución final.

f) Que se garantice el periodo estricto de cuarentena, de tal manera que a las personas que hayan cumplido con todos los protocolos sanitarios dentro de los centros de contención y habiendo finalizado su tiempo completo para ello, se les faciliten los medios para trasladarlos a su domicilio; a su vez, que con suficiente anticipación se les informe a las personas en esta situación, los mecanismos a utilizar para su traslado a sus respectivos domicilios.

g) Se establezcan zonas de aislamiento en cada uno de los establecimientos de salud para las personas sospechosas o positivas del COVID-19, para garantizarle su derecho a la vida y a la salud, así como de las personas trabajadoras de salud y demás pacientes ingresados por otras enfermedades.

h) Se realice una clasificación adecuada: respecto a las personas con resultados positivos y negativos del COVID-19, el lugar de procedencia y se asegure el distanciamiento adecuado;

i) Se establezca una atención diferenciada e inclusiva a la población de niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas con VIH, mujeres embarazadas, entre otros grupos en condición de vulnerabilidad, lo cual implicará la realización de un censo de estas poblaciones en cada uno de los CCC;

Al señor Presidente de la República, Nayib Armando Bukele sobre la base de lo expuesto:

a) Realizar las acciones de su competencia a efectos de garantizar las condiciones adecuadas en los CCC, centros de “retención y establecimientos de salud del país para contener, detectar y brindar el tratamiento adecuado a las personas frente al COVID-19, lo que implica, garantizar al personal de salud de todos los insumos, equipos e infraestructura adecuada para el aislamiento y buen desempeño de las labores, procurando eficiencia, eficacia y transparencia.

b) Instar al señor Presidente de la República a asegurar que en su relacionamiento con esta Procuraduría impere un sentido de contribución y colaboración por la causa común de la defensa de los derechos humanos, tal y como lo exige el artículo 86 de la Constitución.

c) Abstenerse de realizar acciones que estén dirigidas a intentar disminuir o recortar, por cualquier vía o bajo cualquier modalidad, las amplias facultades que la Constitución ha conferido a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

d) Asegurar las perspectivas de protección integral de los derechos humanos y de la salud pública, frente a la pandemia del COVID-19.

Esta Procuraduría supervisará el cumplimiento de la presente medida cautelar, para lo cual se solicita al señor Presidente de la República, Nayib Armando Bukele; al señor Ministro de Salud, doctor Francisco José Alabí Montoya, que rindan un informe de cumplimiento sobre la presente medida cautelar en el plazo de 24 horas posteriores a la notificación de la presente resolución, en la que de manera detallada expongan las acciones realizadas para darle cumplimiento.

Se reitera a las autoridades citadas cumplir las recomendaciones emitidas en las resoluciones de medidas cautelares previas, de fechas treinta y uno de marzo y dos de abril del presente año, con expediente con referencia SS-0171-2020, remitiendo los informes correspondientes.

Así mismo se recuerda a las autoridades precitadas que el artículo 46 de la Ley que rige a esta Procuraduría establece: “Toda persona que impidiere, coartare u obstaculizare en cualquier forma, no enviare los informes que el Procurador le solicite, negare su acceso a

expedientes, lugares, documentos e investigaciones necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones, incurrirá en las responsabilidades penales o administrativas correspondientes. En cualquiera de los casos precitados el Procurador dará aviso inmediatamente al Fiscal General de la República de los hechos respectivos, para que ejerza la acción penal pertinente y en su caso, a la autoridad administrativa competente”.

Se hace del conocimiento la presente resolución al señor Fiscal General de la República licenciado Raúl Melara, para el seguimiento de la presente resolución y las acciones que le competen.

3. Medidas Cautelares para la protección de personas retenidas por incumplimiento de la cuarentena domiciliar

a. PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, San Salvador, a las nueve horas del día dos de abril del año dos mil veinte.

HECHOS

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, ha mantenido a nivel nacional la supervisión permanente de la actuación de las instituciones a fin de prevenir la vulneración de derechos fundamentales de la población en general, particularmente por el contexto de emergencia que estamos viviendo producto del COVID-19, de las personas que fueron enviadas a los Centros de Contención del Coronavirus - CCC- y de quienes han sido referidas a hospitales como implementación de las medidas gubernamentales ante tal emergencia.

La Asamblea Legislativa emitió el Decreto Legislativo n° 594, de 14 de marzo de 2020, que contiene Ley de Restricción Temporal de Derechos Constitucionales Concretos para Atender la Pandemia COVID-19, que limitó la libertad de tránsito, el derecho de reunión pacífica y el derecho a no ser obligado a cambiar de domicilio.

La entonces Ministra de Salud, doctora Ana Orellana Bendek, emitió el decreto ejecutivo N° 12 el 21 de marzo de 2020 en donde se decretaron las ‘medidas extraordinarias de prevención y contención para declarar el territorio nacional como zona sujeta a control sanitario, a fin de contener la pandemia COVID-19’, en el cual además se establece que salvo excepciones, todos los habitantes del territorio de la república deberán guardar cuarentena domiciliar obligatoria, lo cual constituyó la restricción del ejercicio de la libertad de tránsito.

GESTIONES INSTITUCIONALES E INFORMACIÓN OBTENIDA.

En este contexto, esta Procuraduría tuvo conocimiento, que a partir del día 21 de marzo del año en curso se aplicó una medida de ‘retención’ de las personas que habrían incumplido la cuarentena domiciliar decretada, y por ello serían sometidas a una cuarentena forzosa en centros especiales. Al respecto se ha tenido la siguiente información:

El día jueves veintiséis de marzo de este año a través de redes sociales se conoció la falta de alimentación de las personas que están retenidas en el Palacio de los Deportes “Carlos el Famoso Hernández” conocido como INDES. Al respecto, personal de esta Procuraduría se comunicó con el señor Alberto Lizama, quien manifestó ser el funcionario responsable de Centros de Contención por parte del Ministerio de Gobernación, y expresó que ya estaban tomando medidas para atender la situación en el INDES, posteriormente, se conoció que ese día por la mañana, hubo un inconveniente porque el proveedor extravió la ruta, pero que se les proveerían los almuerzos.

El viernes veintisiete de marzo de este mismo año, a las trece horas con veintidós minutos se recibió llamada de una persona que se identificó como Jimmy Meléndez, quien denunció que en el Centro de Contención del Palacio de los Deportes (INDES) había un promedio de 200 personas retenidas, y que en días previos se comunicaron con funcionarios de esta

institución y refirieron las circunstancias de su detención, considerando que los habían detenido a su juicio de forma ilegal. Expuso, además, que en esta ocasión llamaba para conocer la posición de la PDDH, respecto de la resolución de un Habeas Corpus conocida este día, explicó que para las personas detenidas era claro que la Sala de lo Constitucional, en esa resolución se refiere a todas las personas que están en la misma situación por lo que ellos deben ser liberados inmediatamente.

Respecto de las condiciones de su detención expuso que en dos días no les dieron desayuno, que está una persona con diabetes y que no recibe sus medicinas. Agregó, que cuentan con un abogado, y consultó si su abogado podría hacerse presente a la Sala de lo Constitucional para darse por notificado de tal resolución de Habeas Corpus antes indicada.

Al respecto se consultó vía telefónica con el señor Lizama (coordinador de los Centros de Contención por parte del Ministerio de Gobernación) para conocer cuál era la posición gubernamental respecto a la continuidad de las personas en el INDES, y contestó que no tienen conocimiento oficial de resolución de la Sala de lo Constitucional, y que tampoco han recibido indicaciones superiores para tomar medidas inmediatas de poner en libertad a las personas retenidas en ese lugar, y hasta que no se reciban ordenes de la presidencia seguirán operando.

El mismo día (27-03-2020), a las diecisiete horas con cuarenta y un minutos, se obtuvo información que el señor José Arturo Galdámez, el día domingo veintidós de marzo, salió de su casa y se dirigía a traer agua y medicamentos, cuando fue retenido (supuestamente por violar la cuarentena domiciliar) en la gasolinera Puma de San Martín, y que ha permanecido desde entonces en las instalaciones de Ciudad Mujer de Colón; y según informó el denunciante, este día fueron visitados por los doctores y les estuvieron avisando, también llegó un abogado, y les dijeron que ya lo traían para su casa junto con otras personas, pero los llevaron a la Delegación Policial de Soyapango-Ilopango donde firmaron un acta que hacía constar que iban a pasar la cuarentena en sus casas, y que sus familias ya los estaban esperando, pero sin explicarles la razón los subieron de nuevo a unos vehículos y los llevaron de regreso al referido centro de contención, solo les dijeron que era por ordenes superiores.

El día domingo veintinueve de marzo de este mismo año, a las dieciséis horas con cuarenta y un minutos, personal de esta Procuraduría conversó vía telefónica con un señor que se identificó como Mario Damas, él expuso que vino recientemente de Estados Unidos para hacer visita familiar y el día sábado 21 de marzo, a las once horas con treinta minutos regresaba de la casa de una tía a la que había ido a visitar, que padece artritis y no puede salir, cuando fue retenido mientras se conducía como pasajero de un Uber en las cercanías de la Universidad de El Salvador, al detenerlos les dijeron que iban a la delegación a hacerles una prueba a él y al conductor del Uber, allí observó a otras personas detenidas, y que a otros dos jóvenes les pegaron dos pechadas, que él estuvo en el suelo durmiendo en un parqueo de la delegación policial de Monserrat por dos noches, y el día lunes veintitrés de marzo los trasladaron al Palacio de los Deportes -INDES-.

Mencionó que hay situaciones de inseguridad, porque al lugar han llevado nuevas personas y cree que entre ellas hay personas que pertenecen a pandillas y que les han intentado robar. Les preocupa que según los decretos presidenciales no podían estar reunidas más de 50 personas pero que allí hay un grupo superior a 150 personas.

A las diecisiete horas con veintiséis minutos, del mismo día (27-03-2020), se recibió nueva información del señor Jimmy Meléndez, quien afirmó que es uno de los coordinadores del grupo de 175 personas detenidas en el INDES, expresó que deseaban que esta institución les colaborara. Además, denunció que el día viernes habían llegado a ese lugar unos médicos epidemiólogos quienes comenzaron a evaluarlos en su salud, pero que recibieron la orden que se retiraran y desde entonces no les han realizado ninguna prueba médica ni tampoco les han dado ninguna otra información sobre su estado de salud, expresó que tienen incertidumbre sobre la situación jurídica en la que se encuentran.

Respecto de sus condiciones actuales expresó que ya está normalizada la entrega de la comida e implementos, pero si denunció que tienen los casos de dos personas que estaban bajo tratamiento pero sin medicinas uno por diabetes y el otro señor posiblemente tuberculosis; además, expuso que otra de las personas detenidas posiblemente se fracturó una rodilla.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

El derecho humano a la libertad personal y las restricciones impuestas por el decreto N° 12 del Ministerio de Salud.

Como lo establece el artículo 5 de la Constitución de la República: “...toda persona tiene libertad de entrar, de permanecer en el territorio de la República y salir de este, salvo las limitaciones que la ley establezca”. Esta modalidad de libertad a que el constituyente se refiere debe ser sin restricción, de movilización por todo el territorio nacional, y puede tener restricciones temporales, que en este caso lo justifica la emergencia que estamos viviendo por la pandemia por COVID-19, pero estas deben de ser debidamente reglamentadas para el otorgamiento de la imposición de límites.

La Sala Constitucional, en resolución de las diez horas con cincuenta y cuatro minutos del día veintiséis de marzo de dos mil veinte, en el expediente HC-148-2020, estableció lo siguiente:

“Mediante una ley formal, publicada de manera real y efectiva (auto de trámite de inconstitucionalidad 146-2014, de 11 de agosto de 2017) las personas que por inobservar una cuarentena general (sin que se establezca de modo objetivo que puedan ser fuentes de contagio) sean afectadas en sus derechos de libertad física, como consecuencia de un internamiento forzoso con fines sanitarios, tienen que haber tenido la oportunidad de conocer de modo cierto los supuestos concretos, precisos y razonables en que podrían ser sometidos a dicho confinamiento. La aplicación inmediata de una ‘cuarentena no domiciliaria’, sin que haya existido tiempo suficiente para la divulgación de las medidas o sin que se hubieren determinado con precisión los criterios que guiarían su adopción o ejecución operativa (disminuyendo la discrecionalidad excesiva o el riesgo de arbitrariedad) puede ser incompatible con la Constitución.

Asimismo, los derechos en juego (dignidad humana, libertad, seguridad jurídica) exigen que los actos de aplicación de la cuarentena deben ser debidamente documentados, entre otras razones, para garantizar a los interesados el acceso a la información sobre la localización de la persona internada y las condiciones de su cuarentena. En relación con esto último, los “centros de contención de la pandemia” deben contar con el personal, los medios, equipo y recursos necesarios para garantizar a los afectados un trato digno, con acceso a alimentos, artículos de higiene, atención médica y otras condiciones básicas para evitar el riesgo de cualquier forma de trato cruel, inhumano o degradante.

El ingreso forzado de una persona a un régimen de cuarentena solo puede aplicarse u ordenarse cuando se disponga de modo efectivo de lugares adecuados para dicho régimen, sin que las bartolinas u otras dependencias policiales puedan emplearse en ningún caso y ni siquiera durante lapsos breves, para ese efecto, a menos que sus instalaciones fueran adaptadas para ello. Además, las personas remitidas o sometidas a cuarentena en dichos “centros de contención” no pueden ser presentadas ante los medios de comunicación sin su consentimiento, ni expuestas al riesgo de estigmatización social por la situación en que se encuentran.⁹⁸

En este sentido, respecto de la atención de las personas que se encuentran “retenidas”, deben cumplirse dos parámetros básicos, que las personas que fueran sometidas a la aplicación inmediata de una medida de internamiento, o cuarentena forzosa, debían tener el tiempo para conocer las medidas y los alcances y restricciones para poder circular y no ser sujetos de la misma. Además, en caso de ser sometidos de manera forzada a la cuarentena,

⁹⁸ Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución de admisión del habeas corpus 148-2020, de las diez horas con cincuenta y cuatro minutos del día veintiséis de marzo de dos mil veinte. El resaltado en negrita es propio.

se deben cumplir con ciertas condiciones respecto, a la alimentación, seguridad, espacio y separación, higiene y tratamientos médicos, de lo contrario se trataría de una especie de confinamiento forzoso más parecido a una detención.

Cuando la medida de cuarentena es aplicada debe existir un seguimiento y una responsabilidad estatal que debe ser asumida, y que los organismos de seguridad sanitaria y seguridad pública que deben cumplir.

MEDIDAS CAUTELARES

Dentro de las atribuciones asignadas a esta Procuraduría, el ordinal décimo del artículo 194 romano I de la Constitución de la República habilita a promover y proponer medidas que estime necesarias en orden a prevenir violaciones a los derechos humanos. Esta potestad es amplia y permite una gama de mucha diversidad de acciones que se pueden adoptar, no obstante, la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en su artículo 36, concretiza aún más esta potestad, habilitando la emisión de las medidas cautelares. De la formulación literal del artículo indicado se desprende que la función cautelar confiada a esta Procuraduría tiene, al menos, cuatro características. La primera de ellas es que la función cautelar es autónoma, es decir no está circunscrita a un procedimiento de investigación específica, de manera que pueden ser adoptadas pre procesalmente. Se desprende ello de la expresión “al recibir la denuncia, [o] tener conocimiento de los hechos...”. Por supuesto que una vez que el proceso de investigación ha dado inicio, en cualquier etapa del mismo se pueden adoptar medidas cautelares, al amparo de la expresión ‘. .o en cualquier estado del procedimiento’.

Adicionalmente el modelo de medidas cautelares que asume la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos es completamente amplio, es decir basado en el esquema *numerus apertus*, de manera que como Procurador no estoy obligado a seguir un listado exhaustivo de medidas, sino que debo adoptar la que considere conveniente según las circunstancias.

Lo anterior da pie a una tercera característica que es su necesidad o circunscripción teleológica, de modo que una medida cautelar no se puede considerar como un fin en sí mismo, sino que está justificada y limitada a lograr necesariamente un propósito que está determinado por la ley: “evitar que se consuman daños irreparables a las personas”, en ese sentido, si bien se adscribe —como fue apuntado previamente- al modelo de *numerus apertus* la medida escogida debe tener el potencial de lograr el propósito señalado, y no exceder del mismo.

Destaca la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, también, que la medida cautelar debe ser eficaz, con capacidad de lograr el efecto que persigue, y esto significa dos cosas, por una parte pertinencia, y por la otra potencial de transformación de la realidad. Este último elemento, dada la naturaleza de la Procuraduría en el sentido de no ser un órgano jurisdiccional, significa que si bien no puede imponer coactivamente el logro o cumplimiento de la finalidad propuesta, si puede supervisar su cumplimiento y utilizar o desplegar cualquiera de los mecanismo que la Ley le ofrece para propiciar el cumplimiento de su recomendación.

Por otra parte, de la naturaleza de una medida cautelar surge la exigencia de la concurrencia de dos condiciones. La primera, denominada peligro de daño inminente o *periculum in mora*; y la segunda, denominada apariencia jurídica de veracidad o *fumus boni iuris*.

En el presente caso, tal y como se expuso en los hechos objeto de la presente resolución, las personas retenidas en el Palacio de los Deportes “Carlos el famoso Hernández” (INDES), que son aproximadamente 175, han manifestado elementos comunes, como que fueron sujetas de privaciones de libertad sin causa justificada, algunas de estas personas se les retuvo a pocas horas de hacerse público el anuncio de una cuarentena domiciliar obligatoria, y que los primeros días no se tuvo claridad en la aplicación de las restricciones a la libertad ambulatoria; en este sentido, este Procurador recuerda, la necesidad que las

personas deben tener certeza de las condiciones que les permitirán de forma excepcional desplazarse legalmente durante la cuarentena.

Una situación de especial preocupación de las personas ‘retenidas’, es la falta de atención médica a personas con enfermedades crónicas, y que no se les realizan pruebas médicas a fin de determinar si son portadoras del mencionado virus, en tanto, que si las condiciones son inadecuadas, y no se cuenta con una medida de separación, limpieza, y protocolos médicos, podría favorecer los contagios en lugar de prevenirlos.

Finalmente, considero necesario recordar a las autoridades competentes, que, a fin de garantizar los derechos fundamentales a las personas retenidas, se les debe proporcionar los insumos de higiene, y de protección necesarios para prevenir contagios.

En vista de lo anterior, es procedente emitir una medida cautelar, la cual debe estar dirigida a realizar todas las gestiones que sean necesarias para dar efectivo cumplimiento a los parámetros respecto de la aplicación de la restricción del derecho fundamental a la libertad de tránsito, en especial aquellos para determinar que no se trata de una medida arbitraria, a la obligación de proporcionar un trato digno a las personas en cuarentena, garantizar las condiciones de seguridad, a suministrar los insumos médicos necesarios, brindando la información sobre su situación jurídica de las personas y a sus familiares.

En consecuencia y de conformidad con las atribuciones otorgadas en el artículo 194 romano I ordinales 10, 20, 30, 7° y 10° de la Constitución de la República y sobre la base de las facultades contenidas en los artículos 11, 27, 28, 36 y 45 de la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en mi calidad de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, RESUELVO EMITIR LA SIGUIENTE MEDIDA CAUTELAR:

1. Al señor Ministro de Salud doctor Francisco José Alabí Montoya, que adopte las medidas necesarias para garantizar las condiciones sanitarias del Palacio de los Deportes (INDES), que funciona como un centro de contención, suministrando los insumos médicos necesarios, y que la atención médica, sea suficiente para evitar que se pudiera propagar el virus COVID-19 entre las personas en cuarentena.
2. Al señor Director de la Policía Nacional Civil, Comisionado Mauricio Arriaza Chicas, que se garanticen las condiciones de seguridad al interior de las instalaciones del Palacio de los Deportes (INDES), que funciona como un centro de contención.
3. Al señor Ministro de Justicia y Seguridad Pública, ingeniero Rogelio Eduardo Rivas Polanco, y al Director de la Policía Nacional Civil antes mencionado, informen a las personas retenidas, de los instrumentos en los cuales se determinó los criterios para la ejecución operativa de la restricción del derecho fundamental a la libertad de tránsito, establecida en el Decreto Ejecutivo N° 12 en el Ramo de Salud; además, que se revisen los casos de las detenciones ocurridas a partir del día 21 de marzo de este año y determinen de forma clara si en estos casos las personas incumplieron con los parámetros establecidos de la cuarentena domiciliar.

A efecto de supervisar el cumplimiento de la presente medida cautelar, para lo cual se solicita al señor Ministro de Salud, doctor Francisco José Alabí Montoya, al señor Ministro de Justicia y Seguridad Pública, ingeniero Rogelio Eduardo Rivas Polanco, y al señor Director de la Policía Nacional Civil, comisionado Mauricio Arriaza Chicas, que en el plazo de setenta y dos horas posteriores a la notificación de la presente resolución rindan un informe detallando las acciones realizadas para darle cumplimiento, incluyendo información actualizada de la condición de las personas que se encuentran restringidas de su libertad por aplicación del Decreto Ejecutivo N° 12 emitido por la entonces ministra de salud, doctora Ana Orellana Bendek, en especial, las personas que se encuentran en el Palacio de los Deportes ‘Carlos el Famoso Hernández’ (INDES), en las instalaciones de Ciudad Mujer en Lourdes, Colón, y de cualquier otro Centro de Contención donde se encuentren personas retenidas producto del citado decreto ejecutivo.

b. PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS. San Salvador, a las ocho horas del ocho de abril del año dos mil veinte.

HECHOS

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos realiza a nivel nacional supervisión permanente de la actuación de las Instituciones Públicas, a fin de prevenir afectaciones a derechos fundamentales de la población en general, en vulnerabilidad y grupos en situación de vulnerabilidad, como las personas que fueron enviadas a los Centros de Contención del Coronavirus (CCC) y las personas que han sido referidas a hospitales, desde el recién pasado 12 de marzo, que se implementaron las medidas gubernamentales ante la emergencia.

La Asamblea Legislativa emitió el Decreto Legislativo n° 594, de 14 de marzo de 2020, que contiene Ley de Restricción Temporal de Derechos Constitucionales Concretos para Atender la Pandemia COVID-19, que limitó la libertad de tránsito, el derecho de reunión pacífica y el derecho a no ser obligado a cambiar de domicilio.

En el Decreto Ejecutivo N° 12 en el Ramo de Salud, del 21 de marzo de 2020, se promulgaron “medidas extraordinarias de prevención y contención para declarar el territorio nacional como zona sujeta a control sanitario, a fin de contener la pandemia COVID-19”, y establece que salvo excepciones, todas las personas habitantes del territorio de la república deberán guardar cuarentena domiciliar obligatoria, lo cual constituyó la restricción del ejercicio de la libertad de tránsito.

GESTIONES INSTITUCIONALES E INFORMACIÓN OBTENIDA.

En este contexto, esta Procuraduría tuvo conocimiento que a partir del día 21 de marzo de este año, se aplicó una medida de “retención” de las personas que supuestamente habrían incumplido la cuarentena domiciliar, y que éstas serían sometidas a una cuarentena forzosa en centros especiales. Al respecto se han recibido las siguientes denuncias:

El 5 de abril de este año, persona que se acogió al derecho de confidencialidad de su identidad, establecido en el artículo 34 inciso último de la Ley que rige a esta Procuraduría, hizo del conocimiento que desde hace más de quince días, veintitrés mujeres mayores de edad, se encuentran retenidas en las instalaciones de Ciudad Mujer en el municipio de San Martín, de este departamento, entre ellas una en estado de gravidez de ocho semanas, quien fue retenida por agentes de la Delegación Policial de Sensuntepeque, departamento de Cabañas, a las cuatro de la mañana del 22 de marzo de este año, junto a su compañero de vida y otro familiar, estos últimos guardan retención en las instalaciones del Palacio de los Deportes “Carlos el famoso Hernández”.

Se señaló que la autoridad policial encargada de la custodia en Ciudad Mujer San Martín ejerce actos constitutivos de violencia institucional, en presencia de enfermeras del Ministerio de Salud, específicamente las amenaza con restringirles el uso del servicio sanitario y ducha si no acatan sus disposiciones.

El 6 de este mes y año mediante de llamada telefónica se comunicó que a excepción de la persona en estado de embarazo, a las demás mujeres les proveen sus alimentos de forma extemporánea e insuficiente, entregándoles ese día de desayuno un pan francés y el almuerzo hasta las cuatro de la tarde. La insuficiente cantidad de alimentos también se denunció por medio de redes sociales.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

1. El derecho humano a la libertad personal y las restricciones impuestas por el decreto N° 12 del Ministerio de Salud

El artículo 5 de la Constitución de la República establece: “que toda persona tiene libertad de entrar, de permanecer en el territorio de la República y salir de este, salvo las limitaciones

que la ley establezca”. Esta modalidad de libertad a la que el legislador se refiere debe ser sin restricción, de movilización por todo el territorio nacional, y puede tener restricciones temporales, que en este caso es la emergencia por la pandemia COVID19, pero deben de ser debidamente reglamentadas para el otorgamiento de la imposición de límites. La Sala Constitucional en resolución del HC148-2020, estableció lo siguiente:

“5. Mediante una ley formal, publicada de manera real y efectiva (auto de trámite en inconstitucionalidad 146-2014, de 11 de agosto de 2017) las personas que por inobservar una cuarentena general (sin que se establezca de modo objetivo que puedan ser fuentes de contagio) sean afectadas en sus derechos de libertad física, como consecuencia de un internamiento forzoso con fines sanitarios, tienen que haber tenido la oportunidad de conocer de modo cierto los supuestos concretos, precisos y razonables en que podrían ser sometidos a dicho confinamiento. La aplicación inmediata de una “cuarentena no domiciliaria”, sin que haya existido tiempo suficiente para la divulgación de las medidas o sin que se hubieren determinado con precisión los criterios que guiarían su adopción o ejecución operativa (disminuyendo la discrecionalidad excesiva o el riesgo de arbitrariedad) puede ser incompatible con la Constitución.

6. Asimismo, los derechos en juego (dignidad humana, libertad, seguridad jurídica) exigen que los actos de aplicación de la cuarentena deben ser debidamente documentados, entre otras razones, para garantizar a los interesados el acceso a la información sobre la localización de la persona internada y las condiciones de su cuarentena. En relación con esto último, los “centros de contención de la pandemia” deben contar con el personal, los medios, equipo y recursos necesarios para garantizar a los afectados un trato digno, con acceso a alimentos, artículos de higiene, atención médica y otras condiciones básicas para evitar el riesgo de cualquier forma de trato cruel, inhumano o degradante.

El ingreso forzado de una persona a un régimen de cuarentena solo puede aplicarse u ordenarse cuando se disponga de modo efectivo de lugares adecuados para dicho régimen, sin que las bartolinas u otras dependencias policiales puedan emplearse en ningún caso y ni siquiera durante lapsos breves, para ese efecto, a menos que sus instalaciones fueran adaptadas para ello. Además, las personas remitidas o sometidas a cuarentena en dichos “centros de contención” no pueden ser presentadas ante los medios de comunicación sin su consentimiento, ni expuestas al riesgo de estigmatización social por la situación en que se encuentran.

En este sentido, respecto de la atención de las personas que se encuentran “retenidas”, deben cumplirse dos parámetros básicos, que las personas que fueran sometidas a la aplicación inmediata de una medida de internamiento, o cuarentena forzosa, debían tener el tiempo para conocer y los parámetros para poder circular y no ser sujetos de dicha medida. Además, en caso de ser sometidos de manera forzada a esta medida de una cuarentena, ésta debe cumplir con ciertas condiciones respecto a la alimentación, seguridad, espacio y separación, higiene y tratamientos médicos, de lo contrario se trataría de una especie de confinamiento forzoso más parecido a una detención. Cuando la medida de cuarentena es aplicada debe existir un seguimiento y una responsabilidad que debe ser asumida, por los organismos de seguridad sanitaria y seguridad pública que deben cumplir.

MEDIDAS CAUTELARES

Dentro de las atribuciones asignadas a esta Procuraduría, el ordinal décimo del artículo 194.I de la Constitución habilita a promover y proponer medidas que estime necesarias en orden a prevenir violaciones a los derechos humanos. Esta potestad es amplia y permite una gama de mucha diversidad de acciones que la Procuraduría puede adoptar. No obstante, la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en su artículo 36, concretiza aún más esta potestad, habilitando la emisión de las medidas cautelares.

De la formulación literal del artículo indicado se desprende que la función cautelar confiada a esta Procuraduría tiene, al menos, cuatro características. La primera de ellas

es que la función cautelar es *autónoma*, es decir no está circunscrita a un procedimiento de investigación específica, de manera que pueden ser adoptadas pre procesalmente. Se desprende ello de la expresión “al recibir la denuncia, [o] tener conocimiento de los hechos...”. Por supuesto que una vez que el proceso de investigación ha dado inicio, en cualquier etapa del mismo se pueden adoptar medidas cautelares, al amparo de la expresión “...o en cualquier estado del procedimiento...”.

Adicionalmente el modelo de medidas cautelares que asume la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos es completamente amplio, es decir basado en el esquema *numerus apertus*. De manera que como Procurador no estoy obligado a seguir un listado taxativo de medidas, sino que debo adoptar la que considere conveniente según las circunstancias.

Lo anterior da pie a una tercera característica que es su *necesidad o circunscripción teleológica*, de modo que una medida cautelar no se puede considerar como un fin en sí mismo, sino que está justificada y limitada a lograr necesariamente un propósito que está determinado por la ley: “evitar que se consuman daños irreparables a las personas”. En ese sentido, si bien se adscribe –como fue apuntado previamente– al modelo de *numerus apertus* la medida escogida debe tener el potencial de lograr el propósito señalado, y no exceder del mismo.

Destaca la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, también, que la medida cautelar debe ser eficaz, con eficacia, *i.e.*, con capacidad de lograr el efecto que persigue, y esto significa dos cosas, por una parte pertinencia, y por la otra potencial de transformación de la realidad. Este último elemento, dada la naturaleza de la Procuraduría en el sentido de no ser un órgano jurisdiccional, significa que si bien no puede imponer coactivamente el logro o cumplimiento de la finalidad propuesta, si puede supervisar su cumplimiento y utilizar o desplegar cualquiera de los mecanismos que la Ley le ofrece para propiciar el cumplimiento de su recomendación.

Por otra parte, de la naturaleza de una medida cautelar surge la exigencia de la concurrencia de dos condiciones. La primera, denominada peligro de daño inminente o *periculum in mora*; y la segunda, denominada apariencia jurídica de veracidad o *fumus boni iuris*.

En el presente caso la población del Centro de Contención son mujeres y de conformidad a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belén do Pará), el Estado tiene la obligación de prevenir todos los escenarios posibles de violencia contra ellas, inclusive la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Esa Convención define la violencia contra la mujer, en el artículo 1 como: “*cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado*”. Esta definición es ampliada en el artículo 2, el cual incluye como violencia contra la mujer, la violencia física, sexual y psicológica que ocurra cuando:

“...tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual;

b. ...tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar,

c. ...sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra”.

El artículo 5 del referido instrumento reconoce que “la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos”, refiriéndose a los consagrados en el artículo 4, los cuales, en relación con la integridad personal son:

a) el derecho a que se respete su vida;

b) el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral;

c) el derecho a la libertad y a la seguridad personales;

d) el derecho a no ser sometida a torturas;

e) el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia;

Instrumento que dio vida a la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, que señala en su artículo 10 como una de las modalidades de violencia la institucional, la cual es toda acción u omisión abusiva de cualquier servidor público, que discrimine o tenga como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y disfrute de los derechos y libertades fundamentales de las mujeres; así como, la que pretenda obstaculizar u obstaculice el acceso de las mujeres al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar las manifestaciones, tipos y modalidades de violencia conceptualizadas en esta ley.

Por otra parte, el artículo 17 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, se refiere a la protección de las personas por nacer, la que se ejercerá mediante la atención en salud y psicológica de la embarazada, desde el instante de la concepción hasta su nacimiento, la medida de retención bajo las condiciones denunciadas no garantiza el interés superior de la niñez ni la salud de la madre gestante.

En consecuencia y de conformidad con las atribuciones otorgadas en el artículo 194. I, ordinales 1º, 2º, 3º, 7º y 10º de la Constitución de la República y sobre la base de las facultades contenidas en los artículos 11, 27, 28, 36 y 45 de la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en mi calidad de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, pronuncio con carácter de urgente la siguiente medida cautelar, y recomiendo⁹⁹:

1. Al señor Ministro de Salud doctor Francisco José Alabí Montoya, que adopte las medidas necesarias para garantizar que se cumpla con una dieta alimenticia acorde en tiempo y cantidad para las veintitrés mujeres retenidas en las instalaciones de Ciudad Mujer San Martín, que funciona como un centro de contención, en especial para la que se encuentra en estado de embarazo.
2. Al referido Ministro de Salud que gire las instrucciones al personal para erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres, en especial en modalidad institucional en el referido centro de contención.
3. Al señor Director de la Policía Nacional Civil, comisionado Mauricio Arriaza Chicas, que inicie la investigación sobre los hechos denunciados y previo debido proceso, aplique las sanciones pertinentes, a fin de erradicar toda conducta que constituya violencia institucional dentro del referido centro de contención.

Además, que adopte las medidas que sean necesarias para asegurarse que el personal destacado en los diferentes centros de contención garantice de manera irrestricta el respeto del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Al mismo funcionario, considerando lo dispuesto en el Protocolo de Actuación Policial para la Intervención de Personas que Incumplan la Cuarentena Domiciliar, su Ingreso o Salida de los Centros de Contención, en Función del Cumplimiento al Decreto Ejecutivo número 14, en el Ramo de Salud, para la Prevención, Control y Atención de la Pandemia COVID-19, que realice acciones inmediatas para asegurarse que las mujeres en estado de gestación no sean llevadas a los centros de contención para evaluación y cumplimiento de cuarentena. En cuanto a las mujeres embarazadas que se encuentran en centros de contención, *coordine de inmediato con el Ministerio de Salud* para que cumpliendo con los protocolos

⁹⁹ Art. 36.- Al recibir la denuncia, tener conocimiento de los hechos o en cualquier estado del procedimiento, para evitar que se consumen daños irreparables a la persona, el Procurador podrá adoptar las medidas cautelares que estime necesarias y eficaces. La adopción de tales medidas no prejuzgará la materia de la resolución final.

sanitarios establecidos por dicha Cartera de Estado y los que cada caso requiera, sean inmediatamente conducidas a sus viviendas o lugares de residencia, para que cumplan ahí obligatoriamente con la cuarentena domiciliar.

4. A la señora Ministra de Desarrollo Local, María Ofelia Navarrete conocida como María Chichilco, disponga de medidas preventivas para garantizar el respeto de los derechos de las mujeres, en específico a una vida libre de violencia en las sedes de Ciudad Mujer que en la emergencia se han dispuesto como centros de contención.
5. Al señor Ministro de Seguridad Pública, ingeniero Rogelio Eduardo Rivas Polanco, y al Director de la Policía Nacional Civil, informen de los instrumentos en los cuales se determinaron los criterios para la ejecución operativa de la restricción del derecho fundamental a la libertad de tránsito, establecida en el Decreto Ejecutivo N° 12 en el Ramo de Salud; además, que se revisen los casos de las detenciones ocurridas a partir del día 21 de marzo, y determinen de forma clara si en estos casos las personas incumplieron con los parámetros establecidos de la cuarentena domiciliar.
6. Supervisar el cumplimiento de la presente medida cautelar, para lo cual se solicita al señor Ministro de Salud doctor Francisco José Alabí Montoya, al señor Ministro de Seguridad Pública, ingeniero Rogelio Eduardo Rivas Polanco, al señor Director de la Policía Nacional Civil, comisionado Mauricio Arriaza Chicas, y a la señora Ministra de Desarrollo Local, María Ofelia Navarrete conocida como María Chichilco que rindan informe sobre el cumplimiento a la presente medida cautelar en el plazo de setenta y dos horas posteriores a la notificación de la misma, en la que de manera detallada expongan las acciones realizadas para darle cumplimiento.

c. PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, San Salvador, a las ocho horas del cuatro de mayo del dos mil veinte.

HECHOS

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, ha mantenido a nivel nacional la supervisión permanente de la actuación de las instituciones a fin de prevenir la vulneración de derechos fundamentales de la población en general, particularmente por el contexto de la emergencia producto del COVID-19, de las personas que fueron enviadas a los Centros de Contención del Coronavirus -CCC-, a partir del día 21 de marzo del año en curso se aplicó una medida de “retención” de las personas que habrían incumplido la cuarentena domiciliar decretada, y por ello serían sometidas a una cuarentena forzosa en centros especiales.

En los Centros de los cuales se han monitoreado diversas situaciones por medio de noticias periodísticas y denuncias de personas albergadas en los mismos, se encuentra el Centro de Contención Gamaliel, del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, ubicado en la colonia Escalón, en San Salvador.

Mediante nota publicada el veinticuatro de los corrientes, en la página digital de “La Prensa Gráfica”¹⁰⁰, se tuvo conocimiento de los hechos siguientes:

Que personas albergadas en el centro de contención antes referido, ubicado en la colonia Escalón, en San Salvador, se encuentran hacinadas en un mismo espacio, sin guardar distancias, muchos de ellos sin mascarillas y algunas personas con enfermedades, no habían recibido la atención médica pertinente.

Se agrega en la nota, que los albergados exigen la práctica de la prueba del COVID-19, pero en respuesta son amenazados por los policías que custodias el lugar; se señala, que la petición la han realizado debido a que ya cumplieron treinta días de cuarentena obligatoria y aun no se les informa cuando retornarán a sus viviendas, ni sobre el estado de su salud.

¹⁰⁰ <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Albergados-en-edificio-Gamaliel-denuncian-malas-condiciones-amenazas-de-policias-y-exigen-pruebas-de-covid-19-20200424-0034.html>

Se expresa en la nota periodística, que se consultó a los encargados del centro de contención sobre los hechos denunciados, pero se negaron a dar información, agregando que se estaba tramitando el Habeas Corpus 257-2020, a favor de cuatro personas albergadas en el lugar.

De igual forma se tuvo conocimiento por persona que decidió a acogerse al derecho a mantener en reserva la confidencialidad de su identidad, que las cuatro personas antes referidas, Omar Alexander Figueroa Rivas, Guillermo Arnulfo Cruz Cárcamo, Edwin Enrique Rivas Velásquez, Bairon Eleazar Rivas Velásquez y Jorge Alberto Enríquez Campos, fueron detenidas el once de abril del presente año, por agentes policiales, cuando se encontraban en el patio del condominio donde residen, y fueron remitidos al parqueo Gamaliel del Tabernáculo Bautista Amigos de Israel, sin presentar síntomas de COVID-19, se les informó que solamente estarían ahí por espacio de quince días, pero permanecen en el lugar: no obstante les han realizado las pruebas de COVID-19, en cuatro de ellos los resultados fueron negativos, no así en uno de los casos, por lo que, desconocen cuánto tiempo más permanecerán en el centro de contención.

En este caso se interpuso Habeas Corpus, 257-2020, el diecisiete de abril del presente año, la Sala de lo Constitucional ordenó que se verificara las condiciones de la aprehensión, así como el estado de salud de las personas mencionadas, si se había practicado la prueba para descartar la sospecha de COVID-19, ordenando como Medida Cautelar, que fueran inmediatamente conducidos a su respectivo lugar de residencia para que cumpliera obligatoriamente con la cuarentena domiciliar decretada, previa realización de las pruebas de COVID-19, de conformidad a los protocolos establecidos y con la prioridad debida.

Por otra parte, mediante nota publicada el uno de mayo de este año, en el periódico digital “El Faro.net”¹⁰¹, se tuvo conocimiento de los hechos siguientes:

Que en el centro de contención instalado en el Edificio Gamaliel del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, de la colonia Escalón, San Salvador, personas albergadas en el mismo, manifestaron que un grupo de hombres, se emborrachan mezclando con jugo el alcohol sanitizante que les proporcionan. Señalaron, que la noche del treinta de abril, golpearon a un señor que se emborrachaba con ellos, tan fuerte que este se defecó y salió sangrando de una mano, agregando que la Policía, no intervino, por lo que temen por su seguridad.

Agrega la nota, que personas que fueron entrevistadas manifestaron que, en el lugar se encuentran doscientas treinta personas, todas remitidas por violar la cuarentena y presuntamente treinta de ellas, afirman ser pandilleros y se dedican a atemorizar a los demás si no cumplen sus reglas, les impiden hablar con los policías y a un señor lo golpearon por pedir que le bajaran volumen a la música en altas horas de la noche.

Según la nota periodística, dichos sujetos fuman drogas que uno de ellos llevó; y que en la madrugada del uno de mayo, en medio del desorden, un hombre se robó dos teléfonos y escapó por una de las ventanas, de acuerdo a las fuentes. Fue capturado a unas cuerdas por policías y devuelto al centro, pero no lo pudieron integrar con el resto porque los pandilleros amenazaron con asesinarlo. Expresaron, además, que los policías no escucharon el escándalo y los gritos de las personas golpeadas, ellos se mantienen a seis metros de la entrada principal y solo entran en algunas ocasiones.

Se describió en la nota periodística, que la tarde del uno de mayo, voceros de la Policía y del Ministerio de Salud, no brindaron mayor información; el vocero de Salud dijo que había intentado contactar al Ministro de dicha cartera de Estado, pero que no le fue posible; sin embargo, mencionó que ya se había advertido que se están ajustando fallas de logística en los centros de contención, que nunca se ha escondido que ocurren algunos problemas en los centros.

Finalmente se estableció que, a eso de las ocho de la noche del uno de mayo, se consultó como seguía la situación en el centro de contención y el informante expresó que los pandilleros continuaban tomando su bebida.

¹⁰¹https://elfaro.net/es/202005/el_salvador/24370/Golpizas-y-borracheras-en-el-centro-de-contenci%C3%B3n-del-Tabern%C3%A1culo.htm

GESTIONES INSTITUCIONALES

- 1) El veinticinco de abril del presente año, por medio de oficio PADMSC/0042/2020, dirigido al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, se recomendó: se procediera a realizar las pruebas de COVID-19 a las personas, albergadas en el centro Gamaliel, a quienes no se les habían efectuado, proporcionar de manera escrita el resultado de las pruebas de COVID-19 a quienes ya se les haya realizado la misma, garantizar el derecho a la información de las personas y sobre la base de fundamentos médicos sanitarios, en caso que no exista impedimento para permanecer en el centro de contención, informar y garantizar la aplicación del protocolo de salida de estas personas, para no seguir afectando su derecho a la libertad personal.
- 2) El dos de mayo del presente año, por medio de comunicación oficial PADMSC/0045/2020 se solicitó informe sobre los hechos a la Dirección de la Regional de Salud Metropolitana del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, además se solicitó Informar sobre las gestiones realizadas para proporcionar asistencia médica a las personas que habían resultado lesionadas con los incidentes referidos; acciones adoptadas para evitar que se elaboraran bebidas alcohólicas con los insumos entregados a las personas resguardadas en el lugar y acciones para prevenir el supuesto consumo de drogas.
Además, se solicitó informe sobre los motivos por los que las personas continúan retenidas después de haber cumplido con el tiempo estipulado y las razones por los que no se les ha informado el resultado de las pruebas practicadas.
Y sobre las coordinaciones realizadas con la Policía Nacional Civil para la protección y seguridad de las personas en el centro de contención, y para iniciar la investigación pertinente, para que puedan deducir responsabilidades y aplicar las medidas que sean necesarias, respetando el debido proceso.
- 3) El dos de mayo del presente año, se solicitó informe a la Subdirección de la Policía Nacional Civil por medio de oficio PADMSC/046/2020, sobre motivos por los cuales los agentes policiales no intervinieron en los actos violentos y de desorden originados hasta altas horas de la noche en el centro de contención señalado y se recomendó iniciar la investigación pertinente, deducir responsabilidades y aplicar las medidas que sean necesarias, respetando el debido proceso.

CONSIDERACIONES

- 1) En el centro de contención referido, se encuentran personas que presuntamente violentaron la cuarentena domiciliar, establecida por el Órgano Ejecutivo, lo que conllevó a que se concentraran personas de diversos lugares de San Salvador, las denuncias realizadas ante medios de comunicación y algunas denuncias realizadas ante la Procuraduría, reflejan que las condiciones del centro no son adecuadas para prevenir afectaciones al derecho a la salud, debido a que algunas personas enfermas no han recibido atención médica y exigen que se les hagan pruebas de COVID-19, porque no cuentan con las medidas ideales para evitar contagios de la enfermedad.
- 2) Además, varias personas albergadas, cuentan con resoluciones de medidas cautelares de la Sala de lo Constitucional, las cuales son de obligatorio cumplimiento e implica que se verificara las condiciones de la aprehensión, así como el estado de salud, si se había practicado la prueba para descartar la sospecha de COVID-19, ordenando como Medida Cautelar, que fueran inmediatamente conducidos a su respectivo lugar de residencia para que cumplieran obligatoriamente con la cuarentena domiciliar decretada, previa realización de las pruebas de COVID-19, de conformidad a los protocolos establecidos y con la prioridad debida.
- 3) Las condiciones del centro de contención, Gamaliel tampoco garantizan condiciones de seguridad para las personas ahí reclusas, los hechos antes descritos son graves y atentan contra la seguridad interna del centro, por lo que es necesario que

se adopten medidas urgentes y estratégicas para evitar la violencia y prevenir afectaciones a la integridad personal o a la vida de las personas detenidas, las reglas del centro deben ser respetadas por las mismas, además que se les defina su situación con respecto a su proceso médico y se les garantice su derecho a la información.

- 4) Es responsabilidad del Estado y las instituciones que velan por el resguardo de las personas en CCC, prevenir afectaciones a la seguridad e integridad, mucho más si se trata de grupos delincuenciales dentro de las instalaciones y en caso que ocurran hechos delictivos, aplicar o derivar los casos a las instancias competentes, tales como la Policía Nacional Civil o la Fiscalía General de la República para su respectiva investigación penal. De lo contrario, la omisión de acciones oportunas y urgentes les hará incurrir a las personas administradoras de dicho centro y las encargadas de la seguridad del mismo, en las responsabilidades y sanciones correspondientes.

MEDIDAS CAUTELARES

Dentro de las atribuciones asignadas a esta Procuraduría, el ordinal décimo del artículo 194 romano I de la Constitución de la República habilita a promover y proponer medidas que estime necesarias en orden a prevenir violaciones a los derechos humanos. Esta potestad es amplia y permite una gama de mucha diversidad de acciones que se pueden adoptar, no obstante, la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en su artículo 36, concretiza aún más esta potestad, habilitando la emisión de las medidas cautelares.

De la formulación literal del artículo indicado se desprende que la función cautelar confiada a esta Procuraduría tiene, al menos, cuatro características. La primera de ellas es que la función cautelar es *autónoma*; es decir, no está circunscrita a un procedimiento de investigación específica, de manera que pueden ser adoptadas pre procesalmente. Se desprende ello de la expresión “al recibir la denuncia, [o] tener conocimiento de los hechos...”. Por supuesto que una vez que el proceso de investigación ha dado inicio, en cualquier etapa del mismo se pueden adoptar medidas cautelares, al amparo de la expresión “...o en cualquier estado del procedimiento...”.

Adicionalmente el modelo de medidas cautelares que asume la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos es completamente amplio, es decir basado en el esquema *numerus apertus*, de manera que como Procurador no estoy obligado a seguir un listado taxativo de medidas, sino que debo adoptar la que considere conveniente según las circunstancias.

Lo anterior da pie a una tercera característica que es su *necesidad o circunscripción teleológica*, de modo que una medida cautelar no se puede considerar como un fin en sí mismo, sino que está justificada y limitada a lograr necesariamente un propósito que está determinado por la ley: “evitar que se consuman daños irreparables a las personas”, en ese sentido, si bien se adscribe –como fue apuntado previamente– al modelo de *numerus apertus* la medida escogida debe tener el potencial de lograr el propósito señalado, y no exceder del mismo.

Destaca la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, también, que la medida cautelar debe ser eficaz, con capacidad de lograr el efecto que persigue, y esto significa dos cosas, por una parte pertinencia, y por la otra potencial de transformación de la realidad. Este último elemento, dada la naturaleza de la Procuraduría en el sentido de no ser un órgano jurisdiccional, significa que si bien no puede imponer coactivamente el logro o cumplimiento de la finalidad propuesta, sí puede supervisar su cumplimiento y utilizar o desplegar cualquiera de los mecanismo que la Ley le ofrece para propiciar el cumplimiento de su recomendación.

Por otra parte, de la naturaleza de una medida cautelar surge la exigencia de la concurrencia de dos condiciones. La primera, denominada peligro de daño inminente o *periculum in mora*; y la segunda, denominada apariencia jurídica de veracidad o *fumus boni iuris*.

En el presente caso, tal y como se expuso en los hechos objeto de la presente resolución, las personas persona retenidas en el centro de contención Gamaliel del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, han manifestado elementos comunes, como la falta de condiciones adecuadas, la falta de atención médica, que no se les realizan pruebas médicas a fin de determinar si son portadoras del mencionado virus, o no han tenido acceso a los resultados, en tanto que si las condiciones son inadecuadas, y no cuenta con una adecuada separación, limpieza, etc. y los protocolos médicos, estas condiciones podrían favorecer los contagios en lugar de prevenirlos.

Mayormente grave es la situación de violencia suscitada en dicho centro que atentó contra la seguridad e integridad de personas, al grado de ser lesionadas y que al permanecer en el lugar corren el riesgo de seguir sufriendo atentados, desconociendo las acciones realizadas por las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y de la Policía Nacional Civil, para facilitar asistencia médica ante la lesión y prevenir más afectaciones, además de realizar las investigaciones correspondientes, para posteriormente deducir responsabilidades.

Finalmente, considero necesario recordar a las autoridades competentes, que a fin de garantizarles sus derechos fundamentales a las personas retenidas, se les debe proporcionar la información referente a su situación médica de forma oportuna.

En vista de lo anterior, es procedente emitir una medida cautelar, la cual debe estar dirigida a realizar todas las gestiones que sean necesarias para garantizar un trato digno a las personas en cuarentena, garantizar las condiciones de seguridad, a suministrar los insumos médicos necesarios, brindando la información sobre su situación jurídica de las personas y a sus familiares.

En consecuencia y de conformidad con las atribuciones otorgadas en el artículo 194 romano I ordinales 1º, 2º, 3º, 7º y 10º de la Constitución de la República y sobre la base de las facultades contenidas en los artículos 11, 27, 28, 36 y 45 de la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en mi calidad de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, RESUELVO EMITIR LA SIGUIENTE MEDIDA CAUTELAR¹⁰²:

1. Al señor Ministro de Salud doctor Francisco José Alabí Montoya, que adopte las medidas necesarias para garantizar las condiciones adecuadas, a las personas albergadas en el centro de contención Gamaliel, Tabernáculo, Bíblico Bautista Amigos de Israel, que funciona como un centro de contención, suministrando los insumos necesarios, separaciones adecuadas y que la atención médica, sea suficiente para evitar que se pudiera propagar el virus COVID-19 entre las personas en cuarentena. Asimismo, reitero se realice de forma urgente las pruebas COVID-19 a las personas a las cuales no se les ha realizado, se emitan los resultados a las que si se les ha practicado e informar prioritariamente de las mismas a las personas albergadas y familiares.
2. A la misma autoridad de forma urgente adopte las medidas necesarias para prevenir que las personas albergadas en el centro tengan acceso a insumos que puedan atentar contra su salud y su vida y facilitar y coordinar con la Policía Nacional Civil, la investigación de los hechos delictivos descritos.
3. Al señor Director de la Policía Nacional Civil, Comisionado Mauricio Arriaza Chicas, que se garanticen las condiciones de seguridad de forma urgente y prioritaria, al interior de las instalaciones del centro de contención señalado en la presente resolución y adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la vida y la integridad de las personas que han resultado afectadas por hechos delictivos. Además de efectuar una investigación eficaz sobre los hechos, para prevenir más afectaciones.
4. 3.- A efecto de supervisar el cumplimiento de la presente medida cautelar, para lo cual se solicita al señor Ministro de Salud, doctor Francisco José Alabí Montoya, al señor

¹⁰²Art. 36.- Al recibir la denuncia, tener conocimiento de los hechos o en cualquier estado del procedimiento, para evitar que se consumen daños irreparables a la persona, el Procurador podrá adoptar las medidas cautelares que estime necesarias y eficaces. La adopción de tales medidas no prejuzgará la materia de la resolución final.

Ministro de Justicia y Seguridad Pública, ingeniero Rogelio Eduardo Rivas Polanco, y al señor Director de la Policía Nacional Civil, comisionado Mauricio Arriaza Chicas, que en el plazo de setenta y dos horas posteriores a la notificación de la presente resolución rindan un informe detallando las acciones realizadas para darle cumplimiento, a lo antes solicitado.

4. Medida cautelar en relación a la Consulta Pública sobre el proyecto “Pequeña Central Hidroeléctrica Nuevo Nahuizalco II” sobre el Río Sensunapán.

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, San Salvador, a las doce horas del día uno de julio del año dos mil veinte.

HECHOS:

Mediante denuncia interpuesta ante esta procuraduría el día veintiséis de junio del presente año, por la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD)¹⁰³ junto con líderes y lideresas de las comunidades indígenas en la zona¹⁰⁴, esta Procuraduría tuvo conocimiento de los hechos siguientes:

Que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales dio trámite al proceso de “Consulta Pública”, sobre el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la Empresa Sensunapán S.A de C.V, para la ejecución del Proyecto denominado “Pequeña Central Hidroeléctrica Nuevo Nahuizalco II”, que consiste en la construcción de una represa para la generación de energía eléctrica, en el cauce del Río Sensunapán, entre los municipios de Nahuizalco, Sonzacate y Sonsonate, todos del departamento de Sonsonate, la cual dio inicio el 19 de junio y finaliza el 02 de julio del presente año; destaca que para “medios de consulta y observaciones presencial” ofrece la Unidad de Cultura y Educación Ambiental de las Alcaldías Municipales de Sonsonate, Nahuizalco y Sonzacate, en el departamento de Sonsonate.

De acuerdo a lo expresado por líderes y lideresas de las comunidades indígenas, el citado proyecto fue consultado en el año 2012 y rechazado por las comunidades, por considerarlo una grave amenaza grave a la cuenca del Río Sensunapán, a su ecosistema y a los pueblos indígenas de la zona, partiendo de la existencia de siete represas en el mismo y la grave crisis hídrica que atraviesa el país. Adicionalmente, tanto las comunidades indígenas y FESPAD señalan que en el tramo determinado en el proyecto existen once sitios sagrados tanto naturales como contruidos, entre los cuales se pueden citar: El Chital Ponisca, Mactali AT, El Pepeto, Siete Cerritos, Cementerio-Fosa Común y Casco de Hacienda Mirazalco, Poza Los Tadeos, Paso Ondo, El Jabío, Cacerío Las Carias y Los Tozos, cuya importancia radica en las prácticas culturales, medios de vida, la conservación de la memoria histórica y su armonía con el territorio; es decir, favorecen a la pesca artesanal, cultivo de alimentos y de tule para la actividad artesanal que realizan mujeres indígenas, abastecimiento de agua a un aproximado 16 mil habitantes en las comunidades y el lugar donde yacen enterrados abuelos víctimas de la masacre de 1932.

Advierten además que el proyecto puede provocar la disminución del cauce y contaminación de las aguas del Río Sensunapán, amenaza con el desplazamiento forzado del territorio ancestral a las familias indígenas, e influiría en el cambio del uso del suelo provocando mayor vulnerabilidad, impactando gravemente la calidad de vida, cultura y medios de vida de los pueblos indígenas.

II- CONSIDERACIONES:

Respecto a los derechos humanos afectados y las obligaciones del Estado salvadoreño en proyectos de explotación de recursos naturales.

¹⁰³ Denuncia escrita por representantes de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), fecha 26 de junio de 2020.

¹⁰⁴ Nota periodística ARPAS, 25 de junio de 2020.

Los hechos expuestos afectan los derechos humanos de los pueblos indígenas, tales como su auto determinación, consentimiento libre e informado, prácticas tradicionales en lugares arqueológicos y sitios sagrados, a mantener y fortalecer la relación espiritual de las tierras y territorios, acceso al agua; a no ser objeto de actos que afecten la posesión de sus tierras o recursos, y consecuente un nivel de vida digno, derechos reconocidos en el artículos 63 inciso 2° de la Constitución de la República; 1 del Pacto del Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.2 literal b), 9, 10, 11 y 25 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas; 25 de la Ley de Medio Ambiente; Principios 10 y 22 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo; 11. 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Es necesario señalar que es obligación del Estado garantizar el libre ejercicio de los derechos, lo que supone respetar, garantizar y cumplir los derechos humanos, adoptando medidas necesarias para su efectividad.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su jurisprudencia, ha sostenido las dos obligaciones de los Estados, que se desprenden del artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: el deber de respeto y el deber de garantía.

El deber de garantía de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece lo siguiente: *“La segunda obligación de los Estados Partes es la de garantizar¹⁰⁵ el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la convención a toda persona sujeta a su jurisdicción. Esta obligación implica el deber de los Estados partes de organizar todo el aparato gubernamental, y en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifestó ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos (...) La obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos no se agota con la existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta obligación, sino que comporta la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia, en la realidad, de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos”¹⁰⁶.*

En este orden, el presente caso, obliga principalmente al Estado a abstenerse de otorgar permisos ambientales o facilitar trámites para la obtención de los mismos, sin considerarse las condiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos reconocidos a las personas en condiciones de vulnerabilidad como las habitantes de pueblos indígenas.

Sobre el derecho a la Consulta Pública. Libre e informada.

La Ley de Medio Ambiente, en su artículo 25 establece el mecanismo a seguir para la realización de una consulta pública, y en sus literales “b” y “c” regula que para aquellos estudios de impacto ambiental cuyos resultados reflejen la posibilidad de afectar la calidad de vida de la población o de amenazar riesgos para la salud y bienestar humanos y el medio ambiente, se organizara por el ministerio una consulta pública del estudio en el o los municipios donde se piense llevar a cabo la actividad, obra o proyecto y en todos los casos de consultas sobre el Estudio de Impacto Ambiental, las opiniones emitidas por el público deberán ser ponderadas por el ministerio.

En la práctica, la consulta pública basada en la citada disposición supone la exposición oral del proyecto y sus implicaciones a través de expertos y dirigidas a las personas de las comunidades afectadas, en sus municipios de origen o lugar de influencia del proyecto, y NO la opinión a través de medios electrónicos, dado que en alguna medida, las personas o comunidades cuentan con la posibilidad de requerir mayor información para aclarar sus dudas o preocupaciones; estos espacios precisan la concentración de la población interesada, su participación efectiva desde la información clara, consistente, accesible y transparente, y con la suficiente anticipación al inicio de un proyecto u otorgamiento de su autorización, para que las opiniones de las personas que habitan las comunidades interesadas puedan ser justamente ponderadas.

¹⁰⁵ Artículo 2. Convención Americana sobre Derechos Humanos, “Pacto de San José”.

¹⁰⁶ CIDH, Caso de Responsabilidad Internacional del Estado Hondureño por la detención y posterior desaparición de Ángel Manfredo Velázquez Rodríguez, 166 y 167, de fecha 17 de agosto de 1990.

La importancia de la consulta pública radica en la prevención de daños irreparables en la calidad de vida, salud y medio ambiente; y el derecho a la participación en la decisión de asuntos de interés social y ambiental¹⁰⁷.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe sobre “Pueblos Indígenas, Comunidades Afrodescendientes y recursos naturales: protección de derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo” señala que: “89. (...) *el enfoque ambiental tradicional no es suficiente, sino que los impactos de determinado proyecto deben ser evaluados también desde la perspectiva de los derechos humanos que pueden ser afectados, lesionados o de algún modo restringidos. Dicho de otro modo, la preocupación central de la CIDH es la inclusión de criterios y procedimientos que permitan asegurar un análisis del impacto en los derechos humanos involucrados dentro del proceso de toma de decisiones. En los casos en que tales actividades puedan afectar pueblos o comunidades indígenas, tribales y afrodescendientes se encuentra el deber especial, ya desarrollado por los órganos del sistema interamericano, de llevar a cabo estudios previos de impacto social y ambiental, con participación de estos pueblos o comunidades.*”

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el Contexto de la pandemia, y suponiendo medidas de restricción de tránsito adoptada por los distintos países a nivel mundial, para el cumplimiento de la recomendación del distanciamiento físico, como método hasta hoy eficaz en la prevención y contención del contagio por COVID-19, planteó el riesgo en la afectación de derechos de las personas en condiciones de vulnerabilidad durante la pandemia; consecuentemente recomendó a los Estados en su resolución 1/2020 lo siguiente: “57. *Abstenerse de promover iniciativas legislativas y/o avances en la implementación de proyectos productivos y/o extractivos en los territorios de los pueblos indígenas durante el tiempo en que dure la pandemia, en virtud de la imposibilidad de llevar adelante los procesos de consulta previa, libre e informada (debido a la recomendación de la OMS de adoptar medidas de distanciamiento social) dispuestos en el Convenio 169 de la OIT y otros instrumentos internacionales y nacionales relevantes en la materia*”¹⁰⁸.

En este sentido, es inaceptable que el Ministerio de Medio Ambiente continúe con el trámite de realización de una “consulta pública” en medio de la pandemia generada por el virus COVID-19 la cual exige resguardarse en casa, no hacer aglomeraciones y mantener el distanciamiento social para prevenir el contagio del mismo. Además, el transporte colectivo está suspendido, lo que evidentemente es una limitante para que los habitantes de las comunidades arriba mencionadas puedan concurrir a esa supuesta consulta que se desarrolla en las alcaldías municipales.

De igual forma, no se advierte la existencia de razones de urgencia para llevar a cabo la supuesta consulta, máxime cuando el país se encuentra en una lucha en la prevención de la pandemia del COVID-19, misma que actualmente desarrolla su fase tres.

Es poco transparente que el Ministerio de Medio Ambiente esté llevando a cabo la referida “consulta pública” de manera virtual, ya que no solo omite los estándares internacionales sobre el consentimiento previo e informado, sino que afecta gravemente nuestro ya deteriorado entorno ambiental.

La explotación de uno de los ya saturados recursos naturales como lo es el Río Sensunapán, conlleva la destrucción de la fauna y flora, violación al derecho al agua y saneamiento, así también vulnera gravemente los derechos de los pueblos indígenas, en un contexto en el que la mayor preocupación del Estado debe centrarse en la protección y realización de los derechos humanos de la población, en prevenir afectaciones a éstos durante la pandemia a través de la supervisión en la debida diligencia de las empresas o entidades particulares; y no en la aceleración de trámites de permisos poco urgentes durante esta coyuntura, dejando en grave riesgo la progresividad del deterioro ambiental, la conservación y protección de los sitios sagrados de gran valor cultural.

¹⁰⁷ Artículo 25 Ley de Medio Ambiente.

¹⁰⁸ Resolución No. 1/2020 CIDH “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”, de 10 de abril de 2020.

Con la finalidad de prevenir daños irreparables a la calidad de vida de las personas habitantes de pueblos indígenas, a la determinación de su territorio, al acceso a prácticas culturales, protección y conservación del medio ambiente, y a una consulta pública previa e informada de las comunidades indígenas que habitan las cercanías del Río Sensunapán, dentro de su trayectoria en los municipios de Nahuizalco, Sonsonate y Sonzacate en el departamento de Sonsonate, es necesario que el Ministerio de Medio Ambiente lleve adelante una consulta pública en la que se garantice plenamente la participación real de la población a efecto que pueda exponer sus dudas, expectativas, preocupaciones o satisfacciones, lo cual no se puede hacer de manera virtual, pues pretenderlo así es desconocer la realidad en que viven los pueblos indígenas de la zona -por la falta de acceso a internet y tecnología adecuada- y negar que haya una decisión libre e informada.

MEDIDAS CAUTELARES

Dentro de las atribuciones asignadas a esta Procuraduría, el ordinal décimo del artículo 194 romano I de la Constitución de la República habilita a promover y proponer medidas que estime necesarias en orden a prevenir violaciones a los derechos humanos. Esta potestad es amplia y permite una gama de mucha diversidad de acciones que se pueden adoptar, no obstante, la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en su artículo 36, concretiza aún más esta potestad, habilitando la emisión de las medidas cautelares.

De la formulación literal del artículo indicado se desprende que la función cautelar confiada a esta Procuraduría tiene, al menos, cuatro características. La primera de ellas es que la función cautelar es *autónoma*; es decir, no está circunscrita a un procedimiento de investigación específica, de manera que pueden ser adoptadas pre procesalmente. Se desprende ello de la expresión “al recibir la denuncia, [o] tener conocimiento de los hechos...”, por supuesto que una vez el proceso de investigación ha dado inicio, en cualquier etapa del mismo se pueden adoptar medidas cautelares, al amparo de la expresión “...o en cualquier estado del procedimiento...”.

Adicionalmente el modelo de medidas cautelares que asume la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos es completamente amplio, es decir basado en el esquema *numerus apertus*, de manera que como Procurador no estoy obligado a seguir un listado taxativo de medidas, sino que debo adoptar la que considere conveniente según las circunstancias.

Lo anterior da pie a una tercera característica que es su *necesidad o circunscripción teleológica*, de modo que una medida cautelar no se puede considerar como un fin en sí mismo, sino que está justificada y limitada a lograr necesariamente un propósito que está determinado por la ley: “evitar que se consuman daños irreparables a las personas”, en ese sentido, si bien se adscribe -como fue apuntado previamente- al modelo de *numerus apertus* la medida escogida debe tener el potencial de lograr el propósito señalado, y no exceder del mismo.

Destaca la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, también, que la medida cautelar debe ser eficaz, con capacidad de lograr el efecto que persigue, y esto significa dos cosas, por una parte pertinencia, y por la otra potencial de transformación de la realidad. Este último elemento, dada la naturaleza de la Procuraduría en el sentido de no ser un órgano jurisdiccional, significa que si bien no puede imponer coactivamente el logro o cumplimiento de la finalidad propuesta, sí puede supervisar su cumplimiento y utilizar o desplegar cualquiera de los mecanismos que la Ley le ofrece para propiciar el cumplimiento de su recomendación.

Por otra parte, de la naturaleza de una medida cautelar surge la exigencia de la concurrencia de dos condiciones. La primera, denominada peligro de daño inminente o *periculum in mora*; y la segunda, denominada apariencia jurídica de veracidad o *fumus boni iuris*.

En el presente caso, a través de la denuncia recibida se ha tenido conocimiento que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene en trámite al proceso de “Consulta Pública”, sobre el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la Empresa Sensunapán S.A

de C.V, para la ejecución del Proyecto denominado “Pequeña Central Hidroeléctrica Nuevo Nahuizalco II” para autorizar la construcción de una represa para la generación de energía eléctrica, en el cauce del Río Sensunapán, entre los municipios de Nahuizalco, Sonzacate y Sonsonate, todos del departamento de Sonsonate, la cual dio inicio el 19 de junio y finaliza el 02 de julio del presente año.

Lo anterior, denota que luego del día 2 de julio de este año -mañana-, el citado ministerio podrá emitir una resolución autorizando la obra referida, sustentada en que formalmente llevó a cabo una consulta popular pero realmente no es así, pues las condiciones que actualmente se viven en el país hacen concluir la genuina imposibilidad que presentan los habitantes de los municipios de Nahuizalco, Sonzacate y Sonsonate, todos del departamento de Sonsonate para presentarse a tal consulta; y además la mayoría de los pueblos indígenas de esas zonas no cuentan con acceso a medios tecnológicos que les permita participar de manera plena en tal consulta de manera virtual, por tanto se justifica el daño inminente que se generaría al autorizar la realización de tal obra, pues como ya se ha dicho ello conllevaría la afectación de derechos humanos de los pueblos indígenas, tales como su auto determinación, consentimiento libre e informado, prácticas tradicionales en lugares arqueológicos y sitios sagrados, a mantener y fortalecer la relación espiritual de las tierras y territorios, acceso al agua; a no ser objeto de actos que afecten la posesión de sus tierras o recursos, y consecuente un nivel de vida digno.

De igual forma se ha conocido que el citado proyecto fue consultado en el año 2012 y rechazado por las comunidades, por considerarlo una grave amenaza a la cuenca del Río Sensunapán, a su ecosistema y a los pueblos indígenas de la zona, pues el mismo, ya posee siete represas y además se cuenta con grave crisis hídrica que en el país.

Adicionalmente, en el tramo determinado en el proyecto existen once sitios sagrados tanto naturales como construidos, entre los cuales se pueden citar: El Chital Ponisca, Mactali AT, El Pepeto, Siete Cerritos, Cementerio-Fosa Común y Casco de Hacienda Mirazalco, Poza Los Tadeos, Paso Ondo, El Jabío, Cacerío Las Carias y Los Tozos, cuya importancia radica en las prácticas culturales, medios de vida, la conservación de la memoria histórica y su armonía con el territorio; es decir, favorecen la pesca artesanal, cultivo de alimentos y de tule para la actividad artesanal que realizan mujeres indígenas, abastecimiento de agua a un aproximado 16 mil habitantes en las comunidades y el lugar donde yacen enterrados abuelos víctimas de la masacre de 1932, lo que hace concluir que se cumple también el requisito de apariencia jurídica de veracidad en favor los pueblos indígenas que habitan las zonas donde se pretende construir la obra referida por la afectación a los derechos humanos ut supra relacionados.

En vista de lo anterior, es procedente emitir una medida cautelar, la cual debe estar dirigida a realizar todas las gestiones que sean necesarias para dar efectivo cumplimiento a una consulta pública en que los pueblos indígenas de la zona donde se pretende construir la obra se puedan pronunciar ante las autoridades del ministerio de medio ambiente para tomar una decisión libre e informada en relación a la obra denominada “Pequeña Central Hidroeléctrica Nuevo Nahuizalco II”.

Con base a lo anterior, en el ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales contempladas en el artículo 194 romano I ordinales 1°, 2°, 7° 10°, y 11° de la Constitución de la República; y 11, 27, 28, 36, y 45 de la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el suscrito Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, ante el proceso de consulta pública del Estudio de Impacto Ambiental realizado por el Ministerio de Medio Ambiente, con el objetivo de conceder el permiso para la construcción del Proyecto de “Pequeña Central Hidroeléctrica Nuevo Nahuizalco II”; DICTO las MEDIDAS CAUTELARES siguientes:

Al señor ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, arquitecto Fernando López Larreynaga, le exhorto:

1. Que de inmediato suspenda la Consulta Pública que se está realizando en los municipios de Nahuizalco, Sonzacate y Sonsonate, todos del departamento de Sonsonate sobre el proyecto denominado “Pequeña Central Hidroeléctrica Nuevo Nahuizalco II” que se

construiría sobre el Río Sensunapán, en razón de que las comunidades formadas por pueblos indígenas interesadas, se muestran limitadas para acceder a la misma, debido a las medidas implementadas por el gobierno de El Salvador para prevenir el contagio a COVID-19, tales como el distanciamiento físico, la no realización de aglomeraciones y resguardarse en casa, pues además el transporte colectivo está suspendido por decreto ejecutivo; siendo imposible que de manera virtual la referida población pueda expresar sus opiniones sobre la referida obra, ya que en muchos casos no se cuenta con acceso a tecnología suficiente para participar de foros virtuales que les permita -a ellos- tomar una decisión libre y previamente informada.

2. Que de inmediato suspenda la tramitación del proceso de autorización para la construcción de la obra “Pequeña Central Hidroeléctrica Nuevo Nahuizalco II” sobre el Río Sensunapán entre los municipios de Nahuizalco, Sonzacate y Sonsonate, todos del departamento de Sonsonate; y que se reactive con la realización de una real consulta pública presencial, una vez El Salvador haya superado la pandemia generada por el COVID-19.

A la señora ministra de Cultura, licenciada Suecy Callejas Estrada, le exhorto que:

1. A la brevedad posible, realice inspección en la zona donde se construiría la obra “Pequeña Central Hidroeléctrica Nuevo Nahuizalco II” sobre el Río Sensunapán entre los municipios de Nahuizalco, Sonzacate y Sonsonate, todos del departamento de Sonsonate para la identificar los sitios sagrados de los pueblos indígenas conocidos como El Chital Ponisca, Mactali At, El Pepeto, Siete Cerritos, Cementerio-Fosa Común y Casco de Hacienda Mirazalco, Poza Los Tadeos, Paso Ondo, El Jabío, Cacerío Las Carias y Los Tozos, todos ubicados en las cercanías del Río Sensunapán; y si del resultado según las competencias de tal ministerio, adopte las medidas necesarias para prevenir la realización de proyectos que causen daños irreversibles en los mismos.
2. Que la práctica de la inspección recomendada sea con la participación de representantes del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y las comunidades indígenas que habitan la zona donde se ubican los sitios sagrados mencionados en el párrafo anterior.

Con base al artículo 27 de la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, se solicita a los funcionarios antes citados, rendir un informe en el que se pronuncien sobre las acciones y medidas que adoptarán para dar cumplimiento a lo recomendado, debiendo remitir dicho informe dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución.

En caso no emitan el informe requerido en el plazo mencionado, tomar en cuenta lo previsto en el artículo 46 de la ley de esta Procuraduría.



Informes





V. Informes

La presentación de informes ante los organismos internacionales de derechos humanos, tiene como fin poner en conocimiento de dichos organismos el nivel de cumplimiento de compromisos internacionales adquiridos por el Estado salvadoreño. Art. 73 del Reglamento para la Aplicación de los Procedimientos del Sistema de Protección de la PDDH

1. Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador. (Para Lista de Cuestiones)

Mandato de la PDDH

1. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (en adelante PDDH), es una Institución que tiene como mandato velar por el respeto y garantía de los derechos humanos en El Salvador, supervisando la actuación y omisión de las autoridades públicas a efecto de que éstas cumplan de forma irrestricta las obligaciones contenidas en las normas internacionales; la rendición de cuentas y la progresividad de los derechos humanos.
2. Es así que, se constituye como un ente de carácter permanente, imparcial e independiente, que ejerce una magistratura moral y legal con amplias competencias en sintonía con los "Principios de París"¹⁰⁹ y los requerimientos de una efectiva defensa de los derechos humanos.
3. Ante ello, para seguir garantizado las referidas atribuciones, el Estado, debe realizar una asignación de recursos suficientes a la PDDH, con el fin de lograr de modo razonable las mejoras progresivas en el cumplimiento de su mandato, teniendo en cuenta que casi la totalidad del presupuesto establecido se concentra en la remuneración del personal y adicionalmente no existe protección alguna contra reducciones arbitrarias¹¹⁰.
4. Asimismo, es pertinente manifestar al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante Comité), la profunda preocupación por las diferentes e irregulares expresiones vertidas por algunas personas pertenecientes al funcionariado público, que pretenden disminuir las atribuciones conferidas como Institución Nacional de Derechos Humanos, máxime considerando que las decisiones y opiniones emitidas son jurídicamente vinculantes en virtud de los compromisos y obligaciones voluntariamente adquiridas por el Estado salvadoreño en materia de derechos humanos y la eficacia de las recomendaciones expresadas descansa en la buena fe con la que actúen las instituciones destinatarias.
5. En ese contexto, en virtud de la sesión sobre la Lista de Cuestiones previa a la revisión del Sexto Informe Periódico que El Salvador presenta al Comité se realizan los aportes institucionales en torno al cumplimiento de las obligaciones derivadas del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante PIDESC)
6. Por lo que, el presente informe tiene como finalidad contribuir a orientar y armonizar el

¹⁰⁹ OACNUDH "Instituciones Nacionales de Derechos Humanos. Antecedentes, Principios, funciones y responsabilidades" Naciones Unidas, Ginebra. 2010. Pág. 15.

¹¹⁰ PDDH. Informe Anual de Labores del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. 2019-2020. San Salvador, julio 2020. Pág. 18.

diálogo entre el Comité y el Estado Salvadoreño, estableciendo información actualizada y verificada por esta Procuraduría. Así como, precisar situaciones que son de especial preocupación en particular las relacionadas con mujeres y grupos en mayor condición de vulnerabilidad y proponer preguntas concretas que sean de utilidad para el Comité en el desarrollo de la sesión.

Pregunta Sugerida:

7. *Sírvase explicar las medidas adoptadas para asegurar que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos disponga de los recursos humanos y financieros suficientes para cumplir su mandato con eficacia e independencia. Asimismo, detalle las acciones que ha implementado para garantizar que las atribuciones conferidas a ésta institución sean respetadas por todas las Instituciones Nacionales.*

II. Situaciones de especial preocupación (Artículos 1, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12 y 13)

A. Derecho a la educación intercultural y al territorio (Tierras sagradas)

1. Derecho a la educación intercultural

8. Con respecto a la conservación y enseñanza de las lenguas maternas, un aspecto positivo es la creación del Programa de Inmersión Lingüística Temprana, denominado Cuna Náhuat, que tuvo como resultados entre otros, la instauración en los años 2010 y 2018 de las Cunas de los Municipios de Izalco, Santo Domingo de Guzmán y Santa Catarina Masahuat, Departamento de Sonsonate; en un inicio por iniciativas privadas pero que fue retomado por el Ministerio de Educación como programa dirigido a niños y niñas de la primera infancia, quienes son atendidos por mujeres indígenas adultas mayores Nahuat hablantes naturales.
9. No obstante, organizaciones de la Mesa Permanente de la PDDH sobre Derechos de Pueblos Indígenas, han informado que la decisión de que dicho programa será desarrollado por el Ministerio de Educación, ha sido realizada sin consultarles de manera previa, libre e informada a las poblaciones indígenas, pues si bien es cierto, es muy importante su atención por dicho Ministerio, este debe ser conforme a su cosmovisión, respetando y conservando las formas de educar tradicionales de las abuelas a cargo de la Cuna.
10. Así también, desde el año 2017, esta Procuraduría, ha acompañado a las organizaciones indígenas en las acciones que impulsan ante la Asamblea Legislativa, para el reconocimiento del 21 de febrero de cada año, como el “Día Nacional de las Lenguas Maternas en El Salvador”, con el objeto que se promueva el reconocimiento de otras lenguas existentes como el Potón y Pisbi, petición que a la fecha se encuentra en dicho Órgano de Estado, sin ningún avance.

2. Derecho al territorio (tierras sagradas)

11. Un logro importante es el reconocimiento de los pueblos indígenas a través de la reforma constitucional por parte de la Asamblea Legislativa del artículo 63 de la Carta Magna. No obstante, un aspecto a señalar es que solamente se reconoce la propiedad privada, como única forma de tenencia de tierras; a pesar que en éstos pueblos ejercen sus derechos económicos, sociales y culturales de manera colectiva, entre ellos, el derecho a la propiedad, manteniendo la deuda histórica por parte del Estado, de legitimar como suyas, las tierras que ancestralmente eran consideradas sagradas y de su propiedad.
12. En ese sentido, se puede afirmar que, en El Salvador, no existen mecanismos de protección jurídica a los territorios que podrían considerarse propios de los pueblos indígenas, lo que limita su disposición, goce y uso. Sin embargo la Procuraduría ha considerado como avance en cuanto al derecho a la propiedad, que en el año 2016, el Instituto de Transformación Agraria ISTA, instaló la “Mesa de Mujeres Lideresas e Indígenas del ISTA”, la que ha impulsado algunas acciones orientadas a promover y

garantizar el derecho a la propiedad de las mujeres indígenas, recibiendo sus títulos de propiedad y formación sobre dicho tema, no obstante es necesario acotar que tales beneficios fueron recibidos más que por ser indígenas, por ser mujeres.

Preguntas sugeridas

13. *Sírvase informar sobre los resultados de implementación de la reforma Constitucional del artículo 63, para respetar y dar cumplimiento al principio de libre determinación de los Pueblos Indígenas a través de políticas, planes, programas y armonización normativa. En especial detallar los esfuerzos realizados para garantizar el aprendizaje, protección y conservación de las lenguas indígenas*

B. Derecho al trabajo.

1. Desempleo y mercado laboral informal

14. Se reconocen los esfuerzos realizados en el ámbito de los derechos laborales para atender la falta de trabajo decente en el país, a través de la Política Nacional de Empleo Decente, presentada en el año 2017, con el objetivo de generar condiciones de acceso a un empleo digno y decente e implementar estrategias que permitieran articular y ejecutar acciones en beneficio de mujeres y hombres a nivel nacional.
15. No obstante, continúan siendo insuficiente las estrategias y se sigue observando una situación laboral precaria y excluyente; con pocas oportunidades de empleo en el mercado laboral formal, sumándose las condiciones de inseguridad y deficientes que no protegen del derecho a la estabilidad laboral. Esto se agudiza en el sector público, ante los cambios de administraciones municipales o nacionales, a pesar de existir normativa vigente, las personas trabajadoras son despedidas arbitrariamente. Ejemplo de ello, ha sido la remoción por parte del Órgano Ejecutivo, de personal de diferentes dependencias gubernamentales, desde junio del 2019. A pesar de lo anterior, las denuncias por remoción de empleadas y empleados de las diferentes; por lo que esta Procuraduría al 20 de diciembre de 2019, había recibido 1047 denuncias por violaciones a los derechos humanos relacionados al trabajo y a la estabilidad laboral.¹¹¹
16. Por otra parte, debe señalarse que las personas trabajadoras en el sector informal continúan en la precariedad y el abandono por falta de políticas estatales integrales que garanticen el acceso a la seguridad social u otros beneficios y prestaciones
17. En lo relativo al aumento del salario mínimo, en El Salvador por ley debe revisarse cada tres años, siendo el último incremento en el 2017, manteniéndose la brecha salarial entre los diferentes sectores económicos.

Salarios mínimos vigentes en 2020, aprobados desde 2017.

Sectores	Salario mínimo vigente a 2016	Salario mínimo aprobado para 2017
Comercio y servicios	\$251.70	\$300.00
Industria	\$246.60	\$300.00
Maquila	\$210.90	\$295.00
Industrias agrícolas de temporada (café)	\$171.00	\$224.00
Recolección café	\$129.00	\$200.00
Industrias agrícolas de temporada (azúcar y algodón)	\$124.00	\$200.00
Agropecuario	\$118.20	\$200.00
Recolección azúcar	\$109.20	\$224.00
Recolección algodón	\$98.70	\$200.00

Fuente: Ministerio de Trabajo y Previsión Social (en adelante MTPS)

¹¹¹ PDDH. Pronunciamento del Señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, José Apolonio Tobar Serrano, en Ocasión de la Remoción de los Trabajadores y las Trabajadoras de las Diferentes Dependencias del Órgano Ejecutivo. De fecha 20 de diciembre de 2019.

Preguntas sugeridas:

18. *Tenga a bien detallar la efectividad de los mecanismos administrativos y judiciales que garantizan la estabilidad laboral y el debido proceso en el Estado.*
19. *Sírvase explicar los mecanismos adoptados para aumentar oportunidades en el mercado laboral formal y las medidas implementadas para asegurar que las personas trabajadoras en la economía informal se beneficien de los estándares básicos laborales y de protección social de acuerdo a lo recomendado por este Comité.*
20. *Tenga a bien especificar las medidas que han ejecutado para dar cumplimiento a la recomendación realizada con el Comité, relativa a garantizar que el salario mínimo permita un nivel de vida digno. Es especial, detallar si se cumplió con la revisión periódica acorde a lo establecido en el artículo 7, apartado a), inciso ii) del Pacto y en el artículo 38, párrafo 2, de la Constitución.*

2. Libertad sindical y derecho a huelga

21. En lo relativo a libertades sindicales, se reconoce como positivo el aumento en la constitución de organizaciones sindicales en el sector público, sin embargo, el MTPS, entidad que autoriza la constitución y extiende las credenciales a sus integrantes, ofrece dificultades en dicho proceso y en muchas ocasiones el período de acreditación es extendido sin mayor fundamento.
22. Por su parte, el derecho a la huelga continúa teniendo muchas restricciones en su ejercicio, dado que la mayoría son declaradas ilegales por instancias judiciales y la patronal termina sancionando a las directivas sindicales o personas afiliadas.

Pregunta sugerida:

23. *Tenga a bien explicar la efectividad de los mecanismos estatales que garantizan las libertades sindicales y el derecho a huelga en sede administrativa y judicial.*

C. Derecho a la vivienda adecuada

24. En términos de adecuación normativa, la legislación salvadoreña debe ser revisada en tanto que restringe el contenido del derecho a la vivienda a cuestiones vinculadas a la propiedad y no relaciona aquellos elementos que determinan su carácter adecuado, tales como la disponibilidad de servicios, materiales, infraestructura, habitabilidad, asequibilidad y adecuación cultura. Por otro lado, no otorga la debida prioridad de atención para la población en mayor condición de vulnerabilidad desde un enfoque de derechos.
25. Como consecuencia de un marco jurídico inadecuado, unido al fallo en las estrategias integrales para abordar el déficit habitacional cualitativo y cuantitativo y una deficiente inversión pública en esta área, las problemáticas más relevantes respecto del ejercicio de este derecho se refieren a la falta de capacidad de pago para la adquisición de la vivienda, la situación de violencia e inseguridad en las zonas donde habitan las personas con menores ingresos que incluso generan situaciones de desplazamiento forzado; las afectaciones a derechos humanos derivadas de la inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra, especialmente en el marco de la ejecución de desalojos que han incluido el uso inadecuado de la fuerza, la aplicación de métodos confrontativos y la falta total de medidas para la satisfacción de las necesidades básicas primarias de las familias desalojadas, así como la ubicación de viviendas en lugares de alto riesgo y falta de alojamientos de urgencia o albergues adecuados en situaciones generadas por desastres.
26. De igual manera el Estado salvadoreño continúa teniendo retos importantes en cuanto a brindar servicios de energía eléctrica y agua por cañería para toda la población, sobre

todo por aplicación de cobros excesivos o indebidos, desabastecimiento, irregularidad o restricciones ilegales, y contaminación para acceder al servicio de agua. Preocupa de manera particular la situación de las personas con discapacidad en relación al bajo porcentaje de viviendas que cuentan con el aprovisionamiento de servicios básicos, especialmente en la zona rural.

Preguntas sugeridas:

27. *Tenga a bien informar sobre la cobertura del derecho a una vivienda adecuada en la legislación nacional, previendo en qué medida se cumple con las observaciones generales No. 4 (1991) sobre el derecho a una vivienda adecuada y No. 7 (1997) sobre el derecho a una vivienda adecuada: los desalojos forzosos (art. 11, párr. 1).*
28. *Sírvase ampliar, si existen iniciativas o proyectos de ley que atiendan a dichos estándares y promuevan la reforma y adecuación del marco normativo nacional.*
29. *Tenga a bien proporcionar, las estadísticas sobre número de casos y gasto público total en reconstrucción y rehabilitación de viviendas para personas desalojadas y desplazadas durante el periodo que se informa.*
30. *Sírvase completar información sobre el marco normativo y medidas adoptadas (incluyendo cobertura y asignación presupuestaria disponible) para la rehabilitación, reasentamiento y gestión de desastres naturales en relación al derecho a la vivienda adecuada*

D. Derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

31. Como Procuraduría, en forma reiterada se ha venido señalando las deficiencias y dificultades presentes en el Sistema Nacional de Salud, el cual se ha caracterizado por la insuficiencia de presupuesto, medicamentos, recursos y personal; alta segmentación, inequidad, fragmentación, limitaciones en el alcance geográfico; y serios problemas de calidad y calidez en la atención.
32. Dada la conformación del referido Sistema, el acceso a los servicios de salud se ve limitado y trae graves consecuencias sobre todo para aquellas personas con padecimientos crónicos como la insuficiencia renal, cáncer, lupus, entre otras porque no logra brindarles una atención integral con cobertura para todas las personas que lo necesitan. A esto se suma, la centralización de los servicios que dificulta el acceso para la población de las zonas rurales.
33. Con la aprobación en el año 2019 de la Ley del Sistema Nacional Integrado de Salud, se realizó un esfuerzo normativo para establecer los principios y normas generales para la organización y funcionamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud, mediante un proceso progresivo hacia el acceso y cobertura universal de la salud, en forma equitativa, oportuna y de calidad para la población en los diferentes niveles de atención.
34. Sin embargo, la normativa aludida no ha resuelto la problemática existente, debido a que no modifica la fragmentación institucional, por lo tanto, los segmentos de la población continúan recibiendo servicios de salud con una alta inequidad y trato diferenciado, lo que resulta discriminatorio para la mayoría de las personas que atiende.

Pregunta sugerida:

35. *Sírvase exponer los avances realizados por el Estado para consolidar un Sistema Nacional de Salud, accesible a todas las personas, sin discriminación de acuerdo a lo recomendado por el Comité de con el artículo 12 del Pacto y tomando en consideración la Observación general N° 14 (2000) sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (Párr. 21 Observaciones finales del Comité)*
36. *Tenga a bien explicar las acciones realizadas para garantizar el acceso con equidad a los servicios especializados en salud para las personas con enfermedades crónicas, en especial las que se encuentran en las zonas rurales del país.*

E. Derecho a un nivel de vida adecuado

37. Como se ha sostenido, El Salvador aún tiene profundos desafíos para alcanzar un nivel de vida digno para toda la población, especialmente para quienes se encuentran en condiciones de especial vulnerabilidad. Es así que en estudios realizados sobre pobreza multidimensional¹¹² se identificó que de un total de hogares salvadoreños, el 35.2% se encuentran en tal situación y que esto comprende niveles bastante altos de privaciones en diferentes áreas esenciales para su vida y su desarrollo, lo cual se corresponde con los siguientes indicadores: *baja educación de adultos (97.7 %), falta de acceso a la seguridad social (90.8 %), subempleo e inestabilidad del trabajo (84.4 %), falta de acceso a saneamiento (83.7 %), y hacinamiento (79.6 %)*¹¹³.
38. Y, si bien puede considerarse como un avance importante la aprobación de la “Ley de Desarrollo y Protección Social” que establece un marco para el desarrollo humano y para la protección e inclusión social con el fin de promover, proteger y garantizar el cumplimiento de derechos, aún no se han generado los suficientes programas y acciones efectivas que permitan medir y evaluar su impacto. Es claro que el diseño y la focalización de algunas políticas relacionadas a la asistencia, desarrollo y protección social no han sido del todo suficientes para reducir las brechas de desigualdad, sobre todo en las áreas rurales y entre los grupos de niñas, niños, adolescentes (NNA), mujeres y otros grupos en condición de vulnerabilidad.
39. Es por ello, que un aspecto de especial preocupación para la PDDH, es la supresión y modificación por parte del órgano ejecutivo de algunas dependencias estatales¹¹⁴, creadas entre otras funciones para la protección de los derechos sociales, económicos y culturales de poblaciones en condición de vulnerabilidad, siendo una ellas, la Secretaría de Inclusión Social cuya misión principal consistía en generar condiciones de protección social, desarrollo, ejercicio pleno de los derechos y la inclusión social de las personas, desde un enfoque de derechos humanos y género. Dicha secretaría además contaba con las direcciones de personas adultas mayores y diversidad sexual; así como con la división de asistencia alimentaria; además de ejecutar los programas de Ciudad Mujer y Ciudad Mujer Joven.

Pregunta sugerida:

40. *Sírvase, detallar las políticas, programas y planes que han desarrollado para garantizar un nivel de vida adecuado para la población, en especial de las mujeres y grupos en mayor condición de vulnerabilidad. En particular expliquen la efectividad de los mecanismos creados para suplir las funciones de las Secretarías suprimidas.*

F. Derecho al agua y la alimentación adecuada.

41. Una de las principales preocupaciones es lo relativo a los recursos hídricos, situación que acentúa los existentes problemas con la contaminación, la falta de acceso, administración y priorización práctica de los usos del agua.
42. Como se ha informado en anteriores ocasiones al Comité, en abril de 2012, se aprobó la reforma al artículo 69 de la Constitución de la República, para incorporar el derecho

¹¹² En términos estrechamente resumidos, dicha medición concibe y reconoce que la pobreza no es un fenómeno unidimensional cuya variable más importante a considerar sea el nivel de ingresos de los hogares, sino que es, sobre todo, una realidad multidimensional, lo que implica que una adecuada medición de la misma debe considerar diversas áreas de la vida de las personas y hogares, lo que a su vez incluye su participación para determinar cuáles son sus aspiraciones y necesidades más sentidas. Dicha metodología se elaboró siguiendo tales parámetros

¹¹³ STPP y MINEC-DIGESTYC. Medición multidimensional de la pobreza. Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia y Ministerio de Economía, a través de la Dirección General de Estadística y Censos. El Salvador. San Salvador. 2015. Pág. 15.

¹¹⁴ El Órgano Ejecutivo reformó varios artículos de su reglamento interno con la finalidad de eliminar 5 secretarías, siendo ellas la de Inclusión Social, las Secretarías de Participación, Transparencia y Anticorrupción; Técnica y de Planificación, Gobernabilidad y Vulnerabilidad. Según Sesión No 1 del Consejo de Ministros celebrada en casa presidencial, a las catorce horas del día 2 de junio de 2019 Disponible en : <https://www.transparencia.gob.sv/institutions/capres/documents/actas-de-consejo>.

a una alimentación adecuada y el derecho al agua, como derechos fundamentales. Desafortunadamente, la reforma no fue ratificada y se interrumpió su proceso de reconocimiento. Tampoco, ha tenido mayor avance la aprobación de una normativa secundaria que desarrolle el contenido de éstos derechos como la Ley General de Aguas y la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional.

43. Es por ello que resulta muy preocupante que la Asamblea Legislativa de El Salvador no haya llevado a buen término procesos trascendentales para garantizar los referidos derechos. La inaceptable decisión de no aprobar la reforma constitucional que reconoce de forma explícita el DAA y el derecho al agua, así como la postergación injustificada de la aprobación de los proyectos de Ley específicos que complementarían su efectiva aplicación.¹¹⁵

Pregunta sugerida:

44. *Sírvase, explicar cuáles son los obstáculos que han impedido la culminación del proceso de ratificación de las reformas constitucionales para garantizar el derecho a la alimentación adecuada y el acceso al agua. Así como, la normativa secundaria que las desarrolla. Además, detalle los esfuerzos que están realizando para superar dichas dificultades (Párr. 19 observaciones finales del Comité).*

III. Mujeres y grupos en mayor condición de vulnerabilidad. (Artículos 2, 3, 9, 10, 13, 11 y 12)

A. Mujeres.

45. En el caso de los derechos de las mujeres persisten importantes desafíos para la promoción y efectiva aplicación del principio de igualdad y no discriminación especialmente en materia social, política, económica, educativa y cultural. Por lo que continúa siendo necesaria la adopción de medidas de acción afirmativa para revertir o cambiar situaciones discriminatorias, de iure o de facto; así como medidas especiales de protección contra la violencia en todos los ámbitos¹¹⁶
46. Ante ello, se reconoce como avance la creación de los Juzgados Especializados de Instrucción, Tribunales de Sentencia y Cámara Especializadas para un Vida Libre de Violencia y Discriminación contra las Mujeres con sedes en San Salvador, Santa Ana y San Miguel, pero todavía sigue siendo un reto su instauración en todos los departamentos del país, debido a que están focalizados en las zonas urbanas y regionalizados.
47. También es necesario destacar la falta de atención del sector judicial en general para reconocer elementos claves como las relaciones desiguales de poder y la misoginia. A ello se suman las contradicciones existentes entre la normativa especializada y los principios que rigen el Derecho Penal, así como los fallos y negligencia en la conducción de las investigaciones fiscales de los casos de violencia y feminicidio contra las mujeres.¹¹⁷

Preguntas sugeridas:

48. *Sírvase explicar las medidas que implementó para garantizar la eficacia de los mecanismos para prevenir, erradicar y sancionar la violencia en contra de las mujeres y niñas. En especial, detallar el resultado que obtuvo en la reducir los niveles de violencia de género en la sociedad (Párr. 17 observaciones finales del Comité).*
49. *Tenga a bien detallar los avances en el fortalecimiento de los servicios enfocados a la atención en salud sexual y reproductiva de mujeres y niñas, en los diversos Hospitales*

¹¹⁵ PDDH. Cuarto Informe sobre el Estado del Derecho a la Alimentación Adecuada en El Salvador. 1ª. Edición. San Salvador, 2016. Pág. 169.

¹¹⁶ PDDH. Situación de los Derechos Humanos en El Salvador. Informe presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su visita in loco. San Salvador, diciembre 2019. Pág.15.

¹¹⁷ PDDH. Informe Alternativo al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la Lista de Cuestiones Previa a la Presentación del Séptimo Informe Periódico de El Salvador. San Salvador. Febrero 2018. Pág. 17.

y Unidades de Salud que incluya la planificación familiar y anticoncepción, tomando en cuenta los estándares y principios de derechos humanos y los términos recomendados por este Comité (Párr. 23 observaciones finales del Comité).

B. La situación de pobreza de las personas mayores en El Salvador.

50. La Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHMP) ¹¹⁸ de 2019 indica que la población de país es de 6 millones 704 mil 864 habitantes. Las mujeres constituyen el 52.9 % y los hombres el 47.1%; el 61.7 % habita en el área urbana y el 38.3% en el área rural; el 51.4% de la población es menor de 30 años, mientras que el 13.6% tiene de 60 años en adelante.
51. Existe una gran cantidad de personas adultas mayores que siguen trabajando. Sin embargo, la mayoría está obligada a ejecutar trabajos precarios e informales para sobrevivir. La situación se complica especialmente para las mujeres, cuando son las únicas proveedoras del hogar o cuando se ven forzadas a asumir el cuidado permanente de otras personas. En el país el 11.1 % de las personas ocupadas, corresponde a este sector de la población¹¹⁹.
52. Actualmente la mayoría de personas adultas mayores no disponen de una pensión que les garantice la satisfacción de sus necesidades; solamente 20% de las personas adultas mayores recibe algún tipo de pensión. Además, se estima que únicamente el 12% del total de la población mayor de edad tiene acceso a pensiones por jubilación y de ese porcentaje apenas 3% la recibe en el área rural¹²⁰. Esta carencia es determinante en su situación de pobreza.
53. Como lo hemos externado, esta Procuraduría observa con mucha preocupación el desaparecimiento de la gestión gubernamental de la Secretaría de Inclusión Social (SIS), en especial de la Dirección de la Persona Adulta Mayor, entes encargados del Programa Nuestros Mayores Derechos y coordinador del Consejo Nacional para la Atención Integral de la Persona Adulta Mayor (CONAIPAM), quien tiene funciones y atribuciones legales¹²¹ que deben realizarse desde el sistema de atención integral para la persona adulta mayor, dejándose con ello en la inoperancia políticas públicas y programas que garanticen el cumplimiento de los derechos humanos de la población adulta mayor en nuestro país.

Preguntas sugeridas:

54. *Sírvase informar sobre el desarrollo de los planes, programas y acciones referidas a la protección de los derechos de la Población Adulta Mayor. En especial los referidos a la reducción de la pobreza y detalle los mecanismos de consulta que se utilizan para asegurar la participación de este sector en todos ellos.*
55. *Tenga a bien detallar el nivel de funcionamiento del Sistema de Atención Integral para la Persona Adulta Mayor y el avance de las acciones para garantizar la protección social de esta población.*

C. El derecho al trabajo y a la educación de las personas con discapacidad.

1. Ámbito laboral.

56. La política pública existente en materia de empleo no ha sido inclusiva para grupos tradicionalmente excluidos. En octubre de 2017 fue presentada públicamente la Política Nacional de Empleo Decente, que en el eje estratégico N° 5 referido a la igualdad de oportunidades, entre otras áreas de la misma apunta expresamente a las personas

¹¹⁸ DICESTYC. Encuestas de Hogares de Propósitos Múltiples. 2019. Págs. 3 y 4.

¹¹⁹ Idem. Pág. 27.

¹²⁰ GOES. Política Pública de la Persona Adulta Mayor. Gobierno de El Salvador. San Salvador. Octubre 2017. Pág. 75

¹²¹ Asamblea Legislativa. Ley de Atención Integral para la Persona Adulta Mayor. Decreto Legislativo 717 del 23 de enero de 2002, publicado en el D.O. N° 38 Tomo 354 del 25 de febrero de 2002.

con discapacidad como población prioritaria en el marco del cumplimiento de la citada política; sin embargo, a más de dos años la misma no se ha traducido en acciones de inclusión laboral a favor de la población con discapacidad.

57. Tampoco se ha avanzado en la eliminación de la discriminación y de las barreras para el acceso al empleo y por ende no se han contrarrestado los niveles de desempleo de las personas con discapacidad, pese al artículo 24 de la Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. Según la Encuesta Nacional de Discapacidad 2015, del total de la población con discapacidad (410,798.00), solo 29,766 personas tenían para ese entonces un empleo como asalariado permanente¹²², lo que constituye un mínimo para el total de la población con discapacidad mayor de 18 años 343,376, que es parte de la población económicamente activa.¹²³
58. El Estado en su Sexto Informe periódico enviado al Comité de DESC, sostuvo que mediante el Sistema Nacional de Empleo del MTPS, mediante una estrategia interinstitucional entre 2014 y 2018 se colocó en la modalidad de empleo y autoempleo un total de 70,249 personas, de las cuales únicamente el 2.42%¹²⁴ corresponde a personas con discapacidad. Sin embargo, el MTPS no precisa información relativa al monitoreo que haya realizado sobre las condiciones laborales población con discapacidad y los ajustes razonables para la plena inclusión, ni distinguió en ese dato entre entidades públicas y privadas. Tampoco aclaró que ese Ministerio junto con algunas organizaciones de personas con discapacidad logra la inserción de personas con discapacidad a través de acciones coordinadas de intermediación laboral para esta población.

Pregunta sugerida:

59. *Sírvase informar sobre los planes y medidas efectivas para garantizar la formación laboral, el empleo y autoempleo para las personas con discapacidad, a fin de asegurar su inclusión laboral.*

2. Ámbito de educación.

60. Entre la población estudiantil las personas con discapacidad son las que más barreras enfrentan para su inclusión en el sistema educativo. La Política de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología MINEDUCYT, no establece medidas concretas para eliminar barreras físicas y arquitectónicas en los centros escolares. Desde el año 2010, se cuenta con la Política Nacional de Educación Inclusiva, que establece algunas pautas para la inclusión de las personas con discapacidad; sin embargo, la implementación de la misma pareciera no ser una prioridad, a tal grado que ni se menciona en el Sexto Informe periódico de país 2019. En el 2016 se creó el Modelo de Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno con el Sistema Integrado de Escuelas Inclusivas de Tiempo Pleno, del cual no se informa sobre la inclusión de población con discapacidad estudiantil como parte del cumplimiento del mismo.
61. Los datos reflejados en el último Observatorio MINEDUCYT 2018, establece que se cuenta con un total de 5,164 centros escolares públicos o subvencionados por el Estado de los cuales 599 han realizado adecuaciones curriculares para dar respuesta a necesidades de estudiantes con discapacidad y 2,147 han realizado adecuaciones arquitectónicas (1,175 con rampas, 254 con baños accesibles y 718 con pasamanos). Otro dato importante es que, de un total de 1,204,624 estudiantes registrados para ese año escolar, son apenas 284 estudiantes a nivel nacional con alguna discapacidad en los centros educativos regulares. Lo anterior hace concluir que no se están implementando medidas efectivas para eliminar la exclusión y la variedad de barreras que impiden a la población con discapacidad, incluyendo niños y niñas con discapacidad, tanto en el ámbito urbano como rural.

¹²² CONAIPD. Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad 2015, Primera Lectura de Datos Mayo de 2016. Tabla No. 6. Pág. 25.

¹²³ Ídem, cifra resultante de población con discapacidad y personas menores de 18 años. Pág. 16

¹²⁴ Sexto informe periódico que El Salvador debía presentar en 2019 en virtud de los artículos 16 y 17 del Pacto. Párrafo 48.

Pregunta sugerida:

62. *Sírvase proporcionar información sobre las estrategias, planes y programas para garantizar la plena inclusión a la educación a toda la población con discapacidad, incluyendo estudiantes Sordos, Ciegos, Sordociegos, con discapacidad intelectual y psicosocial. Especifique el presupuesto destinado para la inclusión de dicha población.*

D. Políticas de Estado relacionadas al VIH.

63. Se reconoce como positivo la existencia de una marco legal que puede ser utilizado para la protección de los derechos laborales de las personas con VIH, no obstante con respecto a la actualización de la normativa para una respuesta integral, persiste la deuda, ya que las reformas a la Ley de Prevención y Control de la Infección Provocada por el Virus de Inmunodeficiencia Humana, deberían encaminarse a una protección jurídica más amplia, a la respuesta multisectorial, acceso a la justicia por agravios a los derechos de las personas con VIH y sus allegadas, entre otras.
64. Como hemos señalado, estas medidas permitirían disminuir las constantes afectaciones a derechos específicos de personas con VIH, como los derechos laborales, el derecho a la confidencialidad del diagnóstico, el acceso a bienes y servicios sin discriminación, contratación de seguros médicos y servicios funerarios. Por lo que se reafirma la ineludible necesidad de reforzar la legislación para prohibir estas prácticas e implementar medidas educativas para concientizar a la población y prevenir actos discriminatorios¹²⁵.
65. Asimismo, para esta Procuraduría resulta preocupante el mantenimiento de algunas prácticas discriminatorias hacia las personas con VIH en materia de acceso a la vivienda, debido a la exigencia de Pólizas de Seguros Colectivos de Deuda otorgada por una aseguradora privada, bajo las cuales, el crédito debe ser tramitado por una persona de confianza, quien resultaría ser el titular de la vivienda y de la deuda, y poniendo a la persona con VIH como codeudora solidaria.
66. Otro aspecto a destacar, está relacionado con la protección del derecho a la salud, que, en el caso de las personas con VIH, se ve limitado principalmente su acceso al tratamiento por sus altos precios derivados de las regulaciones del país que tienden a favorecer a las patentes. Asimismo, se requiere reforzar en el presupuesto en materia de salud, en particular las partidas específicas para la prevención y atención del VIH en las poblaciones vulnerables quienes sufren de mayor estigma y discriminación.

Preguntas sugeridas:

67. *Tenga a bien proporcionar información sobre las medidas adoptadas por parte del Estado para asegurar que las personas con VIH, gocen de sus derechos económicos, sociales y culturales sin estigma ni discriminación. Indíquese de forma particular el presupuesto asignado para dar cobertura al acceso a los servicios de salud y detalle si este logra satisfacer las necesidades de salud de las personas con VIH.*
68. *Sírvase informar sobre qué acciones se han desarrollado por parte del Estado para combatir prácticas discriminatorias hacia las personas con VIH en los trámites para acceder a créditos para vivienda.*

E. Niñez y adolescencia

69. Desde la PDDH, hemos planteado que aunque, puede decirse que hay avances en materia de educación, protección integral de NNA, en prevención de la violencia, en la prohibición por Ley del Matrimonio Infantil, en la erradicación de trabajo infantil, sin embargo, aún siguen creciendo los delitos por violencia sexual en niñas y adolescentes;

¹²⁵ PDDH. Informe Alternativo al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la Lista de Cuestiones Previa a la Presentación del Séptimo Informe Periódico de El Salvador. San Salvador. Febrero 2018. Pág. 13.

desaparición de NNA por el fenómeno de la violencia a escala nacional; se continua denunciado la falta de acceso a la salud de calidad; persiste el maltrato infantil como uno de los delitos que registran mayor índice de denuncia; y los índices de migración de NNA por falta de oportunidades, desplazamiento forzado y reunificación familiar aún son altos¹²⁶.

70. De igual forma, hemos señalado que el Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia (SNPINA) presenta aspectos significativos de mejora a favor de la población de niños, niñas y adolescentes en el país, sin embargo, aún requiere de una mayor integración y coordinación interinstitucional, a nivel municipal, comunitario y con las organizaciones de la sociedad civil para fortalecerse y ser efectivo en sus funciones. Esto debe pasar necesariamente por la revisión de la ley, la concienciación sobre los derechos de los NNA y la asignación de recursos financieros suficientes para fortalecer al sistema y a las instituciones que lo conforman y atender adecuadamente a las necesidades de los NNA, superando la reducida visión que los concibe como objetos de protección y pasar a entenderlos como sujetos de derechos
71. Además, el Sistema Educativo Nacional no ha logrado generar las condiciones suficientes que permitan el goce del derecho a la educación, especialmente, para la mayoría de niñas y niños de 0-6 años de edad y para adolescentes de tercer ciclo de educación básica y de educación media¹²⁷.

Pregunta sugerida:

72. *Sírvase identificar los obstáculos institucionales o de otra índole que han imposibilitado el fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia.*
73. *Tenga a bien indicar cuáles son los obstáculos que han impedido generar las condiciones suficientes para la protección del derecho a la educación de los NNA. Detallar, los esfuerzos realizados para evitar la deserción escolar, en particular de las niñas y mujeres adolescentes.*

IV. Protección de los DESC en el contexto de la emergencia nacional por COVID-19. (Artículos 2, 6, 11 y 12)

74. Teniendo en cuenta la precariedad del sistema de salud salvadoreño caracterizado por el desabastecimiento de insumos y equipos, la escasa infraestructura y la falta de formación especializada, a finales de enero del presente año esta Procuraduría solicitó al MINSAL información completa sobre los lineamientos de actuación definidos para prevenir, promover, proteger, recuperar y rehabilitar la salud en relación a la COVID-19¹²⁸. No obstante, se remitieron algunos datos, estos no respondían a un plan integral que cubriera todos los aspectos esenciales para la prestación de un buen servicio de salud en un contexto de pandemia.
75. En ese sentido, la situación generada por la COVID-19 tuvo un profundo impacto en la sociedad salvadoreña, no solo por los riesgos a la vida y la salud que evidentemente conllevan una emergencia sanitaria de carácter global, sino además por las diferentes afectaciones a otros derechos humanos derivadas de la respuesta estatal para atender y contener el virus¹²⁹.
76. Es así que, el entorno propició graves violaciones a los derechos humanos de la salud, trabajo y alimentación a través de la limitación al derecho a la libertad personal, tránsito

¹²⁶ PDDH. Informe Alternativo de la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Licenciada Raquel Caballero De Guevara, al Comité de los Derechos del Niño. Sesión Previa Del Grupo de Trabajo. San Salvador. Enero 2018. Pág. 13.

¹²⁷ EDUCO y otros. Informe: La Niñez y Adolescencia salvadoreña en la encrucijada: crecer en una sociedad que incumple sus derechos. Análisis Situacional sobre los Derechos, Obligaciones y Responsabilidades para una Gobernanza Centrada en la Niñez y la Adolescencia en El Salvador. San Salvador. Abril 2018. Pág. 31-43.

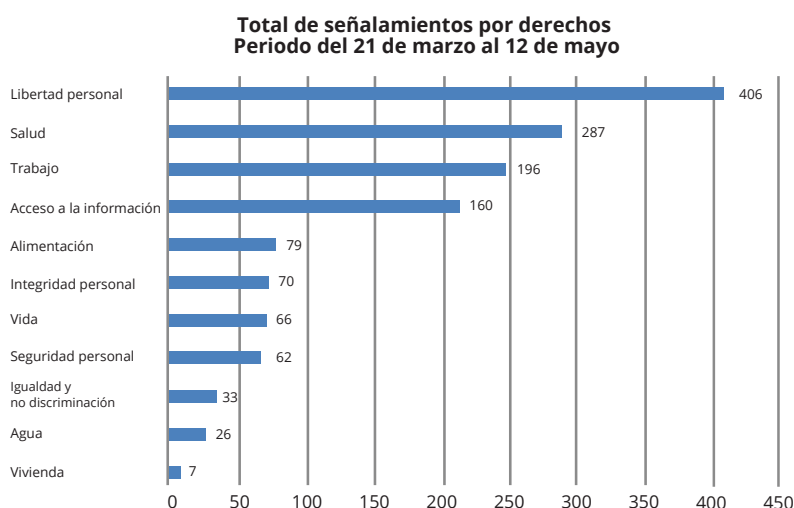
¹²⁸ Oficio PADESC N° 05/2020, de fecha 30 de enero de 2020, dirigido a la Ministra de Salud, con copia al señor Presidente de la República.

¹²⁹ PDDH. Informe Preliminar sobre COVID-19 y Derechos Humanos en El Salvador. San Salvador. Junio 2018. Pág.12.

y de circulación establecida en el Decreto Legislativo 639 y Decreto Ejecutivo 24 , debido que el mecanismo establecido fue improvisado y poco difundido, agudizando la situación con la prohibición de movilizarse a un municipio distinto al de residencia, cuando en el caserío, cantón o municipio no hay lugar para adquirir alimentos, medicamentos o no pueden desplazarse a un hospital especializado.

Fuente: PDDH, elaboración propia con datos registrados en sistema institucional a nivel nacional¹³⁰

77. Como Procuraduría, se destacó que las cuestiones estructurales que se identificaron que contribuyó a la afectación del derecho humano a la salud, fueron la falta de planificación estratégica para prevenir y combatir la pandemia la inadecuada



infraestructura, equipo y funcionamiento de los centros de salud, el desabastecimiento de medicamentos, denegación de atención médica gratuita en casos de emergencia; y la falta de disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios de salud mental.

78. Asimismo, se señalaron aspectos relacionados con el diagnóstico y tratamiento de COVID-19, específicamente los vinculados a ocultar información sobre resultados de exámenes o pruebas, falta de prueba diagnóstica, ocultar o tergiversar información fundamental para la protección de la salud y tratamiento de enfermedades.
79. También, se destacaron vulneraciones al principio de igualdad y no discriminación, específicamente en lo relativo a denegación de asistencia médica a grupos en condición de vulnerabilidad según sus necesidades específicas y la denegación de acceso a los establecimientos, bienes y servicios de salud como resultado de la discriminación de cualquier tipo, entre otros¹³¹.
80. Esta Procuraduría, reiteró su preocupación por que la falta de atención a un aspecto estructural pendiente, que se ha señalado en varias oportunidades, como es el fortalecimiento del Sistema Nacional Integrado de Salud con el fin evitar la segmentación que genera inequidad y obstáculos en la prestación del servicio; agudizó las problemáticas e impidió una adecuada protección del derecho a la salud en el contexto de la Pandemia.

¹³⁰ Ídem Pág. 42.

¹³¹ Negligencia médica, abandono de paciente y denegación de atención psicológica en centros de contención y la falta de acceso a servicios esenciales para la vida de las personas (salud, alimentación, vacunación y prevención de enfermedades).

A. Derechos vinculados a la subsistencia (trabajo, vivienda, alimentación y agua)

81. Sobre el derecho al trabajo sus afectaciones se relacionaron principalmente a la falta de acceso a ingresos económicos y medios de subsistencia que impidieron cumplir las medidas de contención y protección durante la pandemia; actos ilegales o atentatorios contra la estabilidad laboral y la denegación de prestaciones o derechos laborales. También hechos relativos a las condiciones de trabajo, destacando, carencias de protección e insumos ante los riesgos de contagio por el virus en los centros de labores, falta de capacitación técnica y profesional para el personal de salud en el manejo de la pandemia y crisis infecciosa y la falta de disponibilidad o provisión oportuna, y en cantidades suficientes, de material de bioseguridad, insumos y suplementos médicos.
82. Para el derecho al agua se señaló el desabastecimiento sistemático del servicio, cobros excesivos y restricciones ilegales para acceder al agua potable entre otros¹³². En el derecho a la alimentación, los hechos que mayormente fueron vulnerados se refieren a las omisiones del Estado para proveer alimentos durante la cuarentena, especialmente a los grupos en condición de vulnerabilidad; generar de manera progresiva condiciones que permitan el acceso a los alimentos en cantidad y calidad necesarias para el desarrollo; y a asegurar la disponibilidad de alimentos necesarios en condiciones de calamidad y desastre natural. Todo, ello a pesar que se implementaron medidas como entregas de bolsas solidarias y bonos a las familias de escasos recursos económicos, las cuales se desarrollaron de forma improvisada y sin criterios objetivos de asignación.
83. En el derecho a la vivienda, se conocieron hechos referentes al desalojo por falta de pago durante la emergencia nacional por COVID-19, seguido de la falta de disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura adecuada en la vivienda y, finalmente, la falta de protección contra el desalojo forzoso o arbitrario, hostigamiento u otras amenazas.
84. De manera particular, se advirtió al Estado, que teniendo en cuenta que estamos ante una crisis sanitaria, donde debe prevalecer el criterio del derecho a la salud con respeto a la dignidad humana y sin discriminación, y no un enfoque represivo que privilegie una visión militarista de la respuesta estatal, todas las instituciones están obligadas a prevenir cualquier acto que atente contra personas que circulan por la vía pública para abastecerse de alimentos, medicamentos y otras necesidades básicas, además de respetar el principio de legalidad y las garantías judiciales, especialmente en casos de detenciones arbitrarias.¹³³

Pregunta sugerida

85. *Sírvase, detallar las planes y programas, así como el establecimiento de protocolos para la prevención y atención de la crisis sanitaria por COVID-19. En especial, incluya estadísticas, acciones específicas y resultados obtenidos en las medidas adoptadas. Así como, los mecanismos adoptados para garantizar el acceso a la información relacionado con el derecho a la salud en el contexto de la pandemia.*

¹³² Abastecimiento del servicio en condiciones no aptas para su consumo, restricciones para el funcionamiento de los sistemas de abastecimiento de las juntas de agua y la prestación irregular del servicio.

¹³³ Op. Cit. 19. Pág. 56.

**San Salvador, El Salvador, C.A.
Diciembre de 2020**



Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos



2540-4300



www.pddh.gob.sv